

ESTEBAN DÓMINA

LOS PUJADAS

DE LA ÉPICA GUERRILLERA AL HORROR

**«La vida de los muertos está en la memoria de los vivos»
Marco Tulio Cicerón**

A María de los Ángeles Pujadas

Conocí a Ángeles a fines de 1971. Pese a que en ese tiempo, por razones de seguridad, los militantes evitábamos usar nuestros apellidos verdaderos, todos sabían que era hermana de un famoso guerrillero, preso por aquellos días en la lejana cárcel de Rawson. Por cierto, ella no disimulaba el orgullo que sentía por ese hermano dilecto ni se esforzaba en ocultar el parentesco que los unía. Más bien lo exhibía como un legítimo trofeo familiar.

Era una siesta calurosa de diciembre. El bar de la Facultad de Ciencias Económicas estaba desierto; terminada la temporada de exámenes, los estudiantes regresaban a sus casas a pasar las fiestas y no volvían hasta el mes de febrero. La cita con Ángeles la había arreglado un compañero del Integralismo, quien no dio demasiadas pistas de la nueva militante, apenas que tenía un apellido célebre.

La chica se demoraba. Ya había repasado de arriba abajo el ejemplar de *La Opinión*, cuando un ruidoso taconeo de zuecos que se usaban en esa época resonó a lo lejos. Apenas me vio, enfiló hacia donde yo estaba.

—Hola, soy Ángeles —me dijo, sonriendo— ¿Vos sos el flaco Tito, no?

Sin esperar la respuesta se sentó frente a mí; posó resueltamente el atado de *Parisiens* y el encendedor sobre la mesa, mientras arrimaba el cenicero de lata y apartaba el ejemplar de *La Opinión* que había quedado sobre la mesa. Percibí que con la nueva compañera, flaca y desenfadada, seríamos buenos amigos, como en efecto lo fuimos mientras compartimos la militancia.

A través de ella conocería, aunque más no sea virtualmente, a Mariano, uno de mis ídolos de aquella, la edad de la inocencia.

A María Eugenia Pujadas Bustos

Supe de ella por primera vez, cuando, allá por 1975, figuró en las crónicas periodísticas de la época, escuetas y ambiguas por la censura que pesaba sobre los medios, como el bebé que la patota que se llevó a los mayores de la casa dejó junto a su tío, de tan solo once años.

Pasaron casi cuatro décadas desde entonces, hasta que el azar me puso en la pista de María Eugenia Pujadas Bustos, de quien no sabía casi nada, apenas que había sobrevivido a la masacre que desmembró a su familia durante los años de plomo.

A fines del año 2011, di con ella luego de que un compañero la mencionó como al pasar en una conversación ocasional. Grande fue mi sorpresa al escuchar su nombre, tanto como el deseo de conocer a quien, sin quererlo, había sido protagonista, a temprana edad, de aquella historia de horror en la que yo estaba trabajando en ese momento.

Así fue como tomé contacto con María Eugenia, una persona cálida y gentil; y supe de primera mano lo que tenía para contar de todo aquello que se enteró de grande, por cuanto su madre y, más tarde, los abuelos que la tuvieron a su cuidado, creyeron que era mejor para su espíritu joven no conocer demasiado acerca del martirio de sus padres y abuelos paternos.

Por fortuna, pese a ese comienzo terrible, su existencia siguió adelante y su mayor tributo a la vida fueron las nuevas vidas que trajo al mundo.

Con el tiempo, María Eugenia pudo develar la verdad, conocer sus raíces y elaborar el duelo correspondiente con entereza y sin resentimientos. Hoy no reclama venganza, sí justicia.

PRÓLOGO

¿Por qué los Pujadas? ¿Por qué elegirlos a ellos de entre las miles de víctimas del tiempo más cruel que vivió la Argentina en los últimos cien años? Una primera respuesta es que esa familia soportó dos tragedias en menos de tres años que la mutilaron y pusieron al borde del exterminio: el fusilamiento de Mariano, en Trelew, en 1972, y la masacre de cinco de sus integrantes, en 1975, de los cuales solo uno de ellos logró sobrevivir.

Ambos acontecimientos, brutales, despiadados, encierran un enorme valor simbólico; desnudan la quintaesencia de una época signada por la violencia, la desmesura y el horror. Ese solo motivo ameritaba indagarlos, darles visibilidad, dejar testimonio de ellos para las presentes y futuras generaciones.

Pero hay algo más: puestas en contexto histórico, las dos tragedias delimitan una línea de tiempo que refleja cómo evolucionaron —para peor— las cosas en un país que, en los tres años que van de una a otra, sufrió una metamorfosis involutiva, contra natura, que transformó la mariposa prometedora de 1973 en el más repugnante de los gusanos en 1976.

La comprensión cabal de lo sucedido durante los años setenta en la Argentina, su dimensión histórica, requiere de una lectura capaz de reconocer la diferente naturaleza de esos dos momentos: el inicial, en pleno ascenso, cuando la lucha contra la dictadura legitimaba la violencia ejercida desde el campo popular, y el que sobrevino más tarde, el brusco descenso, cuando las organizaciones armadas, aisladas de la sociedad, se quedaron sin sustento y fueron arrasadas por el terrorismo de Estado. La dilucidación de este fenómeno, complejo y ambiguo a la vez, es previa a cualquier debate en torno a cuestiones tales como si se trató o no de una guerra, o, incluso, si hubo un solo demonio o si fueron dos, como sostienen algunos.

Ese cambio de clima, que trastocó una primavera en ciernes tras la derrota de la dictadura de Onganía y Lanusse en un invierno desangelado y feroz, es el que se trata de recrear en las páginas

de este libro. No en clave erudita ni aleccionadora, sino como imprescindible ejercicio de memoria y reflexión.

El doble martirio de los Pujadas aporta un hilo conductor para seguir el rastro de la metamorfosis setentista. La primera tragedia, la de Mariano, fue premonitoria, un anticipo de la generalización del exterminio como método de represión y aniquilamiento que se aplicaría más adelante. Un graffiti estampado en las paredes del aeropuerto abandonado de Trelew lo pone en palabras: «22 de agosto, comienzo del horror.»

Solo buceando en el horror se puede llegar a entender —jamás aceptar o justificar— qué sucedió en la Argentina de entonces, cómo fue que para muchos jóvenes se pasó bruscamente, sin escalas, del sueño épico, del clima de gesta de comienzos de los años setenta, al peor de los infiernos, al reino del terror que asoló al país pocos años después. Para graficarlo, el texto consta de tres partes bien diferenciadas: la historia de Mariano y la primera tragedia, la metamorfosis, y la crónica de la segunda tragedia.

De eso va este libro que conlleva un solo propósito: servir de bitácora para navegar en esas aguas turbulentas de nuestra historia reciente. Y, si cabe, de ayuda para que cada uno saque sus propias conclusiones acerca de lo que nos pasó y, lo más importante, no acepte pasivamente la versión, neutra o matizada, de un tiempo desgarrador que dejó su huella indeleble en la generación que lo vivió y que tributó parte de lo mejor de sí: los hombres y mujeres que, equivocados o no, quedaron en el camino en aras de un mundo mejor.

E.D.

PRIMERA PARTE

MARIANO, LA ÉPICA GUERRILLERA

Los Pujadas

Los Pujadas, catalanes republicanos, se vinieron para la Argentina buscando nuevos horizontes. Hastiados de franquismo, ese régimen oscuro y retrógrado que asolaba España por aquellos días, tomaron la decisión que cambiaría el curso de sus vidas.

Despuntaban los años '50; Europa, lentamente, renacía de las cenizas y restañaba sus heridas después de otra guerra de mayor alcance y más terrible todavía que la Guerra Civil Española: la Segunda Guerra Mundial.

Pese a todo, en medio de esos acontecimientos luctuosos que desgarraron al Viejo Mundo, José María Pujadas Valls y quien sería su esposa, Josefa Badell Suriol, habían logrado graduarse de médicos, con honores. Con apenas veintitantos años cada uno, él algo mayor que ella.

Residían en la carrer de Provenza, en un apartamento del cuarto piso. En el corazón de la Barcelona que Carlos Ruiz Zafón pinta magistralmente en su exitosa novela *La sombra del viento* (Planeta, 2003); una ciudad cautivante, sumergida en la atmósfera sórdida del franquismo, llena de contrastes y silencios:

«1945, un año de cenizas. Solo habían pasado seis años desde el fin de la guerra y aunque sus cicatrices se sentían a cada paso, casi nadie hablaba de ella abiertamente. Ahora se hablaba de la otra guerra, la mundial, que había apestado al mundo con un hedor a carroña y bajeza del que jamás volvería a desprenderse. Eran años de escasez y miseria, extrañamente bendecidos por esa paz que inspiran los mudos y los tullidos, a medio camino entre la lástima y el repelús.»

Seguramente, José María y Pepita se las arreglaban lo mejor que podían para galvanizar el espíritu ante tanta adversidad, para poner sus jóvenes vidas a cubierto de ese estado de cosas que ahogaba sueños y pisoteaba esperanzas. No es difícil imaginar a la pareja, en las plácidas tardes domingueras de septiembre, recorriendo las Ramblas aledañas al mar o las calles del Ensanche modernista; o deteniéndose frente a la basílica de la Sagrada Familia aún sin terminar para contemplar los avances de la magnífica obra y admirar el genio artístico de Antonio Gaudí, su creador.

Y, a la caída del sol, antes de regresar al hogar, saboreando un bocadillo de longaniza en *Els Quatre Gats*, el legendario café de la carrer de Montsió donde, según Ruiz Zafón, los parroquianos «compartían mesa con el espejismo de Pablo Picasso, Isaac Albéniz, Federico García Lorca o Salvador Dalí y cualquier pelagatos podía sentirse por unos instantes figura histórica por el precio de un cortado.» Difícilmente pusieran un pie en el ostentoso Hotel Ritz de entonces, vedado para bolsillos flacos; pero sí, juntos debieron haber concurrido a la biblioteca del Ateneo de la calle Canuda, y fatigado una y otra vez sus galerías generosas y salones atestados de lectores sin prisa.

Como parte de ese mismo programa, es probable que en las tardes invernales vieran alguna cinta en el Windsor Palace o, resguardados de la nieve y del frío con sus capotes de paño grueso, montados en el viejo tranvía azul, trepan la ascendente avenida del Tibidabo, sembrada de cipreses y palacios sombríos. ¿Qué habría garabateado José María en los cristales empañados con su dedo enguantado? Y, por qué no, alguna mañana soleada de domingo, una esporádica visita al pintoresco cementerio de Montjuic, en la ladera de la montaña que le da su nombre, a dejar flores en la tumba de algún pariente, padres o abuelos quizá.

Sin embargo, todos esos módicos placeres que entregaba la gallarda ciudad a quienes vivían en ella y la celebraban sin pedir nada a cambio, no alcanzaban a compensar el tufo clerical y represivo de esa España mojigata, de misales y confesores, en la que el legendario *Caudillo de El Ferrol* y su patética cohorte de alcahuetes y adulones dedicaban día y noche a la caza de *rojos* encubiertos, comunistas embozados; que, a ojos de gente como ellos, de mente estrecha y prejuicios largos, podría serlo cualquiera aun cuando ni remotamente lo fuese.

A José María y Josefa, médicos vocacionales, amantes de la vida, no les iba aquello de «¡Viva la muerte!» que vociferaban las hordas franquistas a guisa de grito de guerra para insuflarse ánimo y amedrentar a los republicanos que aún pululaban en las calles, confundidos entre los demás, temiendo ser reconocidos y declarados enemigos públicos del régimen. Como tampoco le iban los modos policiales, la intolerancia y el clericalismo reconcentrado de un régimen totalitario que no ofrecía resquicios a la esperanza.

En esa Cataluña, mágica y asfixiante al mismo tiempo, tan prometedora como peligrosa y hostil, el joven matrimonio —médicos hematólogos los dos— trabajaban en el hospital Santa Creu y atendían un laboratorio de análisis clínicos. Impotentes frente a la ignorancia y la miseria que los rodeaba, solían contar que los pobres esperaban en la puerta del consultorio para ofrecer donar su sangre a cambio de un poco de comida y, asfixiados por la atmósfera represiva, pese a todo, trataron de sentar las bases de una familia. En los años siguientes nacieron los primeros tres hijos, todos varones.

Hasta que, hartos de Franco y del franquismo recargado, temiendo que las cosas se pusieran aún peor de lo que estaban y una nueva guerra europea reclamara a sus vástagos, el matrimonio Pujadas decidió emigrar a una tierra promisoría que para entonces había recogido en su regazo a muchos hijos de España y de otras partes del mundo: la República Argentina.

En 1953, con el corazón estrujado de pena por lo que dejaban atrás, cerraron el laboratorio, descolgaron sus diplomas, juntaron sus petates y, a fines de aquel año, cruzaron el ancho océano a bordo del vapor *Salta*, junto a otros trescientos y tantos viajeros, ilusionados como ellos. Con tres niños a cuestas de 6, 5 y 2 años, respectivamente, y los baúles repletos de sueños, se largaron para nuestras pampas. A empezar una nueva vida lejos de los discípulos de Primo de Rivera y Escrivá de Balaguer.

Fueron emigrantes tardíos: para entonces; la salida en masa de nativos europeos hacia América, la nueva tierra prometida, se había ralentizado tras la finalización de la guerra, hasta convertirse, pasada la mitad de siglo, en un goteo calmo y espaciado. El resultado de ese proceso extendido a lo largo del tiempo fue una inmensa colonia de peninsulares trasplantados a la Argentina.

La demora de los Pujadas en adoptar la crucial resolución habla a las claras de que la decisión fue difícil para José María y

Josefa, catalanes hasta el tuétano, enamorados como nadie de su tierra. Los dos debieron de haber sentido en carne propia lo que Ruiz Zafón pone en palabras exquisitas en un pasaje de su novela, cuando un personaje le dice a otro: «Esta ciudad es bruja, ¿sabe usted, Daniel? Se le mete a uno en la piel y le roba el alma sin que uno se dé ni cuenta.»

Sin embargo, la decisión estaba tomada. Claro que salir de España así como así no era nada sencillo, la burocracia lo complicaba todo; para justificar el viaje, un médico argentino que trabajó amistad con el matrimonio, Carlos Quiroga Mayor, facilitó las cosas consiguiéndoles un contrato de trabajo en una finca que su padre tenía en Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba.

Así, con el alma rescatada a duras penas, se vinieron para la República Argentina con sus hijos José María, Mariano y Ricardo. Ella, embarazada; él, enfermo de tuberculosis. La que llevaba Josefa en su vientre era una mujer: María de los Ángeles. La niña de mirada vivaz y pelo lacio nació en tierra argentina, durante un breve paso de sus padres por la apacible villa serrana que despuntaba junto al lago San Roque, a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba. Tres años más tarde le siguió María José, y, en 1964, Víctor, el benjamín de la familia.

En la capital cordobesa, los Pujadas iniciaron su nueva vida. Entre otros cambios impuestos por las circunstancias, dejaron de lado la medicina y optaron por otro rubro: la avicultura. Con ese fin, adquirieron unos terrenos alejados del centro de la ciudad capital, en la periferia Norte, todavía rural. En el lugar elegido, frente al flamante Liceo Militar general Paz, levantaron la granja avícola que bautizaron San José, que en poco tiempo se convirtió en una de las más importantes y modernas de su tipo, con varias sucursales en la zona. La dirección postal era: Camino a Jesús María Km. 5 y $\frac{1}{2}$ o, se llegaba igual, Km. 711 Ruta Nacional N° 9.

En esa Córdoba apacible, de costumbres aldeanas, que se despercebía al compás del impulso impetuoso de la Fábrica Militar de Aviones y el incipiente polo automotriz que crecía en su seno como en un útero materno, la familia catalana llevaba una vida similar al resto de las familias de su tiempo, consagrada al trabajo y la educación de los hijos.

La adaptación fue inmediata, como si hubieran nacido aquí. En poco tiempo, merced a su esfuerzo, los Pujadas sacaron chapa de *gente de trabajo*, el sello aprobatorio de una sociedad de rai-

gambre conservadora que veía con malos ojos a los holgazanes y, peor aún, a los que lucraban del esfuerzo ajeno. Eso tampoco iba con ellos, más cristianos que católicos, forjados en la escuela del sacrificio y honor.

La periodista Silvia Valerga, en una nota publicada en el diario *Página 12* el 20 de agosto de 2010, describió la rutina familiar en esa época:

«Josefa trabajaba todo el día, conocía y manejaba el funcionamiento de la cabaña a la par de su marido, desde los galpones de las cuatro sucursales hasta la planta de incubación. José María atendía toda la parte económica y comercial de la empresa familiar. Quienes lo conocieron lo describen como una persona culta y delicada en el trato con la gente, y aseguran que en la cabaña había un ambiente de mucho trabajo, pero también de gran amistad.»

Los chicos crecieron en ese entorno afable, abierto, de trabajo duro, para nada patronal; labraron su propia personalidad siguiendo los cánones de libertad y responsabilidad inculcados por los mayores de la casa. María de los Ángeles y María José eran alumnas del Instituto de Educación Integral Nuestra Señora, el colegio popularmente conocido como *Monjas Azules*, un establecimiento educativo de doble turno conducido por una congregación religiosa progresista, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, que en ese tiempo, igual que la mayoría de los de su tipo, solo admitía mujeres. Las hermanas Pujadas concurren durante algún tiempo a la sede de calle 9 de Julio al 800 hasta que, en el año 1967, se habilitó el edificio propio de la institución en barrio Jardín Espinosa, en el todavía virginal confín sureño de la ciudad, donde ambas concluyeron la secundaria: María de los Ángeles en 1970 y su hermana tres años más tarde. Ricardo cursaba Ingeniería Electromecánica en la Universidad Nacional, en tanto que José María se dedicaba tiempo completo a atender la cabaña.

Luego de concluir el secundario, María de los Ángeles se inscribió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, en la carrera de Contador Público. A su

turno, María José se matriculó en la Escuela de Historia, también en la Universidad estatal.

Mariano

La semblanza trazada por el padre de Mariano y recogida por Roberto Baschetti en su antología de relatos *Campana de Palo* (De la Campana, 2000) –disponible además en varios sitios de Internet– nos permite conocer de primera mano que Mariano nació en Barcelona, España, el 14 de julio de 1948, el mismo día en que se conmemora la toma de la Bastilla, punto culminante de la Revolución Francesa. Quizá por eso, el espíritu jacobino, la sed de justicia, su apego a los *sans culotte*, formaron parte de su gen.

Cinco años más tarde, el pequeño Mariano se trasladó a la Argentina junto a su familia, que se radicó en la ciudad de Córdoba. Al año siguiente, ingresó a la Escuela Nacional N° 55 de barrio Guiñazú, por entonces una zona suburbana próxima a su hogar, donde además funcionaba la granja avícola montada por sus padres. Pese a que apenas contaba con seis años, fue admitido en un grado más avanzado gracias a la educación precoz recibida en su tierra natal. Esa humilde escuela pública fue el ámbito de socialización y adaptación del niño catalán trasplantado a tierras lejanas.

Más tarde, adolescente ya, fue alumno aventajado del Colegio de Nuestra Señora de Monserrat, el *Monse*, dependiente de la Universidad Nacional y uno de los más reputados de Córdoba, formador a lo largo de la historia de elites dirigentes y cuadros académicos de prestigio en la Argentina, incluso desde los tiempos previos a la Revolución de Mayo de 1810.

Veamos qué escribió su padre acerca del Mariano de esos años juveniles de su vástago:

«Tanto en la escuela primaria como luego en el nacional Monserrat, mostró una faceta característica de su personalidad: su genio alegre, su “ángel” como diría el gitano, que le hacía ganar amigos por doquier. Además fue un excelente alumno en matemáticas, física y ciencias naturales, con innata facilidad para los idiomas. En ese tiempo, resultó

becado por el intercambio estudiantil del Rotary Club, graduándose en el Colegio de Agricultura de la Universidad de Nebraska (EE.UU.). Su año de permanencia en Curtis, viviendo con varias familias, le sirvió de mucho para afinar su escala de valores y madurar su juicio.»

El intercambio rotario al que se alude, lo facilitó la membresía de su padre en esa organización social con ramificaciones en varios países de Occidente. La etapa inmediata en la vida de Mariano, su paso de la adolescencia a la adultez, es evocada por su padre en los siguientes términos:

«Pasó del Monserrat a la Universidad Católica, a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y sin que ello le impidiera ser un excelente alumno siempre encontraba tiempo no solo para ayudar en la actividad de la familia sino también de preocuparse de los problemas estudiantiles.»

En efecto, en esa época, además de estudiar regularmente y avanzar en la novel carrera elegida, inaugurada en 1966, Mariano presidía el Centro de Estudiantes de Ciencias Agropecuarias, la organización que llevaba adelante las reivindicaciones y planteos estudiantiles en tiempos dictatoriales.

El presidente de facto designado por la Junta Militar tras el golpe de Estado de 1966, teniente general Juan Carlos Onganía, había impuesto un tono represivo y ultramontano a la gestión de gobierno, especialmente en lo concerniente a las universidades y la cultura en general, ámbitos considerados por los militares como dominios del comunismo ateo. A las chicas se les prohibía concurrir a clases en minifalda y a los varones usar barba y pelo largo.

Ese clima autoritario sin matices era el caldo de cultivo propicio para el surgimiento de agrupaciones y corrientes estudiantiles afines a las ideologías contestatarias y de izquierda que estaban en boga por aquellos años en todo el mundo. Un camino que Mariano, un joven sensible, inquieto y comprometido con su tiempo, no tardaría en recorrer.

Pero volvamos a la semblanza trazada por su padre:

«Sus numerosos viajes hacia el norte provincial, especialmente practicando estudio y análisis de suelos, lo pusieron en contacto con las zonas más pobres, despertando en él un afán de justicia y la amarga certeza de que no se podría hacer nada de provecho para remediar los males que tenía ocasión de palpar, sin un cambio fundamental de estructuras, en lo económico y en lo social. Así se fue plasmando la personalidad de Mariano, el idealista que no vacilaba en darse por entero con alegría e inmensa cordialidad frente a sus semejantes y también el muchacho transformándose en hombre con un juicio sereno y ecuánime, con una voluntad férrea para seguir en una lucha dura y riesgosa buscando alcanzar mejor bienestar y mayor justicia para un pueblo con el que se había integrado y sentido absolutamente suyo.»

En síntesis, a la luz del relato paterno, podemos ubicar a Mariano como un típico joven universitario de su tiempo, que, consciente de la realidad que lo rodeaba, alternaba sus estudios con la militancia. Que vivió a pleno aquella Córdoba de los años '60, rebelde y conservadora a la vez, que aún no tenía calles peatonales y lucía las dos rotondas céntricas que se removerían años más tarde: la que presidía Dalmacio Vélez Sarsfield y, más popular, la que galopaba el general José María Paz en su caballo de bronce, en el otro extremo de la antigua Calle Ancha. Una Córdoba donde ya no circulaban los viejos tranvías de antaño pero sí las *mechitas*, los taxis marca Mercedes Benz pintados de negro y amarillo, y los *loros*, esos ómnibus urbanos de color verde claro de la vieja CATA, la cooperativa que por entonces prestaba el servicio de transporte urbano de pasajeros.

En la Córdoba de aquellos días, Mariano frecuentó el circuito estudiantil de la época, que incluía lugares emblemáticos de cita o encuentro como el bar Unión, Los Barrilitos frente a la Galería Cinerama, el Nacional de Cañada y Colón, o La Cuba de Oro, parada obligada para saborear una fuente de ranas en la alta

madrugada, una vez concluidas las tareas del día. De seguro no frecuentaba Bongó, la discoteca top de Saldán, y sí, en cambio, peñas, pensiones y casas de estudiantes, donde se alternaban el debate político con las guitarreadas, el vino en damajuana y los romances juveniles.

Debió de ser oyente fiel de Radio Universidad, en el 580 del dial, la emisora más escuchada por los universitarios de entonces, y asiduo visitante de las librerías de la calle Deán Funes, donde compraría clásicos de la época como *Megafón o la guerra*, de Leopoldo Marechal, y *El miedo a la libertad* de Erich Fromm. Y habitué del cine Sombras, sobre la avenida General Paz, al lado del Automóvil Club Argentino, donde los ideologizados espectadores acodados en las incómodas butacas de madera, podían disfrutar películas legendarias como *I Compagni*, de Mario Monicelli, *La Batalla de Argel* y *Queimada*, dramas coloniales llevados al cine por el director Gilo Pontecorvo, y tantos otros filmes cargados por igual de rebeldía y espíritu justiciero.

Quienes conocieron a Mariano por esos años, aseguran que pese a ser un ávido lector, su preferencia no era la elaboración teórica ni la disquisición erudita a las que eran afectos algunos de sus compañeros de ruta: antes que un intelectual, Mariano era un líder nato, un ser vital que transmitía fortaleza espiritual, empeño y actitud positiva frente a la adversidad a la que sabía sobreponerse antes que el resto. Y, sobre todo, se lo recuerda como una persona íntegra, de una rectitud y honestidad a toda prueba, mamada desde temprana edad. Los valores inculcados por sus padres estaban presentes en él, lo mismo que los rasgos heredados de la formación humanista recibida en su paso por el Monserrat, primero, y por la Universidad Católica, después.

Así las cosas, no resultaba aventurado predecir que, en un tiempo convulsionado y de replanteos profundos como el que se vivía por aquellos años, un joven como él, con esa escala de valores, acabara por involucrarse en la lucha contra la injusticia social y por una sociedad mejor, más igualitaria. Al revés, es difícil imaginar que alguien con el perfil humanista de Mariano se hubiera mantenido ajeno o indiferente a lo que sucedía su alrededor. Podría decirse que estaba predestinado al martirio, en el sentido cristiano de la palabra, como tantos jóvenes de esa misma generación que abrazaron la causa revolucionaria y tributaron sus vidas en pos de un ideal.

El tiempo de Mariano: los años '60 y la radicalización de la clase media

Los años '60 fueron un tiempo de profundos cambios culturales a nivel global. Si la década del '50 fue un intermedio forzado por la posguerra y la configuración de un nuevo orden mundial, la del '60 marcó el fin de esa transición y el comienzo de una nueva era en la historia de la humanidad, de cara al futuro.

De golpe todo cambió: el mundo dejó de ser el que había sido hasta entonces; los parámetros tradicionales fueron dejados de lado y reemplazados por otros, acordes al nuevo tiempo. No solo *Los Beatles* rompieron el molde convencional imponiendo un nuevo estilo musical, transgresor y provocativo, sino que las manifestaciones de ruptura y cambio se reprodujeron en todos los ámbitos, revolucionando un mundo que latía al compás de ideas y actores de nuevo cuño, ávidos por mirar hacia delante y dejar atrás los horrores del pasado reciente.

Las artes y la cultura acusaron recibo del giro copernicano de la sociedad contemporánea y se zambulleron de cabeza en el cambio, imponiendo versiones estéticas desestructuradas, como el arte *pop* y la psicodelia, que tuvieron su correlato en la conducta social de las nuevas generaciones. Con la Guerra de Vietnam como telón de fondo y la Revolución Cubana en pleno apogeo, se generalizó en todo Occidente una movida juvenil contestataria, que renegaba de los valores tradicionales inculcados por sus mayores y proclamaba una existencia mucho menos materialista, de libertad. Una movida que, en su versión más desenfadada, incluyó al movimiento *hippy* y, menos banal, a los fenómenos revolucionarios en los países neocoloniales.

En efecto, muchos jóvenes, sobre todo en los países centrales, donde pese a que las urgencias materiales estaban resueltas y el confort invadía los hogares, cedieron a la tentación del llamado *Flower Power*. Eyectados de la realidad convencional que los rodeaba hacia un limbo a la medida de sus fantasías, aquellos jóvenes pelilargos vivieron a full un tiempo libertario de «sexo, drogas y *rock 'n' roll*.» Otros, en cambio, especialmente en los países dependientes donde las condiciones de vida eran más duras y la injusticia social estaba a la vista, optaron por abrazar la causa revolucionaria y tributaron sus mejores años, incluso su propia vida en muchos casos, en pos de un cambio radical de estructuras.

Eran, si se quiere, dos maneras, opuestas y distantes, de oponerse al *statu quo*, renunciando al legado de sumisión y pacatería de las generaciones precedentes.

Las manifestaciones antisistema cobraron mayor voltaje en la segunda mitad de la década sesentista, cuando se produjeron alzamientos y revueltas que conmovieron un planeta artificialmente adormecido en aras de la denominada «coexistencia pacífica», el esquema mundial de reparto de poder tácitamente acordado entre los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética para no recalentar la Guerra Fría que ambas superpotencias libraban entre bambalinas. Fue el tiempo en que la humanidad vivió pendiente de que, de uno u otro lado de esa delgada línea, a alguien se le ocurriera pulsar el fatídico *botón rojo* que controlaba las ojivas nucleares e hiciera volar por los aires al globo terráqueo.

El punto más alto de ese tiempo épico y efervescente fue el año 1968. Ese año se produjeron en simultáneo: la Primavera de Praga, en Checoslovaquia, entre enero y agosto; la muerte de Martin Luther King, el líder negro asesinado en los Estados Unidos, en abril; el Mayo Francés, en París; la rebelión estudiantil de Tlatelolco, en México, en octubre; y las movidas pacifistas de los estudiantes estadounidenses iniciadas en Berkeley que se extendió como reguero de pólvora a todas las demás universidades americanas, solo por citar los episodios más resonantes que repercutieron con fuerza en todo el orbe.

Al año siguiente, en línea con lo anterior, en el lejano Cono Sur, se produjo nuestro Cordobazo criollo, de ribetes parecidos al Mayo francés. Nada se estaba quieto en el mismo lugar ni permanecía inalterable por mucho tiempo: así estaba el mundo convulsionado de los años '60.

En todos los casos citados, el protagonismo corrió por cuenta de las nuevas generaciones. Los jóvenes sesentistas, lejos de adoptar la postura de resignación y docilidad de sus padres frente a las injusticias flagrantes del mundo exterior y a las guerras decididas por los amos del mundo, enarbolaron las banderas de libertad y justicia; sin pensarlo dos veces, la emprendieron contra el sistema, contra la sociedad de consumo; ora por las buenas, ora por las malas. Las consignas dominantes eran de ruptura: «Seamos realistas, pidamos lo imposible», proclamaban los graffiti estampados por los estudiantes parisinos en las paredes del barrio Latino. «Ni golpe ni elección, revolución», gritaban las paredes cordobesas.

La influencia de la Revolución Cubana era palpable, flotaba en el ambiente intelectual de la época. Según escribió el padre Gustavo Morello en *Cristianismo y Revolución*, ensayo editado por la Universidad Católica de Córdoba:

«Los años '60 son hijos de la Revolución Cubana. Cuba era el argumento de los hechos, la fuerza de una revolución hecha con garra, en las narices del imperio. Era un pueblo con mística revolucionaria; en donde se moría con la promesa de llegar al paraíso socialista, cuyos anticipos estaban en la construcción del socialismo. Seduce el pragmatismo de la Revolución Cubana. En estas circunstancias, el discurrir intelectual cedió a la urgencia revolucionaria. Cuba significó la confianza absoluta en el tiempo de la revolución. Era inminente la conquista del poder por parte del pueblo en armas. Ese pueblo construiría casi automáticamente, sin mediación política, la sociedad sin clases, un mundo de hermanos.»

Esa particular forma de ver el mundo influyó en todo: en los gustos, usos y costumbres de una juventud inconformista y transgresora que no perdía ocasión para marcar diferencias con sus mayores, a quienes no les quedaba más remedio que aceptar a regañadientes la impetuosa *nueva ola* como parte de un fenómeno que estaba fuera de sus posibilidades de control e, incluso, de entendimiento.

La Argentina de entonces, pese a formar parte del llamado Tercer Mundo, ese lote difuso de naciones que no pertenecían a Occidente ni a la órbita comunista, era más homogénea, menor asimétrica, de lo que es hoy. Había desigualdad social y exclusión, sí, pero no había tantos ricos exageradamente ricos ni pobres en cantidades como los hubo en las décadas siguientes. En otras palabras, la brecha social no era un abismo aún. La llamada clase media pasaba por su mejor momento, ocupando un espacio social y cultural preponderante. Era una Argentina sostenida en dos pilares básicos: la cultura del trabajo y un sistema educativo que funcionaba a pleno como una verdadera turbina de desarrollo

social, sostenido por una escuela pública de excelencia en todos sus niveles.

La relación entre padres e hijos también sufrió cambios irreversibles durante esos años. La mayoría de los padres de entonces, nacidos en las primeras décadas del siglo, habían vivido casi la mitad de sus vidas en un contexto cultural diferente al de sus hijos, sin poder disfrutar de los avances científicos y tecnológicos que tras la finalización de la Segunda Guerra revolucionaron al mundo y tornaron mucho más comfortable la vida cotidiana, como la televisión y los antibióticos, por citar solo dos ejemplos de una larga lista de novedades. A su vez, muchos de esos padres eran productos de las corrientes inmigratorias que atestaron la Argentina decimonónica y de comienzos del siglo veinte; formaban parte de la primera o segunda generación de descendientes de inmigrantes que pusieron en práctica los valores y mandatos implícitos en su bagaje genético y sobre los que se fue edificando la Argentina moderna.

Así fue como, en general, los mayores de entonces procuraron para sus respectivas familias, sobre todo para los vástagos, un mejor pasar del que ellos mismos habían tenido de jóvenes, poniéndolos a cubierto de privaciones y escaseces que habían sido moneda corriente en sus vidas. Se preocuparon, entonces, por dotar a su descendencia de las armas y herramientas necesarias para abrirse paso, para progresar en la escala social sin tanto esfuerzo ni sufrimiento, empezando por la educación, la más valiosa de todas esas herramientas. Aunque la mayoría de ellos no concurren a la escuela más que unos pocos años, apenas los suficientes para aprender a sumar, restar, leer y escribir, habían aprendido en carne propia la lección más provechosa: el valor de la preparación para afrontar la vida, y por esa razón tan elemental como loable pretendieron que sus hijos completaran la secundaria al menos. Y si fuera posible, que ingresaran a la Universidad y consiguieran un título académico, algo que la mayoría de ellos no había logrado. Ese era el berretín de una generación de padres que Florencio Sánchez pinta magistralmente en *M'hijo el doctor*.

Lo cierto es que esos rasgos sociológicos —sucintamente mencionados sin más pretensión que aportar el contexto de la época para entender mejor algunas cosas— fueron el soporte de la nueva matriz social en la que la pequeña burguesía urbana adquirió un

peso social y cultural dominante, transformándose en protagonista del cambio.

La clase obrera, el otro actor social de ese cambio, exhibía un comportamiento más estable a lo largo del tiempo. Había sido combativa desde siempre; los ejemplos sobran en la historia argentina: la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, la Forestal, la Resistencia Peronista, algunos de los picos altos de epopeyas obreras teñidas de represión y tragedia que dejaron cientos de mártires a la vera del camino. Durante la década del '60, los trabajadores argentinos, mayoritariamente peronistas, seguían en pie de lucha por la defensa del empleo y del salario en tiempos de los presidentes Arturo Frondizi y Arturo Illia, y, más tarde, contra la política económica de la dictadura militar que favorecía a los monopolios y las multinacionales de la época.

La gran novedad en ese período histórico fue la incorporación masiva de la clase media argentina a las luchas sociales que hasta allí libraban en soledad los trabajadores y las organizaciones sindicales. De a poco, las universidades argentinas dejaron de ser una isla o una torre de marfil alejada de la realidad y los estudiantes abandonaron las posturas elitistas y reaccionarias del pasado, incorporándose masivamente al campo popular. Este fenómeno asociativo virtuoso cobró mayor visibilidad a partir del golpe de Estado de 1966, y fue en aumento en los años siguientes, cuando la llamada unidad obrero-estudiantil se convirtió en el eje dinámico de la resistencia popular en los tiempos oscurantistas de Onganía.

La vanguardia de ese fenómeno, el sector de las capas medias que asumió mayor protagonismo, fue la juventud, especialmente la universitaria. También aquí, en Argentina, la ideología dominante entre los jóvenes era revolucionaria. El mundo estaba en erupción y la Argentina no se quedaría al margen: soplaban vientos huracanados como en todas partes y las nuevas generaciones fueron quienes tomaron la bandera del cambio en sus manos.

Ahora bien: ¿Qué objetivos se planteaban aquellos jóvenes inquietos, solidarios, comprometidos con su tiempo? El hombre nuevo y una sociedad más justa, podría ser una síntesis comprensiva del discurso juvenil de entonces que tenía tanto de esperanzador como de quimérico. Esa era, sucintamente, la utopía en estado químicamente puro que daba sustento al compromiso humanista y militante de las nuevas generaciones y a la entrega

generosa de mártires tempranos cuyo número iría en aumento en los años siguientes al compás de la radicalización de la lucha y el consiguiente y paulatino recrudescimiento de la represión.

En un país dependiente como lo era la Argentina de entonces, presa del entramado de posguerra, que mostraba en primer plano un Occidente manejado con mano de hierro por los Estados Unidos de Norteamérica, no podían estar ausentes del discurso revolucionario los contenidos nacionales y antiimperialistas. El eufemismo acuñado por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) para designar a los países tercermundistas como «naciones en vías de desarrollo» fue reemplazado por el más explícito de *países dependientes* o, directamente, *coloniales*; términos acuñados por los cultores de la llamada teoría de la dependencia, como Elio Jaguaribe o Theotonio Dos Santos. En la Argentina, a la vez que se asumía la condición de país periférico, la juventud enarbolaba la bandera de la liberación nacional, sobre cuyos contenidos había distintos enfoques y visiones que alimentaban el debate intelectual y la praxis revolucionaria de aquellos días.

Alfredo Grieco y Bavio, autor de *Cómo fueron los 60* (Espasa Calpe, 1994), sostiene, a manera de síntesis, que:

«En los años 60 la situación es clara: nadie quiere la moderación de una *autonomía interna* o el *autogobierno*, sino una independencia radical; el movimiento independentista se ha extendido de las élites urbanas a las masas populares; en todas partes surgen (con éxito) nuevas personalidades carismáticas que se identifican (y consiguen ser identificados) con la voluntad emancipatoria nacional y popular.»

El movimiento estudiantil

Córdoba, una Meca universitaria y cultural de renombre internacional, con un estudiantado vanguardista que había protagonizado la legendaria movida reformista de 1918, estaba llamada a convertirse en el epicentro de ese proceso de ruptura y cambio que sacudía las estructuras tradicionales a escala mundial. Por

eso mismo, la profesión de fe anticomunista de los militares que tomaron el poder en 1966, de entrada, tuvo a la docta provincia en la mira.

Ese año de 1966 puede considerarse una bisagra, un hito que marcó a fuego el comienzo de un nuevo tiempo en Córdoba. El mismo año en que Mariano cumplió los dieciocho y obtuvo el título de Bachiller y la libreta de Enrolamiento —el documento ciudadano de entonces, que no llegaría a usar, al menos para votar—, en el mes de septiembre, Santiago Pampillón fue asesinado por la policía cordobesa mientras participaba en una de las manifestaciones que los estudiantes llevaban adelante en repudio a la intervención de la Universidad Nacional. Pampillón, obrero de IKA Renault y estudiante de Ingeniería, representaba la encarnación simbólica de la unidad obrero—estudiantil en una misma persona. Su martirio marcó a fuego la épica antidictatorial basada en la lucha popular.

El gobierno de facto, imbuido de un espíritu ultramontano y represivo a la vez, dictó la Ley 16.912, que dispuso la intervención a las universidades nacionales, entre otros propósitos, a fin de revisar: «Las normas que actualmente rigen a la universidad y elaborarlas nuevamente con el propósito de eliminar las causas de acción subversiva.» Para concretar el objetivo purificador enunciado, se colocó a las universidades en la órbita del Ministerio del Interior y se encomendó a los interventores de esas casas de estudio terminar con la autonomía universitaria, suprimir el cogobierno docente—estudiantil y prohibir todo debate de ideas y expresiones contrarias a la filosofía occidental y cristiana que encarnaba el régimen. La medida desencadenó episodios como *La noche de los bastones largos*, la brutal represión policial contra estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Buenos Aires; y las consiguientes cesantías, renuncias y éxodo en masa de profesores e investigadores de primer nivel.

El mismo fenómeno autoritario se replicó con características particulares en Córdoba. Por esos días, como parte de la protesta estudiantil contra la intervención a la Universidad Nacional, un grupo de militantes del Integralismo realizaba una huelga de hambre en la parroquia Cristo Obrero, sobre Figueroa Alcorta, en pleno centro de la ciudad, que contaba con el apoyo de los curas Nelson Dellaferreira y José Oreste Gaido, encargados de la parroquia mencionada. A lo largo del conflicto, que se extendió

durante toda la segunda mitad de aquel año, hubo asambleas multitudinarias en diferentes lugares, movilizaciones callejeras y una marcha desde la vecina ciudad de Alta Gracia.

Pese a que la larga y desgastante huelga estudiantil se agotó sin conseguir la renuncia de las autoridades universitarias y, en cambio, hizo que muchos alumnos perdieran el año lectivo, marcó un punto de inflexión. A partir de la evaluación de los resultados obtenidos, los más activos comprendieron que había que superar el planteo meramente reivindicativo y proseguir la lucha en el terreno político, disponiendo de herramientas organizativas superiores, capaces de reemplazar a organismos e instituciones como los consejos académicos, el cogobierno y otras similares, que habían dejado de funcionar luego de la intervención para dar paso a un régimen verticalista y reaccionario. Con ese fin, se fundó el MUCO (Movimiento Universitario del Cristo Obrero), de vida efímera, que fue la primera experiencia superadora de la etapa anterior.

Luis Rodeiro, protagonista activo de ese tiempo, en su libro *Fantasías de Bandoneón* (Ediciones de la cortada, 1996) da su visión de ese momento crucial:

«El país es otro. La respuesta estudiantil como expresión de la nueva realidad argentina, es nueva. Se transita por otros caminos. El peronismo que los reformistas no lograron entender, y la influencia ideológica, política y metodológica de la revolución cubana, son ahora nuevos puntos de referencia. El reformista universitario, como expresión ideológica del liberalismo, ha quedado superado. El antagonismo tradicional católico-marxista está, al menos momentáneamente, suspendido. El cristianismo mismo, con los nuevos aires que llegan del Concilio, se resuelve y se renueva. Las críticas juveniles comienzan a apuntar directamente al Sistema.»

El reformismo al que alude Rodeiro controlaba la otrora poderosa FUC (Federación Universitaria de Córdoba), en cuyo seno convivían socialistas seguidores de Guillermo Estévez Boero, radicales de

Franja Morada, comunistas, y discípulos de Jorge Abelardo Ramos. Desde los tiempos de «libre o laica» —el conflicto desatado por la reforma educativa frondicista— la vieja FUC, dirigida por Abraham Kozak, disputaba la hegemonía del movimiento estudiantil con Integralismo, una corriente socialcristiana en ascenso que aún no había virado hacia el peronismo. En la Universidad Católica de Córdoba (UCC), entretanto, la Agrupación de Estudios Sociales (AES), fundada en 1967, daba sus primeros pasos.

La evolución posterior del proceso de radicalización del movimiento estudiantil estuvo fuertemente condicionada por factores externos entre los que no se puede omitir el surgimiento de corrientes sindicales antiburocráticas como la CGT de los Argentinos (CGTA), nacida en 1968 como consecuencia de la división del movimiento obrero organizado, y el crecimiento en el seno de la Iglesia Católica del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo.

Emilse Pons, en su monografía incluida en la compilación *Córdoba Bicentenario. Claves de su historia contemporánea* (Universidad Nacional de Córdoba, 2010), afirma:

«Esta radicalización de las tendencias en el movimiento estudiantil que desplaza al liberalismo y jaquea al tradicional reformismo universitario vinculado desde antaño con los partidos políticos de izquierda tradicionales, no puede entenderse cabalmente sin tener en cuenta los quiebres y recambios políticos e ideológicos que se operan en el contexto histórico general con los triunfos de movimientos reformistas y revolucionarios en la década del sesenta, de los cuales la Revolución Cubana de 1959 sea probablemente uno de los símbolos más movilizadores.»

La praxis de esa nueva dirigencia estudiantil, que crecía por fuera de las estructuras tradicionales, exigía una rigurosa formación teórica de cuadros dirigenciales; los textos de autores como Marx, Engels, Lenin, Mao, Ho Chi Min, Marcuse, Sartre, Russell, Althusser, Gramsci, Fanon y otros que planteaban cambios revolucionarios y nuevas visiones el mundo comenzaron a ser de lectura obligatoria y permanente.

Existencialismo, humanismo, materialismo dialéctico, estructuralismo, bullían en el mismo caldero donde se cocinaba una visión del mundo opuesta a la mirada tradicional y conformista. Sin embargo, no había una síntesis posible de aquella parafernalia teórica ni, mucho menos, una traducción política capaz de unificar la acción revolucionaria. Solo había cierto grado de consenso general alrededor de la idea de construcción del socialismo como meta final, que cada quien definía a su gusto, y de la toma violenta del poder, ya que nadie creía que las Fuerzas Armadas que gobernaban con mano de hierro estuvieran dispuestas a soltarlo por las buenas. De a poco, el concepto de violencia revolucionaria dejó a un costado del camino la vía pacífica para el asalto al poder, sobre todo la electoral, caída en descrédito tras los sucesivos golpes de Estado. Todo lo demás desunía o, al menos, encendía discusiones a las que, por lo interminables e inconducentes, solía llamárseles *bizantinas*.

También había unanimidad en recoger el ejemplo de Ernesto Guevara, asesinado en Bolivia en octubre de 1967, como figura emblemática universal y modelo de conducta a seguir: el *Che*, por su generosa entrega a la causa revolucionaria, era el ídolo indiscutido de las jóvenes generaciones ávidas de misticismo e intransigencia. El rostro barbado del guerrillero argentino, rescatado de la célebre fotografía de Korda de un Che victorioso y lleno de vida, se multiplicó en pancartas, murales y afiches, convertido en bandera de lucha y símbolo unívoco de la resistencia a la dictadura.

El culto al Che adquirió proporciones gigantescas después de muerto, alimentado por otra fotografía icónica: la de un Ernesto Guevara sin vida, yacente en la lavandería del hospital de Vallegrande, con los ojos abiertos y una expresión serena y triunfante en el rostro, como burlándose de sus verdugos.

Alfredo Grieco y Bavio, ya citado, pone en palabras el fenómeno que rápidamente tuvo alcance universal:

«La foto que mostraba su bello cuerpo muerto, asmático y semidesnudo, dio la vuelta al mundo; su heroísmo sería recordado una y otra vez en las revueltas de todo tipo que signarían 1968; de algún modo, el destino trágico —no se sabe si voluntariamente aceptado— las anticipaba y resumía a todas.»

La influencia de la Iglesia

A comienzos de los años '60, la Iglesia de Córdoba aquilatava una larga tradición conservadora a ultranza, apenas resquebrajada por algunos episodios discordantes como el que cita Lucas Lanusse en su ensayo *La Universidad Montonera* (Universidad de San Andrés):

«Las movilizaciones obreras y ocupaciones de fábricas de 1964 generarían en el seno de la Iglesia cordobesa nuevos incidentes. En abril de ese año, en el marco del Plan de Lucha lanzado por la CGT, el diario *Córdoba* publicó tres reportajes a los sacerdotes Gaido, Dellaferrera y Vaudagna acerca de la posición de la Iglesia frente a la cuestión social, la educación y los cambios teológicos que se venían marcando en el Concilio Vaticano II. El contenido de las notas generó una importante ola de críticas de parte de los sectores católicos conservadores, derivando en una intensa polémica. Treinta sacerdotes del clero cordobés adhirieron a los curas rebeldes mediante una solicitud. Finalmente, el conflicto concluyó el 25 de mayo, cuando tras la visita del Nuncio a Córdoba y como consecuencia de las presiones ejercidas, la totalidad del clero cordobés manifestó su adhesión a Monseñor Castellanos. Había triunfado la verticalidad.»

El puntapié inicial del debate en el seno de la Iglesia lo dio el mencionado Concilio Ecuménico Vaticano II, que deliberó en Roma entre los años 1962 y 1965. Esa cumbre ecuménica del catolicismo, convocada con la intención de *aggiornar* la doctrina milenaria a los cambios y desafíos propios de los nuevos tiempos, introdujo una serie de reformas que renovaron no solo la antigua liturgia —entre otras innovaciones se reemplazó el latín por las lenguas vernáculas en la celebración de la misa— sino la visión estrecha del mundo que ostentaba la Iglesia preconiliar.

El Concilio trajo, entre otras consecuencias, un replanteo a fondo de la misión evangelizadora de la Iglesia y un acercamiento a los sectores más humildes y desprotegidos de la sociedad, especialmente en espacios continentales donde imperaban la injusticia y el neocolonialismo, por caso Latinoamérica. En 1962, el Papa Juan XXIII lo puso en palabras: «frente a los países subdesarrollados, la Iglesia se presenta tal como es y quiere ser: como la Iglesia de todos, particularmente, la Iglesia de los Pobres.» Era el germen de la llamada Teología de la Liberación, que cobró forma algunos años más tarde.

Para entonces, en el plano intelectual, el debate giraba en torno de la supuesta contradicción entre socialismo y cristianismo, que solían ser presentados como términos antagónicos por algunos connotados intelectuales de ese tiempo. La tesis del compromiso con la lucha por la liberación desde el cristianismo era defendida con erudición y fervor, entre otros referentes de la época, por Conrado Egger Lan, titular de la cátedra de Historia de las Religiones de la UNBA y autor de numerosos libros y ensayos; en tanto que la visión marxista de la revolución social corría por cuenta de pensadores como León Rozitchner, los hermanos Ismael y David Viñas y José Aricó, líder del grupo Pasado y Presente, entre otros.

El paso siguiente que dio la Iglesia postconciliar fue la encíclica *Populorum Progressio* (Progreso de los Pueblos), dictada por Paulo VI en 1967. En ella, el Sumo Pontífice denunciaba el estado de injusticia reinante en el mundo y la brecha existente entre países ricos y países pobres, proponiendo a su vez el desarrollo integral del hombre, enriqueciendo con esos nuevos contenidos y enfoques la llamada Doctrina Social de la Iglesia.

Esa encíclica de cuño progresista disparó en el acto otras movidas que apuntaban en la misma dirección, como el *Manifiesto de los 18 obispos*, un documento de perfil anticapitalista firmado por prelados de distintos países liderados por monseñor Helder Cámara, arzobispo de Recife (Brasil). «Los cristianos tienen el deber de mostrar que el verdadero socialismo es el cristianismo integralmente vivido, en el justo reparto de los bienes y la igualdad fundamental de todos», se lee en uno de los párrafos del manifiesto que interpelaba a la vieja Iglesia.

Apenas se conoció en la Argentina, el documento agitó las aguas en el seno del catolicismo criollo, concitando la adhesión espontánea de alrededor de trescientos sacerdotes. En Córdoba,

donde se venía dando el debate tanto en el Seminario Mayor como en varias parroquias populares, la lista oficial de adherentes a la postura de los obispos incluyó a varios curas: Felipe D'Antona, José R. Echeverría González, Nelson Dellaferrera, José A. Fernández, Carlos A. Fugante, José Oreste Gaido, Justo Hilario Irazábal, Abdon Layús, José C. Mariani, Elmer Miani, Nagib J. Nasser, Humberto Mariani, Gustavo Ortiz, Miguel Pogliano, José Ángel Rovai, José Antonio Segundo, Pedro Suárez, Erio Vaudagna, Milán Viscovich y Luis Eduardo Zorzín.

El último párrafo de la nota de adhesión cursada por los sacerdotes argentinos a los obispos firmantes del manifiesto deja en claro el compromiso asumido:

«Estamos convencidos que nuestra Iglesia Latinoamericana vive una hora de definiciones concretas muy urgente, frente a los acontecimientos actuales. Al adherirnos al documento publicado por Uds. tenemos conciencia de haber dado, como sacerdotes, un primer paso para comprometernos dentro del proceso de transformación de América Latina.»

Así nació el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, que proclamaba «la opción por los pobres» y propiciaba la militancia social y política en barrios humildes y villas de emergencia donde la marginalidad mostraba su peor cara, a la vez que desafiaba la jerarquía eclesiástica dirigida por el obispo Raúl Francisco Primatesta, quien en 1965 había reemplazado a Ramón Castellanos al frente de la Curia arzobispal cordobesa.

En el mes de mayo del año 1968, se realizó en Córdoba la primera reunión nacional de coordinación del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. El encuentro se llevó a cabo en el Hogar Sacerdotal de calle Rioja 564 y asistieron representantes de la mayoría de las diócesis del país. Algunos obispos, como Enrique Angelelli de La Rioja, Alberto Devoto de Goya (Corrientes) y Vicente Zaspé de Santa Fe, apoyaron al movimiento, aunque sin integrarse de manera orgánica; en tanto que la cúpula eclesiástica lo desconoció y persiguió a sus inspiradores.

Ese año de 1968 los vientos renovadores en el seno de la Iglesia universal siguieron soplando con fuerza. En el mes

de junio, la ciudad de Medellín (Colombia) fue sede de la II Conferencia Episcopal; los obispos allí reunidos aprobaron un documento en el que examinaban el papel pastoral de la Iglesia en sus respectivos países bajo una óptica social, denunciaban la opresión del sistema capitalista sobre los pobres, criticaban la explotación de la que eran víctimas los países del Tercer Mundo y exigían una serie de reformas políticas y sociales en pos de un orden más justo.

La divulgación de estos nuevos paradigmas, que reclamaban un mayor compromiso de la Iglesia con los desposeídos y propiciaban la fusión de la acción evangelizadora con tareas concretas de concientización social y política, influyó en la formación de los jóvenes y en la evolución de las agrupaciones estudiantiles que formaban parte del espacio socialcristiano o humanista.

Hasta no hacía mucho, el pensamiento socialcristiano reconocía como referencia superior a Jaques Maritain, el filósofo tomista que patentó el Humanismo Integral como piedra angular de la doctrina basada en la fe católica como motor del cambio social. Sin embargo, la radicalización de los procesos políticos y sociales, que dio lugar a la aparición en escena de nuevos actores, como era el caso de Camilo Torres —el sacerdote colombiano que resolvió adoptar el camino de las armas y fue ultimado por el ejército de aquel país en 1966—, tornó insuficiente esquemas como el postulado por Maritain, consistentes desde el punto de vista intelectual pero de escaso valor operativo a la hora de poner en práctica la justicia social proclamada. Algo parecido pasaba con las abstracciones filosóficas de otro referente humanista, el jesuita Pierre Teilhard de Charden, consideradas heréticas hasta por miembros de su propia orden. Fue entonces que el filósofo francés Louis Althousser acudió en auxilio de quienes necesitaban una nueva visión del marxismo capaz de superar la antinomia planteada sin forzar demasiado las cosas.

No resulta extraño, entonces, que por esa época viera la luz *Cristianismo y Revolución*, la revista militante concebida por el ex-seminarista Juan García Elorrio en colaboración con el periodista Jorge Bernetti que intentaba una síntesis de los términos reunidos en el nombre elegido para la publicación, que dejara conformes por igual a marxistas y católicos. Según el padre Gustavo Morello, ya citado:

« (...) para *Cristianismo y Revolución* la pregunta no es si un cristiano debe o no ser revolucionario. La pregunta es si existe otra forma de compromiso cristiano auténtico que no sea el revolucionario.»

Y, como complemento de lo anterior: «la guerrilla es, en C y R, la forma más pura y más correcta, la única alternativa que se plantea con seriedad tomar el poder para el pueblo.» Como se ve, la nueva concepción implicaba, además, una revisión de la violencia y su justificación en determinado contexto social.

De allí al conocido apotegma acuñado por Perón: «la violencia en manos del pueblo no es violencia, es justicia», había apenas un paso.

La opción por el peronismo

Existía algo más en el centro del debate sesentista, una cuestión espinosa que obraba como divisoria de aguas entre posiciones irreductibles a favor y en contra: la revalorización del peronismo como atajo revolucionario para la toma del poder.

Visto a la distancia, resulta curioso que los jóvenes de aquella época, despojados de prejuicios y atavismos, estuvieran dispuestos a efectuar una relectura de acontecimientos pasados y reexaminar la potencialidad transformadora del peronismo a la luz de la nueva realidad, aun cuando la mayoría de ellos no había vivido la experiencia peronista y provenía de familias antiperonistas.

El resultado de ese proceso de apertura mental, revisión y búsqueda de nuevas opciones, fue que el rechazo ancestral de la clase media diera paso a un viraje progresivo y arrollador hacia la aceptación del peronismo como doctrina apta para guiar la acción revolucionaria. Aquello de «alpargatas sí, libros no», que en el pasado había desunido a intelectuales y trabajadores, en la década del '60 mutó sorprendentemente hacia consignas unificadoras de nuevo signo del tipo: «obreros y estudiantes, unidos adelante.»

Para sorpresa —o disgusto en muchos casos— de sus mayores, aquellos jóvenes, que habían tenido su rito iniciático con *La hora de los hornos* —el film testimonial de Fernando Pino Solanas que se proyectaba en sindicatos, salas clandestinas y casas de militantes—,

se aprendían de memoria las estrofas de la pegadiza marcha partidaria entonada por Hugo del Carril, dispuestos a luchar por el regreso de un general nacionalista, anciano ya, a quien conocían de mentas y cuya sola mención en voz alta desataba la tirria de sus padres. Toda una novedad de la época: las mismas capas medias que en la década anterior denostaron a Perón y engendraron de su seno a los comandos civiles para derrocarlo, ahora, reconciliadas con el pueblo y con el gigante invertebrado y miope del que hablaba John William Cooke, demandaban su retorno.

El fenómeno fue tratado e interpretado por numerosos autores. Transcribimos de *Soldados de Perón. Los Montoneros*, de Richard Gillespie (Grijalbo, 1987):

«Tras varios años de hallarse aislados de los trabajadores argentinos, los militantes de la clase media aceptaron entonces por completo la mitología peronista, pues, por muchas que fueran las críticas contra Perón y su esposa, no podían admitir que el pueblo se hubiese equivocado en su inquebrantable fe en ellos.»

Juan Gasparini, en su libro *Montoneros. Final de Cuentas* (De la campana, 1999) escribe:

«Socialmente, el fenómeno guerrillero emerge de lo que se conoce como radicalización y peronización de los sectores medios, fomentada por la denominada Revolución Argentina de 1966. Franjas significativas de la juventud, del estudiantado, de profesionales, artistas e intelectuales rechazan las posiciones antiperonistas y desde derecha e izquierda inician un acercamiento al justicialismo, soldando a la clase obrera con muchas parcelas significativas de la clase media. Al superar el desencuentro que debilitaba al movimiento popular, el progresismo confluía. En la mayoría campeaba la idea de que no había solución popular fuera del peronismo.»

Lo mismo expresa Jorge Luis Bernetti en *El peronismo de la victoria* (Legasa, 1985):

«Por otra parte el clima cultural del país se había modificado. Las posiciones gorilas y liberales habían experimentado un serio retroceso. Amplios sectores de las capas medias asumían una actitud entusiasta o comprensiva del papel histórico del peronismo. Un hondo proceso de reformulación histórico-ideológico liquidaba viejos argumentos para mantener enfrentados a grandes sectores nacionales.»

José Amorín, uno de los fundadores de Montoneros, refleja este fenómeno en su libro *Montoneros. La buena historia*:

«Si reconocemos que después del golpe del '55, el peronismo en lucha experimentó tres etapas—el Peronismo de la Resistencia (hasta 1960), el Peronismo Revolucionario (hasta 1967/68) y la Tendencia Revolucionaria (a partir de la creación de la CGT de los Argentinos y en cuyo contexto surgieron las Organizaciones Armadas Peronistas)—entre la segunda y la tercera etapa se incorporó una variable independiente que, de alguna manera, hizo una irrupción en el proceso revolucionario: se trató de la incorporación de jóvenes en su mayoría de clase media quienes—politizados en el cristianismo post conciliar, el nacionalismo o la nueva izquierda e influenciados por las teorías del Peronismo Revolucionario de John Willam Cooke—impusieron una impronta de lucha diferente a las experimentadas hasta ese momento por el peronismo.»

Claro que la adhesión masiva de la pequeña burguesía al movimiento nacional, al que hasta ese momento los intelectua-

les de izquierda habían dado la espalda, cuando no combatido abiertamente, requería de un esfuerzo teórico que obrara a la vez como justificación consistente y propuesta seductora para captar voluntades de paladar exigente. No en vano, buena parte de la energía puesta al servicio de la militancia revolucionaria se consumía en discutir horas enteras acerca de si el peronismo representaba el mejor camino o el más directo hacia la toma del poder por parte de la clase trabajadora o si, en cambio, escondía una trampa mortal para el proletariado y los sectores populares, como pregonaban algunas corrientes de la izquierda dura, herederas de las concepciones anacrónicas del viejo Partido Comunista, esencialmente antiperonista y tributario, en su hora, de la Unión Democrática. Para esa franja intelectual aferrada al dogmatismo, Perón era un líder burgués y la etapa peronista una distracción capitalista, una lamentable pérdida de tiempo en el camino de la clase obrera hacia la toma del poder, en los mismos términos que Carlos Marx definió al bonapartismo en *El 18 de Brumario de Luis Bonaparte*, libro de cabecera de la izquierda argentina.

Cuestiones medulares como la catadura ideológica de Perón, su rol histórico retardatario o progresista, o ciertos contenidos autoritarios o *fascistoides* del peronismo de la primera hora que lastimaban la sensibilidad de algunos intelectuales, estaban en el centro del debate de entonces. El artífice de esa elaboración superior, rebuscada por momentos, capaz de inclinar la balanza y convencer al marxista más incrédulo de las bondades revolucionarias del peronismo, fue, sin dudas, John William Cooke, dueño de una mente esclarecida. Su profético *Informe a las bases*, editado clandestinamente y pasado de mano en mano, fungió como una verdadera Biblia breve para la formación de cuadros y la divulgación del pensamiento revolucionario peronista.

Ese texto cuasi evangélico, convertido en literatura de culto en el circuito político *underground* de la segunda mitad de los '60, fue redactado por Cooke al poco tiempo de producido el golpe de Estado contra el presidente Arturo Illia con el propósito de que sirviese a la militancia peronista como blindaje contra los falsos profetas y guía práctica para la acción revolucionaria, que el autor promovió hasta su muerte temprana, en 1968. Allí escribió:

«El régimen no puede institucionalizarse porque el peronismo obtendría el gobierno.

El régimen solo tiene fuerza para mantenerse a costa de transgredir los principios democráticos que invoca como razón de su existencia. El peronismo, por su parte, jaquea al régimen agudiza su crisis, le impide institucionalizarse, pero no tiene fuerza para suplantarlo, cosa que solo será posible por métodos revolucionarios.»

Y para que no quedaran dudas de cómo concebía las cosas y su propio rol en ese proceso, pontificó:

«Es preciso que demos el paso de la rebeldía a la revolución, pero eso no se produce espontáneamente por revelaciones mágicas, sino por la elaboración teórica que es parte de la conducción.»

En su obra póstuma, *Peronismo y Revolución*, una reelaboración del *Informe* publicada más tarde, apelando a las categorías marxistas de análisis, Cooke caracterizó el momento político que se vivía un par de años después del golpe militar, identificando al peronismo con la clase obrera argentina y colocándolo en el centro de la escena histórica:

«La antinomia peronismo-antiperonismo es la forma concreta en que se da la lucha de clases en este período de nuestro devenir. Por eso es que contra el peronismo se ejerció la violencia durante todo el tiempo, sea en la forma negativa de vedarle sus derechos o sea bajo las formas activas de la represión.»

Más adelante, con la misma rigurosidad, fundamentaba por que, según él, el peronismo estaba llamado a ser el eje del proceso revolucionario en la Argentina:

«Fue una explosión popular y revolucionaria como esfuerzo emancipador en un país dependiente, cumplido empíricamente y

unificando las verdades parciales en un programa de grandes consignas; coincidiendo con la aparición de las masas compuestas principalmente por el nuevo proletariado urbano que había surgido como clase pujante y que no estaba alienada por los valores vetustos del régimen.»

En su parte final, el documento alertaba acerca del mayor peligro que Cooke avizoraba tras la irrupción de los militares: que la acomodaticia dirigencia sindical —a la que conocía muy bien por haber sufrido sus claudicaciones durante el tiempo en que fue el primer delegado de Perón en el país— se acoplara a la aventura golpista:

«Ahora los burócratas buscarán toda clase de pretextos para hacerse oficialistas. De paso, si se considera que estamos en una “revolución” [se refiere a la Revolución Argentina encarnada por Juan Carlos Onganía] no hay obligación de tener que hacerla y andar buscando excusas para no intentarla.»

No era un temor infundado: la plana mayor del sindicalismo peronista había concurrido, oronda, a la jura de Juan Carlos Onganía.

Y el remate, inflamado de mística militante, acorde al clima de época:

«Habrà violencia reaccionaria hasta que pueda ser derrotada por la violencia revolucionaria. O dictadura del privilegio o liberación nacional. O los militares pentagonales o el poder del pueblo. Cualquiera otro planteo es un engaño, una ilusión liberal restaurada de apuro por el reaccionarismo reformista.»

Seguramente esta misma lógica bipolar, impecablemente traducida por Cooke, fue la que llevó a Mariano, un joven universitario de clase media, como a tantos jóvenes de su tiempo, a

abrazar la causa peronista y la vía revolucionaria para la toma del poder.

La matriz del peronismo revolucionario en Córdoba

En 1967, comienza a gestarse en Córdoba lo que sería la matriz del peronismo revolucionario en la provincia. No fue un proceso lineal ni reconoce una única vertiente sino que, por el contrario, obedeció a una dinámica aluvional a partir del aporte de distintos sectores y experiencias anteriores, algunas yuxtapuestas e incluso disímiles entre sí.

En la universidad, tras el asesinato de Santiago Pampillón y el fin de la huelga estudiantil de 1966, aprovechando el reflujo ocasionado por la baja de los niveles de conflictividad y la normalización de las actividades académicas, comenzó un proceso de reacomodamientos y replanteos a más largo plazo. Al año siguiente, parte del activo que había conducido las jornadas de protesta se reagrupó en Lealtad y Lucha, una corriente que desde sus orígenes apuntaba hacia la identificación con el peronismo y la adhesión a métodos más radicales de acción política.

En 1967 se celebró una cumbre del peronismo revolucionario en la localidad serrana de Río Ceballos, a la que asistieron referentes nacionales de la corriente. En el cónclave se planteó la necesidad de una organización alternativa a las estructuras tradicionales del Movimiento Peronista dominadas por la burocracia política y sindical, capaz de liderar la lucha popular.

La cuestión de la vía armada figuró en la agenda del encuentro. Sobre el particular, el exsacerdote Elvio Alberione señala:

«Allí se discutieron temas como la violencia, la lucha armada, el socialismo, y se estableció que el peronismo era el soporte político. Aparecieron dos posturas: un sector, con Emilio Maza, que planteó no hacer diferencias dentro del peronismo y propuso un foco rural como metodología de acción. Otro, que me incluyó, veía que el peronismo contenía sectores vinculados a la derecha y priorizaba la lucha urbana. A partir de

allí nace la Agrupación Peronista Lealtad y Lucha, que se transformará en el Peronismo de Base y después en las Fuerzas Armadas Peronistas.»

(www.los70.org.ar)

José Amorín, ya citado, corrobora lo anterior:

«Todos los participantes coincidían en que al estar cerradas las vías legales de expresión política había que desarrollar la lucha armada. Ello, con escasas excepciones, estaba fuera de discusión. Lo que se discutía era en qué condiciones desarrollar esta lucha. Si era o no el momento de tomar las armas, si estaban dados los requisitos políticos, si no era menester desarrollar previamente una fuerte organización popular que diera sustento –político e infraestructural– a la lucha armada, o si la misma lucha armada generaría las condiciones para desarrollar la organización popular. Al finalizar el Congreso quedaron establecidas dos posiciones: una postulaba que, aunque la lucha armada iba a ser imprescindible en el futuro y había que tenerla presente en cualquier desarrollo estratégico, las condiciones objetivas y el nivel de organización popular no eran todavía suficientes para implementarla. La otra sostenía que las condiciones objetivas estaban dadas. En todo caso, no lo estaban las subjetivas, las cuales consistían en la adhesión anímica del pueblo y, por consiguiente, su apoyo y compromiso con quienes protagonizaran la lucha armada. Pero, esas condiciones subjetivas se iban a generar por el solo hecho de iniciar la lucha armada.»

En 1968, el mismo año que las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) reincidieron en un intento de foco rural en Taco Ralo (provincia de Tucumán), en Córdoba, casi de modo concomitante,

surgieron la CGT de los Argentinos y el Peronismo de Base (PB), expresiones ambas del peronismo revolucionario.

En Córdoba, la corriente sindical antivandorista liderada en el orden nacional por Raimundo Ongaro y dirigentes sindicales combativos como Amado Olmos, Lorenzo Pepe y Jorge Di Pasquale, reunió bajo un mismo techo a Agustín Tosco y Atilio López, junto a referentes del gremialismo ortodoxo como el *cabezón* Correa (Madera) y el *gringo* Setembrino (Telefónicos). La prueba cabal de que no se trataba de un proceso químicamente puro eran esos curiosos entrecruzamientos de gremios que a nivel nacional respondían a la CGT Azopardo, timoneada por Vandor, y que en Córdoba formaban parte de la GGT de los Argentinos y viceversa.

El Peronismo de Base (PB), que absorbió en su seno a la militancia de Lealtad y Lucha, se conformó a partir de trabajos políticos con asentamiento barrial; de allí su nombre. Las dos primeras comunidades de base fueron la de barrio Talleres (Seccional 13ª), que contó con el patrocinio del cura Abdon Layús, y la de barrio Bella Vista (Seccional 10ª), de la que participaba el cura Carlos Fugante, titular de esa parroquia. Otro enclave territorial del PB era el de barrio Pueyrredón, apoyado en el trípode conformado por la parroquia de la Sagrada Familia, el colegio Luis María Robles sobre la calle Padre Luis Monti y las dependencias de la Universidad Católica de la calle Buchardo. En ese triángulo, que no era el de las Bermudas pero se le parecía, se cocinaba buena parte de la épica dominante por esos años.

El PB, apartado de las estructuras tradicionales del justicialismo copadas por la ortodoxia, exaltaba el costado clasista y combativo de Eva Perón, adscribía al socialismo –bajo el eufemismo de Patria Socialista–, repudiaba el colaboracionismo de Vandor con el régimen militar a la vez que impulsaba la lucha antiburocrática y la renovación dirigencial en el plano sindical, siguiendo los lineamientos de la CGT de los Argentinos. En su hora fundacional, el ámbito de militancia ofrecido por el PB posibilitó el reagrupamiento de cuadros históricos dispersos, provenientes de distintas experiencias anteriores como la Resistencia Peronista; el Partido de la Vanguardia Popular (PVP) –un desprendimiento del tronco socialista–; el Movimiento Revolucionario Peronista (MRP) liderado por Fausto Rodríguez; agrupaciones universitarias como Integralismo y AES, y de grupos cristianos de base. El órgano de prensa se llamaba *Evita* y las agrupaciones barriales y sindicales

adscriptas, *26 de Julio*, una fecha de clara connotación *evitista* que evocaba el día del fallecimiento de la segunda esposa de Perón. En la misma línea que la CGT de los Argentinos, la consigna de cabecera era «Solo el pueblo salvará al pueblo» y la estética preferida, la gráfica inconfundible del dibujante Ricardo Carpani.

Por esa misma época, el Integralismo universitario comenzó el proceso de radicalización que al cabo de unos meses ocasionaría la escisión del grupo comandado, entre otros, por Lorenzo Gatica, Alfredo Alonso y Eduardo Flores, para conformar la Agrupación Nacional Peronista (ANP), que en los años siguientes se fusionó con Guardia de Hierro y el Frente Estudiantil Nacional (FEN) dando lugar a la Mesa del Trasvasamiento Generacional, liderada en el orden nacional por el *gallego* Alejandro Álvarez. El Integralismo, asociado por entonces al Peronismo de Base e integrante de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), quedó a cargo de Juan Carlos Pezoa y Luis Azócar, entre otros dirigentes universitarios. El *gordo* José Saucedo era por entonces el lúcido traductor que se ocupaba de *dar letra* a sus compañeros. El AES, del que nos ocuparemos más adelante, asumía el mismo espacio en la Universidad Católica. Lentamente, comenzaba a configurarse el nuevo tablero del peronismo revolucionario.

A comienzos de 1969 se llevó a cabo un segundo plenario clandestino en una finca cercana al aeropuerto de Pajas Blancas para definir el futuro curso de acción del peronismo revolucionario. La organización y la seguridad del encuentro estival corrieron por cuenta del Integralismo y contó con la asistencia de figuras connotadas del ala dura del peronismo, como el mayor Bernardo Alberte, exdelegado de Perón; Gustavo Rearte, líder del MRP; Alicia Eguren, la viuda de John William Cooke; Armando Jaime, dirigente salteño, además de representantes de los sindicatos peronistas más combativos.

Carlos Hobert, *Pingulis*, dirigente montonero muerto a fines de 1976, alude a esta cumbre del peronismo revolucionario en el cuarto número de la revista *La Causa Peronista*:

«En enero de 1969 se hace otro Congreso en Córdoba. Pero ese ya fue más amplio, incluso quiso asistir Brito Lima pero lo sacamos a patadas porque ya en aquel entonces era un elemento policial. De este

Congreso salen tres posiciones. Una que sustentaba fundamentalmente el Movimiento Revolucionario Peronista y que sostenía la necesidad de profundizar la organización de la clase trabajadora y que mientras esas condiciones no estuvieran dadas no se podía iniciar la lucha en el plano militar. La segunda posición sostenida por los sindicalistas que proponían el fortalecimiento de la estructura sindical, fundamentalmente de la CGT de los Argentinos que en aquel entonces era el único foco de resistencia real que había en el seno del movimiento peronista y la clase trabajadora, pero más allá de eso nada. La tercera posición sostenida por el Negro Sabino Navarro, era que se hacía necesario lanzar la lucha armada para crear esas condiciones de conciencia y organización del pueblo peronista. Luego, de todos estos sectores unos se fueron por la derecha y otros por la izquierda. La posición del Negro fue la de la mayoría. Pero si bien se estaba de acuerdo con llevarla adelante, no se hacía.»

Sin embargo, muy pronto se hizo, y cómo.

El AES

El proceso de reconfiguración cultural y política de la clase media, como se dijo, tuvo su epicentro en las universidades, donde proliferaron agrupaciones estudiantiles de distinto signo que planteaban la lucha antidictatorial, contra el imperialismo y por la liberación nacional y social. La idea de la participación predominaba por sobre la indiferencia o la pasividad de otros tiempos, haciendo que la mayoría de los estudiantes se involucraran en cuestiones alejadas de la problemática estrictamente universitaria y que tenían que ver con la situación de los trabajadores y de los sectores más humildes de la sociedad.

Emilse Pons, ya citada, afirma que:

«La convulsionada década del sesenta signada por movimientos reformistas, revolucionarios y de liberación nacional impregna la conciencia de gran parte del movimiento estudiantil, planteando las premisas ideológicas y programáticas en términos de la antinomia reforma o revolución.»

En 1967, en la Universidad Católica de Córdoba se realiza un ciclo de conferencias que abordan tanto el *Diálogo entre católicos y marxistas*, a cargo de Manuel Virasoro, de la orden jesuítica, como *El compromiso de los cristianos con la liberación*, por Conrado Egger Lan, ya mencionado. Por esos días, el sacerdote Milán Viscovich, profesor de la casa, daba a conocer su propuesta de modelo social inspirado en la encíclica *Populorum progressio* y en el socialismo yugoeslavo.

La mano invisible que manejaba los hilos de los centros de estudiantes de la Universidad Católica de Córdoba y la Federación que los aglutinaba desde el año 1964 era la Agrupación de Estudios Sociales (AES), que mantenía vasos comunicantes con el Peronismo de Base, la tendencia más radicalizada por entonces del peronismo revolucionario; emparentada a su vez con la CGT de los Argentinos, con grupos católicos radicales como el Comando Camilo Torres y con otras expresiones de la izquierda peronista.

El AES, una agrupación de elite con una estética y funcionamiento similares a las de grupos leninistas antes que a los peronistas tradicionales, captaba los mejores cuadros que se destacaban en los centros de estudiantes de las distintas facultades o sobresalían en los *grupos de base* que constituían la periferia de activistas del núcleo duro. Una vez reclutados, recibían una rigurosa instrucción marxista leninista y eran iniciados en la doctrina revolucionaria peronista de la mano de autores como John William Cooke o Juan José Hernández Arregui.

Mariano perteneció al grupo inicial del AES, que tras un arduo debate asumió la identidad peronista revolucionaria.

Entre los fundadores del AES figuran Alberto Molina (*Momo*), Carlos Soratti Martínez (*Cacho*), Jorge Mendé, Miguel Ángel Bustos (*Negro*), María Leonor Papaterra (*Marilor*), Teresa Graffigna, Ramón Maggio, Leticia Jordán, Claudio Ehrenfeld (*Ruso*), Humberto

Anone (*Cara de hilo*), Luis Prol (*Chino*), Héctor Bruno y Carlos Tuda (*Pollo*). En 1968 se incorporan los seminaristas Hugo Baretta, Miguel Moze (*Chicato*), Roberto Vidagna, Martínez, Rojo. Tomás Carbell, Eduardo Arnedo (*Trozquito*), Yaya Assales y Francisco Yofre (*Pelado*) son incorporaciones posteriores. (Fuentes: *Los intelectuales críticos y la transformación social* de Pablo Ponza, en Internet. *Documentos 1970–1973*. Compilación de Roberto Baschetti).

La mayoría de los nombrados eran estudiantes de Derecho y de Ciencias Políticas y Diplomacia, algunos de las carreras de Administración de Empresas y el resto de otras facultades o escuelas, como Medicina, Arquitectura, Bioquímica, Ciencias Agropecuarias, Psicología y Servicio Social.

En ese tiempo, las instalaciones de la UCC se repartían entre la sede de calle Obispo Trejo al 300, en el casco histórico de la ciudad, y la de calle Buchardo, en barrio Pueyrredón, donde funcionaban las facultades de Filosofía y Humanidades, Derecho y Arquitectura. En el Campus, el predio ubicado sobre el camino a Alta Gracia adquirido en 1960, únicamente existía el primer edificio y funcionaban la facultad de Ingeniería y el Centro de Ciencias Básicas. Desde 1965, el rector de la universidad jesuítica era el R.P. Fernando Storni, quien dio fuerte impulso a la institución y le imprimió su sello personal. Afecto al orden y la disciplina, mantuvo una relación con altibajos cuando no de tirantez con los sectores estudiantiles y las organizaciones que los representaban, que en más de una ocasión causó encontronazos entre las partes hasta que, a comienzos de 1970, se produjo la ruptura definitiva.

Con relación a ese período, en la página oficial de la UCC, se lee:

«Se vive una época de participación, tanto de profesores como alumnos en diversas iniciativas tratando de crear, a veces con una gran dosis de idealismo pero siempre impregnado con el espíritu de entrega a la Institución. Se vincula a la Universidad con sus pares del mundo. Claramente se ve la necesidad de abrir las puertas a otras experiencias académicas, sin encerrarse en la propia autosuficiencia suicida; se realiza el Festival de Cine y otras manifestaciones que ensanchan la perspectiva del espíritu. Se

establecieron carreras no tradicionales como Ciencia Política y Relaciones Internacionales e Ingeniería Agronómica. Al final del período, comienza a afianzarse la economía y a retribuirse la tarea docente.»

Pese a que la Universidad Católica reunía alumnos de mayor poder adquisitivo y nivel social más alto que los de la Universidad Nacional, por contagio, el clima de efervescencia y politización era el mismo. En las vacaciones de invierno de 1968, un grupo numeroso de militantes del AES viajó a Tucumán, para comprobar con sus propios ojos las condiciones de miseria y represión imperante en aquella provincia norteña, una de las más golpeadas por la política económica del entonces ministro de Economía Adalberto Krieger Vasena que ocasionó cierres de ingenios azucareros y alta desocupación. En los fogones que se organizaban por las noches, Mariano solía cantar las canciones que entonaban los republicanos durante la guerra civil española, en especial su favorita, la que pedía: «Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos coman mierda.»

Los fundamentos de la agrupación constan en un documento publicado en la revista *Cristianismo y Revolución* Nº 5, del año 1968: «El objetivo del AES es luchar por una nueva sociedad, donde el hombre pueda realizarse plenamente.» En los párrafos siguientes, el documento sostenía que: «Argentina, como el resto de Latinoamérica se encontraba oprimida por el sistema liberal-capitalista que impide toda realización plena y humana», y que, como paso imprescindible para realizar un «cambio radical de las estructuras», era necesario el estudio de la realidad concreta «en un contacto vivo con el hombre real, verdadero y único, artífice de la historia.»

En otra parte del documento, a tono con el pensamiento revolucionario en boga, se justificaba la *violencia de abajo*, y se proclamaba que:

«(...) Violencia es la muerte prematura; Violencia es el hambre y el raquitismo de los niños; Violencia es humillarse para poder alimentar a los hijos; Violencia es que la madre embarazada no desee el nacimiento del hijo que quiere, para no sentirse culpable de

la miseria que lo espera; Violencia es la inseguridad del trabajo; Violencia es aniquilar a los hombres por la bestialidad del trabajo sin que puedan aprovechar los derechos de la educación y la cultura.»

Los militantes del AES se paraban en la vereda opuesta de otra agrupación peronista que actuaba en el ámbito de la Universidad Católica, el Movimiento de Unidad Nacional (MUN), una corriente de derecha con vínculos sindicales y partidarios ortodoxos. Para los primeros, la gente del MUN eran, directamente, *fachos*, y a menudo se los acusaba de estar vinculados a los servicios de inteligencia del Estado. Para los del MUN, los otros eran *bolches*.

El AES llegó a ser hegemónico dentro de la Federación de Asociaciones Estudiantiles de la Universidad Católica de Córdoba (FAEUCC). En 1969 pertenecían al AES el presidente de la Federación, Claudio Ehrenfeld, y los delegados de casi todas las facultades: María Leonor Papaterra de Filosofía y Humanidades; Jorge Raúl Mendé, de Medicina; Mariano Pujadas, de Ciencias Agropecuarias; Miguel Bustos, de Derecho, María Lidia Piotti de Servicio Social. Todos ellos y algunos otros eran las caras visibles del frente político de la agrupación, en tanto que otros cuadros *tapados* permanecían en la clandestinidad.

Con motivo de los serios incidentes de Corrientes y Rosario durante el mes de mayo de ese año, que derivaron en la muerte de tres estudiantes a manos de la policía, la FAEUCC, por primera vez en los trece años de vida de la Universidad Católica, impulsó un paro activo por 48 horas que suscitó tensiones con las autoridades rectorales, que cuidaban por encima de todo que la imagen de la casa no luciera contaminada con las ideas radicales en boga. Los estudiantes tomaron las facultades por varios días y convocaron asambleas que solían reunir más de un millar de asistentes.

En el comunicado emitido por la FAEUCC, transcrito en *Una historia con sentido. Los primeros 50 años de la Universidad Católica de Córdoba*, editado por dicha casa de estudios en el año 2006, se exponen los fundamentos de la medida, concebida «como acto de denuncia y repudio ante la violencia institucionalizada estructural, materializada una vez más en los tristes acontecimientos que vivimos los argentinos.» Y más adelante reafirma la línea de acción adoptada en los siguientes términos:

«Porque no somos conformistas hemos decidido realizar este paro, no como protesta pasiva, sino como el comienzo de una actividad crítica permanente, procurando la profunda concientización del estudiantado y elaborando la necesaria reflexión para asumir un firme compromiso con la acción futura.»

La militancia estudiantil

En las semanas previas al Cordobazo, el AES y el Integralismo —su par de la Universidad Nacional— protagonizaron junto con otras agrupaciones estudiantiles importantes marchas y *actos relámpago* en el centro de la ciudad con fines de agitación y propaganda. Para entonces, ya existía una mesa de enlace entre ambas organizaciones que coordinaba acciones comunes.

El exdirigente montonero Cecilio Salguero, periodista y licenciado en Comunicación Social, era integrante del AES en esa época. En un reportaje (*El mango del hacha*, revista digital, N° 132) relata esos comienzos y las actividades desplegadas por la agrupación durante los años previos al Cordobazo:

«Nuestras inquietudes eran de un gran compromiso social y político, a favor de los pobres, explotados y marginados sociales, mayoritariamente peronistas. Éramos frontalmente opositores a la dictadura fascista de Onganía y al clero integrista conservador (Ciudad Católica, Verbo, Opus Dei, etc.) dirigidos por el Obispo Raúl Primatesta y los jesuitas de la UCC. Admirábamos a Evita, Camilo Torres, Ernesto Guevara, Agustín Tosco, Atilio López, Raimundo Ongaro, Rodolfo Walsh, Rodolfo Puiggrós, Hernández Arregui, Scalabrini Ortiz, Ernesto Jaureche, John William Cooke, Jean Paul Sartre, Frantz Fanon, Marx, Lenin, Mao Tse Tung, Ho Chi Min, Monseñor Angelelli, Sandino, José

Hernández, Moreno, Belgrano, San Martín, Bolívar, Mariátegui, Tupac Amaru, Helder Cámara, a los republicanos españoles, a la resistencia francesa, etc. y los luchadores por la liberación nacional y social contra el imperialismo y la dependencia de los países del tercer mundo. Nos unimos a la CGT de los Argentinos de Atilio López y Agustín Tosco, adherimos a los programas de Huerta Grande, La Falda y 1º de mayo de 1968. Distribuíamos la revista *Cristianismo y Revolución* dirigida por García Elorrio y el Semanario de la CGTA dirigido por Rodolfo Walsh. Participamos en las barricadas, actos relámpagos y planes de lucha junto a la CGTA, la coordinadora de Centros Vecinales y el movimiento estudiantil de la UNC y la Tecnológica. El objetivo era derrotar a la dictadura —que tenía un plan de permanecer 20 años en el poder, desde 1966 a 1986—, recuperar los Derechos Humanos, sociales y políticos; recuperar la Democracia; lograr la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados, en especial Julio Cortázar y de Juan Domingo Perón.»

Los llamados *actos relámpagos* eran movilizaciones simultáneas de grupos de activistas, organizadas y sincronizadas al detalle con fines propagandísticos en la vía pública. Participaban militantes de diversas agrupaciones estudiantiles y sindicales y consistían en interrumpir el tránsito en puntos neurálgicos de la ciudad para provocar el mayor congestionamiento posible. Logrado el objetivo, se arrojaban volantes tipo *mariposa* impresos a mimeógrafo, se entonaban algunas consignas contra la dictadura, un par de «¡Viva Perón!» a voz en cuello, y trascartón se desaparecía raudamente del lugar. Para que las fogatas ardieran durante más tiempo, se esparcía aserrín empapado en nafta sobre la calzada, hasta que se comenzó a utilizar la *soga*, una larga ristra de bolsas de arpillera trenzadas entre sí, embebida en nafta mezclada con aceite, que se tendía a lo ancho de la calzada y se incendiaba para interrumpir el tránsito.

Las *molotov* o *molos*, eran de fabricación casera y requerían una compleja provisión de ingredientes. Mientras algunos se encargaban de conseguir gasolina y recorrer estaciones de servicio y talleres mecánicos en busca de aceite usado, que se agregaba para que la mezcla ardiese durante más tiempo, otros visitaban los bares de la zona, colectando recipientes de vidrio, preferentemente porroncitos de cerveza. Lo más complicado era concebir los detonadores para activar el cóctel incendiario; generalmente eran las compañeras las encargadas de comprar en la farmacia los insumos para preparar la mezcla que hacía de iniciadora y que muchas veces fallaba.

Luego de esas escaramuzas —que para muchos aspirantes eran un verdadero bautismo de fuego— se cumplía con el requisito del *retén*, o sea de reportarse en algún lugar, generalmente un bar, donde alguien esperaba que los demás pasaran por allí; el que no cumplía el trámite podía haber caído preso y era preciso saberlo a tiempo para tomar los recaudos del caso. A veces la policía apresaba a alguno de los participantes; si no registraba antecedentes, lo soltaban al día siguiente luego de *pintarle* los dedos. Cada agrupación tenía un abogado amigo a mano pronto a intervenir en caso de que las cosas pasaran a mayores y hubiera que interponer un recurso de *habeas corpus*.

Las pintadas callejeras también eran rigurosamente organizadas. Lo primero era pergeñar las consignas a estampar en las paredes de la ciudad, que debían ser concisas y fáciles de escribir. Hasta que aparecieron los aerosoles comerciales, se pintaba a pincel o con unos tizones a base de negro de humo. Para elaborarlos había que derretir sebo o, en su defecto, velas comunes en una olla hasta que se obtenía una sopa amarillenta, viscosa y maloliente, que, una vez agregado el polvillo que proveía el color oscuro, se vertía a alta temperatura en unos cucuruchos de papel de diario que hacían las veces de moldes. Al final de la jornada, el saldo solía ser de quemaduras múltiples, dedos pegoteados y ollas irrecuperables. El llenado de aerosoles desechados era más complejo aún. Había que quitarles cuidadosamente la válvula, inyectar la pintura y el gas en su interior y volverlos a sellar herméticamente. Obviamente, casi nunca funcionaban, y si lo hacían, solían exhalar un chorrito inofensivo; eso cuando no se desprendía la válvula y el chorro de pintura negra empapaba al operador. Así de artesanales eran las cosas.

La agitación y propaganda no se limitaba al ámbito universitario. Con frecuencia, militantes universitarios participaban de *volanteadas* en puerta de fábrica, casi de madrugada, cuando ingresaba el primer turno de operarios a las planteas fabriles de los barrios de Santa Isabel y Ferreyra.

Veamos cómo recuerda Cecilio Salguero al Mariano de aquellos días:

«Estudiaba Agronomía y también trabajaba en la granja de su padre. Le gustaba la vida del campo, la naturaleza y la ecología. Era un apasionado de la militancia política y había asumido toda la historia del pueblo español, masacrado por el fascismo.

También comprendió quién era quien en la Argentina, donde habían venido muchos refugiados protegidos por el gobierno popular. Era un muy buen compañero, sólido en sus convicciones, solidario, muy inteligente y sobre todo valiente y decidido.

Además, era muy atractivo para las compañeras...!!!»

(*colectivoeprosar.blogspot.com*)

El último comentario, enfatizado por su autor, hace referencia al aspecto físico de un Mariano veinteañero, pintón, morocho y alto, de aspecto bien varonil que le abría las puertas del mundo femenino. Sin embargo, a medida que maduraba, Mariano desdénaba la frivolidad y se manejaba en su vida privada siguiendo los cánones jesuíticos de austeridad y responsabilidad. Además, estaba de novio con una bella y joven militante.

La vía armada

El 29 de mayo de 1969, Córdoba explotó por los aires. Ese día se produjo el hecho de masas que quedó registrado en la historia como *El Cordobazo*, en la misma categoría de acontecimientos de resonancia internacional del glamoroso Mayo Francés o la fugaz Primavera de Praga.

El Cordobazo fue una rebelión obrera y popular contra la dictadura de Onganía que obró como parte aguas dando por tierra con los planes de perpetuidad de la Revolución Argentina.

La jornada se inició con un paro decretado por las dos CGT nacionales, que en Córdoba se adelantó un día, convertido en paro activo con abandono de tareas a partir de las diez de la mañana. La movilización de trabajadores de distintos gremios cobró voltaje con el transcurso de las horas, sobre todo después de que se produjo la muerte del obrero mecánico Máximo Mena, en la esquina de bulevar San Juan y Arturo M. Bas. El mayor protagonismo corrió por cuenta de los trabajadores enrolados en el SMATA, conducido por Elpidio Torres, quienes, como estaba previsto, abandonaron masivamente las plantas fabriles de la periferia y se encolumnaron hacia el centro de la ciudad; y del gremio de Luz y Fuerza, liderado por Agustín Tosco. La paralización del transporte, que corrió por cuenta de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) conducida por Atilio López, garantizó que ese día la actividad fuese nula.

La fuerza policial, desbordada por completo, debió ceder el control del terreno a los manifestantes que, dispersados y reagrupados, se arracimaban en las esquinas, lanzando piedras y bolitas de acero bajo las patas de los caballos de la policía montada para hacerlos rodar por el piso, en tanto que otros destruían escaparates con bulones arrojados con gomeras de fabricación casera. Las *molotov* servían a su vez para incendiar las barricadas que se improvisaban en las bocacalles con lo que hubiese a mano más lo que la gente, en solidaridad con los manifestantes, arrojaba desde las ventanas de los edificios linderos. El Ejército intervino recién al final del día y paulatinamente retomó el control de la situación. El último bastión en ser reducido fue el Barrio Clínicas, donde la toma se extendió hasta el día 30.

Durante esa jornada de lucha, los militantes del AES estuvieron en las calles, entonando consignas contra el régimen, levantando barricadas y enfrentando cara a cara a las fuerzas policiales que, como se dijo, tras varias horas de refriega callejera, se replegaron a sus cuarteles, superadas por una movida popular sin precedentes.

Ese día, Mariano compartió con sus compañeros de militancia lo que para muchos de ellos fue el bautismo de fuego, al menos en una escala superior a la que venían desarrollando hasta en-

tonces. Se abrió un nuevo capítulo en sus vidas y las de todos los argentinos.

El Cordobazo significó un salto de calidad en la lucha contra la dictadura, un antes y un después que trajo, entre otras consecuencias, el endurecimiento de las consignas políticas y la aplicación de una nueva metodología: la lucha armada.

Como parte de ese mismo proceso, se produjo una radicalización de las distintas organizaciones populares que llenaban el vacío dejado por los partidos políticos, impedidos de actuar por la suspensión que pesaba sobre ellos. Las agrupaciones que desplegaban su accionar en diferentes ámbitos —gremial, barrial, universitario— ocuparon el espacio dejado vacante por las fuerzas políticas tradicionales pasadas a *cuarteles de invierno* por la dictadura. En el seno de esas tendencias de nuevo cuño prevalecían las líneas más duras por sobre las contemporalizadoras o pacifistas; ganaban mayor adhesión entre las bases aquellas que pregonaban métodos de acción directa en la lucha antidictatorial. De a poco, cundió la afición por los *fierros* y la violencia se convirtió en un hecho cotidiano en la convulsionada Argentina de aquellos días.

La cuestión del peronismo y la lucha armada suscitaba intensos debates y replanteos en el seno de las corrientes tradicionales de izquierda, que con frecuencia terminaban en fracturas y escisiones que conllevaban el desplazamiento de sus militantes hacia posturas más revolucionarias. Fue así, por ejemplo, como el viejo y anodino Partido Comunista, superado por la realidad, sufrió por esos años el desprendimiento del Partido Comunista Revolucionario (PCR), que, junto a la Vanguardia Comunista (VC), escindida a su vez del tronco socialista, asumieron en un principio la línea insurreccional y, más tarde, el pensamiento maoísta; mientras que el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) se embanderaba con el trotskismo, al igual que el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT); en tanto que la organización El Obrero asumía el marxismo-leninismo en estado puro.

Estas tendencias radicalizadas de izquierda alcanzaron durante ese período un grado de desarrollo importante en el movimiento estudiantil. En la Universidad, el movimiento estudiantil, impactado por los acontecimientos mencionados, atravesó por un proceso similar; las corrientes de izquierda prevalecían por sobre el viejo reformismo a la hora de captar adeptos, un fenómeno favorecido por el recambio generacional del estudiantado

y el arribo de camadas de jóvenes de clase media que no habían vivido la etapa de predominio reformista o integrista que había quedado atrás.

En el terreno sindical, entretanto, las direcciones burocráticas y filo patronales resultaban desbordadas por las nuevas camadas de dirigentes y activistas que, de a poco, copaban los cuerpos de delegados cuando no la conducción de los sindicatos, como fue el caso de SITRAC (Fiat Concord), SITRAM (Fiat Materfer), SMATA y otros gremios menores.

En medio de ese clima de efervescencia social, durante los meses posteriores al Cordobazo, varios grupos armados hicieron su presentación en sociedad, provenientes a su vez de distintas vertientes ideológicas y praxis diferentes: Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), las más antiguas en el país, con raíces en la Resistencia Peronista; Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), nacidas para apoyar la guerrilla del Che en Bolivia, que ensayaban una fusión de marxismo y peronismo; Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), marxistas leninistas, y ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Completaban el espectro Montoneros y Descamisados, organizaciones de cuño peronista que obraron como receptáculo de militantes provenientes del tronco nacionalista y, en algunos casos, ligados a la Iglesia.

Todas, con distintos matices, reivindicaban la lucha armada como vía para la toma del poder. A diferencia de experiencias del pasado, como fue el caso de Uturuncos (1959); del Ejército Guerrillero del Pueblo (1963), de Jorge Masetti; y las FAP de Taco Ralo, Tucumán (1968); esta vez la estrategia sería urbana en lugar de rural, aunque persistió como eje dominante la teoría del foco guerrillero, de inspiración netamente guevarista.

Sobre esta cuestión, José Pablo Feinmann, en *La sangre derramada* (Editorial Ariel, 1998), cita las tres aportaciones fundamentales que, en palabras del Che Guevara, hizo la Revolución Cubana a los movimientos revolucionarios de América Latina:

« (...) 1ro. Las fuerzas populares pueden ganar una guerra contra el ejército. 2do. No siempre hay que esperar que se den todas las condiciones para la revolución: el foco puede crearlas. 3ro. En la América subdesa-

rollada el terreno de la lucha armada debe ser fundamentalmente el campo.»

Una lectura más afinada de experiencias propias y ajenas que obraron como espejo para la guerrilla argentina —especialmente la de los Tupamaros en Uruguay— inclinó la balanza hacia el foco urbano antes que rural. Los grupos guerrilleros argentinos, además de operar en las ciudades más pobladas, aplicaron una metodología parecida, basada en premisas tales como la organización celular y tabicada, el funcionamiento clandestino y la formación político-militar de cuadros.

Las primeras acciones fueron de recuperación de armamento y adiestramiento de futuros combatientes. Con este último fin, muchos cuadros fundacionales recibieron instrucción militar en Cuba. La captación de futuros guerrilleros se hacía sobre todo en las llamadas organizaciones de superficie, ya sea que actuaran en el ámbito sindical, estudiantil o, incluso, de la Iglesia. Así fue como los primeros grupos armados reclutaron a muchos jóvenes provenientes de familias tradicionales de Córdoba y de clase media; además de trabajadores, estudiantes e intelectuales que pasaron a engrosar sus filas. Cada nuevo militante *encuadraba* a otros jóvenes pertenecientes a su círculo —compañeros de estudio, parejas, amigos— y así el activo de estas agrupaciones, sobre todo en el ámbito universitario, creció en poco tiempo, lo mismo que su capacidad de movilización.

Córdoba tuvo un papel clave en el desarrollo de las organizaciones guerrilleras, especialmente de Montoneros. En el mes de febrero de 1969, un grupo no identificado había atacado el Tiro Federal de Córdoba llevándose una veintena de armas cortas y largas. Aunque los autores no se dieron a conocer, se trataba de los primeros integrantes de Montoneros, que hasta no contar con la infraestructura suficiente preferían hacerse pasar por delincuentes comunes. En la misma época se produjo el asalto al destacamento policial de Parque Siquiman y la toma de la guardia del Hospital Militar, a la vez que se reportaron varios episodios de despojo de armas a policías en actividad, presumiblemente llevadas a cabo por miembros de grupos guerrilleros en formación. El 26 de diciembre de aquel año, un grupo comando asaltó la sucursal del Banco de Córdoba en la localidad serrana de La Calera, donde actuaron células porteñas

y cordobesas de los Montoneros en ciernes, aunque sin darse a conocer como tales.

Richard Gillespie certifica lo anterior en su obra ya citada:

«No hay indicios de que las autoridades conocieran la existencia del grupo antes del comienzo de 1970. Por la misma razón, se carece de detalles sobre sus primeras actividades. Al parecer, aunque su núcleo inicial fue establecido por Abal Medina, Ramus y Firmerich en Buenos Aires, la mayor parte de las primeras acciones tuvieron efecto en la provincia de Córdoba, donde Emilio Maza organizó una segunda red y se convirtió en el "comandante" local. El grupo de Córdoba asaltó el Banco de La Calera y atacó el puesto de vigilancia del Hospital Militar; y hubo incursiones en algunos otros bancos, en canteras y en unas cuantas comisarias de policía. Los policías, atacados por sorpresa, fueron desarmados. Ninguna de esas primeras acciones fue espectacular, pero se juzgaron indispensables para la preparación y equipamiento de unas fuerzas de combate eficaces.»

Lucas Lanusse, en *Montoneros, el mito de sus doce fundadores* (Vergara, 2005), reconstruye el origen de esa organización guerrillera, que nace de la fusión de por lo menos cinco grupos distintos, a los que el autor de la investigación denominó: Grupo Fundador (comandado por Fernando Abal Medina), Grupo Sabino (por José Sabino Navarro, exobrero de la fábrica Deutz), Grupo Santa Fe, Grupo Córdoba y Grupo Reconquista (liderado por Roberto Perdiá); conformados en la etapa anterior, cada uno con proveniencias y trayectorias diferentes.

Mariano, joven comprometido, idealista y valiente; no tardó en ejercer su opción personal. Junto a otros compañeros del AES, fue uno de los primeros integrantes del Grupo Córdoba de Montoneros, una organización que reconocía un origen peronista y cristiano.

Los aparatos clandestinos surgidos en Córdoba y Santa Fe tomaron contacto, a comienzos de 1970, con otro de similares características liderado por Fernando Abal Medina en la Capital Federal. Los tres grupos coincidieron en la idea de conformar una organización político militar de alcance nacional. En esa formación original de lo que más tarde serían los Montoneros participaron distintas vertientes, entre ellas quienes provenían del Comando Camilo Torres, fundado por Juan García Elorrio, editor del semanario *Cristianismo y Revolución*; de la Juventud Estudiantil Católica del Nacional Buenos Aires comandada por Fernando Abal Medina y Mario Eduardo Firmenich; de la Juventud Obrera Católica, con el Negro José Sabino Navarro a la cabeza; además del Peronismo de Base, el Integralismo cordobés, el AES, el Ateneo de Santa Fe y otras agrupaciones estudiantiles y barriales.

Según Gillespie, ya citado:

«El primer documento de los Montoneros también ilustraba a sus lectores respecto a cómo concebía la lucha armada. Después de justificar la violencia revolucionaria como una respuesta a la violencia institucional, los Montoneros afirmaban que su ambición era convertirse, junto con las FAP y otras organizaciones fraternas, en el Brazo Armado del Pueblo. Esto implica ser la vanguardia político-militar de una base popular lo más amplia posible.»

Resulta importante destacar lo de *brazo armado* del peronismo, porque así se concebía a sí mismo el primer núcleo montonero, un concepto que fue reemplazado más adelante por el de *vanguardia armada* del movimiento.

Entre los proto Montoneros cordobeses figuran, entre otros: Emilio Ángel Maza (exliceísta, estudiante de quinto año de Medicina), Carlos Capuano Martínez (estudiante de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba), Mariano Pujadas, Miguel Ángel Bustos, Luis Rodeiro, Luis Losada, Ignacio Vélez Carreras, Cristina Liprandi, Susana Lesgart, Alejandro Yofre, Jorge Raúl Mendé, José Fierro, Jorge Juan Escribano y Héctor Araujo. (Fuentes: *Los intelectuales críticos y la transformación social en Ar-*

gentina (1955–1973). *Documentos 1970–1973. Vol. 1.* Compilación de Roberto Baschetti). Fernando Vaca Narvaja, también exliceísta, pertenecía al Grupo Santa Fe (estudiaba Ingeniería Química en aquella ciudad).

Algunos de ellos provenían de Lealtad y Lucha: Elvio Alberione (*Cruzado*), Eduardo Piotti (*Zapa o Zapatía*), María Lidia Piotti, Luis Rodeiro (*Negro*), Guillermo Martínez Agüero, Jorge Escribano, Raúl Guzzo Conte Grand, Manuel Lorenzo, Cecilio Salguero, Dinora Gebennini, Hugo Baretta, José María Luján. (Fuente: *Campana de palo*, Baschetti, pag. 39).

Los sacerdotes Carlos Fugante y Fulgencio Rojas, capellanes del Liceo Militar General Paz, tuvieron mucho que ver en la conformación del grupo inicial de Montoneros. El cura Rojas influyó particularmente sobre Emilio Maza, Ignacio Vélez, Fernando Vaca Narvaja y José Fierro, todos ellos alumnos del Liceo.

La opción por la lucha armada implicaba un compromiso superior: el de exponer la vida. En ese tiempo, tomar las armas conllevaba la posibilidad cierta de matar o morir; encerraba la idea de la propia muerte como acto supremo de entrega militante, un concepto central en la construcción de la épica guerrillera de entonces. El *Hombre Nuevo*, tal como se lo concebía, debía estar dispuesto a dar su vida por los demás, por los explotados y los humildes; una visión enraizada en el cristianismo.

Juan Pablo Feinmann reflexiona sobre el particular en los siguientes términos:

«La muerte gloriosa es tan plena, tan bella y absoluta como la vida gloriosa. Y tal vez más, porque a través de la muerte gloriosa el militante cumple con el juramento fundacional que es dar la vida. La muerte gloriosa del militante les está diciendo a sus compañeros: *vean, no me quebré, llegué hasta el final, lo di todo, di la vida.* Así, el momento más glorioso de la vida de un militante es el de su muerte, porque en él se confirma la fidelidad al juramento extremo originario.»

La toma de La Calera

Había pasado poco más de un mes del secuestro del teniente general Pedro Eugenio Aramburu, la resonante acción guerrillera que conmovió el tablero político nacional y que aceleró el reemplazo del tambaleante Juan Carlos Onganía por un ignoto general que cumplía tareas en la embajada argentina en los Estados Unidos, Roberto Marcelo Levingston, segundo presidente de facto de la Revolución Argentina que comenzaba a perder sustento.

Aramburu, principal protagonista de la llamada Revolución Libertadora de 1955, salió de su domicilio porteño en la mañana del 29 de mayo de 1970 –Día del Ejército y primer aniversario del Cordobazo– escoltado por dos jóvenes uniformados que fingían ser oficiales en actividad, a los que, momentos antes, la esposa del secuestrado hizo pasar al living del departamento y les ofreció café, sin saber quiénes eran realmente. Uno de ellos era el cordobés Emilio Maza, que había aprendido el porte y los modos militares en su paso por el Liceo; el otro, un jovencísimo Fernando Abal Medina, que debutaba en las ligas mayores disfrazado de oficial del Ejército Argentino.

A partir de ese momento, nada se supo acerca del paradero de Aramburu. La única información que se tenía provenía de los comunicados de la organización Montoneros, que se adjudicó la autoría del hecho y anunció por ese mismo medio –textos escritos a máquina que eran dejados en bares o confiterías– que el prisionero estaba siendo sometido a juicio revolucionario, acusado de diversos cargos ligados con su pasada actuación durante los meses posteriores al golpe que derrocó a Perón, los fusilamientos de 1956 y la desaparición del cadáver de Evita, entre otros crímenes.

La misma fuente, mediante el Comunicado N° 4, fechado el 1° de junio de 1970, dio cuenta de que ese día, a las siete de la mañana, el prisionero había sido ejecutado. «Que Dios Nuestro Señor se apiade de su alma», concluía el parte. Los detalles de cómo habían sido las cosas se conocerían con el paso del tiempo; por el momento, las fuerzas de seguridad e inteligencia se hallaban desconcertadas y no atinaban a dar con los autores del espectacular operativo: no tenían idea de quiénes eran los Montoneros ni por dónde comenzar a buscarlos. Así transcurrió el mes de junio.

El 1° de julio de 1970 hizo frío, mucho frío, en Córdoba. Más aún en la zona serrana, donde se encuentra enclavada la localidad de La Calera, una comunidad humilde, de trabajadores, que

sin quererlo ese día se convertiría en el centro de atención de los argentinos.

A las 7.30 arribaron a esa población ubicada a poco más de 20 kilómetros al Oeste de la capital cordobesa tres automóviles —entre ellos un Torino camuflado como patrullero— y una pick up, ocupados por la quincena de jóvenes que participaron del operativo que estaba pronto a desarrollarse en el lugar. Mariano era uno de ellos.

Los recién llegados ingresaron por la avenida principal y se dividieron en varios grupos, uno de esos grupos procedió a asaltar la sucursal del Banco de Córdoba, mientras los otros copaban en simultáneo la Municipalidad, la Comisaría y la oficina de Correos. Todos, hombres y mujeres, eran personas jóvenes, iban armados y llevaban un brazalete con los símbolos y nombre de la organización a la que pertenecían: Montoneros. Del banco se llevaron unos cuatro millones de pesos en billetes resellados con la leyenda «Pesos Ley 18.188», el nuevo signo monetario que había entrado en vigencia el primer día de aquel año.

En todos lados hallaron empleados madrugadores, azorados por algo nunca visto hasta entonces, salvo en las películas de acción. El único sitio donde hubo un conato de resistencia fue frente al banco, donde se registró un intercambio de balazos con un policía de civil que acertó pasar por el lugar y se encontró de sopetón con un asalto. En otras dependencias, los inesperados visitantes pintaron con aerosol leyendas en las paredes alusivas a la identidad peronista de la organización; en la Comisaría, los guerrilleros vestidos con uniformes policiales obligaron a cantar la marcha peronista a los verdaderos policías que fueron encerrados en una celda.

Todo fue rápido, no más de una hora. Los jefes se comunicaban con *walkies talkies*, dirigiéndose entre ellos por sus apodos o nombres de guerra. Antes de retirarse, cortaron las líneas telefónicas, sembraron la calzada de clavos miguelito y dejaron en la acera del banco una caja que simulaba contener un artefacto explosivo. Más tarde se constató que en su interior había un grabador con una cinta magnetofónica de la Marcha peronista en su versión tradicional, la de Hugo del Carril.

Hasta allí, el objetivo había sido cumplido con creces: se habían expropiado armas, recuperado dinero y asegurado un golpe publicitario que mantendría a Montoneros en la vidriera pública

por un buen tiempo. Sin embargo, el diablo no tardaría en meter la cola.

La retirada de los participantes del operativo se efectuó de acuerdo a lo planificado, utilizando para el escape la misma ruta por la que habían llegado, es decir, tomando por Dumesnil hasta la bifurcación del camino, donde algunos siguieron hacia la vecina localidad de Saldán y otros hacia Villa Rivera Indarte, cuando aún el Regimiento de Infantería con asiento en camino a La Calera no había sido alertado.

Todo hubiera salido de acuerdo a lo planeado de no ser porque uno de los vehículos —un Fiat 1500— sufrió una avería y debió ser reemplazado sobre la marcha por un Rambler expropiado a su dueño. Ese vehículo, detenido en la banquina en el desvío que conduce a Villa Allende por el denominado Cerro San Alfonso, llamó la atención a los ocupantes de una chata Ford F 100 que, anoticiados del asalto al banco de La Calera, recorrían la zona en busca de indicios de los fugitivos.

A partir de ese momento, los hechos se precipitaron. Al corto diálogo mantenido entre los ocupantes de uno y otro automotor siguió un breve tiroteo, del que resultó herido uno de los guerrilleros, en tanto que su compañero era reducido por la fuerza por los tripulantes de la pick up. El autor de los disparos fue un policía que poco antes se había sumado espontáneamente a la cacería de los guerrilleros en fuga. En poder de los detenidos se hallaron armas y granadas de mano. El herido de bala resultó ser Luis Losada, y su compañero, José Antonio Fierro. Ambos, en distintos vehículos, fueron trasladados a la comisaría de Villa Allende. Como Losada perdía mucha sangre, fue derivado al Hospital Militar para su curación, en tanto que Fierro fue interrogado en el lugar, según se dice, por el general Jorge Raúl Carcagno en persona.

En el transcurso del interrogatorio, surgió el dato de una casa operativa ubicada en barrio Los Naranjos de la capital cordobesa, próxima a la avenida que lleva a la salida hacia Carlos Paz. Pasado el mediodía, la vivienda fue rodeada por efectivos policiales y del Ejército. En el lugar se hallaban Emilio Maza —el dueño de casa— Ignacio Vélez y su esposa, Cristina Liprandi. Todos ellos habían estado esa mañana en La Calera. Tras un recio tiroteo, en el que fueron gravemente heridos los dos hombres, las fuerzas de seguridad lograron capturar a los tres ocupantes de la vivienda. Maza, trasladado al Hospital San Roque, falleció al cabo de algunos

días por las heridas recibidas, en tanto que Vélez permaneció con vida, lo mismo que Liprandi.

Lo hallado en el lugar permitió desovillar la madeja hasta donde ni siquiera los represores podían imaginar. Uno de los elementos más valiosos hallados en la requisita posterior al tiroteo fue un fichero en el que figuraban los nombres de un par de centenas de contactos y colaboradores de la organización. Los allanamientos comenzaron ese mismo día.

El hallazgo providencial de una autorización de manejo de un Renault 4 L extendido por Norma Esther Arrostito a favor de Emilio Maza puso a los investigadores en la pista del caso Aramburu. La pericia permitió comprobar que el documento había sido redactado con la misma máquina de escribir Olivetti utilizada para tipear los comunicados de Montoneros, el grupo armado que había raptado a Aramburu, de quien, a esa altura, apenas se sabía que había sido ejecutado por sus captores. La esposa del secuestrado reconoció en una foto que le mostraron a Emilio Maza como uno de los dos jóvenes que, haciéndose pasar por oficiales del Ejército, se habían llevado a su marido la mañana del 29 de mayo. Una cosa condujo a la otra y, en horas, los nombres y los rostros de los autores del caso más resonante de los últimos tiempos aparecieron en afiches pegados en todas partes, principalmente en Buenos Aires. El efecto dominó funcionaba a pleno y el desbande era total.

También en horas fueron cayendo los protagonistas del complot de La Calera, que se fueron sumando a los tres heridos —Maza, Losada y Vélez— y los dos detenidos hasta el momento: Fierro y Liprandi. La primera lista incluye a José María Breganti, Felipe Nicolás Defrancesco, Juan Carlos Soratti Martínez y Heber Albornoz. La sociedad cordobesa, absorta, comentaba los nombres de reconocidas familias involucrados en la guerrilla, insistentemente difundidos por los medios periodísticos de la época.

Algunos participantes del operativo, entre ellos Mariano Pujadas, alcanzaron a escabullirse aunque no pudieron regresar a sus domicilios ni retomar sus quehaceres habituales. La vasta acción policial en procura de dar con posibles ramificaciones de la organización, dio lugar a una verdadera diáspora de combatientes y dirigentes de agrupaciones vinculadas con Montoneros que debieron ocultarse o emigrar a otras partes fuera de Córdoba. Muchos de ellos pasaron a la clandestinidad en la que permanecieron en los años siguientes. Tal el caso de Carlos Capuano Martínez, que

se trasladó a Buenos Aires donde murió en un enfrentamiento armado el 16 de agosto de 1972.

Cristina Liprandi, 42 años después de todo aquello, en un reportaje concedido a *La Voz del Interior* (29/3/2012) afirmó que «la toma de La Calera se planteó para recaudar fondos, por un lado, y por otro, armas, fundamentalmente. Y un poco para gestar lo que iba a ser después la organización político-militar que fue Montoneros. Éramos muy poquitos, cinco acá y seis en Buenos Aires.» Cuando se le pidió una valoración retrospectiva, respondió: «Como organización político-militar, en un momento determinado, con una coyuntura especial que existía en la Argentina, y fundamentalmente desde el peronismo, la única perspectiva que teníamos los jóvenes era quebrar la historia.»

Mariano: clandestinidad y caída

Mariano Pujadas, sobre quien pesaba orden de captura, también debió pasar a la clandestinidad. Aunque permaneció en Córdoba, no pudo retornar a su hogar ni a la facultad, donde cursaba el último año de la carrera de Agronomía. Lo que hasta allí había sido una doble vida, una alternancia por momentos esquizofrénica entre actividades *legales* e *ilegales* a ojos de los demás, a partir de ahora pasaba a ser una sola, más complicada aún. Vivir en la clandestinidad no era esconderse en medio de un monte o bajo tierra, a cubierto de todo. Era moverse, salir a la calle, confundirse entre la gente común evitando llamar la atención por sobre todas las cosas. Implicaba variar por completo las rutinas, dejar de frecuentar los lugares de siempre, cambiar el aspecto personal, portar documentos falsos y, con frecuencia, llevar un arma siempre a mano.

Miguel Bonasso, en su *Diario de un clandestino* (Planeta, 2000), lo pone en palabras: «Recordé que la clandestinidad, igual que el coma, tiene grados. Que uno se va internando en profundidades hasta toparse con un extraño que te mira desde el espejo.» Y, más adelante, agrega: «La clandestinidad no acaba necesariamente con la vida social, pero la somete a reglas rigurosas y, a veces, pintoresca.»

Mariano debió de experimentar esas mismas sensaciones durante el año que permaneció en la clandestinidad tras la toma

de La Calera. Durante esos meses, junto a otros compañeros, se dedicó a tiempo completo a la tarea de ayudar a reconstruir la organización casi desde cero. Con las limitaciones derivadas de su condición ilegal, concentró sus esfuerzos en las actividades propias de la nueva etapa: reclutar y adiestrar nuevos cuadros para suplir las bajas producidas, rearmar la logística, organizar un nuevo esquema de seguridad y planificar un retorno gradual a la operatividad. Todo dificultado por la emergencia que se vivía tras los allanamientos, traslados y detenciones convertidos en moneda corriente en las semanas posteriores a la toma de La Calera y el desenlace ulterior.

El cadáver de Aramburu fue descubierto en una finca cercana a la localidad Timote, en la provincia de Buenos Aires, enterrado en el sótano de la vivienda rural propiedad de la familia Ramus, donde fuera ejecutado. Poco más tarde, otra adversidad sacudió a la organización: el 7 de septiembre de ese año de 1970, en un enfrentamiento con la policía, producido en una pizzería ubicada en la localidad bonaerense de William Morris, perdieron la vida Fernando Abal Medina, número uno de Montoneros, y Carlos Gustavo Ramus. En el mismo lugar fue detenido Luis Rodeiro, que había viajado desde Córdoba para esa cita, en tanto que José Sabino Navarro y Carlos Capuano Martínez, los otros dos participantes del cónclave, lograron huir. La irrupción de la policía malogró la reunión cumbre que los montoneros pensaban llevar a cabo en el lugar para restablecer el enlace con la célula cordobesa, perdido tras el copamiento de La Calera y el posterior esclarecimiento del secuestro y muerte de Aramburu. Por cierto, esa situación, difícil de por sí, se agravó en extremo como consecuencia de las bajas de ese día, al punto que la existencia misma de la organización quedó envuelta en un manto de incertidumbre.

Richard Gillespie, en *Soldados de Perón. Los Montoneros* retrata ese momento dramático:

«Entretanto, los Montoneros se habían estado reorganizando después de su descalabro de La Calera. José Sabino Navarro tomó posesión de la jefatura de la organización después de la muerte de Abal Medina y Ramus en William Morris. Se trasladó a Córdoba y trabajó diecisiete horas diarias para

reconstruir allí la red montonera, además de viajar a menudo como enlace nacional (...) el esqueleto montonero comenzaba a tomar cuerpo y se transformó en una organización nacional.»

Lucas Lanusse, por su parte, señala:

«Tras los desastres ocurridos entre julio y septiembre de 1970, la tendencia a la autonomía regional se vio reforzada. Ello respondió justamente a la necesidad de hacer frente a cuestiones locales urgentes y a la imposibilidad práctica de los distintos grupos de tomar contacto entre ellos. De esa manera, se impuso en forma natural la idea de afianzar cada una de las regiones –futuras “regionales”– antes de encarar un trabajo de unificación y coordinación. Por ese motivo, durante bastante tiempo Montoneros no llegó a contar con una estructura nacional sólida y articulada. Tampoco puede hablarse en aquel entonces de una auténtica “conducción nacional”, en condiciones de dar órdenes que llegaran a todos los rincones del país.»

A esta altura quedaban claro al menos dos cosas: la primera, que la exigua realidad del grupo en ése, el momento más difícil de su corta existencia, no guardaba proporción con la enorme popularidad cosechada tras las primeras acciones, sobre todo el secuestro de Aramburu; y, segundo, que la tarea de reconstrucción corrió por cuenta de los sobrevivientes, cuadros de segunda línea, muchos de ellos sin formación o con formación militar incompleta, que con esfuerzo y el apoyo solidario de las FAP, que les proveyó de alguna logística, volvieron a poner de pie a los Montoneros. Entre ellos, Mariano, que se consagró por completo a esta faena de reorganización en Córdoba, la regional más golpeada por las bajas y detenciones.

De a poco, en Córdoba, los comandos montoneros renacieron de las cenizas y volvieron a operar. Durante el último trimestre de

1970, en sendos operativos, se llevaron pequeñas sumas de dinero de la tesorería del Jockey Club, de una estación de ferrocarril y de la oficina central de correos. En noviembre, asaltaron el puesto de vigilancia del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Registro Civil de Bella Vista, donde el botín fue un buen número de documentos en blanco. Es probable que Mariano participara en algunas de estas acciones.

Se trataba, en todos los casos, de operaciones de poca envergadura, de recuperación de armas y dinero: después de los golpes recibidos aún no estaban para cosas mayores. Acerca de la menguada operatividad de la organización durante esta etapa, Lucas Lanusse apunta:

«Además de no realizar hechos de envergadura, en aquel tiempo Montoneros no se destacó tampoco por accionar frecuentemente. De hecho, entre octubre de 1970 y agosto de 1971 se realizó un promedio de tres operativos mensuales firmados. Prácticamente dos tercios de esas acciones se llevaron a cabo en Buenos Aires, que a su vez es la única región que registra por lo menos un operativo todos los meses. En Córdoba se realizó un operativo firmado cada 37 días.»

Para establecer una comparación con fines ilustrativos, el ERP, la organización más activa, en el mismo período llevó a cabo un promedio de diecisiete operativos firmados. Como reflejo de lo anterior, la percepción que existía era que la estrella de Montoneros comenzaba a apagarse en la misma medida que la del ERP cobraba altura y ganaba el centro de la escena. Sin embargo, esa realidad cambiaría en los años subsiguientes.

Precisamente el ERP, el 12 de junio de 1971, liberó de la cárcel de mujeres del Buen Pastor, en el barrio de Nueva Córdoba, a cinco reclusas: entre ellas a Ana María Villarreal de Santucho y Cristina Liprandi de Vélez, detenida en la casa de Los Naranjos donde las fuerzas de seguridad hirieron gravemente a su marido y mataron a Emilio Maza tras la toma de La Calera.

Diez días más tarde, el martes 22 del mismo mes, Mariano, que actuaba en la clandestinidad desde hacía un año, cayó preso

en una redada policial. Fue durante el trascurso de una reunión *cantada* en una casa que resultó allanada por las fuerzas policiales mientras se desarrollaba la misma. Mariano Pujadas resultó detenido junto al resto de integrantes de la Unidad Básica de Combate (UBC) de la que, además del nombrado, formaban parte: María Zaida El Ganame, Zulema Josefina El Ganame, Gladys Olga Scorza, Adriana Esper de Maggio, Roque Maggio, y Carlos María Suárez.

El día siguiente, en la contratapa, donde se publicaban las noticias policiales, el diario *La Voz del Interior* dio cuenta del procedimiento: «Presuntos extremistas fueron detenidos», era el título que encabezaba la crónica del allanamiento efectuado el día anterior por efectivos de la Unidad Regional Córdoba de la policía provincial en una vivienda de calle Mendoza 1477 de la capital cordobesa. La nota señala que en ese lugar fueron detenidas las hermanas El Ganame —dueñas de casa— y el resto de las personas que se hallaban allí reunidas, a los que sindicaba como miembros de Montoneros: María Zaida El Ganame, profesora de Jardín de Infantes, empleada municipal; Zulema El Ganame, psicóloga; Adriana Maggio, psicóloga, empleada municipal; Roque Maggio, estudiante de Psicología; Gladys Scorza, estudiante de Radiología, miembro de una conocida familia de Oncativo, provincia de Córdoba. Y Mariano Pujadas, estudiante de quinto año de Ciencias Agropecuarias en la Universidad Católica. La crónica detalla los elementos secuestrados: 3 pistolas calibre 11.25; un fusil reformado del mismo calibre; 7 granadas de mano; 2 aparatos transmisores-receptores; 2 pelucas, una de hombre y otra de mujer; abundante munición; agujas hipodérmicas; 11 libretas de enrolamiento; formularios en blanco para confeccionar cédulas de identidad; sellos, etcétera.

La clandestinidad había tocado a su fin: ahora Mariano era un preso de la dictadura.

Mariano preso

Mariano Pujadas fue alojado en la Cárcel de Encausados de Córdoba, en barrio Güemes, junto a otros presos políticos. Quedó a disposición del Poder Ejecutivo (Decreto N° 3722), según las previsiones de la Ley N° 18.670 que creaba el fuero antisubversivo,

bajo los cargos de asociación ilícita y tenencia de armas de guerra y explosivos.

No llegó a tomar contacto con sus antiguos compañeros, el grupo de presos de La Calera, por cuanto estos habían sido trasladados al penal de Resistencia (Chaco) algunas semanas después del *Viborazo* –el estallido social del 15 de marzo de 1971–, en represalia porque uno de ellos, Ignacio Vélez, se dirigió a los manifestantes que aquel día llegaron hasta las inmediaciones de la cárcel para expresar su solidaridad a los presos políticos alojados en ese penal.

El *Viborazo* fue el segundo levantamiento que sacudió a Córdoba y que, aunque de menor alcance y notoriedad que el *Cordobazo* de 1969, tuvo, al igual que este, un fuerte impacto político y una gran adhesión popular. Se destacó esta vez la participación de los combativos SITRAC y SITRAM, los gremios que agrupaban a los trabajadores de las plantas de Concord y Materfer de la empresa FIAT. Se le llamó *Viborazo*, porque el entonces gobernador José Camilo Uriburu, unos pocos días antes, había afirmado que cortaría de un solo tajo la cabeza de la serpiente marxista que anidaba en Córdoba. Por cierto, la única cabeza que rodó fue la de él.

Allí, en el viejo penal de calle Belgrano, Mariano y los demás presos se enteraron de la muerte de José Sabino Navarro –miembro de la conducción nacional de Montoneros– acaecida a fines del mes de julio en la zona de Villa general Belgrano, en las sierras de Calamuchita, tras un operativo de recuperación de automotores perpetrado por Montoneros en la ciudad de Río Cuarto que desembocó en una persecución policial de ribetes cinematográficos por las serranías cordobesas. Además de Navarro –a quien hallaron muerto tras una intensa búsqueda terrestre y aérea que duró varios días–, las fuerzas de seguridad dieron muerte a Juan Antonio Díaz y detuvieron al santafesino Jorge Cotone (*Cacha*) y al cordobés Cecilio Manuel Salguero, integrantes de la misma célula.

Pocos meses más tarde, en diciembre, fueron detenidos otros dos combatientes de Montoneros oriundos de Córdoba: Susana Lesgart –pareja de Fernando Vaca Narvaja– y Jorge Mendé; y muertos a raíz del estallido de material explosivo que estaban manipulando, los estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y exintegralistas, Efraín Antonio Salatín y Mario Oscar Lépore.

Todas esas caídas significaron duros golpes a la organización que, sin embargo, en los meses siguientes logró vertebrar una nueva Conducción Nacional, con predominio de Mario *Pepe* Firmenich —el sobreviviente de mayor rango tras las muertes de Emilio Maza, Abal Medina y Sabino Navarro—, y representación de al menos seis regionales: Capital Federal, Córdoba, Litoral, Noroeste, Noreste y Cuyo. En una cumbre realizada en el mes de diciembre de aquel año de 1971 se presentaron los lineamientos que guiarían de allí en más el accionar de la organización, los que fueron aprobados en la siguiente reunión, la primera celebrada en 1972.

En el nuevo cuerpo doctrinario, quedaba definitivamente zanjada la discusión acerca de la opción «movimiento peronista o alternativa independiente», que las FAP venían planteando desde hacía tiempo como cuestión liminar de previa resolución, y que, ante la falta de acuerdos, impidió la fusión de los grupos guerrilleros existentes en uno solo: la proyectada Organización Armada Peronista (OAP). Por cierto, Montoneros adoptó el camino movimientista, con los pros y contras que ello implicaba. Entre otras cuestiones a resolver, destacaba el vínculo con el conductor natural del espacio, Juan Domingo Perón, con quien mantuvieron una relación complicada y plagada de altibajos.

Pese a que las cosas parecían comenzar a enderezarse, a esa altura ya asomaba la primera disidencia interna con epicentro en Córdoba. Allí, el esquema operacional reconocía dos columnas: Norte y Sur, según la jurisdicción militar de cada una de ellas en la capital cordobesa. Entre ambas columnas se suscitaron diferencias de criterios que desembocaron en una virtual división.

La visión crítica de los integrantes de la Columna Sur al método foquista y excesivo militarismo de la organización venía incubándose desde hacía tiempo, compartida por el grupo de presos de La Calera, que para entonces había sido alojado en la cárcel de Resistencia (Chaco) y mantenía contacto con la conducción de la Columna Sur. Algunas de esos cuestionamientos constan en los apuntes recogidos por Luis Rodeiro en su libro ya citado y formaron parte del famoso *Documento de tapas verdes*, como se conoce al vademecum disidente impreso a mimeógrafo, dado a conocer algunos meses más tarde.

En los apuntes citados, entre otras, se aludía a cuestiones tales como que se sujetaba la práctica política a la armada, considerada esta segunda como «"único criterio de verdad"; a que

“se extraen cuadros de la actividad política, desvinculándolos de sus bases”; a que “la necesidad de operar militarmente posterga siempre los análisis teóricos y la tarea política”; a que “se mistifica al combatiente, considerándolo un hombre nuevo por el solo hecho de tener un arma en la mano.» Y así. Un rosario de reflexiones críticas que apuntaba en una única dirección: interpelar el rumbo que la conducción había impreso a la organización en los últimos meses. Conducción que, además, prohibió la difusión de las críticas y, por cierto, censuró cualquier debate acerca de las mismas. Aunque el material censurado igualmente circuló entre los presos, no produjo contagios en otros penales, como Devoto o Rawson, donde se concentraba la mayor parte de militantes de Montoneros.

Seguramente Mariano tuvo noticias del proceso interno aludido y conoció la posición crítica de sus antiguos compañeros, muchos de ellos muy cercanos a él, pero a juzgar por su conducta ulterior optó por no sacar los pies del plato y siguió acatando desde el presidio las directivas de los nuevos mandos superiores de la organización, que en la Regional Córdoba eran el propio Firmenich, desplazado desde la Capital Federal a la Docta para colaborar con la reorganización de la Regional; la santafesina María Graciela de los Milagros Doldan (*Gorda o María*), –fundadora más tarde de la Columna Sabino Navarro–; y el excursa Elvio Alberione (*Cruzado*), entre otros.

En Rawson

Los presos políticos que permanecían en la cárcel de Encausados «a disposición del Poder Ejecutivo Nacional», un estatus jurídico traído de los pelos a la medida de los tiempos que corrían, por razones de seguridad, fueron trasladados al penal de Rawson, en la provincia de Chubut.

Según recuerda Manuel Lorenzo, un militante montonero que había caído preso en el mes de mayo de ese año de 1971, el traslado se efectuó bajo estrictas medidas de seguridad, esposados de pies y manos. La máquina que los llevaría al nuevo destino –un DC3 de la Fuerza Aérea– partió desde la Escuela de Aviación. El embarque se hizo a punta de FAL y cada prisionero viajó esposado al brazo del policía que lo acompañaba.

«Rawson, la capital de la provincia de Chubut, está a veinte kilómetros de Trelew y no tiene otra vida que la burocrática: los empleados de la administración pública viajan dos veces al día entre ambas ciudades y dejan a Rawson desolada apenas anochece», afirma Tomás Eloy Martínez, en *La pasión según Trelew* (Planeta, 1997).

La cárcel –técnicamente denominada Instituto de Seguridad y Resocialización U6–, ocupa unas tres manzanas de terreno en el extremo norte de la ciudad; fue concebida para albergar delinquentes comunes calificados como peligrosos. Tanto que, según Eloy Martínez, «hasta que aparecieron los presos –así, a secas, como aprendieron a llamar en Trelew a los cautivos políticos–, la cárcel no suscitaba sino aprensión.» El penal estaba rodeado de leyendas, algunas coloridas, pero apenas una que otra historia de fuga, algo casi imposible en un sitio desolado como la meseta patagónica.

La presencia de alrededor de dos centenares de presos políticos –guerrilleros y no guerrilleros, muchos de ellos notorios, como el sindicalista cordobés Agustín Tosco– cambió esa atmósfera tanto como los modos y costumbres de los lugareños, que hasta allí conocían muy por arriba lo que pasaba en el resto del país. «Hasta que les llegó a ellos la hora del sobresalto. Fue a mediados de 1971, cuando por primera vez el gobierno militar envió presos políticos a la cárcel de Rawson. La vida empezó a respirar de otra manera», escribe Eloy Martínez.

El motivo para trasladar dirigentes y militantes a una cárcel con fama de inexpugnable, ubicada a 1500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, era doble: lo primero, aislarlos, alejarlos de los centros urbanos poblados y del contacto con sus respectivas organizaciones, y, lo segundo, infringirles un castigo adicional, hacerles sentir en carne propia los avatares de la soledad en un lugar inhóspito, alejado de todo.

Con Mariano preso en el lejano sur, su familia trató de sobrellevar la situación y seguir adelante con sus actividades. Los padres dedicados a sus labores de siempre y los hijos repartiendo el tiempo entre el trabajo y el estudio. María de los Ángeles militaba activamente en el Integralismo de Ciencias Económicas (UNC), donde seguía la carrera de Contador Público. Después que detuvieron a Mariano, ella y el resto de la familia integraron la Comisión de Solidaridad con los Presos Políticos Estudiantiles

y Gremiales. Gradualmente, José María hijo se sumó a esas actividades.

El reportaje a Juan Carlos Maristany, publicado en *Página 12* el 20 de agosto de 2010, aporta datos acerca de la familia de quien por entonces era su novia, María José Pujadas: «durante ese período no había otro tipo de militancia política, salvo la preocupación por el estado de Mariano en la cárcel y las lógicas comunicaciones con los otros padres de presos políticos.»

El mismo testimonio da cuenta del cuadro de situación familiar por esos días:

«Cada uno tenía, aparte de las responsabilidades en la cabaña, sus obligaciones de estudio. Ricardo estudiaba Ingeniería Electromecánica, de lo que se recibió. José María estaba dedicado de lleno al trabajo de la cabaña, Ángeles estudiaba Ciencias Económicas; su novio, Sergio, Agronomía, igual que yo, pero más avanzado, por lo que también se recibió antes del desastre, y María José terminó el secundario cuando estábamos de novios y empezó la carrera de Historia.

La cabaña era un lugar donde trabajaban la familia y muchos empleados; sin embargo, la policía, el Ejército o quienes fueran, hacían allanamientos cada tanto. A mí me tocó estar en uno cuando entraron, pienso que sin saber realmente qué buscaban, hablaron con los padres, revolvieron el escritorio y se fueron.»

Entre 1971 y 1972 menudearon los viajes de los miembros de la familia Pujadas a Rawson para visitar a Mariano; la mayoría de las veces en ómnibus fletados por la Comisión de Solidaridad en los que se trasladaban familiares y abogados de los detenidos. Incluso, el matrimonio Pujadas facilitaba el traslado de otros familiares, ya sea ayudando a solventar los pasajes para que familiares sin recursos de otras provincias pudieran visitar a los presos, o compartiendo el largo viaje en la rural Ford de la familia. Otras veces enviaban a Trelew un cargamento de huevos de granja se-

leccionados. El padre de Mariano fue uno de los familiares más activos en la tarea de tender lazos entre la comunidad local y los presos políticos.

En su libro, ya citado, Tomás Eloy Martínez alude a esas visitas de familiares:

«Trelew se convirtió en el apeadero obligado de los peregrinos que tenían familiares en la cárcel de Rawson. De tanto ir y venir, no tardaron en anudar amistades con la gente del pueblo.

(...) Al marcharse, los familiares de los presos les rogaban que fueran a visitarlos al penal y que les llevaran cigarrillos, caramelos y ropas.»

De esa relación fraguada por las circunstancias, surgieron los *apoderados*, lugareños que tomaban bajo su protección un detenido, a manera de contención más afectiva que otra cosa. A Mariano, le tocó Elisa Martínez, un ama de casa sin activismo político cuyo esposo, el artista Horacio Mallo, esculpió un busto de Mariano que obsequió a su familia. «De entrada nos unió que ambos éramos argentinos naturalizados porque éramos de España, aunque era mucho más joven que yo. Algo mucho más afectivo que intelectual», contó la apoderada durante el juicio, cuarenta años después.

Cuando el número de prisioneros aumentó, los *apoderados* formaron una Comisión de Solidaridad que reglamentaba las visitas y clasificaba las encomiendas, entre otros menesteres. Los días de visita al principio fueron cinco por semana y luego cuatro, de 9:00 a 11:30 y de 14:30 a 16:00 horas; la capilla del penal se usaba como locutorio, porque no lo había. Existían dos clases de guardiacárceles: los que trataban con rudeza y lejanía a los prisioneros y los otros, los que intentaban hacerles más llevadera la existencia, incluso pasando mensajes al exterior o consiguiéndoles cigarrillos y alguna que otra vitualla.

Por más que los detenidos ponían su mejor cara cada vez que llegaban visitas desde lejos y en sus cartas suavizaban la dura realidad que los rodeaba para no afligir a los suyos, lo cierto es que las condiciones en que se hallaban distaban de ser conforta-

bles. Los calabozos individuales eran de reducidas dimensiones, escasos dos por tres metros; sin instalaciones sanitarias, salvo por el recipiente para defecar u orinar que se vaciaba una vez al día, y un camastro como todo mobiliario. El implacable viento patagónico se filtraba por aberturas, hendiduras y chifletes del edificio; la calefacción, deficiente, incapaz de mantener la temperatura del agua de las calderas y atemperar los gélidos pabellones y pasillos. Sin embargo, la convivencia amable y respetuosa entre miembros de diferentes organizaciones y las diferentes actividades compartidas por los militantes presos compensaban las carencias.

El *Gaita*, como sus compañeros apodaron a Mariano, preservaba el buen talante y la fortaleza de espíritu por encima de todas las cosas, procurando mantener alta la moral del grupo.

De a poco, el clima épico que reinaba afuera se recreó en el interior del penal. Las prisioneras, que ocupaban el primer piso, se las arreglaron para agujerear el piso y comunicarse a través de esos huecos con sus compañeros varones. Las guitarreadas se convirtieron en peñas tras las rejas, inundando de cánticos y voces los desangelados muros. Las noticias que llegaban desde el exterior, que daban cuenta del retroceso de la dictadura, obraban como acicate para volver a la lucha cuanto antes.

Manuel Lorenzo comentó acerca del primer plan de fuga, que consistía en cavar un túnel para salir al exterior y abordar un avión de unos contrabandistas que operaba desde una pista clandestina y hacía la ruta con el Paraguay y con quienes la gente del ERP había establecido contacto. La celda elegida fue la de Enrique Gorriarán Merlo, por ser la más próxima al muro perimetral, pero el avance de la excavación era casi nulo dadas las características del suelo pedregoso que provocaba permanentes desmoronamientos. Finalmente, pese al empeño puesto por todos, el plan fue desestimado por ese motivo y por el alto riesgo que implicaba tratar con delincuentes.

La fuga definitiva comenzó a gestarse a comienzos de 1972. Gustavo Peralta, vecino de Trelew y apoderado del cordobés Manuel Lorenzo, contó la siguiente anécdota que Tomás Eloy Martínez recogió en su libro ya citado:

«Creo que el 3 de agosto de 1972 fue la última vez que entré al penal, doce días antes de que se concretara la fuga. No bien

aparecí en la capilla, Mariano Pujadas me llamó aparte y me dijo que los presos estaban muy enojados conmigo porque de mi casa habían salido chismes sobre una posible toma del penal. "Vos te mandaste la parte. Dijiste que atacarías a la guardia y que nos liberarías. Eso está mal, Gustavo. Nos creaste problemas de seguridad y vaya a saber qué otros trastornos nos esperan". Le respondí que todo eso era mentira y que me dolía mucho. Él no pareció creerme y me volvió la espalda.»

Según Peralta, el entredicho lo afectó al punto de que pensó dejar por un tiempo la función de apoderado:

«Me sentí mal. No alcanzaba a entender por qué yo, de la noche a la mañana, me había convertido en un indeseable para los guerrilleros. Sentía esa especie de fiebre a la altura del corazón que permite identificar los momentos de injusticia, y me callé la boca. Tuve el impulso de volver al penal y de romperle la cara a Pujadas, de arrastrarlo a la calle y sacarme la bronca de una vez por todas, pobre iluso, nada menos que a Pujadas, as del karate y de los sentimientos limpios.»

Más adelante explica cómo cayó en la cuenta de lo que estaba pasando realmente: «Tuvo que llegar el 15 de agosto para que me avivara (...) para descubrir de golpe por qué Marcos (Osatinsky) y Mariano habían querido mantenerme a distancia y postergar el aumento de apoderados que les proponíamos.»

También Elisa Martínez evocó durante el juicio esa última visita, cuando Mariano, tomándola suavemente de los hombros, charló con ella y su esposo: «No me dejó mover por el resto del pabellón para conversar con los demás como yo hacía en esos días de visita general.» Y agregó: «Entendí que se estaba despidiendo de nosotros, aunque en ese momento no me di cuenta.»

La fuga

La fuga masiva fue cuidadosamente planificada durante meses. Una cúpula integrada por representantes de las tres organizaciones armadas a las que pertenecían los presos alojados en el penal de Rawson –ERP, Montoneros y FAR– se ocupó de planificar cada detalle; en tanto que las respectivas conducciones externas autorizaron la operación, aun cuando dudaran del éxito de la misma teniendo en cuenta las múltiples dificultades que se debían sortear para que las cosas salieran bien. El ERP era quien tenía más fichas en juego, ya que la conducción completa, encabezada por Roberto Santucho, se hallaba en el penal. Le seguían las FAR y, en menor medida Montoneros, que hasta el traslado de Fernando Vaca Narvaja a Rawson solo tenía cuadros intermedios alojados en esa prisión. Pese a que no compartía del todo la decisión, la conducción montonera autorizó a sus militantes presos a participar del operativo.

El plan era tan ambicioso como sencillo: consistía en copar el penal, dirigirse en masa al aeropuerto de Trelew y abordar el avión de la compañía Austral que hacía escala en ese aeropuerto cerca de las 19 horas, luego de que militantes que vendrían mezclados en el pasaje tomaran el control de la máquina. El traslado masivo hasta la estación aérea se haría en dos camiones, una camioneta y un automóvil que el día elegido debían estacionarse en las inmediaciones y esperar la señal convenida para presentarse en el portón del presidio, listos para evacuar a los presos.

Un guardiacárcel, a cambio de algún dinero y ulterior protección para su familia, facilitaría las armas y los uniformes para iniciar el operativo, cuyas secuencias estaban definidas de antemano hasta el más ínfimo detalle. El objetivo de máxima era la fuga de 110 prisioneros, que ocurriría siguiendo un orden jerárquico preestablecido.

Los líderes del operativo confiaban en que tomarían por sorpresa a quienes estaban a cargo de la custodia de un penal preparado para evitar o desalentar fugas concebidas desde afuera hacia adentro, pero no para una operación pergeñada a la inversa. La fecha escogida como «día D» fue el martes 15 de agosto. En los días previos se repasaron una y otra vez los pasos a seguir, se computaron y tabularon los tiempos y quedó definido el rol de

cada uno. Pasadas las seis de la tarde de aquel día, de acuerdo a lo planificado, los presos se apoderaron de los pabellones, coparon los puestos de vigilancia y desarmaron a los guardias.

Esa primera fase del operativo fue exitosa —salvo por la muerte del guardiacárcel Gregorio Valenzuela, que intentó impedir la fuga—; en unos pocos minutos, todo estuvo listo para el escape masivo salvo por un detalle que acarrearía consecuencias fatales: por una interpretación equivocada de la señal convenida —una sábana desplegada en una ventana fue confundida con una frazada, la señal contraria—, los vehículos que debían trasladar a los prisioneros, en lugar de acercarse a las puertas del penal, emprendieron el retorno a la ciudad. Salvo el único automóvil, un Ford Falcon, que fue abordado por los seis presos que componían el Grupo N° 1, el que reunía a los dirigentes de mayor rango: Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Mena del ERP; Roberto Quieto y Marcos Osatinsky de las FAR, y Fernando Vaca Narvaja de Montoneros. Ese fue el único contingente que logró abordar el avión de Austral antes de que despegara. El resto de los prisioneros permaneció en el penal, procurando conseguir con urgencia más medios de transporte convocando por teléfono a taxis y remises del lugar.

Con los pocos automóviles que acudieron al llamado, un segundo grupo de diecinueve personas —entre las que se encontraba Mariano— pudo, a duras penas y sufriendo retrasos, llegar al aeropuerto; por desgracia para ellos, al momento de arribar, la máquina carreteaba rumbo a Chile. No les quedó más remedio entonces que copar la base aérea y procurar una negociación con las fuerzas represivas que ya habían rodeado el lugar. Actuaron como mediadores el juez federal Alejandro Godoy y el abogado chubutense Mario Abel Amaya, ligado a la Unión Cívica Radical.

El penal, entretanto, seguía en poder de los guerrilleros que no habían podido trasladarse al aeropuerto y aguardaban, ansiosos, novedades de afuera. En la celda que hasta unas horas antes había ocupado Mariano quedaron unos pocos efectos personales, entre ellos una foto de su familia pegada en la pared y el libro de Le Duan, *La revolución vietnamita* (La Rosa Blindada, 1971), que estaba leyendo, seguramente facilitado por algún compañero del ERP.

La foto fue rescatada por Manuel Lorenzo, otro montonero preso, y puesta a salvo de las requisas posteriores. Es un retrato

familiar al aire libre, en el que posan, junto a los padres, los tres hermanos varones de Mariano y la aún pequeña María José. En el reverso, escrito a mano, se lee: «Mariano te mando esta foto creo que no tenés ninguna nuestra. Mamá.»

Palabra de Mariano

El Canal 3 de Trelew registró la conferencia de prensa que ofrecieron en el hall del aeropuerto los voceros de los diecinueve guerrilleros que no lograron abordar el avión. Allí, de modo improvisado y en medio de una gran tensión, Rubén Pedro Bonet, del ERP, Mariano Pujadas, de Montoneros, y María Antonia Berger, de las FAR, contestaron lo mejor que pudieron las preguntas que formulaba el ocasional reportero. Imágenes borrosas, en blanco y negro como era la televisión de entonces; voces inaudibles en parte debido a los precarios equipos de exteriores que se utilizaban en esa época; sin embargo, pese al transcurso del tiempo, el testimonio sigue siendo conmovedor. Fuerte, muy fuerte.

Bonet fue el primero en tomar la palabra para anunciar que la decisión del grupo era entregarse sin ofrecer resistencia, y que para eso requerían la presencia del juez, los abogados y del periodismo. Admitió el fracaso de la operación pero se congratuló que en ese preciso instante los seis compañeros que lograron abordar el avión estarían a salvo en tierra chilena.

A su turno, Mariano, a quien se lo ve sereno y aplomado, expresó:

«Esto, de alguna manera, es reafirmar nuestra voluntad de lucha junto al pueblo y es lo que se ha expresado combativamente en tantas jornadas de lucha en Córdoba, Rosario, Buenos Aires, en todas las ciudades del país, que luchan permanentemente para derrotar a la dictadura, por conseguir el gobierno popular y construir una patria socialista. Esto es reafirmar una vez más nuestra voluntad de luchar junto al pueblo para esas verdades.»

A continuación se transcriben las partes esenciales del diálogo mantenido con la prensa y, en forma completa, las expresiones de Mariano Pujadas.

«Reportero: -¿Todo salió como lo planearon o fue un poco así, fruto de las circunstancias?

MP: -Que nos fuéramos todos. Se fue solo un grupo. Nosotros no pudimos llegar a tiempo.

Reportero: -¿Cuántos quedaron acá, entonces?

Bonet: -Creo que somos de diecinueve a veinte. En este momento los vamos a contar.

MP: -Sí, sí (ademán de contar)

Reportero: -Además de ustedes, de los diecinueve, ¿Cuántos son los que viajaron?

Bonet: -Creemos que son seis.

Reportero: -¿Son todos hombres?

MP: -Sí, son todos hombres.

Reportero: -¿Cuáles son las condiciones en este momento?

Bonet: -Entregarnos incondicionalmente.

MP: -Entregarnos incondicionalmente. Nuestra lucha es bien demostrativa de que no tenemos intención de hacer ningún daño a los civiles. Les hemos aclarado eso. Se lo hemos reiterado. Simplemente los mantenemos aquí incluso por seguridad de ellos. Está la represión afuera. Mientras arreglamos con la represión cómo vamos a entregarnos, a entregar las armas y a garantizar nuestra seguridad, la seguridad de ellos está garantizada también.

Reportero: -¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el gobierno actual?

Bonet: -Es una dictadura militar al servicio de los monopolios.

MP: -Pienso exactamente lo mismo.

Reportero: -¿Qué solución ven las organizaciones armadas de las distintas siglas a la situación del país?

Bonet: -Bueno, continuar la guerra revolucionaria.

MP: -La vía no la ponemos nosotros. La vía la pone el régimen cuando proscribire la voluntad del pueblo. Es mentira que el pueblo puede elegir libremente a sus gobernantes. Nosotros entendemos que está suficientemente demostrado que el régimen siempre va a tender alguna trampa y no casualmente, sino porque las clases dominantes necesitan mantener una situación de privilegio. Siempre van a tender alguna trampa dentro de actual sistema capitalista para impedir la llegada de gobiernos representativos de los intereses del pueblo, que son la liberación de la dominación imperialista y la construcción de una patria socialista. Entendemos que el problema de la violencia no es un problema que lo tengamos nosotros. El problema de la violencia es algo que nos impone el régimen, cortando todas las demás posibles salidas. Estamos convencidos de que solo por la vía violenta vamos a poder conseguir un gobierno para el pueblo.

Reportero: -Los comandos superiores de cada uno de vuestros grupos, o sea ERP, Montoneros y FAR, ¿entienden que la única posibilidad que hay es la salida a través de la escalada de violencia o que hay alguna otra posibilidad a través de un proceso electoral democrático?

MP: -Aquí hay compañeros de las tres organizaciones, como dijo el compañero Bonet: del Ejército Revolucionario del Pueblo, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de Montoneros. Esta acción

es significativa de nuestra voluntad de unión. Estamos juntos en esto y vamos a luchar por la liberación de nuestro pueblo. Hoy nos separan algunas diferencias políticas pero estamos seguros de que al calor de la lucha esas diferencias van a ser superadas. Dos de las organizaciones que estamos aquí, representadas por algunos de sus miembros, son organizaciones peronistas, y la otra no lo es. Pero eso no es ninguna traba para esta voluntad de unidad.

Los compañeros peronistas que estamos aquí lo hemos dicho ya otras veces y lo repetimos hoy: no somos nosotros los que hemos elegido el camino de la violencia. Si el régimen tuviera la voluntad de dar elecciones totalmente limpias, sin ningún tipo de trabas, el pueblo lo aceptaría y nosotros lo aceptaríamos. Nosotros le decimos al régimen que si quiere demostrar esa voluntad que no haga tanta cháchara con elecciones libres y se expida más claramente, que demuestre en los hechos su voluntad de pacificar el país. En ese sentido, mientras el régimen no haya liberado a los presos políticos que pueblan hoy las cárceles, que son miles; mientras el régimen no haya terminado con las torturas, los secuestros y los asesinatos que realiza; mientras el régimen no permita que la voluntad popular se exprese con programas revolucionarios de gobierno que sean representativos de los intereses del pueblo, porque el pueblo tiene programas elaborados, seguirá manteniendo las condiciones de violencia que dejan como única vía posible la respuesta de la violencia revolucionaria.»

Concluida la conferencia de prensa, Mariano, convertido a esa altura en líder del grupo guerrillero que mantenía el control del

aeropuerto, tuvo un aparte con el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, a cargo a su vez de las fuerzas represivas. La reproducción textual del diálogo mantenido entre ambos en medio de la confusión reinante es la que sigue:

«MP: -Vamos a entregarnos con la expresa condición de que antes nos revise un médico, para comprobar nuestro estado físico, y de que nos lleven en ómnibus directamente al penal, acompañados por el doctor Godoy y por el doctor Amaya.

Sosa: -¿Y para qué quieren un médico?

MP: -Tenemos experiencia sobre la forma en que hemos sido torturados en otras oportunidades por la represión.

Sosa (indignado): -¡No se lo voy a permitir!

MP (calmo): -No estoy diciendo que usted sea torturador. Usted personalmente. Pero le repito que tenemos experiencia. En otras oportunidades fuimos detenidos y pese a que la policía nos aseguró que no seríamos torturados, hemos sufrido torturas.

Sosa: -Los vamos a trasladar a la base aeronaval.

MP: -No. Yo le pido especialmente que se nos traslade al penal.

Sosa (fastidiado): No sabemos en qué condiciones se encuentra el penal. Yo les doy mi palabra de que en la base obtendrán las seguridades que buscan.»

Enseguida, Mariano, en un aparte junto al kiosco de revistas y cigarrillos que se encontraba en la confitería del aeropuerto, conferenció en voz baja con sus compañeros para decidir el curso de acción a seguir.

Tras ese breve conciliábulo, el grupo resolvió que lo mejor era entregarse, tal como se había anunciado, bajo la promesa de ser regresado al penal. En presencia del juez Godoy y del abogado Amaya, uno a uno, depositaron las armas en el piso, a corta distancia de sus pies. Cumplido el trámite, los guerrilleros formaron

fila en la vereda del aeropuerto, una imagen emblemática que en los años subsiguientes sería profusamente difundida. En ella se los ve vestidos con ropa de calle, abrigada; algunos pensativos, otros con gesto altivo: a Mariano sin bigotes, luciendo un pulóver claro de cuello redondo del que asoma una camisa oscura; a Ana María Villarreal embarazada, a Susana Lesgart sonriente. . .

Unos metros más allá de la formación, el capitán Sosa reclamaba a los gritos a un subalterno que trajera cuanto antes el ómnibus para proceder al traslado de los prisioneros. Entretanto, en el interior de la estación aérea, los pasajeros que permanecían retenidos y los familiares que los acompañaban suspiraban aliviados y comenzaban a distenderse. La pesadilla parecía tocar a su fin.

Cuando el micro se detuvo junto al grupo y comenzó el ascenso de sus integrantes, María Angélica Berger agitó sus manos y, liberando la ansiedad contenida, gritó a voz en cuello «¡Viva Perón!» Susana Lesgart, que le seguía en la fila, repitió a su vez con el mismo entusiasmo: «¡Viva!» Al escuchar las exclamaciones, Mariano, que ya estaba dentro del coche, no pudo con su genio y sacando la cabeza por la ventanilla gritó lo suyo: «¡La vida por Perón!» ¿Sabría acaso que esa profecía, lanzada con efusión, pronto se haría realidad?

Una vez que los diecinueve prisioneros estuvieron a bordo, subieron el juez Godoy y el abogado Amaya, tal como habían solicitado los malogrados fugitivos. Enseguida se cerró la puerta automática y el micro se perdió en la fría noche patagónica, rumbo a la tragedia. El reloj marcaba las 11:15. Aproximadamente una hora antes, bajo una lluvia intensa, había aterrizado en el aeropuerto de Pudahuel, en Santiago de Chile, la máquina que llevaba a los seis jefes que habían logrado huir.

Faltando al compromiso asumido por Sosa, los diecinueve prisioneros fueron trasladados a la base aeronaval Almirante Zar, ubicada a unos siete kilómetros al norte de Trelew. Sosa justificó el cambio de planes diciendo que se debió a que la zona aledaña al penal había sido declarada en estado de emergencia, y que sería una estadía provisoria en la base, hasta tanto se restablecieran las condiciones de seguridad del establecimiento que seguía tomado por los presos.

A las dos de la madrugada, el general Eduardo Ignacio Betti, comandante de la 9ª brigada de Infantería con asiento en Comodoro Rivadavia, asumió el mando de la zona de emergencia. Tres

horas más tarde se reunió con el comandante del Quinto Cuerpo de Ejército, general Manuel Ángel Ceretti, recién llegado de Bahía Blanca. A esa misma hora, se desplegaba un vasto operativo de rastrillaje en la región para tender un cerco y recapturar posibles fugados, en tanto que se reforzaba la frontera con la vecina provincia de Río Negro. Cuando despuntó el alba del miércoles 16, el alerta militar se había extendido a la región comprendida por las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, norte de Santa Cruz y sur de Buenos Aires.

Recién pasadas las ocho de ese día, con el sol elevándose morosamente en el cielo austral, los detenidos que mantenían el penal bajo control se rindieron y entregaron las armas. Mientras el personal militar procedía a la requisita y conteo de los presos, un anillo infranqueable impedía el acceso al lugar. En las horas subsiguientes, los esfuerzos por tomar contacto con los presos por parte de los abogados, tanto los locales como los arribados desde Buenos Aires, fueron inútiles.

Uno de los letrados que había viajado desde la Capital Federal en automóvil, Eduardo Luis Duhalde, evocó años más tarde esas horas en el artículo titulado *Una herida en mi costado*, disponible en varios sitios de Internet, donde se lee:

«Desde la mañana del 17 de agosto, Rawson parecía, por un lado, una ciudad ocupada, las patrullas militares la controlaban, incluyendo hasta el comedor del Hotel Provincial. Pero, por otro, era un páramo solo recorrido por los fuertes vientos invernales: los habitantes—sensatamente—solo se dejaban ver lo indispensable. Una indescriptible sensación de muerte nos embargaba, era una crónica anunciada. Íbamos de la cercanía de la cárcel a la zona próxima a la base Almirante Zar, donde tenían a los prisioneros, sin que en ningún lado nos permitieran acercarnos. Constantemente pedíamos entrevistar al juez de la Cámara Federal Jorge V. Quiroga, que había viajado desde Buenos Aires y que instruía el sumario, sin que accediera a recibirnos: hasta llegamos a presentarle escritos pasándolos por debajo de la puerta

de su habitación del hotel, reclamándole seguridad para nuestros defendidos.»

Más adelante, agrega: «Comprendimos que nada podíamos hacer allá. Nos embargaba el dolor, la impotencia, el sentirnos absolutamente inútiles frente a la negación de todo derecho. Lo único posible era volver de inmediato a la ciudad de Buenos Aires, a denunciar que el crimen avanzaba a pasos agigantados.»

A los familiares que acudieron presurosamente a Rawson tan pronto conocieron la novedad no les fue mejor. El relato de Alicia L. de Bonet, una de esos familiares, recrea la angustia vivida durante esas horas aciagas:

«En la comisaría de Rawson, estaba con los padres de Mariano (Pujadas), de Susana (Lesgart), de María Angélica (Berger), entre otros, nos tomaron las impresiones digitales y nos hicieron el prontuario mientras nos "aconsejaban" que volviéramos a nuestras casas. Esta era la condición para liberarnos. Los "viejos" no podían creer que se las agarraran con ellos y me decían: "yo soy médico en mi pueblo y lo único que quiero saber es cómo esta mi hija, ¿por qué no me van a dejar acercarme a ella?". "Si mi hijo hizo lo que considero que tenía que hacer, ¿por qué se la agarran conmigo?". "Che ¿te parece que tengo cara de gangster?". Tenían fuerza, humor, orgullo por el camino que habían elegido sus hijos. Para poder salir, prometimos a los policías que nos iríamos a nuestras casas.»

En lugar de eso, según cuenta:

«Nos fuimos a Trelew y seguimos buscando información. Yo era maestra y un poco periodista de *Nuevo Hombre* de esa manera conseguí fotos del aeropuerto cuando estaba tomado y una cinta de la Conferencia de Prensa grabada por la televisión. En esa

cinta, los compañeros explican las razones de sus luchas y las negociaciones antes de entregarse.

Intentamos ir a la Base, pero había militares por todos lados controlando, nos vuelven a detener y nos llevan a la comisaría de Trelew. Los abogados se enfrentan a un hermético cerco de silencio que les impide todo contacto con los detenidos de la Base y de la cárcel de Rawson. Los detienen también para su identificación, al igual que a los chóferes de los remises que los condujeron al aeropuerto. Los doctores Amaya y Solari Irigoyen, que eran abogados locales, tampoco logran tomar contacto con los presos y el doctor Amaya queda detenido. Los jueces Quiroga y Godoy se niegan a recibir ninguna petición ni *habeas corpus* de los abogados. Los abogados convocan una conferencia de prensa en el estudio de los doctores Romero y Amaya. Poco después, el estudio es allanado, lo que obliga a realizar sus declaraciones en la calle. Al día siguiente, decidimos todos regresar a nuestras casas.»

A esa altura, el hermetismo era total y nadie sabía qué ocurría tras los muros del penal, mucho menos en la base Almirante Zar. Esa noche fue detenido el abogado Amaya. El viernes 18 y el fin de semana que le siguió transcurrieron en medio de un clima tenso, sin que desde esferas oficiales se brindara ninguna información. La preocupación por la suerte de los diecinueve prisioneros iba en aumento y el temor a una represalia flotaba en el ambiente.

El lunes 21, a primera hora, 140 efectivos de Gendarmería reforzaron la vigilancia del penal. Ese mismo día, la tensión aumentó cuando, desde el otro lado de la cordillera, trascendió que el gobierno de Salvador Allende, desoyendo los reclamos de las autoridades argentinas, libraría salvoconductos a los asilados para que pudieran viajar a La Habana, Cuba. Es probable que esta novedad, que enfureció a los altos mandos argentinos, terminara de sellar la suerte de los diecinueve cautivos, mantenidos como

rehenes a la espera de la decisión del gobierno chileno. La palabra «escarmiento» sonaba cada vez con más fuerza en los corrillos oficiales.

Entretanto, más tarde se supo que el trato dispensado a los prisioneros en la base Almirante Zar, sometidos a una vigilancia rigurosa, fue de lo más duro y, por momentos, humillante. A los presos, que fueron alojados en calabozos individuales, a lo sumo de a dos, no se les permitía reunirse ni hablar entre ellos. Durante la noche, eran despertados a gritos, varias veces, y sometidos a movimientos vivos, siempre rodeados por una doble hilera de soldados. Iban de a uno al baño, custodiados por un centinela que les apuntaba a la cabeza con su arma.

Mariano ocupaba junto a Jorge Ulla la primera celda del ala derecha.

22 de agosto

A las tres de la madrugada del martes 22 de agosto, la columna mercurial marcaba un grado bajo cero. Afuera era noche cerrada; adentro de la base, reinaba el silencio, apenas se filtraba el ulular del viento patagónico que soplabla con furia sobre la yerma meseta. En medio de semejante inmovilidad, nada hacía presagiar que, media hora más tarde, comenzaría una actividad inusitada, de extrema crueldad: los cautivos fueron obligados a sacar las colchonetas y formar delante de sus respectivas celdas. Acto seguido, sin mediar palabras, fueron ametrallados a mansalva. Algunos quedaron tendidos, desangrándose en el piso, otros atinaron a arrojar al interior del cubículo para refugiarse de la implacable andanada de proyectiles disparadas por las metralletas PAM. Los victimarios encabezados por el capitán Sosa, impassibles, verificaron uno a uno los cuerpos exánimes, disparando el tiro de gracia con pistolas calibre 45.

Sin embargo, no alcanzaron a concluir la masacre, interrumpida por la irrupción de otros oficiales que supuestamente desconocían lo que estaba pasando. Así fue como quedaron con vida solo siete de los diecinueve guerrilleros. Cuatro de ellos –Polti, Astudillo, Bonet y Kohon– murieron al cabo de unas pocas horas, en tanto que otros tres –Berger, Camps y Haidar–, increíblemente, permanecieron con vida.

Con el paso del tiempo se comprobó que las armas asesinas fueron disparadas por Sosa en persona y cuatro de sus ayudantes: el capitán Raúl Herrera, el teniente de corbeta Roberto Guillermo Bravo, el teniente Emilio Del Real y el cabo Carlos Marandino. El procedimiento contó con el visto bueno del jefe de la base, Rubén Paccagnini.

La lista completa de las víctimas es la siguiente:

- Jorge Alejandro Ulla (PRT-ERP), 28 años, estudiante y obrero metalúrgico.
- Alfredo Kohon (FAR), 27 años, estudiante de Ingeniería.
- Ana María Villarreal de Santucho (PRT-ERP), 36 años, profesora de Artes Plásticas.
- Carlos Alberto del Rey (PRT-ERP), 26 años, empleado.
- Carlos Heriberto Astudillo (FAR), 28 años, estudiante de Medicina.
- Clarisa Lea Place (PRT-ERP), 24 años, estudiante de Abogacía.
- Eduardo Adolfo Capello (PRT-ERP), 24 años, estudiante de Economía.
- Humberto Segundo Suárez (PRT-ERP), 23 años, obrero.
- Humberto Adrián Toschi (PRT-ERP), 26 años, estudiante de Arquitectura.
- José Ricardo Mena (PRT-ERP), 20 años, albañil.
- María Angélica Sabelli (Montoneros), 23 años, estudiante de Ciencias Económicas.
- Mariano Pujadas (Montoneros), 24 años, estudiante de Agronomía.
- Mario Emilio Delfino (PRT-ERP), 29 años, estudiante de Ingeniería.
- Miguel Ángel Polti (PRT-ERP), 21 años, estudiante de Ingeniería.
- Rubén Pedro Bonet (PRT-ERP), 30 años, obrero.

-Susana Lesgart (Montoneros), 22 años, estudiante.

Los tres sobrevivientes:

-Alberto Miguel Camps (FAR), 24 años, estudiante.

-María Antonia Berger (FAR), 30 años, Socióloga.

-Ricardo René Haidar (Montoneros), 28 años, Ingeniero Químico.

Todo está guardado en la memoria

El sumario estuvo a cargo del capitán Jorge Enrique Bautista, designado por la Armada para investigar los hechos pese a que no era juez militar de carrera. El primer testimonio de dos de los sobrevivientes fue receptado por el sumariante en la enfermería de Puerto Belgrano, algunos días después de que fueran trasladados para ser atendidos. Por esas horas, María Antonia Berger aún se debatía entre la vida y la muerte. Recién prestó declaración el 5 de septiembre, cuando estuvo en condiciones de hacerlo.

La segunda declaración testimonial se efectuó ante un juez civil, esta vez en la cárcel de Devoto, donde fueron alojados los sobrevivientes semanas después de la matanza.

Los testimonios, salpicados de detalles escalofriantes, son crudos y reveladores a la vez. Todos son igualmente válidos para reflejar lo acontecido aquella noche trágica. Elegimos al azar el de María Antonia Berger, que se transcribe completo a continuación:

«Después de concretarse la toma del aeropuerto de Trelew, nos planteamos mis compañeros y yo la necesidad de garantizar nuestra seguridad física en el trato posterior a la rendición; de tal forma se logró una amplia certificación de nuestro estado físico por parte de médicos y periodistas.

El juez federal que intervino en la negociación de nuestra rendición prometió

acceder a nuestro requerimiento de que se nos retornara al penal de Rawson en forma inmediata; dicho juez, al igual que el oficial de policía que lo acompañaba, se portaron en forma correcta. Al llegar las tropas de infantería de Marina, las tratativas de rendición se celebran con el oficial al mando de las mismas, capitán de corbeta Sosa, ante quien Mariano Pujadas, Rubén Pedro Bonet y yo insistimos en lograr que se nos reintegre a la unidad carcelaria, como condición previa a la rendición. Ante la oposición del capitán Sosa, se hace saber a él y al juez federal que a nuestro entender la base naval no reúne las mínimas garantías de seguridad en cuanto a nuestras vidas; para el supuesto caso que el penal de Rawson aún se encontrara ocupado militarmente por los compañeros alojados en este, los tres nos ofrecimos a gestionar la rendición incondicional de ellos.

En esos términos se planteaba la discusión, aunque luego el capitán Sosa accede a los requerimientos y afirma que nos llevará hasta el penal. De esta forma se hace efectiva la rendición, y todos entregamos nuestras armas; momentos antes de ascender al micro que nos llevaría de regreso a la cárcel de Rawson, nos enteramos de que se nos lleva a la base naval Almirante Zar, bajo pretexto de que la zona se había declarado en estado de emergencia, por lo cual las órdenes recibidas por Sosa eran el traslado de los prisioneros a la base, para su alojamiento en esta.

Ascendemos al micro, un poco confiados por la garantía que nos ofrece el juez federal, siempre acompañado por el doctor Amaya; ambos nos acompañan en el micro hasta la base y en esta hasta el pasillo mismo que conduce a nuestras celdas. Al despedirse

de nosotros, el juez reitera que hará todo lo necesario para garantizar nuestra seguridad física.

Una vez en nuestras celdas, aproximadamente cuatro horas después, bajo pretexto de revisión médica, se procede a realizar prolija requisa a órdenes de oficiales médicos, quienes nos ordenan quitarnos la ropa hasta quedar totalmente desnudos; miran nuestros cuerpos prolijamente, tal vez en busca de un arma aunque todos sabemos que la piel no tiene bolsillos ni mochilas. Esa madrugada, a las cinco horas recién nos hacen llegar mantas y colchones.

La custodia inicialmente se compone de doce conscriptos armados con fusiles FAL, FAP y otra arma larga automática la cual no conozco, y suboficiales armados con PAM todos ellos, en detalle que luego se convertiría en común, con sus armas amartilladas, sin seguro y apuntando hacia nosotros. Posteriormente, al tercer día de nuestra permanencia en la base, son remplazados los soldados conscriptos por personal militar permanente, es decir cabos y suboficiales principales al mando de uno o dos oficiales, quienes ya forman parte de la dotación de custodia habitual.

Comienza a endurecerse el trato dado a los prisioneros. Para ir al baño y a comer se nos lleva de a uno, con ambas manos apoyadas en la nuca, mientras nuestros carceleros nos apuntan con sus armas montadas y sin seguro, en forma continua se procede a maltratarnos; a los muchachos se les ordena hacer repetidas veces cuerpo a tierra totalmente desnudos, a pesar del intenso frío característico de la zona. También se nos obliga a hacer numerosos movimientos parándonos y sentándonos en el suelo, o sostener el peso del cuerpo con los dedos estirados y apoyados de punta en la pared durante mucho tiempo,

hasta que el dolor es insoportable. Todo ello, mientras nos encañonan permanentemente con sus armas. Es de remarcar que este trato era conocido por todos los integrantes de la base, ya que muchos oficiales concurrían a vernos, deteniéndose a observar cuanto nos ordenaban hacer.

Recuerdo una ocasión en la cual habíamos estado haciendo toda clase de movimientos ordenados por nuestros carceleros; en tal oportunidad, el teniente de corbeta Bravo colocó su pistola calibre 45 en la cabeza de Clarisa Lea Place, al tiempo que amenazaba con matarla porque esta se negaba a colocarse boca arriba en el suelo. Clarisa, atemorizada, contesta con un débil "No me mate"; el oficial vacila; luego baja su arma.

La tensión va aumentando; cada vez que un prisionero es sacado de su celda para ir al baño o para comer, y se lo llevan encañonándolo con las armas sin seguro, nunca sabemos si volveremos a ver con vida al que se aleja. Es notorio cómo la situación es progresivamente más tensa; lo sienten aún nuestros carceleros; tres disparos aislados y hasta una ráfaga entera de ametralladora cuyas marcas quedaron en las paredes, son muestras de un nerviosismo manifiesto que hacía que sus armas se les dispararan sin ellos darse cuenta.

Una noche asistimos a un simulacro de fusilamiento, y como tal lo asumimos posteriormente. Aproximadamente a la medianoche nos despiertan con gritos; a oscuras nos obligan a tirarnos cuerpo a tierra repetidas veces, sentarnos y pararnos en el suelo, etcétera, al tiempo que simulan ir a buscarlos para llevarnos, abren los candados, los cierran nuevamente; encienden y apagan las luces al tiempo que montan y desmontan repetidas veces sus armas. Escuchamos los cuchicheos de nuestros carceleros con otros

oficiales que han llegado. Por señas le pregunto a un cabo qué estaba pasando y me contesta moviendo su dedo índice como si apretara el gatillo de un arma. Como cierre de una noche agitada, comienza un nuevo interrogatorio por los oficiales, ante quienes reiteramos nuestra negativa a declarar; amenazan a Alfredo Kohon con ser torturado si insiste en su negativa de declarar.

El día anterior a los sucesos, concurre el juez a presenciar nuevos reconocimientos en rueda de presos; claro que sin enterarse del interrogatorio a que nos sometía personal de DIPA en una habitación cercana al lugar donde él presenciaba los reconocimientos.

A las 3:30 de esa noche, me despiertan los gritos que profiere el teniente de corbeta Bravo, el cabo Marchan y otro cabo del cual ignoro su nombre [¿Marandino?]. Bravo es rubio, mide 1,85 m, lleva bigote, es bien parecido y tendrá treinta años; Marchan es morocho, de tez mate; su estatura es mediana y tendrá veintiún años; el otro cabo es de características obesas, mide 1,75 m es de tez blanca. Todos ellos profieren insultos a nuestros abogados, al tiempo que aseguran "ya les vamos a enseñar a meterse con la marina"; a gritos, nos dicen que esa noche vamos a declarar, lo queramos o no.

Escucho otras voces de otras personas diciendo cosas semejantes, pero no alcanzo a distinguirlas puesto que inmediatamente nos ordenan salir de nuestras celdas, caminando sin levantar los ojos del piso; noto que es la primera vez que nos dan tal orden, pero no logro adivinar el motivo de la misma. Una vez en el pasillo que separa las dos hileras de celdas que son ocupadas por nosotros, nos ordenan formar en fila de a uno, dando cara al extremo del pasillo y en la puerta misma de nuestras celdas.

También observo que es la primera vez que nos ordenan tal dispositivo para sacarnos de nuestras celdas.

De pronto, imprevistamente, sin una sola voz que ordenara, como si ya estuvieran todos de acuerdo, el cabo obeso comienza a disparar su ametralladora sobre nosotros, y al instante el aire se cubrió de gritos y balas, puesto que todos los oficiales y suboficiales comenzaron a accionar sus armas. Yo recibí cuatro impactos; dos superficiales en el brazo izquierdo, otro en los glúteos, con orificio de entrada y de salida y el cuarto en el estómago; alcanzo a introducirme en mi celda, arrojándome al piso, María Angélica Sabelli hace lo mismo, al tiempo que dice sentirse herida en un brazo, pero momentos después escucho que su respiración se hace dificultosa, y ya no se mueve. En la puerta de la celda, en el mismo lugar donde le ordenaron integrar la fila, yace Santucho, inmóvil totalmente.

Reconozco las voces de Mena y Suárez por su acento provinciano, dando gritos de dolor. Escucho también la voz del teniente Bravo dirigiéndose a Alberto Camps y a Cacho Delfino, gritándoles que declaren; ambos se niegan, lo cual motiva disparos de arma corta después no vuelvo a escuchar a Alberto ni a Cacho. Escucho, sí, más voces de dolor, que son silenciadas a medida que se suceden nuevos disparos de arma corta; ahora solo escucho las voces de nuestros carceleros, que con gran excitación comienzan a inventar una historia que justifique el cruel asesinato, aunque solo sea válida ante ellos mismos.

Escucho que se aproximan los disparos de arma corta. Es evidente que quien se halla abocado a la tarea de rematar a los heridos está cerca de mi celda; trato de fingir que estoy muerta, y entrecerrando los ojos lo veo

parado en la puerta de mi celda; es alto como de 1,80 m, de cabello castaño aunque escaso, delgado; lleva insignias de oficial de marina. Apunta a la cabeza de María Angélica y dispara, aunque esta ya estaba muerta. Luego dirige el arma hacia mí y también dispara; el proyectil penetra por mi barbilla y me destroza el maxilar derecho alojándose tras la oreja del mismo lado. Luego se aleja sin verificar el resultado de sus disparos, dando por sentado que estoy muerta.

Continúan los disparos de arma corta, hasta que se hace el silencio, solo quebrado por las idas y venidas de mucha gente; ellos llegan, nos miran; tal vez para cerciorarse si estamos ya muertos; cuando descubren algún herido parece que se tranquilizaran unos a otros, pues dicen que al desangrarse morirá; mientras, yo continuo tratando de no dar señales de vida.

A la hora llega un enfermero que constata el número de muertos y heridos; también llega una persona importante, tal vez un juez o un alto oficial, a quien le cuentan una historia inventada. Cuatro horas después llegan ambulancias, con lo cual comienzan a trasladar, de a uno, los heridos y los muertos. Cuando llego a la enfermería de la base observo la hora: son las 8:30; todo había comenzado a las 3:30. Me llevan a una sala en la enfermería, en la cual veo seis camillas en el suelo, con seis heridos; yo soy la séptima.

Dos médicos y algunos enfermeros nos miran, pero se abstienen de intervenir. Solo uno de ellos, un enfermero, animado por algo de compasión, quita sangre de mi boca; nadie atiende a los heridos, se limitan a permanecer atentos al momento en que dejen de serlo para integrar la estadística de muertos.

A pesar de la cercanía de la ciudad de Trelaw no requieren asistencia médica de allí, sino que esperan a que arriben los médicos

desde la base de Puerto Belgrano, quienes lo hacen solo a mediodía, o sea cuatro horas después de nuestra llegada a la enfermería. Los médicos recién llegados nos atienden muy bien; me operan allí mismo, surgiendo dadores de sangre entre los soldados. Recupero el conocimiento veinticuatro horas después de la operación, ya en un avión que me transporta a la base de Puerto Belgrano, donde la atención médica continúa siendo muy buena.»

La versión oficial

Hubo varias, más o menos similares, todas inverosímiles, siguiendo la misma línea del intento de fuga. La primera de esas versiones consta en el comunicado difundido el mismo día de la matanza por el Comando de la zona de emergencia, y alude a un intento de evasión iniciado durante una requisita por Mariano Pujadas, quien habría atacado por la espalda al jefe de turno, arrebatándole la pistola ametralladora que portaba. Según el parte, a esa acción le siguió un intenso tiroteo, con el saldo conocido de muertos y heridos.

De entre todos los relatos que circularon o se publicaron en las horas posteriores a la matanza, por considerarlo el *más oficial* de todos, elegimos la exposición brindada por el almirante Hermes Quijadas el sábado 26 de agosto, en nombre de la Junta de Comandantes, difundida por la cadena nacional de Radio y Televisión. Con gesto adusto y voz grave, el vocero *ad hoc* de los victimarios enfrentó las cámaras de Canal 7 y leyó el siguiente parte:

«Desde su recaptura, los diecinueve subversivos fueron alojados en los calabozos de la unidad militar, distribuyéndose a razón de dos o tres hombres o mujeres (separadamente), dada la limitación de las celdas.

La resolución de mantenerlos en jurisdicción militar respondió a la necesidad de:

Evitar reintegrarlos a la cárcel de Rawson, dada la peligrosidad de los mismos, hasta

que quedase asegurado el correcto funcionamiento del establecimiento cuyas deficiencias eran evidentes.

Facilitar la intervención del juez de la cámara federal en lo penal trasladado oportunamente desde Buenos Aires en averiguación de los hechos ocurridos en Rawson y Trelew. Esto último no se hubiera logrado de haber sido sacados de la zona.

Los terroristas permanecieron bajo estricta vigilancia con prohibición de hablar entre sí. No obstante ello, se constató que se comunicaban por medio del sistema que utilizan los sordomudos, así como también por el "Sistema Morse", a cuyo efecto golpeaban el calzado o las paredes con sus manos.

En oportunidad de ser interrogados por personal de la policía federal o de las fuerzas armadas, evidenciaron un gran entrenamiento mental, manteniendo un cerrado mutismo y una actitud desafiante.

El 21 de agosto, es decir, el día anterior al intento de evasión de la guardia, una importante cantidad de testigos de la fuga de la cárcel procedió, en presencia del juez de la cámara federal en lo penal, a reconocer a los autores de la alevosa muerte del guardiacárcel Valenzuela. Esta situación fue asimilada por los reclusos con aparente suficiencia. No obstante ello, es evidente que la presión psicológica producida por encontrarse detenidos en jurisdicción militar y el hecho de haber sido reconocidos como autores de un nuevo asesinato, gravitó en el accionar desesperado emprendido el día 22 a las 3:30 horas.

Desde el primer día, el régimen con los detenidos fue el de control periódico y a toda hora. De allí que en la madrugada se resolviera, como en otras oportunidades, sacarlos del interior de las celdas haciéndolos formar en el pasillo sobre el que convergían

las mismas.

En el extremo de salida del pasillo, donde se produce un ensanchamiento de este, y único lugar de escape, se colocó, como era norma permanentemente, a tres hombres armados con pistolas ametralladoras.

Con el objeto de realizar el control previsto para esa hora, el jefe de turno recorrió el pasillo hasta el fondo y, a su regreso, cuando llegaba al extremo de la salida del mismo, fue tomado por Pujadas del cuello al tiempo que le quitaba su arma automática. Es de hacer notar que estando Pujadas en un extremo del pasillo, al tomar contra su cuerpo al jefe de turno, prácticamente cubría tras de sí al resto de los reclusos.

Instantáneamente y con gran destreza, Pujadas, que era especialista en karate, disparó contra uno de los tres guardias, pegando su primer impacto muy próximo a la cabeza de uno de ellos.

A pesar de que los detenidos tenían un rehén, se cumplieron las claras órdenes existentes de que se tirara aún en esas circunstancias, por lo que uno de los guardias abrió fuego al tiempo que los detenidos aprovechaban el cubrimiento para avanzar sobre los guardias. A pesar de ello, Pujadas rápidamente efectuó otro disparo que tampoco dio en el blanco, dificultado por el forcejeo que mantenía el oficial para zafarse. Dicho disparo pasó muy cerca de la cadera de uno de los guardias y se incrustó en una puerta. El oficial logró zafarse de Pujadas y hacer cuerpo a tierra. La acción de las armas no se hizo esperar contra los reclusos agrupados y en tren de fuga. Cuando cesó el fuego se comprobó que trece de los detenidos estaban muertos, mientras que los seis restantes quedaban heridos.

La atención médica que se les prestó fue inmediata. Posteriormente, dos de ellos, que

por su estado era posible evacuar, fueron enviados a Bahía Blanca, mientras que el resto continuó siendo atendido en las instalaciones sanitarias de la base.

Constatada la gravedad de la detenida Berger, un médico cirujano especializado fue trasladado desde el hospital naval Puerto Belgrano a la base aeronaval Almirante Zar. Dicho profesional fue quien operó a la herida, al mismo tiempo que se le suministraban transfusiones de sangre donada por el personal militar de la base, con lo cual se la puso fuera de peligro.»

Hasta aquí la explicación oficial del gobierno militar, de la que jamás se apartó ni rectificó. En síntesis, para los que ordenaron o toleraron la matanza, se había tratado de un episodio desencadenado por la audacia de un preso –Mariano Pujadas– que puso en peligro la vida de sus compañeros. Una hipótesis inverosímil teniendo en cuenta la personalidad de Mariano –no era un individuo impulsivo ni agresivo, sino todo lo contrario– y la irracionalidad que suponía intentar una fuga en condiciones tan adversas, algo que un cuadro político-militar formado tenía en claro.

Sin embargo, no resulta casual que, de entre todos los prisioneros, eligieran a Mariano para presentarlo poco menos que como el responsable de la matanza. Más allá de su condición de karateca, funcional a la explicación inventada sobre la marcha por los militares, es indudable que el capitán Sosa le guardaba ojeriza después del diálogo mantenido entre ambos en el aeropuerto: la firmeza exhibida en todo momento por el guerrillero cordobés, demostraba que era un individuo bien plantado, un hueso duro de roer. Esta suposición queda corroborada en el testimonio de uno de los sobrevivientes, Ricardo Haidar, quien señaló que «a partir del jueves, Mariano Pujadas es maltratado especialmente. En una oportunidad el oficial Bravo lo obligó a barrer el pasillo completamente desnudo.»

Pese a que desde la cúpula del gobierno se procuró disimular el impacto que causó el trágico episodio en el seno del poder, fue evidente que la línea dura impuso condiciones y el resto debió cerrar filas para preservar la unidad de las Fuerzas Armadas. Desde el presidente Lanusse para abajo se asumió una férrea

postura corporativa; el sector que apostaba a la pacificación del país o, al menos a un nivel más bajo de violencia para facilitar la salida electoral condicionada, debió resignarse a compartir el costo público de una acción extrema, que para algunos fue ordenada por la Junta de Comandantes, en tanto que para otros fue concebida y ejecutada por la Marina sin el consenso de las otras armas. Para acallar las repercusiones de la matanza, la misma noche del 22, el gobierno sancionó la Ley 19.797 que prohibía a los medios de comunicación difundir informaciones sobre las actividades de las organizaciones guerrilleras.

Alejandro Agustín Lanusse, dedicó algunas páginas de su libro de memorias *Mi testimonio* (Laserra Editores, 1977) a «los hechos del 22 de agosto», como las encabezó. En uno de los párrafos, se esfuerza en presentar la matanza como fruto de un error y respalda enfáticamente la versión oficial:

«Así retomado el control del establecimiento penal, el general Betti no consideró que se daban en el mismo las condiciones de seguridad necesarias como para concretar el traslado de los detenidos que estaban en la base de Trelew. Pocos días después, los trágicos sucesos del 22 de agosto, ponían en evidencia que mis temores o mi apreciación sobre lo inadecuado que era mantener a los prófugos detenidos en un cuartel habían, lamentablemente, sido acertados. La versión de lo acontecido que posteriormente hiciera difundir el Gobierno Nacional, por intermedio del Almirante Quijada, fue exactamente la verdad de lo sucedido.

Acepto la cuota de responsabilidad que se me quiere asignar en los errores cometidos que arrojaran un saldo tan trágico como lo fue la muerte violenta de dieciséis personas. Rechazo, no solo en lo que me concierne, sino también por lo que corresponde a los hombres de la Armada Nacional, que protagonizaron los luctuosos sucesos, cualquier irresponsable acusación de motivaciones no confesables en los mismos.»

Lo cierto es que la masacre de Trelew quedará marcada a fuego en la historia argentina como un hecho de violencia extrema, destinado a compartir cartel en materia de crueldades con la Semana Trágica o la Patagonia Rebelde. O, más cerca en el tiempo, con los fusilamientos de José León Suárez en 1956.

El sepelio

Los cadáveres de las víctimas fueron trasladados a la Capital Federal el miércoles 23, en un avión militar que partió a las 14:45 de la base de Trelew. Los cuerpos de Eduardo Capello, María Angélica Sabelli y Ana María Villarreal de Santucho fueron velados en la sede del Partido Justicialista, en la avenida La Plata de la ciudad de Buenos Aires, mientras que el resto era despachado, en féretros prolijamente sellados y cerrados, al lugar donde residían las respectivas familias: Córdoba, Rosario, Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero.

El avión de la Fuerza Aérea que esa noche descendió en la pista de la Escuela de Aviación Militar, transportó cinco ataúdes a Córdoba: los de Mariano Pujadas, Humberto Toschi, Susana Lesgart, Miguel Ángel Polti y Carlos Astudillo. Este último siguió por tierra a Santiago del Estero, donde recibió sepultura, en tanto que el de Polti viajó al interior de la provincia, donde residía su madre. Los demás fueron entregados de inmediato a sus familias, salvo el de Toschi que fue retenido hasta las dos de la madrugada en la Seccional 9ª de Policía, de donde fue retirado por sus familiares.

El comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, general Alcides López Aufranc, prohibió que los guerrilleros muertos fueran velados en la sede de la Regional Córdoba de la CGT, ubicada en la segunda cuadra de la avenida Vélez Sarsfield, por lo que las capillas ardientes fueron instaladas en los respectivos domicilios particulares. Susana Lesgart fue velada en 24 de Septiembre 877, Humberto Toschi en avenida Caraffa 950 y Mariano Pujadas en Camino a Jesús María Km 5 y ½, en la granja San José, donde había pasado su infancia y adolescencia.

Juan Carlos Maristany, en la nota de *Página 12*, ya citada, cuenta que:

«(...) pese a la advertencia por parte del Ejército de que no se podía abrir el cajón, pues ellos daban la versión de un intento de fuga con el consecuente enfrentamiento, Pujadas padre, en un momento del velorio, hizo retirar a la gente y junto con mi padre, que también era médico, y otro médico más amigo de la familia de apellido Smith, abrieron el cajón. Yo estaba presente.»

El entonces novio de María José Pujadas asegura que:

«Mariano tenía heridas en las piernas, los brazos y muy pocas en el tórax, pero sí tenía un brutal hueco en la nuca, lo que corroboraba que había sido fusilado y muerto con un tiro de gracia disparado desde corta distancia. Todo este episodio fue brutal, y sin lugar a dudas habrá generado en los Pujadas un lógico resentimiento con los militares y la policía.»

Los avisos fúnebres aparecidos ese jueves 24 de agosto en el diario *La Voz del Interior* son escuetos. En el caso de Susana Lesgart, los avisos necrológicos fueron cuatro: de sus familiares directos, de la familia Vaca Narvaja, de los Yofre y de amigos de la occisa, entre ellos Carlos Capuano padre y el abogado Gustavo Roca. Humberto Toschi tuvo dos avisos, uno de sus familiares, entre los que se menciona a su hijito Sebastián, y otro del personal de Transportes Toschi, la empresa familiar. Un solo aviso comunicó la muerte de Mariano: el de sus padres y hermanos.

El sepelio de los guerrilleros muertos estaba previsto para las 16 horas de ese mismo día, pero, temiendo posibles movilizaciones y disturbios, los militares dieron la orden de interrumpir los velatorios antes del mediodía. La misma directiva se impartió en todas partes y dio lugar a que en Buenos Aires el ejército entrara con tanquetas y bombas de gases lacrimógenos a la sede del Partido Justicialista para desalojar a la concurrencia y sacar los ataúdes por la fuerza.

El cortejo fúnebre que acompañó los restos de Susana Lesgart arribó a las 11:30 horas al cementerio San Jerónimo, ubicado en el corazón de barrio Alberdi, donde se había apostado una fuerte guardia policial, en tanto que un helicóptero sobrevolaba permanentemente la zona.

El coche que portaba el féretro de Mariano y los pocos vehículos que lo acompañaban, entre ellos la camioneta en cuya caja viajaban los empleados de la cabaña, tomaron por avenida Japón, que casi colindaba con el establecimiento. A gran velocidad, la caravana recorrió la distancia que separaba la casa de los Pujadas del cementerio San Jerónimo. En el pórtico de la necrópolis, aguardaba un grupo de militantes que cubrió el cajón con una bandera de Montoneros y, entonando estribillos, acompañó al compañero caído hasta su última morada. Frente al nicho donde quedó depositado el ataúd, tres oradores usaron de la palabra y se cantó el Himno Nacional argentino.

Así, en medio de llantos, bronca contenida, y la presencia de algunos agentes encubiertos de los servicios de inteligencia, aquel soleado mediodía cordobés, fue sepultado Mariano Pujadas. En su familia, golpeada por la desgracia, ya nada sería igual.

Ese mismo día hubo una asamblea en el Comedor Universitario, donde varios oradores condenaron la masacre y se leyó la lista de los dieciséis fusilados. Un par de días después se convocó a otra asamblea, esta vez en la céntrica Facultad de Arquitectura, que congregó a centenares de estudiantes que colmaron el Aula Magna. En medio del desarrollo del acto, la policía rodeó la manzana, bloqueó la única puerta de ingreso y entró a bastonazos y armas en mano, deteniendo a la mayoría de los manifestantes que en ese edificio estrecho, convertido en una ratonera, no tenían por donde escapar. Fueron llevados al Cabildo, donde funcionaba la Jefatura de Policía. Allí fueron fichados y se le tomaron las huellas digitales antes de ser puestos en libertad.

Pasada la tragedia, los Pujadas siguieron con sus vidas lo mejor que pudieron, acosados por la represión y estigmatizados como *subversivos*. Según comenta Maristany en el reportaje de *Página 12* ya citado:

«Así, las cosas se fueron poniendo cada vez más difíciles, los padres de Mariano estaban profundamente amargados, José

María empezó a militar en la Juventud Peronista y María José terminó el secundario y entró en la universidad y allí se enroló en la JP. Ese fue el momento en que cortamos nuestro noviazgo. Ya mucha gente que no conocía ni la familia ni el entorno hablaba de los Pujadas como si fueran dirigentes montoneros, pero eso no era cierto. Ese chisme descabellado, que corrió de boca en boca y hasta el día de hoy se mantiene en algunos rincones de esta sociedad, más la locura de un grupo de asesinos, desembocó en una de las matanzas más brutales que tuvimos en Córdoba.»

Trelew dejó una huella dolorosa, imposible de borrar. Tomás Eloy Martínez afirma que:

«Las inútiles muertes de Trelew se convirtieron en una semilla de odio. En los dos años que siguieron, no pasó semana alguna sin que alguien sucumbiera por haber sido ejecutor, juez, abogado, sobreviviente o defensor de la matanza. La destrucción de la Argentina empezó entonces, en aquella madrugada aciaga de 1972, y fue sucia, sorda, canallesca, como una pesadilla de fin del mundo.»

Hay poco para agregar, como no sea subrayar que Trelew fue el episodio más sangriento, el pico más alto de violencia del régimen de facto que padeció Argentina entre 1966 y 1973. Hubo muchas muertes, incluso algunas desapariciones de personas en ese período en que corrió mucha sangre, pero el rostro anticipado del terrorismo de Estado, el que conoceríamos en toda su inconmensurable brutalidad algunos años más tarde, fue el que asomó aquel fatídico 22 de agosto de 1972, allá, en la remota Patagonia.

Cuarenta años después, el juicio

El lunes 7 de mayo de 2012 comenzó en Rawson el proceso contra cinco exjefes de la Marina imputados por los asesinatos cometidos en 1972. Ese día, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia puso en marcha las audiencias públicas en el marco de la causa caratulada: *Sosa, Luis Emilio y otros sobre privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidio agravado*.

Según consta en el acta de elevación a juicio, el 22 de agosto de 1972 a la madrugada, aproximadamente entre las 2:30 y 3:30; Sosa, Bravo, Del Real y un cuarto oficial ya fallecido, de apellido Herrera, se presentaron en el lugar de detención, el área de calabozos que se hallaba en el edificio de acceso a la base Almirante Zar y donde en ese momento hacía guardia Marandino. A continuación, los marinos ordenaron a los detenidos que doblaran sus mantas y sacaran los colchones y los dejaran en el extremo del pasillo por donde se ingresaba a dicho sector, luego de lo cual se los hizo formar en fila, instantes antes de abrir fuego contra los prisioneros. Como consecuencia de la lluvia de disparos o rematados con tiros de gracia, fallecieron ese día dieciséis detenidos.

Los jefes militares que fueron imputados bajo el cargo de «homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser ejecutado con el concurso premeditado de dos o más personas (16 hechos) y homicidio doblemente agravado por alevosía en el grado de tentativa (3 hechos) todos en concurso real» son: Luis Emilio Sosa; Rubén Norberto Paccagnini; Horacio Alberto Mayorga; Carlos Marandino; Emilio Del Real y Jorge Bautista. También fue imputado Roberto Bravo, quien vive en Miami, pero la Justicia estadounidense negó su extradición a la Argentina en el año 2008. Tampoco estuvo presente en las audiencias Horacio Mayorga, quien, según los peritos forenses de la Corte Suprema de Justicia, no estaba en condiciones físicas de estar presente en las audiencias.

La responsabilidad de cada uno de ellos, según consta en la causa, es la siguiente:

«-Luis Emilio Sosa: El excapitán de la Marina es considerado el principal responsable del fusilamiento de los prisioneros que estaban bajo su responsabilidad el 22 de agosto de 1972.

-Rubén Norberto Paccagnini: En 1972 era el

jefe de la Base Almirante Zar. Se lo considera participe necesario por haber transmitido la orden de ejecutar a los guerrilleros cautivos.

–Emilio Jorge Del Real: acusado de formar parte del grupo que disparó sus armas contra los prisioneros indefensos.

–Carlos Amadeo Marandino: Acusado de haber participado en los fusilamientos.

–Jorge Enrique Bautista: Se lo acusa de encubrimiento; en su carácter de juez militar realizó un sumario cuya conclusión fue que se trató de un intento de fuga.

–Horacio A. Mayorga: Era el superior de Paccagnini, a quien le transmitió la orden impartida por el entonces presidente de facto, Agustín Lanusse.

–Roberto Bravo: Acusado de disparar contra los presos al igual que Sosa, Marandino y Del Real.»

Durante las audiencias desfilaron numerosos testigos. Uno de los testimonios más escalofriantes fue el de Miguel Marileo, el empleado de la funeraria que preparó los cadáveres de los fusilados. «Los habían dejado en el suelo, en dos hileras. Cada uno tenía al costado de su cabeza una bolsita con las balas que los habían matado. Fue una barbaridad», afirma en el reportaje publicado por *Página 12* el 13 de mayo de 2012.

El entonces joven empleado de la pompa fúnebre, relató que el 22 de agosto, poco antes de la medianoche, efectivos de la Marina lo fueron a buscar a su domicilio. Rememoró que ese día, «aparecieron en el local cerca de las cuatro de la tarde. Pusieron un camión de culata, pidieron 16 cajones de madera con caja de metal interna, los cargaron, pagaron y se fueron.»

A partir de ese instante supo que en algún momento vendrían a buscarlo para completar la faena. Así fue, y al llegar a la base Almirante Zar se encontró con las dos hileras de ataúdes abiertos y vacíos extendidas en la sala de entrada del edificio central. La valija con herramientas y la garrafa para soldar que el dueño de la funeraria bajó del camión que los trasladó, confirmaron sus temores. Enseguida los condujeron donde se encontraban los

ocho cuerpos, desnudos, ensangrentados y mutilados porque «en enfermería los habían abierto para sacarles las balas», dijo.

Y enseguida, la parte más desgarradora del relato:

«La verdad... sentí una gran impotencia. Caminé entre todos. Los miré, los revisé. Vi que Pujadas era quien había recibido más balazos, porque estaba abierto de acá (se toca la garganta) hasta el ombligo y tenía como diez impactos. Vi que la mujer de Santucho tenía tres tiros en la panza donde cargaba un bebé. Estaría de cinco meses. Y con Sabelli me di cuenta de que los habían rematado sin más, indefensos. Una chica de pelo bien largo, me acuerdo. No tenía impactos en el cuerpo. No le veía orificios. Entonces le pasé la mano por detrás de la cabeza para levantarla y llevarla a su cajón. En la nuca tenía el hueco de la bala... Uno solo.»

Una vez concluido el ingrato trabajo, lo regresaron a su hogar, dejándole en claro que por su propia seguridad no debía contar nada de lo que había visto.

Un testimonio clave fue el del teniente retirado Agustín Magallanes, quien fue testigo de los hechos ocurridos en la madrugada del 22 de agosto en la base Almirante Zar y afirmó ante el tribunal que no creía en la versión oficial ni en lo declarado en el sumario por Sosa y los otros autores materiales de la matanza, sustento de la argumentación oficial.

También prestaron testimonio familiares de las víctimas, entre ellos Alicia, la viuda de Rubén Bonet, testigo y querellante en la causa, quien declaró durante cinco horas, reconstruyendo la historia y aportando pruebas, como los dos informes de la autopsia practicada a su marido, que demuestran que fue rematado nueve horas después de sufrir las primeras heridas de ráfagas de ametralladora. Para corroborar sus dichos, Alicia Bonet ofreció al tribunal la exhumación del cuerpo del guerrillero que se halla sepultado en el cementerio de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires. Afirmó que entonces quedará demostrado «que tiene una entrada de bala enorme que le rompió el cráneo. Es un tiro de gracia y con eso, ya no se puede pedir más testimonio.» También, a su

turno, declaró Hilda Bonardi de Toschi, compañera de uno de los fusilados, y Eduardo Toschi, hermano de la víctima.

De la familia Pujadas, la única en declarar fue Ana María Bigi, pareja de José María Pujadas al tiempo de los fusilamientos. Manifestó que «el cadáver de Mariano tenía un rostro en paz, sereno. Pero tenía 16 tiros, estaba desnudo y lo habían cosido como matambre, como si hubiese habido una autopsia.»

Durante el juicio fueron sacados a la luz documentos oficiales ocultos hasta el momento que prueban que la Armada trasladó al exterior a la mayoría de quienes participaron en los asesinatos e hizo todo lo posible para que no declararan ante tribunales civiles. También se conocieron actuaciones vinculadas a los juicios iniciados por las familias de algunos de los presos fusilados inmediatamente después de los hechos, y se escuchó un audio con las voces de los tres sobrevivientes, grabadas en una cinta que el sonidista atesoró durante cuarenta años, esperando la oportunidad de reproducirla.

Los defensores de los acusados coincidieron en negar la lesa humanidad atribuida a los delitos juzgados y su inscripción en un plan sistemático de terrorismo de Estado, para pedir la prescripción y, en algunos casos, la amnistía de sus defendidos.

La sentencia del tribunal, conocida el 15 de octubre de 2012, absolvió a Paccagnini y Bautista, en tanto que dictó condenas de cadena perpetua en contra de Sosa, Del Real y Marandino, coautores responsables del homicidio con alevosía de 16 presos políticos y tres tentativas; estos, sin embargo, siguieron en libertad hasta que la sentencia quede firme, una vez que se resuelvan los recursos de casación interpuestos por las partes. Los representantes legales de las víctimas impugnaron las absoluciones dictadas por el tribunal, en tanto que los abogados de los tres represores apelaron las condenas recibidas por los mismos. La Cámara Nacional de Casación Penal deberá analizar y expedirse con relación a los recursos presentados.

Más allá de la prosecución del trámite judicial, el punto más importante, desde la perspectiva de la verdad histórica, es que el fallo tipifica los crímenes de Trelew como delitos de lesa humanidad y echa por tierra la versión del intento de fuga.

«En esta unidad de la Armada Argentina se cometieron crímenes de lesa humanidad. El 22 de agosto de 1972 se perpetró la Masacre de Trelew. Memoria. Verdad. Justicia», reza el enorme

cartel emplazado junto al mojón que señala el kilómetro 1453 de la ruta 3, a metros del ingreso a la base Almirante Zar. El viejo Aeropuerto de la ciudad, hoy desactivado como tal, fue transformado en Centro Cultural por la Memoria.

SEGUNDA PARTE
METAMORFOSIS

Metamorfosis

El Diccionario de la Real Academia Española ofrece distintas acepciones del vocablo metamorfosis», todas aplicables –simbólicamente– a lo que pasó en la Argentina entre 1972 y 1976. «Transformación de algo en otra cosa», es una de esas acepciones que alude al cambio de un estado a otro, el pasaje de una fase a una superior, como parte de un proceso evolutivo. Eso fue lo que ocurrió realmente en ese período histórico en que la democracia reconquistada en 1973 mutó en terrorismo de Estado y, sin escalas ni intervalos, en la más sangrienta dictadura.

A diferencia de lo que ocurre en la naturaleza, donde la metamorfosis suele ser un proceso virtuoso en la evolución de los seres vivientes, capaz de mejorar la especie o, por ejemplo, transformar una larva en mariposa, en el caso argentino –si se admite el recurso metafórico– fue exactamente a la inversa: la mariposa multicolor que aleteaba en la primavera del '73 se transformó en un horrible gusano en el invierno que sobrevino un par de años después. Un travestismo explicable solamente a partir de las antinomias existentes y la resolución violenta de las contradicciones en el seno del peronismo.

Lo que viene a continuación es una reseña que procura identificar las distintas fases de ese fenómeno, siguiendo el rastro de la metamorfosis que devino en tragedia.

1972

Hacia fines de 1972, la dictadura militar que había usurpado el poder en 1966 estaba en pleno retroceso. Hacía rato que se había acabado el estado de gracia inicial consentido por una parte importante de la sociedad y, para entonces, la autotitulada Revolución

Argentina, que transitaba su séptimo año, presentaba claros síntomas de agotamiento, vapuleada por levantamientos populares, luchas sindicales y la actividad persistente de las organizaciones armadas surgidas en los años previos.

En el mes de agosto de aquel año, el régimen, preso de la impotencia por frenar el desgaste, había mostrado su costado más cruel asesinando a dieciséis prisioneros indefensos en una base aeronaval de Trelew. Ese episodio brutal concitó el repudio de gran parte de la sociedad que, lejos de justificar la matanza, tuvo gestos de solidaridad hacia las víctimas y sus familiares, ensanchando aún más la brecha entre el pueblo argentino y las Fuerzas Armadas convertidas en brazo armado del antipueblo.

El tercer presidente de facto de ese período, el teniente general Alejandro Agustín Lanusse, a diferencia de sus dos antecesores —especialmente del primero, el obtuso teniente general Juan Carlos Onganía— era un militar dotado de cierta sagacidad política, o al menos de olfato más fino que sus rudimentarios camaradas. Lanusse, desde el momento en que reemplazó en la presidencia al insulso Roberto Marcelo Levingston —segundo de la serie— se abocó a encontrar una salida para que las Fuerzas Armadas pudieran escapar de la encerrona en que se hallaban, políticamente aisladas y militarmente hostigadas por las organizaciones guerrilleras que, pese a los duros golpes recibidos y la sangría de cuadros, seguían operando y ganando espacio en la sociedad, sobre todo en las capas medias y juveniles seducidas por el heroísmo y la intransigencia demostrada por esos jóvenes que enfrentaban a la dictadura con armas en la mano, arriesgando sus vidas. Parecía que la semilla guevarista al fin había germinado en la Argentina, tal como lo había soñado el Che.

Contrariamente a los deseos y propósitos de quienes gobernaban el país, la cruda realidad indicaba que lo que en algún momento se pensó que duraría muchos años estaba próximo a agotarse, a caer bajo su propio peso agobiado por el fracaso. Aquella grandilocuente declaración inicial que desnudaba sin ambages el propósito señalado: «la Revolución Argentina tiene objetivos, pero no plazos», había perdido sentido y sonaba más hueca que nunca, tanto o más que el ensayo corporativista de Onganía que ni siquiera llegó a concretarse, consumido por una realidad implacable que desbordó las fantasías de los gestores del golpe de Estado. Era público y notorio que la Revolución Argentina

había sido un completo fracaso en el plano económico y social, y amenazaba a serlo, además, en el político, con imprevisibles consecuencias para sus mentores.

En *Mi testimonio*, ya citado, Lanusse rememora la compleja situación en que se encontraba la dictadura en aquellos momentos y la urgencia por hallar una salida política:

«¿Qué otra alternativa, por lo demás, presentaba la realidad? a) No podía seguirse con un interinato administrativista y ordenancista, políticamente aséptico, como lo entendían hasta los propios discípulos de Onganía, y el gobierno necesitaba tener un signo, b) No podía superarse la asexualidad tecnocrática con ensayos corporativistas impotables, c) No podía asumirse, sin producir escisiones en las Fuerzas Armadas, la asociación ideológica con Chile, Perú y Bolivia que preconizaba Oscar Alende, d) No podía recrearse la antinomia Revolución Libertadora versus Peronismo. Solo podía intentarse el Acuerdo (así creía firmemente yo).»

Tan apremiada como desgastada, la cúpula militar, siguiendo la lógica esgrimida por Lanusse, bendijo la salida de emergencia propuesta por el hombre fuerte del momento, bajo el pomposo título de Gran Acuerdo Nacional (GAN). Lo que aparentaba ser una convocatoria amplia y generosa era, en realidad, un plan amañado, un traje a medida de las necesidades y urgencias de los militares para garantizar que, al final del camino, el gobierno formal pasara a manos de civiles confiables en tanto que, como en el pasado, las Fuerzas Armadas se reservaban el rol de monitores y supremos custodios del orden occidental y cristiano.

Por cierto, ni Perón, ni el ala dura de su movimiento, reunían los requisitos exigidos para desempeñar el papel de gobernantes pasivos y funcionales a los planes militares, lo que obligaba a posar la mirada oficial en las fuerzas políticas moderadas, cuanto más antiperonistas y comprometidas con el régimen mejor, aun cuando no contaran con la potencialidad electoral suficiente para frenar al justicialismo en las urnas. Ya se vería, llegado el momento, de qué modo burlar una vez más la voluntad popular.

A raíz de esa indocilidad genética del peronismo, no en vano, hasta allí se había optado por la proscripción lisa y llana, un remedio antidemocrático que, con los resultados a la vista, no había servido de gran cosa. Todo un intrínquilis que los dictadores de turno, hostigados por los cuatro costados, no atinaban a resolver. Lanusse, que no quería repetir fracasos anteriores, colocó a Arturo Mor Roig, un veterano político radical conocedor de los pliegues de la política criolla, al frente del Ministerio del Interior, con la misión de tejer esa compleja trama que excedía la limitada capacidad y escaso tacto de los militares para las cuestiones políticas.

La mayor dificultad para los mandos castrenses estribaba en que el peronismo, tras la pausa impuesta por su dirigencia negociadora, parecía haber vuelto súbitamente a la vida, motorizado por una juventud politizada y activa que no reconocía jefaturas burocráticas, repudiaba las tácticas adormecedoras, hablaba sin tapujos de patria socialista y agitaba como bandera innegociable el regreso de Perón al país. Y por si todo eso fuera poco, reivindicaba la vía armada y la actividad de los grupos guerrilleros, reconociéndolos como protagonistas de la fase superior de la lucha. La contrapartida de ese fenómeno fuera de control era la pérdida de espacios sufrida por los demás partidos tradicionales tras seis años de congelamiento forzoso y envejecimiento equivalente de las caras de siempre, los mismos que habían sido parte del drama argentino desde 1955 en adelante.

El fracaso de sus opositores mantenía vigente a Perón. El líder justicialista residía desde hacía más de una década en Madrid, en compañía de su tercera esposa, María Estela Martínez, más conocida por su apodo: *Isabelita*. Perón había recalado en la España franquista tras un peregrinaje que lo llevó por varios países sudamericanos y centroamericanos después de la caída de su gobierno en 1955, entre ellos Panamá, donde conoció a Isabelita, con quien se casó a poco de llegar a España para formalizar la situación y no irritar al *Generalísimo*, su nuevo anfitrión. Desde su casa del coqueto barrio de Puerta de Hierro, Perón seguía con atención la evolución de la situación en la Argentina, a la que añoraba volver algún día. Se informaba, recibía visitantes, contestaba cartas y mimaba a sus tres caniches con un ojo puesto en su tierra natal. La gama de visitantes era amplia: durante esos años, se entrevistó al menos dos veces con Ernesto Che Guevara, la segunda poco

antes de que el famoso guerrillero partiera hacia Bolivia, donde halló la muerte.

Enclaustrado en su bunker madrileño y vigilado por los agentes de Franco, Perón se las arreglaba para seguir manejando los hilos del Movimiento Peronista que, pese a los sucesivos intentos por dividirlo o domesticarlo, se mantenía fiel a su conducción estratégica y sordo a los cantos de sirena de las variantes neoperonistas que asomaban cada tanto.

Los reiterados ensayos de cooptación de dirigentes propensos a transar con el régimen de turno no habían dado los resultados esperados, lo mismo que la agotada receta basada en la proscripción electoral: si no se le permitía participar en las elecciones, el peronismo se las ingeniaba para arruinar los planes de sus adversarios, ora votando en blanco, ora apoyando al candidato de otro partido que Perón señalara con su dedo. Así fue en 1958 y 1963. Y si se lo dejaba participar, ganaba, como había ocurrido en 1962 en la provincia de Buenos Aires y otros distritos, obligando al régimen a declarar nulas esas elecciones y volver la cuenta a cero. No en vano, John William Cooke caracterizó al peronismo como «el hecho maldito del país burgués» precisamente por su inigualable capacidad para aguar fiestas ajenas.

Del «desensillar hasta que aclare», la cauta postura inicial adoptada tras el golpe de 1966 hasta ver qué pasaba, Perón, consumado analista y fino lector de la realidad, endureció paulatinamente su discurso y viró hacia la confrontación abierta con los militares en la misma dosis que estos cosechaban desgaste y fracasos. Lo que causaba mayor irritación a la cúpula castrense era que apoyara de manera explícita el accionar de los grupos guerrilleros, las «formaciones especiales», como las llamaba, simulando o dejando entrever que estas actuaban como engranajes tácticos de una estrategia diseñada y conducida por él. Perón sabía que ese juego fastidiaba a sus excamaradas y lo hacía cada vez que podía.

Al cabo de cinco años de dictadura, en 1971, Perón consideró suficiente el margen otorgado a las Fuerzas Armadas y comenzó a preparar el terreno para el final de la partida que se aproximaba: además de dar cabida en las estructuras movimientistas a la juventud —el nuevo e impetuoso actor que día a día ocupaba mayores espacios en desmedro de la dirigencia tradicional—, reemplazó a Jorge Daniel Paladino, un dirigente de perfil negociador, por

Héctor J. Cámpora, un cuadro histórico de probada incondicionalidad y lealtad, requisitos esenciales para transitar una etapa que no admitiría medias tintas: o se estaba con el jefe peronista o se estaba con Lanusse. La designación de Cámpora como delegado personal cayó bien en el seno de la Juventud Peronista, que en el acto lo bautizó *Tío*, como parte de un juego imaginario y nada inocente en el que los jóvenes se asumían como sobrinos del sonriente odontólogo de San Andrés de Giles ungido por el jefe máximo para representarlo en la Argentina.

El relato apropiado a las circunstancias lo proveía *Actualización política y doctrinaria para la toma del poder*, un reportaje fílmico dirigido por los cineastas militantes Fernando Solanas y Octavio Getino, en el que Perón monologa frente a la cámara durante 134 minutos acerca de la realidad mundial y local, incorporando al cuerpo doctrinario peronista conceptos en boga como «socialismo nacional» y «guerra revolucionaria», además de destacar el papel protagónico de la juventud en la etapa y plantear sin rodeos el «trasvasamiento generacional» como la vía recomendable para renovar la dirigencia del Movimiento e insuflar aires de cambio a las viejas estructuras.

En el film, que se rodó entre junio y octubre de 1971 en su residencia madrileña, Perón define como guerra integral:

«(...) la que se hace por todos los medios, en todo momento y en todo lugar. Es decir, cada uno de los que forman esa fuerza popular que está en lucha, desde la mañana a la noche, hace en cada lugar y en cada momento su acción de guerra, su lucha. Es decir, buscando dañar siempre al enemigo cualquiera sea la situación en que él se encuentre. Esto da lugar a que se empleen todos los sistemas y métodos para realizar esa lucha.»

Más que la concepción vietnamita de guerra popular esbozada por el general Vo Nguyen Giap en *Guerra del pueblo, ejército del pueblo*, Perón recurría una vez más a la clásica concepción clauswitziana, mamada en sus años de academia militar y Escuela Superior de Guerra, que definía a la guerra como la continuidad de la política por otros medios, a la vez que actualizaba el viejo

concepto de «sabotaje», puesto en práctica durante los años de la Resistencia.

Para endulzar el oído de los jóvenes y motivarlos a que siguieran metiendo presión a propios y extraños como lo venían haciendo, Perón desenfunda el recambio generacional:

«(...) hay una nueva generación que está esperando y, por eso, yo vengo hablando de la necesidad del trasvasamiento generacional, junto con la organización debe venir un cambio, porque si no, el Movimiento envejecerá y terminará por morir como todo lo viejo.»

El documento fílmico, pese a que no fue estrenado en el circuito comercial regulado por la censura, tuvo una amplia difusión entre la militancia y las bases peronistas, como a su tiempo la había tenido *La hora de los hornos*, de los mismos cineastas, integrantes del grupo *Cine Liberación*.

EL GAN

Lanusse era consciente de que cualquier salida política que pudiera sobre el tapete debía contar, si no con el apoyo explícito de Perón —algo imposible de conseguir tal como se presentaban las cosas—, al menos con un guiño, una venia tácita, para que el intento, cualquiera fuere, no abortara antes de nacer. Lanusse era tan antiperonista como sus camaradas; lo mismo que el resto, estaba dispuesto a hacer lo que fuere para impedir que el peronismo volviese al poder. Sin embargo, hombre pragmático al fin, pese a haber sufrido cárcel durante el gobierno peronista, tenía en claro que, con Perón en contra, cualquier plan por más ingenioso que fuere estaba condenado de antemano al fracaso.

Justamente, para distender la relación con el jefe justicialista y ayudar a que las incipientes negociaciones llegaran a buen puerto, Lanusse había devuelto el cadáver de Evita, celosamente ocultado durante más de tres lustros en un cementerio de Milán bajo un nombre falso. Pese a ese y otros gestos amigables que escandalizaban al ala gorila de los militares —como la promesa de liqui-

darle las pensiones adeudadas desde 1955 o aliviar ciertas causas judiciales que aún subsistían y podían causarle inconvenientes si algún día regresaba al país—, Perón se mantuvo intransigente y no facilitó los planes de la dictadura. Por el contrario, se mostró más indómito e intratable que nunca, alentando cada vez que podía a la *juventud maravillosa*, convertida en ariete de la lucha contra el régimen, a que redoblara su accionar sin dar tregua al enemigo. Y ponderando a las *formaciones especiales*.

Para fortalecer el frente interno y consolidar su conducción, a fines de 1971, Perón volvió a *mover la dama*, como lo había hecho en 1965 para desarmar las pretensiones autonómicas de Augusto Vandor, el líder sindical con ínfulas de sucesor. Esta vez envió a Isabel a la Argentina, acompañada por José López Rega, su ayudante de cámara, para que su tercera esposa hiciera de portavoz de la consigna «Unidad, Solidaridad y Organización», un remedo de las tres virtudes teologales acuñado para la ocasión con el fin de insuflar mística y amalgamar al Movimiento Nacional Justicialista de cara a la etapa crucial que se avecinaba. El siguiente paso fue hacerse proclamar candidato a la presidencia de la Nación, un mensaje simbólico y desafiante a la vez, que fastidió a Lanusse y sus camaradas, ilusionados con un paso al costado de Perón que facilitara las cosas.

Las organizaciones armadas, entretanto, seguían operando a gran escala. En un mismo día fueron pasados por las armas el máximo ejecutivo de FIAT en el país, Oberdan Sallustro, y el comandante del II Cuerpo de Ejército, general Juan Carlos Sánchez. En el primer caso, la autoría corrió por cuenta del ERP, en tanto que el segundo hecho fue obra de las FAR. El embajador argentino en España Jorge Rojas Silveyra, en nombre de Lanusse, solicitó a Perón, que condenara los atentados. Perón no lo hizo y, como otras veces, guardó silencio.

Lanusse, acicateado por las movidas provocadoras y los silencios cómplices de Perón, urdió una nueva jugada. Para obligarlo a negociar en el marco del GAN y, por esa vía, despegarlo de los sectores más duros del movimiento, concibió una cláusula irrisoria según la cual todo aquel que quisiese presentarse como candidato en las elecciones presidenciales convocadas para el año siguiente debía fijar residencia en el país antes del 25 de agosto, una fecha tan arbitraria como el espíritu de la norma. El objetivo buscado era acorralar a Perón, quitándole la iniciativa política y

despojándolo del manejo de los tiempos como venía sucediendo hasta ese momento.

Perón quedó entonces frente a una encrucijada: convalidar un nuevo antojo de los militares regresando cuando ellos quisieran y sufrir el consiguiente desgaste de su imagen pública o sortear la celada y seguir adelante con los planes trazados y manejando sus propios tiempos. Naturalmente, el jefe peronista optó por lo segundo y el plazo se venció sin que Perón lo acatara.

Lanusse creyó entonces logrado su propósito y proclamó que Perón no volvía «porque no le daba el cuero», un alarde condimentado con retórica criolla para dejar mal parado a su antagonista, como si fuera un cobarde. A esa altura, océano de por medio, Lanusse y Perón movían sus piezas como dos avezados jugadores de ajedrez, procurando sacarse ventajas uno a otro en una pulseada que determinaría el destino político del país y, por supuesto, el de cada uno de ellos. Perón sabía muy bien que era su última partida y no estaba dispuesto a perderla. El telón de fondo de la pulseada era una Argentina convulsionada y a la deriva.

El descongelamiento de la actividad política impulsado por el ministro Mor Roig había devuelto a la vida a los partidos tradicionales, cuyos líderes, temerosos de quedar al margen, comenzaron a mover sus propias fichas con vistas a las próximas elecciones. Veteranos de mil batallas, todos sabían que, inexorablemente, el peronismo canalizaría el descontento popular hacia las Fuerzas Armadas y que los militares harían lo imposible para evitarlo, y que por eso mismo no habría lugar para terceros en discordia: había que estar de un lado o del otro. Por eso mismo, Lanusse y Perón, cada uno a su manera, procuraban inclinar el resto del arco político a su favor; el primero, esforzándose por aislar al peronismo de las demás fuerzas políticas y vertebrar a la vez un andamiaje civil funcional a las pretensiones del gobierno militar. Perón, por su parte, dedicado a desmontar pacientemente una a una esas operaciones; obteniendo a su vez éxitos rotundos como *La Hora del Pueblo*, el pacto democrático tejido con la UCR balbinista para reclamar elecciones limpias y sin condicionamientos.

Jorge Bernetti escribe al respecto, en *El peronismo de la victoria* (Legasa, 1983):

«*La Hora* constituyó, fundamentalmente, la primera expresión pública oficial de recon-

ciliación entre el peronismo y el radicalismo, luego de 25 años de duros enfrentamientos. Este acercamiento no supuso, como los comicios posteriores lo probaron, una alianza electoral. Significó una modificación del corte político de la realidad argentina, ante el avance decidido de la penetración económica, ideológica y militar del imperialismo en la vida nacional. El radicalismo viraba de las posiciones sustentadas durante largos años frente al peronismo.»

Paralelamente, Perón impulsaría por otra vía la constitución del Frente Cívico de Liberación Nacional (FRECILINA), un acuerdo programático con el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), aun cuando la fuerza conducida por Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio no despertaba entusiasmo entre los peronistas, sino más bien desconfianza, a raíz de los desencuentros del pasado y las supuestas «traiciones» de Frondizi a la hora de cumplir ciertas promesas a cambio del apoyo electoral recibido.

Así las cosas, a muchos les resultaba increíble que después de 17 años el peronismo fuese capaz de desentumecer su musculatura, recuperar la lozanía perdida y, casi sin proponérselo, volver a ocupar el centro de la escena, como si todo ese tiempo hubiese transcurrido en vano. «No es que nosotros fuimos muy buenos, lo que pasa es que los que vinieron después fueron muy malos», solía comentar un Perón risueño en las tertulias de Puerta de Hierro frente a ocasionales visitantes argentinos, mientras acariciaba a Canela, su caniche favorito. Y no le faltaba razón. Como fuere, lo cierto es que la torpeza de sus adversarios y el ímpetu de las nuevas generaciones habían obrado el milagro, y allí estaba el peronismo, vivito y coleando, para desconuelo de sus enemigos y desconcierto de la izquierda tradicional que lo había dado por muerto.

Las huestes juveniles, soliviantadas por el discurso duro y flamígero del Perón de esos días, enarbolaban la consigna «Luche y vuelve» con el entusiasmo propio de los años mozos, en tanto que las organizaciones armadas seguían golpeando aquí y allá, jaqueando a un régimen tambaleante que perdía popularidad día tras día y dejaba jirones en el camino.



Mariano Pujadas (centro) durante la conferencia de prensa en aeropuerto de Trelew.



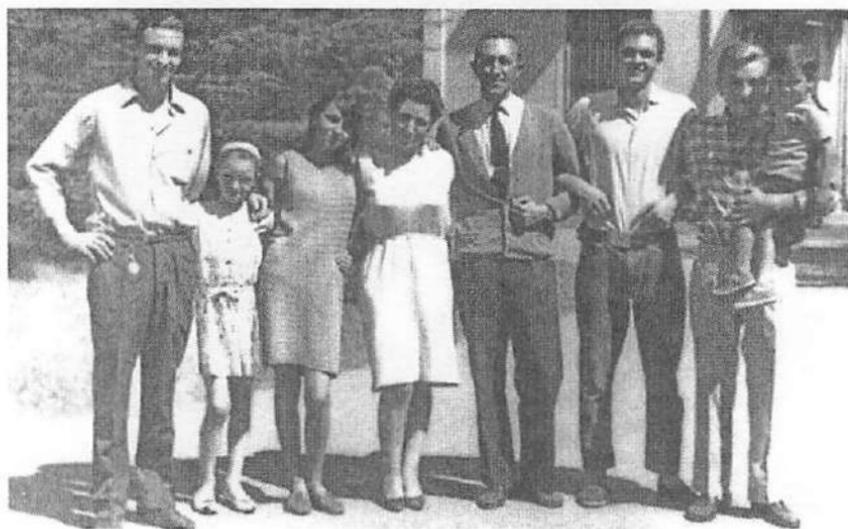
Mariano Pujadas (último de la derecha) en aeropuerto de Trelew tras la rendición.



José María Pujadas Valls y Josefa Badell Suriol en Barcelona,
antes de emigrar a la Argentina.



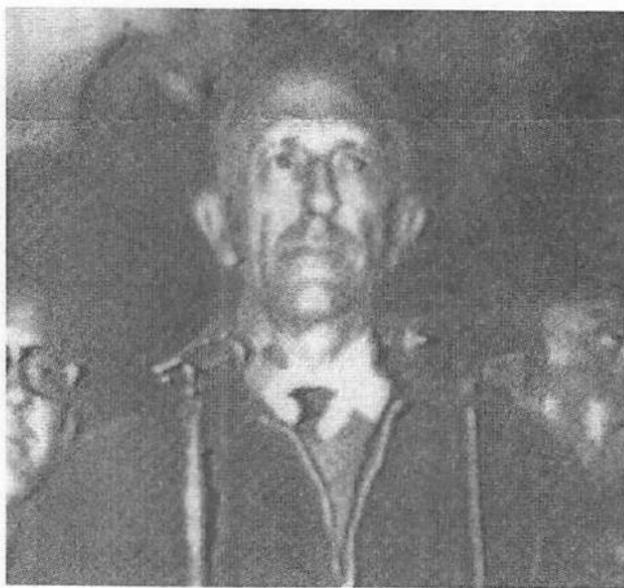
Fotografía familiar que Mariano conservó en prisión.



Fotografía familiar en la cabaña San José,
en la que posa la familia completa.



José María Pujadas (hijo).



José María Pujadas (padre).



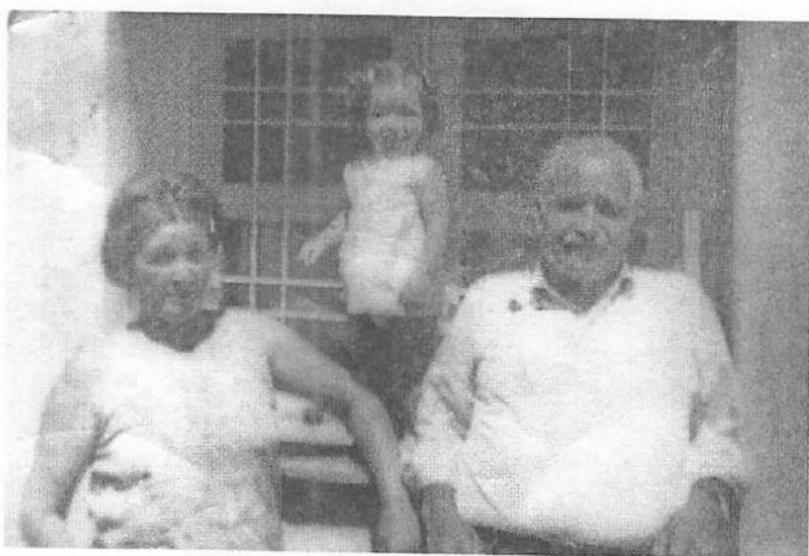
Mirta Bustos, antes de la tragedia.



Mirta Bustos después de la tragedia.



La pequeña María Eugenia con su papá, antes de la tragedia.



María Eugenia con sus abuelos maternos, después de la tragedia.

1er CUERPO

ARCHIVADO _____ LEGAJOS N° _____ FOLIOS _____ N° ORDEN ARCHIVO _____

EXPEDIENTE N° 49-5-75



JUZGADO FEDERAL
DE
1ª INSTANCIA N° 1 DE CORDOBA

Provincia de CORDOBA

SECRETARIA EN LO CRIMINAL

SUMARIO con motivo del hallazgo de los
cadáveres de: José María PUJADAS VALES,
JOSÉ BARRIL de PUJADAS, José María PUJA-
DAS BARRIL y María Isabel Rosa PUJADAS BA-
DELL

Iniciado 27 de Octubre de 1975.

JUEZ

Secretaria

JUEZ

Antonio Ledesma

FISCAL

ALI FERRALI

Sección

SECRETARIO

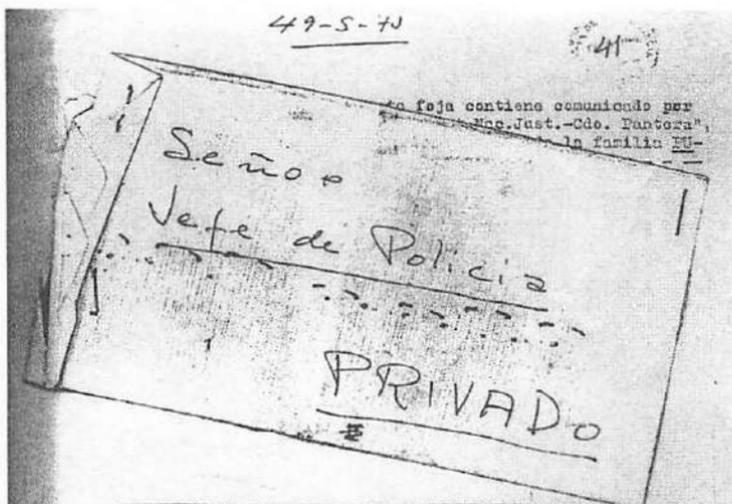
J. Carlos Oscar Rivarola

Secretaria N°

Carátula del expediente judicial original.

49-5-70

41



Córdoba de la Nueva Andalucía 18/8/75 AG



PARTE DE GUERRA N° 1

- 1°) Este Comando el día 14/8/75, siendo las 03,00hs procedió al secuestro y posterior ejecución (05.00/hs.) del "Clan PUJADAS", que servía de apoyo logístico a la antipatria operante en nuestro país.
- 2°) Este Comando advierte al Pueblo, que no se deje engañar por las versiones de la prensa judío-sionista tendiente a confundir y desvirtuar nuestro patriótico objetivo.-
- 3°) No amenazamos, ni advertimos... EJECUTAMOS.-

¡ SANGRE Y HONOR ! ¡ VICTORIA O MUERTE !

POR ARGENTINA
VIVA LA PATRIA + VIVA PROSA



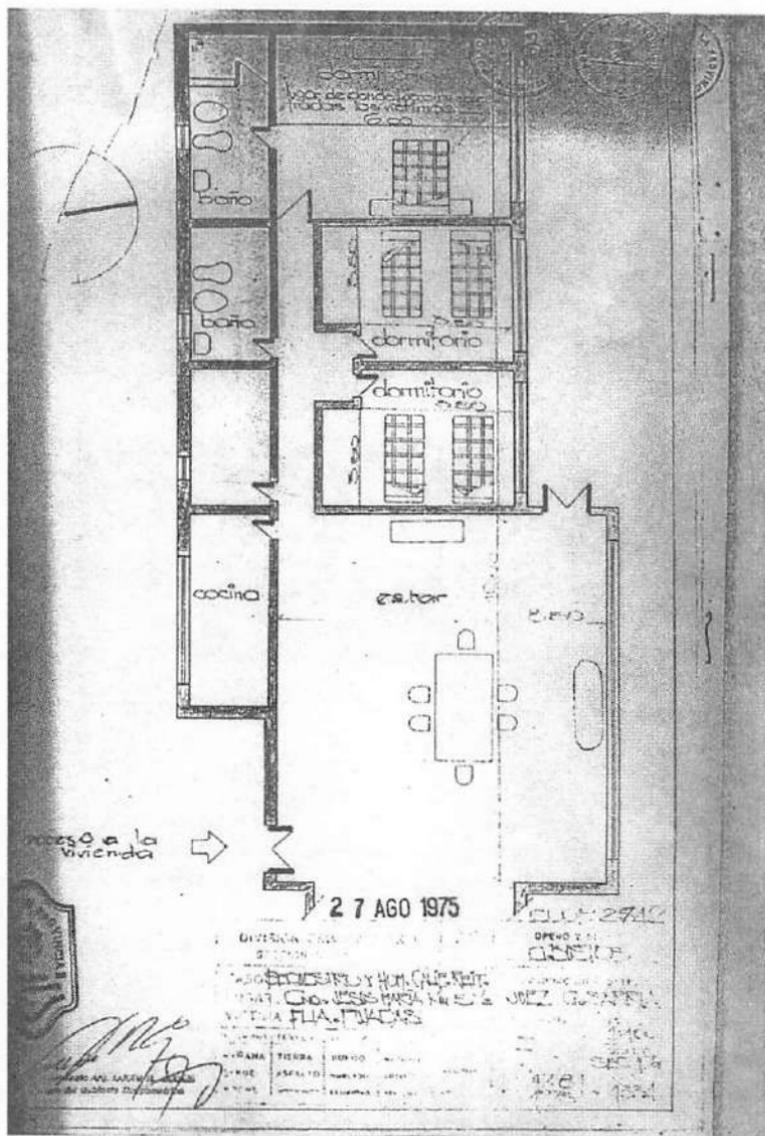
ODO. REST. NAC. JUST.

CDO. PANERA

Comunicado distribuido por los asesinos de la familia Pujadas.



Croquis de la escena del crimen según consta en expediente judicial.



Plano de la vivienda familiar de los Pujadas.



María Eugenia Pujadas, junto a su familia, a 38 años de la tragedia.



María Eugenia Pujadas junto al autor de este libro durante una audiencia del juicio por la masacre de su familia (Tribunales Federales de Córdoba).



Víctor Pujadas, sobreviviente de la tragedia.



Víctor Pujadas junto al nicho de su hermano Mariano,
en Córdoba (secuencia de *Retratos de Familia*).

La idolatría juvenil se canalizaba hacia los combatientes, capaces de dar sus vidas por una sociedad más justa. Los mártires eran infaltables en las consignas de la época: «La sangre derramada no será negociada», constituía un claro mensaje dirigido a los sectores del movimiento que soñaban con una salida transaccional; en tanto que: «Ya van a ver, ya van a ver, cuando vengamos los muertos de Trelew» o, más explícita aún: «Cinco por uno, no va a quedar ninguno», contenían una dura advertencia a los militares para que supieran que la tragedia de la base Almirante Zar no quedaría impune y que, tarde o temprano, la afrenta sería cobrada.

Luche y vuelve

Lo que siguió fue la preparación del segundo retorno; el primer intento se había registrado a fines de 1964, durante la presidencia de Arturo Illia, pero esa vez el avión en que Perón viajaba de regreso a la Argentina junto a su comitiva, por pedido expreso del gobierno radical de entonces, fue interceptado por las autoridades del Brasil y devuelto a Madrid con el principal pasajero a bordo.

Ocho años después de aquel suceso caído en el olvido, el largo exilio en tierra española estaba llegando a su fin. Antes de que finalizara ese año de 1972, Perón voló a Roma, donde se entrevistó con el primer ministro Giulio Andreotti antes de abordar el vuelo charter que lo traería de regreso a la Argentina. Tampoco esta vez había garantías de que las cosas salieran bien; la cúpula militar, hasta último momento, dudó que Perón se largara, creyendo —o prefiriendo creer— que se trataba de una bravuconada más de las tantas que el mañoso excolega solía gastar para incomodarlos. Sin embargo, cuando los servicios de inteligencia corroboraron que la cosa iba en serio y que el viaje tenía fecha cierta, entre los militares hubo ceños fruncidos y cundió la preocupación por lo que podía pasar cuando Perón pisara suelo argentino. Para apaciguar los espíritus y distender la situación, antes de embarcar, Perón proclamó que venía «como prenda de paz», asegurando que se había convertido en «un león herbívoro», algo así como una fiera domesticada de la que nada debían temer. Igual, los militares no le creyeron.

Durante el viaje, el clima del pasaje osciló entre la euforia y la ansiedad; tanto Perón —que viajaba en la cabina de primera clase junto a su esposa y unos pocos elegidos— como el resto de

la selecta comitiva integrada por artistas, deportistas, empresarios, sindicalistas y famosos de la época, que colmaban la clase turista, no sabían a ciencia cierta con qué se encontrarían cuando la máquina tocara tierra en Ezeiza. Nadie confiaba demasiado en Lanusse ni en las Fuerzas Armadas.

El 17 de noviembre de 1972 amaneció lluvioso en Buenos Aires. El fuerte temporal que había azotado durante todo la noche a la Capital y el conurbano bonaerense provocó el desborde de arroyos, desagües y cunetas. Sin embargo, pese a la inclemencia climática, el *Giuseppe Verdi*, de la empresa Alitalia, tocó tierra en el aeropuerto de Ezeiza a las 11:20 de la mañana, la hora prevista. No era un servicio regular, sino un vuelo charter fletado para uso exclusivo del expresidente argentino y sus acompañantes, unas 150 personas en total. La fotografía tomada apenas el viajero bajó las escalerillas del avión verdiblanco quedó para la historia. En ella se ve a José Ignacio Rucci, por entonces Secretario general de la CGT, esforzándose por cubrir con un amplio paraguas a Perón para que la lluvia torrencial no lo empapase. Enseguida, un automóvil estacionado a la vera de la máquina trasladó al recién llegado al Hotel Internacional que en ese tiempo funcionaba dentro de la estación aérea de Ezeiza.

Para contrarrestar el paro decretado por la CGT y de paso mantener a la gente en sus casas, el gobierno había declarado «jornada no laborable» aquel día. Sin embargo, desde hora temprana, decididos a burlar el cerco tendido por las fuerzas de seguridad, numerosos grupos de simpatizantes, pertenecientes a sindicatos y a la Juventud Peronista, optaron por largarse a campo traviesa, salvando obstáculos y cruzando arroyos con el agua hasta la cintura. No importaba: todo eso y mucho más valía la pena tras diecisiete años de espera. Los que transcurrieron desde 1955, cuando Perón fue derrocado por la Revolución Libertadora, hasta ese momento, en que por fin el sueño de miles de peronistas estaba a punto de cristalizar. A fuerza de empeño, algunos contingentes de militantes lograron arrimarse a la cerca perimetral de la pista y, desde lejos, aferrados al alambre, pudieron agitar sus brazos y vivir al anciano general que antes de introducirse en el automóvil los saludó con su mano. Y les dedicó una de sus clásicas sonrisas, la primera después de tanto tiempo.

Las premoniciones de que algo andaba mal parecieron cobrar cuerpo cuando los mandos militares impidieron al viajero aban-

donar la estación aérea y lo obligaron a permanecer en una de las habitaciones del hotel. Allí transcurrieron las primeras tensas horas de estadía de Perón en la Argentina, hasta que él mismo decidió, arriesgando su integridad física, romper el cerco y salir de allí. Junto a Isabel y López Rega, se dirigió a la casona que lo esperaba en la calle Gaspar Campos, en el partido de Vicente López. Apenas corrió la voz de que el recién llegado se hallaba en ese tranquilo barrio residencial, comenzaron a arribar columnas de jóvenes militantes, que acamparon en el lugar, improvisando fogones y guitarreadas y dando rienda suelta a la bullanga matizada con cánticos y estribillos de ocasión.

El romance entre Perón y la JP pasaba por su mejor momento: los jóvenes festejaban la parte que más les gustaba de las expresiones públicas y las salidas cáusticas de Perón contra los militares, desechando lo que no les agradaba del todo o no encajaba demasiado en sus esquemas ideológicos; un ejercicio de negación que a la larga traería sus consecuencias. Vivían la edad de la inocencia a *full*; asumían a Perón de modo acrítico, casi como un mito viviente —que en buena medida lo era—, sin advertir que ese ser de carne y hueso tenía sus propios planes y no estaba dispuesto a que lo jubilaran ni ellos, ni Lanusse, ni nadie. Perón, experto en tácticas, estrategias, juegos pendulares y manejo de los tiempos, confiaba en que, llegada la hora, podía recoger ese indómito barrilete al que cada día daba más hilo y remontaba hasta las nubes sin reparar demasiado en las consecuencias. Todavía no había caído en la cuenta de que le había dado demasiado piolín.

Tras un breve descanso, y sin reponerse del todo del largo viaje y las emociones vividas, Perón comenzó a recibir visitantes. Uno de ellos fue Ricardo Balbín, el jefe de la Unión Cívica Radical, que debió ingresar por los fondos de la vivienda saltando una tapia para entrevistarse con su viejo adversario. Por desgracia para los argentinos, esa incipiente semilla de unidad nacional no llegó a dar los frutos esperados.

La multitudinaria asamblea cívica realizada unos días más tarde en el restaurante *Nino*, en Vicente López, congregó a la mayor parte del arco democrático. El encuentro, que reunió a los dirigentes políticos más representativos y a los líderes de la CGT y de la Confederación general Económica (CGE), selló la suerte del gobierno militar, condenado a cien años de soledad. Solamente quedaron afuera partidos menores, como la Nueva Fuerza de

Álvaro Alsogaray, comprometidos con la dictadura y carentes de representatividad a todo efecto político.

Después de esa movida exitosa, Perón dio forma al Frente Justicialista de Liberación Nacional (FREJULI), la herramienta electoral concebida para la ocasión, y designó a Héctor J. Cámpora como candidato a la presidencia de la República por esa alianza de partidos, una decisión que el conjunto del peronismo acató sin chistar pese a que a algunos no les cayó demasiado en gracia el personaje elegido, sobre todo a la ortodoxia, que hubiera deseado ver en ese puesto a alguien de sus propias filas.

Cumplidos esos pasos impregnados de fuerte simbolismo para *marcar la cancha* y dejar en claro quién mandaba, el 14 de diciembre, Perón retornó a Madrid, pero esta vez para concluir y liquidar asuntos pendientes antes de emprender el regreso definitivo al país, inmediatamente después de que se produjera el previsible triunfo en las urnas. Para que no quedaran dudas de que no estaba dispuesto a ceder un ápice ante las pretensiones de la dictadura, en la capital española declaró que «si tuviera cincuenta años menos estaría colocando bombas o haciendo justicia por mano propia.» Mientras, de este lado del océano, se ponía en marcha la campaña electoral en San Andrés de Giles, la tierra del candidato presidencial, quien, a partir de ese momento, recorrió el país de acto en acto, todos multitudinarios y con una abrumadora presencia y protagonismo de los sectores juveniles más radicalizados. «¡Se siente, se siente, el Tío presidente!», coreaban los jóvenes mientras el hombre de finos bigotes a la antigua los saludaba con los brazos en alto y una sonrisa de oreja a oreja.

A esta altura, existía la sensación generalizada de que las cartas estaban echadas; las Fuerzas Armadas sufrían un grado de desgaste tal que no les permitía pensar en ninguna aventura que supusiera alterar el cronograma electoral o variar el rumbo emprendido sin causar males mayores. Así las cosas, a Lanusse no le quedó más remedio que aceptar los hechos y ratificar la fecha de elecciones: 11 de marzo de 1973. Sin embargo, no se privó de levantar la última valla para evitar o morigerar el seguro triunfo justicialista: el balotaje, un recurso copiado del sistema francés, que establecía una segunda vuelta electoral si ningún candidato obtenía la mitad más uno de los votos en la primera convocatoria. La apuesta de Mor Roig, padre de la criatura, era que la fórmula peronista no llegara al 50 por ciento y quedara a merced del arco

antiperonista, convenientemente reagrupado alrededor de la segunda fórmula más votada.

1973

Mientras la dictadura preparaba la retirada, enmarañando las cosas todo lo que podía, del otro lado del mostrador, en el seno de las organizaciones armadas, la salida electoral y las cabriolas de Perón generaban un intenso debate y reacciones dispares que iban desde la complacencia táctica al rechazo estratégico. Las únicas organizaciones armadas que apoyaban la fórmula Cámpora-Sola Lima, participaban activamente del proceso preelectoral y tenían representantes en las listas legislativas y en las candidaturas provinciales eran Montoneros y FAR, que hasta allí acompañaban de manera acrítica, podría decirse, la conducción de Perón: de momento, ambas estrategias, la de Perón y la de ellos, lucían compatibles, al menos en el corto plazo. Sin embargo, las visiones a futuro divergían, como se comprobó en los meses siguientes cuando quedó al descubierto que los juegos de unos y otros eran bien diferentes.

En las antípodas del pragmatismo montonero, las FAP venían planteando reparos a la táctica electoralista, oponiendo lo que llamaban «la alternativa independiente de la clase obrera y del pueblo», un camino más puro desde el punto de vista ideológico pero difícil de traducir en una política de masas, como si lo fue la que expresaba el «luche y vuelve» enarbolado por la Tendencia Revolucionaria, una consigna que hablaba por sí misma y no requería de explicaciones alambicadas: hasta el último peronista entendía su significado y, lo más importante, lo compartía. Algo similar ocurría con «Cámpora al gobierno, Perón al poder», la consigna concebida para el momento electoral. La coyuntura encontró a las FAP divididas en dos posturas: la más intransigente, que postulaba lisa y llanamente el voto en blanco, y otra, menos fundamentalista, que planteaba el «apoyo crítico» a los candidatos del FREJULI, una transacción intelectual que de todos modos no lucía seductora para las bases peronistas. Ambas posturas difíciles de bajar a una militancia entusiasmada con la perspectiva que ofrecían unas elecciones que se presentaban más que halagüeñas para el peronismo.

El ERP, tercero en discordia, se mantuvo al margen de la campaña electoral y anunció que seguiría operando militarmente aún bajo el nuevo gobierno constitucional, apuntando a blancos

militares y personeros de grupos económicos concentrados, hasta comprobar el giro que adoptaría aquel, aunque sin demasiadas expectativas al respecto, por cuanto el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) caracterizaba a Perón como un líder burgués de quien poco o nada podía esperarse. De hecho, el 18 de febrero, un comando del ERP asaltó con éxito el Batallón 141 de Córdoba llevándose una importante cantidad de armamento.

La conformación de las listas de candidatos del FREJULI fue transaccional, acorde a la estructura tradicional de «ramas» concebida por Perón para segmentar el Movimiento y reservarse para sí la conducción del conjunto. Conforme a ese esquema, una porción de las nóminas le tocó a la dirigencia política, una cuota al sindicalismo, otra a la Rama Femenina y, como novedad, esta vez hubo lugares expectables para la emergente Juventud Peronista. El resultado fueron listas heterogéneas, en las que se mezclaban apellidos de linaje ortodoxo con representantes de la Tendencia Revolucionaria; algunos muy conocidos, otros ignotos; algunos indiscutidos, otros no tanto. Sin embargo, el clima de euforia reinante postergó la previsible eclosión de esa torre de Babel para más adelante; de momento, nadie pensaba en otra cosa que no fuera en llenar las urnas de votos y acceder al gobierno. Ya habría tiempo para dirimir las cuitas internas.

La campaña se desarrolló bajo dos consignas centrales acuñadas por el sector juvenil que hablaban por sí solas y no daban lugar a segundas interpretaciones: «Liberación o dependencia», una *remake* del legendario y eficiente «Braden o Perón» de 1945, y «Cámpora al gobierno, Perón al poder», que expresaba sin tapujos la apuesta política del momento que encerraba, a su vez, una ficción difícil de sostener como se verá más adelante. La dirigencia sindical y la ortodoxia partidaria participaron tangencialmente en una campaña hegemonizada por la JP montonera –a la que Cámpora se acopló sin poner reparos–, esperando una oportunidad más propicia para jugar sus propias cartas. Hasta allí, la juventud seguía siendo *maravillosa*.

Sin embargo, la tensión ya existía. Vale la pena apelar a la crónica que esboza Juan Gasparini en *Montoneros. Final de cuentas* (De la Campa, 1999) de un episodio ocurrido en las semanas previas a las elecciones, que permite entrever la naturaleza compleja del vínculo entre Perón y Montoneros y la desconfianza mutua que se profesaban:

«Quieto y Frimenich fueron a visitarlo a Europa [a Perón]. Por lo que pudo saberse, con cierta inocencia –cuyo reverso podía ser percibido o dejar entrever petulancia o prepotencia– los jefes de FAR y Montoneros pusieron las cartas sobre la mesa. Exteriorizaron sus planes y los medios de que disponían. Dejaron en claro que decretaban un alto el fuego pero que no se desarmaban, autoerigiéndose en censores de eventuales desviaciones del proceso que se avecinaba.»

En el transcurso de la reunión mencionada, según la misma fuente, los visitantes anunciaron a Perón que Rodolfo Galimberti, el mediático representante de la Juventud Peronista (JP) en el Consejo Superior del Movimiento designado por Perón, había sido encuadrado en las filas guerrilleras, a la vez que le entregaron un listado de 300 nombres para cubrir cargos gubernamentales en la futura administración camporista. Según Gasparini, con aquellas actitudes:

«(...) se traslucía la ambición, acaso legítima, de un traspaso progresivo de la dirección del movimiento, revelando (de acuerdo con los hechos que se sucedieron) una sobrevaloración de sus fuerzas por parte de los líderes juveniles. Habitado al método de conducción unipersonal, es fácil imaginar la recepción de Perón a tales planteos en los que vio cernirse una amenaza. El candor fue tomado por irreverencia. No era esa, quizá, la intención de sus interlocutores: ellos suponían ser portavoces de una pretensión justa y que podía expresarse sin ambages a partir de las mutuas deudas de gratitud y reconocimiento creyendo mantener una amplia unidad de pensamiento. Perón se limitó a escuchar y eludió promesas. La respuesta no se haría esperar.»

El cronograma electoral siguió adelante y, tal como estaba previsto, se votó el domingo 11 de marzo. Habían pasado diez años de las últimas elecciones presidenciales en la República Argentina: el 7 de julio de 1963, cuando Arturo Umberto Illia resultó electo presidente de la Nación. En realidad, para los peronistas fueron muchos más, teniendo en cuenta que el partido fundado por Juan Domingo Perón se hallaba proscrito desde 1955. De hecho, no se le permitió participar en aquellos comicios, en los que se impuso la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) con apenas el 24 por ciento de los votos, ni tampoco en los anteriores, los de 1958, que dieron el triunfo a Arturo Frondizi.

Como era habitual en aquella Argentina turbulenta, el mandato del presidente Illia fue interrumpido el 28 de junio de 1966 por un golpe de Estado, uno más de la larga serie inaugurada en 1930. La movida militar encumbró a un teniente general con ínfulas de caudillo de república bananera, Juan Carlos Onganía. Fue él quien comandó la primera etapa de la llamada Revolución Argentina, que de revolución tuvo poco y de argentina mucho menos, por lo que su fracaso estaba decretado.

El 11 de marzo, en el cuarto oscuro, los votantes podían optar por alguna de la decena de fórmulas presentadas por otros tantos partidos o alianzas. Por algún binomio del remozado arco democrático, como Cámpora-Solano Lima (FREJULI); Balbín-Gamond (UCR); Alende-Sueldo (Alianza Popular Revolucionaria); o por candidaturas que se ofrecían sin complejos de culpa como continuadoras de la dictadura con formato civil, como las que encabezaban el ingeniero Álvaro Alsogaray (Nueva Fuerza); el marino retirado Francisco Manrique (Alianza Popular Federalista), o el brigadier Ezequiel Martínez (Alianza Republicana Federal).

Los argentinos concurren a las urnas envueltos en un gran entusiasmo y la esperanza renovada de tener por fin una democracia estable en el país tras largos años de desencuentros. Los jóvenes que debutaron electoralmente en aquellos comicios compartieron desde temprano las largas filas de votantes con veteranos que volvían a sufragar después de mucho tiempo, todos embargados por la misma ansiedad. Las autoridades de mesa —muchos bisoños en el oficio— sellaban los flamantes DNI (Documento Nacional de Identidad) de los primeros y las viejas libretas de Enrolamiento —o Cívicas si eran mujeres— de los segundos.

Tras casi siete años de tiranía, en la Argentina se vivía a pleno la primavera democrática.

A la hora del recuento de votos, se confirmó el resultado esperado: el FREJULI se impuso holgadamente con el 49,56 por ciento de los votos, resultando segunda la UCRP con el 21,29 por ciento y, bastante más atrás, el resto de los partidos. Aun cuando por unas pocas centésimas la coalición triunfante no alcanzó el 50 por ciento exigido por la regla del balotaje ideado por Mor Roig, el radicalismo reconoció inmediatamente el triunfo justicialista y desistió de concurrir a una segunda vuelta. Héctor J. Cámpora y Vicente Solano Lima quedaron consagrados entonces como presidente y vicepresidente de la Nación, respectivamente. Un clima de euforia se adueñó del país, y decenas de miles de argentinos salieron a las calles a festejar la recuperación de las instituciones republicanas y el inicio de un nuevo tiempo. Por doquier, cientos de mariposas desplegaban sus alas y, orondas, se echaban a volar.

La ola triunfalista que inundó el país permitió al FREJULI obtener 21 de las 22 gobernaciones provinciales en juego —salvo Neuquén, donde se impuso el neoperonismo, un pariente cercano— y asegurarse el control administrativo de la Capital Federal. El frente pergeñado por Perón logró a su vez mayoría propia en la Cámara de Diputados y orilló los dos tercios en el Senado. En las provincias resultaron electos varios gobernadores cercanos a la Juventud Peronista: Oscar Bidegain, en Buenos Aires; Ricardo Obregón Cano, en Córdoba; Alberto Martínez Baca, en Mendoza; Jorge Cepernic, en Santa Cruz; Miguel Ragone, en Salta y Antenor Gaúna, en Formosa. Como se ve, el peronismo monopolizó el poder en una dimensión tan exagerada que la suerte institucional del país y la del Movimiento se confundieran en un mismo amasijo donde la disputa se tornó salvaje en los meses subsiguientes.

Con la dictadura virtualmente fuera de escena y Perón preparando su retorno definitivo, transcurrió la transición hasta el 25 de mayo de 1973, fecha prevista para la asunción de las nuevas autoridades. Todo parecía encaminarse por el buen sendero; sin embargo, ya asomaban en el horizonte los graves conflictos que se desencadenarían en los meses siguientes y que echarían por tierra la ilusión general de cerrar definitivamente las heridas del pasado, disfrutar el presente en paz y avizorar un futuro prometedor para

hijos y nietos. Un sueño que muy pronto la realidad se encargaría de convertir en añicos.

En el ínterin, no todas fueron buenas noticias para la izquierda peronista: a fines de abril, Perón destituyó a Rodolfo Galimberti como representante de la JP, molesto porque, días antes, el dirigente juvenil había anunciado a los cuatro vientos la creación de milicias para la reconstrucción nacional, un exceso verbal que Perón consideró inconveniente en ese momento en que no deseaba agitar las aguas para no inquietar a los militares ni asustar a una sociedad expectante con el cambio de gobierno. Por nada del mundo, Perón deseaba que el retorno del peronismo al poder se percibiera como un salto al vacío, como se empeñaba en presentarlo el *ancien regime*. El enojo de Perón rozó a Juan Manuel Abal Medina, por entonces secretario general del Partido Justicialista, quien, sin embargo, siguió en el cargo aunque muy condicionado por la nueva relación de fuerzas, favorable a la ortodoxia en desmedro del sector juvenil al que representaba el hermano de Fernando.

Por parte de los grupos guerrilleros, no hubo tregua. Durante abril y mayo, el ERP y las FAR se mantuvieron en actividad; en tanto que los Montoneros se replegaron, privilegiando el accionar político al accionar militar. Se reportaron asaltos a puestos de vigilancia y acciones de recuperación, pero los hechos más resonantes fueron los atentados que costaron la vida al coronel Héctor Iribarren y al dirigente del SMATA Dirk Kloosterman. El 30 de abril, un comando del denominado *ERP 22 de agosto* ejecutó en el barrio porteño de Congreso al contralmirante Hermes Quijada, en represalia por la masacre de Trelew. La espiral de violencia disgustó a Perón, que comenzaba a tomar consciencia de que las cosas no se presentarían tan sencillas como había creído.

Ajena al incipiente cambio de clima que se gestaba en las cercanías de Perón y las prevenciones que poco a poco calaban hondo en el ánimo del jefe justicialista, la militancia juvenil vivía a pleno el momento y daba rienda suelta a la euforia contenida, a la alegría revolucionaria. Los jóvenes tocaban el cielo con las manos y, con los dedos en *ve*, saltaban y cantaban: «Qué lindo, qué lindo, qué lindo que va a ser, el hospital de niños, en el Sheraton Hotel», ilusionados con que la «patria socialista» —que ubicaban varios grados a la izquierda del socialismo nacional que pregona Perón— estaba al alcance de la mano, confiados en que el moderno

edificio del bajo porteño, pronto a ser inaugurado, alojaría bebés y niños enfermos en lugar de obesos y rubicundos turistas norteamericanos de bermudas y calzado deportivo.

Los infaltables bombos, las consignas mortificantes contra los militares en retirada, la recordación permanente de los mártires, la movilización ruidosa e incesante, crearon en el seno de una militancia entusiasta la sensación ficticia de que la toma del poder real era inminente, que se trataba de escoger el papel que cada uno deseaba desempeñar en una gesta que, sin embargo, solo existía en la imaginación de sus protagonistas; la realidad iba por otro lado. Ese estado de excitación colectiva, sin embargo, contagió a gran parte de la sociedad.

Diversos analistas confirman la subjetividad reinante, entre ellos Richard Gillespie, ya citado:

«El 25 de mayo de 1973, mientras Héctor Cámpora ocupaba formalmente su puesto de presidente de la República Argentina, una atmósfera carnavalesca invadió el centro de Buenos Aires. Después de dieciocho años de proscripción, el peronismo volvía al poder, y centenares de miles de argentinos se alegraban efusivamente por ello. Incluso las formalidades que se celebraron en el interior del Congreso estuvieron teñidas hasta cierto punto del carácter popular del histórico día gracias a la presencia en la ceremonia de juramento de los presidentes de Chile y de Cuba, Salvador Allende y Osvaldo Dorticós. Afuera, más de un millón de peronistas llenaban la Plaza Congreso, la céntrica Plaza de Mayo y la avenida de Mayo, a lo largo de catorce cuadras. El corazón de Buenos Aires latía a los gritos de "Se van, se van, y nunca volverán", mientras una jubilosa muchedumbre celebraba la partida de los militares.»

Héctor J. Cámpora, en su emotivo discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa, reunida tras siete años de receso parlamentario, derrochó elogios dirigidos a Perón, Evita y la juventud

maravillosa que, según él, «supo responder a la violencia con la violencia.» Esa misma noche, los presos de las cárceles de Villa Devoto, Córdoba, Resistencia, Rawson, Salta y Ezeiza, recuperaron la libertad merced a un decreto presidencial –forzado por las circunstancias– que dispuso una amplia amnistía sin esperar la correspondiente ley del Congreso de la Nación. En Rawson, recuperaron la libertad quienes la noche del 15 de agosto no lograron salir de allí por falta de vehículos, lo mismo que los tres sobrevivientes de la masacre que permanecían en otras cárceles. Otros, como Mariano, quedaron en el camino de esa cruzada épica a la que tributaron sus vidas jóvenes.

Los mejores días del peronismo parecían renacer al calor de los nuevos tiempos. Sin embargo, la metamorfosis había comenzado y no tendría vuelta atrás.

Córdoba, 1973

En Córdoba, como en el resto del país, también se impuso el peronismo. La fórmula del FREJULI cordobés, integrada por Ricardo Obregón Cano y Atilio López, representaba un arco político de signo progresista que tenía como eje al ala progresista del peronismo, a la Tendencia Revolucionaria y al sindicalismo combativo. El binomio triunfante había quedado unguado en los comicios internos del Partido Justicialista cordobés realizados en junio de 1972, relegando a la fórmula de la ortodoxia integrada por Julio Antún, líder de la Mesa Redonda Peronista Permanente, y Alejo Simó, secretario general de la UOM local. Antún, desconforme con el resultado, denunció fraude y a partir de ese momento se convirtió en enemigo acérrimo del ascendente obregonismo. Trascartón, igual que en el resto del país, el peso de la campaña electoral lo llevó sobre sus hombros la JP, en tanto que los sectores tradicionales del peronismo seguían el desarrollo de los acontecimientos sin involucrarse demasiado, confiados en que en algún momento los vientos soplarían en dirección contraria.

El 11 de marzo de 1973, los candidatos del FREJULI –que además del peronismo reunía en su seno al MID cordobés, el Partido Popular Cristiano y otras fuerzas menores– superaron a la fórmula radical integrada por Víctor Hipólito Martínez y Felipe Celli por apenas 9.000 votos, alcanzando el 44,2 por ciento del total contra

43,1 de la UCRP, que logró imponerse en el departamento Capital por 3.773 votos. Sin embargo, el tramo municipal de la boleta del peronismo obtuvo más votos que la radical, consagrando a Juan Carlos Ávalos como nuevo intendente de la ciudad de Córdoba.

De acuerdo a las reglas del balotaje, que también regía para las fórmulas provinciales, el domingo 15 de abril debió realizarse una segunda vuelta para proclamar al ganador. Esta vez la diferencia se estiró a 86.000 sufragios a favor del FREJULI. Fue decisivo un debate televisado, donde Obregón Cano se mostró más convincente que su adversario. Sin embargo, el resultado ajustado confirmaba una vez más el vigor electoral del radicalismo cordobés, que dio dura batalla a los candidatos de un justicialismo que contaba a su favor con el aliciente de la presencia física de Perón en el país tras dieciocho años de ausencia forzada.

Ricardo Obregón Cano, odontólogo recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, oriundo de Río Cuarto, tenía una larga trayectoria en el movimiento peronista. Había sido senador provincial por aquel departamento en el año 1951 y presidente del Senado de la Provincia hasta 1954, año en que juró como ministro de Gobierno de Raúl Lucini, el gobernador peronista derrocado en 1955. En 1962 fue electo diputado nacional en los comicios que luego fueron anulados y, en 1963, se plegó al voto en blanco tal como lo ordenara Perón desde el exilio madrileño.

El vicegobernador electo, por su parte, era un viejo luchador del movimiento obrero cordobés, secretario general del gremio de chóferes de ómnibus urbanos, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), y líder de una de las dos corrientes en que se hallaba dividido el gremialismo peronista, la llamada *legalista*, mientras que el otro sector, el *ortodoxo*, era comandado por el metalúrgico Alejo Simó, el taxista Mauricio Labat y el molinero Bernabé Bárcena, entre otros. El mosaico gremial cordobés se completaba con los gremios autotitulados *independientes*, que tenían en Agustín Tosco, secretario general de Luz y Fuerza, a su principal referente; y los llamados *clasistas*, orientados por René Salamanca, secretario general del SMATA y referente de la lista Marrón que se había quedado con la conducción del sindicato industrial de mayor peso de la época, el de los mecánicos.

Los Pujadas otra vez en los diarios

Desde la tragedia de Trelew, el apellido Pujadas no había vuelto a las páginas de los diarios. Tres días después de la primera vuelta electoral, el miércoles 14 de marzo, cuando se descontaba el triunfo peronista pese a que aún no se conocían las cifras del escrutinio definitivo, se produjo un episodio de ribetes policiales, no esclarecido del todo, que involucró a la familia Pujadas y que, al día siguiente, *La Voz del Interior* recogió bajo el título: «Enfrentamiento armado entre policías y guerrilleros: heridos y detenidos.»

Los hechos mencionados se desarrollaron en una finca rural ubicada en el Km. 26 del Camino a Pajas Blancas, a tres kilómetros de Río Ceballos. Según la nota periodística, en horas de la tarde, en la subcomisaría de esa localidad de las Sierras Chicas se recibió una denuncia telefónica alertando acerca de un movimiento inusual de personas y vehículos en las inmediaciones del predio donde funcionaba un criadero de aves. De inmediato, por orden de la superioridad, una comisión encabezada por el titular de la repartición e integrada por otros cuatro agentes partió en un patrullero a constatar la veracidad del dato. El vehículo recorrió a marcha lenta los 300 metros de camino de tierra que separaban el sitio buscado de la ruta y al llegar a la tranquera de ingreso, solicitaron a un joven peón que se hallaba en el lugar que les indicara dónde estaban los demás. Cuando, guiados por el muchacho, se acercaron al galpón donde unas diez o quince personas celebraban una reunión, fueron recibidos con una balacera que duró algunos minutos hasta que los del galpón huyeron por los fondos de la finca hacia campo abierto.

El resultado del tiroteo fue de tres policías heridos, a más del joven lazarillo que se llevó la peor parte. El patrullero donde se parapetaron los uniformados quedó seriamente dañado, con el parabrisas destrozado por las balas, lo mismo que la carrocería, alcanzada por numerosos proyectiles. Cuando cesaron los disparos y renació la calma, vecinos del lugar acudieron en auxilio de los heridos y requirieron el envío de ambulancias y refuerzos policiales. El parte médico emitido más tarde indicaba que el subcomisario Venancio Luján había sufrido heridas leves, en tanto que el agente René Álvarez presentaba una herida de bala en un pulmón, lo mismo que el agente Carlos Brizuela en el abdomen. Los tres fueron trasladados a la Clínica San Martín, en la ciudad de Córdoba. El más delicado de todos era Antonio Guillermo Boiero,

de 16 años, el peón de la finca que también resultó herido y fue derivado al Hospital San Roque en grave estado. En el procedimiento, la policía dijo haber secuestrado una pistola calibre 11.25 sustraída tiempo atrás a un oficial de la Policía Federal y un fusil FAL, presumiblemente perteneciente al arsenal del Batallón 141 asaltado por un grupo armado en el mes de febrero.

Por el tenor de la documentación hallada y otros indicios, la policía suponía que se trataba de una cumbre de *pesos pesados* del ERP y Montoneros, la segunda, después de otra de similares características que se habría llevado a cabo un par de días antes en el mismo lugar, de la que se tenía información confidencial. Incluso, se especuló con que uno de los participantes del cónclave pudo haber sido Enrique Gorriarán Merlo, el jefe del ERP que comandó el copamiento del Batallón 141.

Durante la tarde de ese mismo día, se detuvo a varias personas, entre ellas a José María Pujadas y su hijo de igual nombre, dueños del criadero donde supuestamente se desarrollaba la reunión clandestina desbaratada por la presencia policial. También se llevaron detenida a la casera del lugar y a dos personas más que se hallaban en las inmediaciones. Estas últimas recuperaron su libertad luego de demostrar que nada tenían que ver y habían sido despojadas de la camioneta en que se conducían por varios individuos que los encañonaron con sus armas y huyeron en el vehículo. Esa misma noche, los Montoneros emitieron un comunicado liberando de toda responsabilidad a los integrantes de la familia Pujadas, padre e hijo, y a Antonio Boiero, el joven malherido. Entretanto, la policía llevaba a cabo otros procedimientos, entre ellos el allanamiento a otro criadero de aves de propiedad de la familia en la localidad de Río Segundo, en el departamento del mismo nombre.

Padre e hijo, luego de ser prontuariados, fueron liberados al cabo de algunos días de detención. Un par de semanas más tarde, el 29 de marzo, un comando de las FAR copó la municipalidad de Saldán, una localidad serrana vecina a Córdoba, de donde se llevaron documentación de distinto tipo. Antes de retirarse del lugar, efectuaron pintadas con aerosol y lanzaron panfletos apoyando la fórmula Obregón Cano-Atilio López para la segunda vuelta electoral.

Primavera cordobesa

El día de la asunción de las autoridades electas, 25 de mayo, hubo un acto en la plaza San Martín, frente al Cabildo, y esa misma noche fueron liberados de las cárceles cordobesas los presos políticos, como ocurría por esas horas en el resto de los penales del país. Al día siguiente los presos liberados en la víspera fueron recibidos por Obregón Cano en la Casa de Gobierno. Antes de retirarse, izaron en el mástil oficial, junto al símbolo patrio, las banderas de las organizaciones guerrilleras. El estado de gracia que se vivía aún permitía licencias como esa, aunque no por mucho tiempo más.

Cuatro días más tarde, el cuarto aniversario del Cordobazo se celebró con un acto multitudinario y efusivo que contó con la presencia del presidente de Cuba, Osvaldo Dorticós. El palco se levantó en el lugar donde, el 29 de mayo de 1969, había caído el obrero Máximo Mena bajo las balas policiales, en la esquina de bulevar San Juan y Arturo M. Bas, en tanto que la concurrencia llegaba hasta la explaza Vélez Sarsfield, ubicada a cinco cuadras de allí. Todos los oradores, a su turno, fustigaron a la dictadura y exaltaron la etapa de construcción socialista que se iniciaba bajo el auspicio de la amistad revolucionaria entre Argentina y Cuba, certificada por la presencia de Dorticós. Hasta allí, la primavera setentista parecía haber llegado para quedarse por mucho tiempo. Sin embargo, aunque no se notara, la metamorfosis comenzaba a obrar sus efectos, especialmente en Córdoba.

El gabinete de Obregón Cano reunió en su seno a figuras de distinta extracción, una mixtura entre sectores tradicionales y las nuevas corrientes que convivían en el recreado espacio peronista: Alfredo Erio Bonetto en Gobierno; José Enrique Fierro en Hacienda; Luis Esterlizi en Obras Públicas; Humberto Gómez Amaya en Agricultura y Ganadería; Antonio Lombardich en Bienestar Social; Carlos Tagle Achával en Educación y Luis Dall'Aglio en la Secretaría General de la Gobernación. El Fiscal de Estado era Juan Carlos Bruera; el director de Prensa Alejo Díaz Tillard y el presidente del Banco de Córdoba Julio Aliciardi. Horacio Obregón Cano, hijo del gobernador, ocupaba la secretaría Privada y a su vez hacía de nexo con los sectores juveniles que apoyaban el gobierno y por esos días eran asiduos visitantes de la Casa de las Tejas. Entre ellos Miguel Ángel Bustos, uno de los presos liberados;

Elvio Alverione, dirigente montonero; Roberto Vidaña y Miguel Angel Mozé, dirigentes de la JP Regional III.

El elenco obregonista se completaba con aliados no orgánicos como Norberto Erico Tejada, presidente de la Cámara de Diputados; Luis Carnevale, Senador Nacional; Héctor Bruno, presidente del bloque de diputados del FREJULI; Carlos Palacio Deheza, diputado nacional; Fausto Rodríguez y Blas García, diputados que provenían del Movimiento Revolucionario Peronista (MRP) y otros diputados afines como Miguel Ángel Bizzi y José Osvaldo Mussa.

En la Universidad Nacional de Córdoba, el rectorado fue ocupado por Francisco Luperi, un peronista moderado, en tanto que las secretarías y los decanatos se repartieron entre las distintas corrientes universitarias ligadas al peronismo, tocándole algunos a la izquierda peronista, como el de Ciencias Económicas, Arquitectura, Filosofía y Letras y Servicios Sociales. El peronismo tradicional, por su parte, se quedó con Medicina, Ingeniería y Derecho.

Montoneros sufría por esos días, la crisis interna más importante desde su nacimiento: la disidencia del grupo de presos de la cárcel de Resistencia (Chaco), la mayoría de los que había participado en la toma de La Calera, quienes, luego de recuperar la libertad, fundaron la Columna Sabino Navarro, que si bien se autodefinía como organización político-militar, impugnaba el militarismo y priorizaba la etapa el trabajo de masas y la organización desde las bases. En esa corriente se enrolaron Luis Rodeiro, Luis Losada, Ignacio Vélez, Graciela Doldán, Jorge Cotone y José Fierro, entre otros. El brazo político de la columna era el Peronismo Descamisado, donde convergieron militantes anteriormente ligados al Peronismo de Base y al Integralismo universitario.

Cámpora al gobierno

Los meses que sucedieron a la asunción de Héctor Cámpora fueron particularmente turbulentos y las profundas contradicciones internas del peronismo, larvadas durante la campaña electoral, finalmente asomaron a la superficie y tuvieron en vilo a una sociedad absorta ante el espectáculo de facciones en pugna.

Las dos corrientes ideológicamente irreconciliables que habían crecido en el seno del movimiento peronista al fragor de la lucha contra la dictadura, quedaron cara a cara, dispuestas a disputar sin concesiones los espacios de poder y la predilección de Perón por uno u otro bando. Por un lado, los sectores progresistas, la JP y los gremios combativos, partidarios de la llamada *patria socialista*, y, por el otro, la derecha peronista y los caciques sindicales más connotados, que proclamaban su adhesión a la *patria peronista*, en explícita oposición a los primeros. No había síntesis posible entre posturas antagónicas y praxis bien diferenciadas como las que exhibían unos y otros. Y un detalle que explica los niveles de violencia reinantes: ambos sectores contaban con logística armada; mientras unos tenían el respaldo de FAR y Montoneros, del lado contrario revistaban bandas de derecha amparadas por los organismos de inteligencia y algunos sindicatos enrolados en la línea dura. La metamorfosis seguía su progreso irreversible, cada vez más virulento.

El nuevo escenario institucional y la vigencia del estado de Derecho le planteaba un dilema a la Tendencia Revolucionaria, tal como lo señala la investigadora Julieta Bartoletti en su tesis doctoral *Montoneros: de la movilización a la organización. Un caso paradigmático de militarización*, (Universidad Nacional de San Martín, 2010):

«El abandono de las acciones armadas, al menos de forma pública, inevitable dada la opción de buscar la inserción en las “superestructuras”, que involucraba desde entonces la participación en las instituciones de gobierno. Sin embargo, implicaba una problemática renuncia a la práctica a partir de la cual había definido su naturaleza revolucionaria, por lo cual Montoneros opta por una contradictoria posición: abandona la práctica armada pero continúa reivindicado su naturaleza político-militar.»

La autora citada describe la complejidad política y ambigüedades del momento en los siguientes términos:

«Las primeras definiciones de Perón respecto de la etapa que se abre anuncian ya la agudización de la contradictoria posición de Montoneros, ya que a la contradicción entre la reivindicación de su naturaleza "político-militar" y el abandono público de la práctica armada, se suma la creciente contradicción entre el lugar a que aspiran en el Movimiento Peronista y el que Perón les ofrece, así como el contraste entre su propia interpretación de lo que debía hacer el gobierno, y lo que este efectivamente hacía.»

Hasta allí, Perón confiaba en que su capacidad de conducción le permitiría controlar las tensiones internas del movimiento y poner en caja tanto los arrestos revolucionarios de los sectores juveniles como los desbordes del ala derecha sin que la sangre llegase al río. Componedor por naturaleza y poco afecto al conflicto explícito, apoyado en su prestigio y autoridad, Perón apostaba a que sus directivas fueran finalmente acatadas, como en general venía sucediendo, por todos los sectores, incluidas las organizaciones armadas, el hueso más duro de roer. Él sabía mejor que nadie que el peronismo fungía entre sus adherentes como una profesión de fe, casi como una religión: así como el buen cristiano asumía la fe en su Dios y confiaba a ciegas en él, el buen peronista *creía* en Perón y, metafóricamente, estaba dispuesto a dar la vida por su líder. De momento, parecía que las cosas seguían siendo así: su liderazgo estaba fuera de discusión y obraba como límite de las controversias internas cada vez más ríspidas.

Perón estaba convencido de que el ala dura, representada por la Montoneros y la Tendencia Revolucionaria que le respondía, tarde o temprano entenderían que la etapa de resistencia a la tiranía había quedado atrás, que había comenzado un nuevo ciclo de cuño democrático, y que, dadas las circunstancias, se ajustarían al libreto pacificador que él proponía, en un giro discursivo y gestual que la sociedad, saturada de violencia, prefería escuchar antes que permanentes incitaciones a la violencia. Confiaba, en definitiva, en que nadie «sacaría los pies del plato», como solía decir, y que las organizaciones armadas caerían en la cuenta de que la actividad guerrillera ya no tenía razón de ser en el nuevo escenario institucional, con un poder civil legítimo de signo afín.

No en vano, solía repetir que «para un argentino no hay nada mejor que otro argentino», procurando ponerse por encima de las divisiones. Sonaba lógico y consistente: el pueblo argentino venía de sufrir una experiencia traumática que había causado numerosas bajas en el campo popular.

Sin embargo, los conductores de FAR y Montoneros manejaban otras expectativas: no se cruzaba por sus cabezas deponer las armas y, lejos de resignarse a ser actores secundarios, aspiraban a conducir el proceso; en otras palabras, a suplantar a Perón. Planteadas así las cosas, no había síntesis posible: Perón no estaba dispuesto a resignar su jefatura estratégica y ellos no complacerían sus deseos acatando mansamente sus órdenes. Las cartas estaban echadas y la marejada a la vista cerca de la orilla.

La composición del gabinete nacional, igual que las listas legislativas, también fue transaccional, aunque su diseño final mostró escasa representación de los sectores juveniles –apenas en el Ministerio del Interior– y, en cambio, incluyó una mayoría de nombres ligados a la ortodoxia peronista, un sesgo que la Tendencia achacó a la tibieza y falta de personalidad de Cámpora, que admitió la presencia en el gabinete de José López Rega, *el Brujo*, como ministro de Bienestar Social sin oponer reparos. El Ministerio de Economía, por expreso pedido de Perón, le fue confiado a José Ber Gelbard, titular de la CGE, en tanto que los otros ministerios fueron ocupados por Ricardo Otero (Trabajo), hombre de las 62 Organizaciones comandadas por Lorenzo Miguel; Juan Carlos Puig (Relaciones Exteriores), Esteban Righi (Interior), Antonio Benítez (Justicia), Ángel Robledo (Defensa) y Jorge Taiana (Educación). La opción por Gelbard tenía un claro sentido: recrear un empresariado de signo nacional capaz de contrarrestar la hegemonía alcanzada en los últimos años por los sectores más concentrados, ligados a las multinacionales que controlaban los principales resortes de la economía. Al respecto, la periodista María Seoane, en *El burgués maldito* (Sudamericana, 2003), escribe:

«(...) en el país de 1973, influido por la ideología tercermundista y antiimperialista en boga, la política aún conservaba un singular predominio sobre la economía, la técnica y las cuentas bancarias. Por eso Gelbard podía ser ministro; es más, superministro. Y por

esa misma razón estaba obligado a que las primeras medidas que dictara tuvieran un alto impacto y fueran dirigidas hacia la base social y política que había promovido el regreso del peronismo al poder.»

Esas primeras medidas del nuevo gobierno estuvieron destinadas a garantizar el abastecimiento de productos básicos de la canasta familiar, empezando por la carne vacuna, a los que se les fijaron precios máximos. El Pacto Social, firmado por representantes empresarios y sindicales, congeló precios, salarios y tarifas para detener la espiral inflacionaria heredada de la dictadura, una apuesta complicada que requería de medidas complementarias para surtir efectos satisfactorios.

La Tendencia Revolucionaria compensó en parte su escasa presencia en el gabinete nacional quedándose con el control de las principales universidades del país, donde logró colocar a gente de confianza al frente de rectorados y decanatos. Como correlato, la Juventud Universitaria Peronista (JUP) exhibía un crecimiento exponencial que le permitía hegemonizar el movimiento estudiantil, desplazando a las demás corrientes en las preferencias del estudiantado.

Bastaron unas pocas semanas para comprobar que las cosas no funcionarían como esperaba Perón. La sorda disputa por el control de espacios de poder y la cobertura de cargos gubernamentales de segunda y tercera línea se recalentó con el paso de los días y las tensiones fueron en aumento en igual proporción, saliéndose con frecuencia de madre. Los diarios de la época abundan en crónicas que desnudan la sorda pulseada detrás de bambalinas que, en más de una oportunidad, asumió ribetes violentos, como ocurrió el 9 de junio durante el acto en recordación de las víctimas de los fusilamientos de José León Suárez que terminó con un tiroteo y un muerto.

Los trascendidos de la época daban cuenta de que Perón no estaba conforme con el cariz sesgado y conflictivo que tomaba el gobierno camporista ni con el desempeño de su delfín como presidente de la Nación, incapaz de poner freno a los excesos y garantizar la gobernabilidad. Mucho menos Isabel y López Rega, quienes no dejaban pasar ninguna oportunidad para esmerilarlo delante de Perón, preparando el terreno para la contraofensiva que no tardaría en desatarse.

Los días previos al 20 de junio, fecha fijada para el regreso de Perón, fueron movidos. Las ocupaciones de reparticiones estatales y emisoras de radio y televisión por parte de grupos de derecha eran moneda corriente, en tanto que el ERP seguía secuestrando empresarios y exigiendo rescates para financiar la actividad guerrillera a la que no pensaba renunciar, sino más bien incrementar en los meses futuros. Por esos días, Mario Eduardo Firmenich y Roberto Quieto, en conferencia de prensa, aseguraban que el apoyo al gobierno de Cámpora sería irrestricto mientras se cumpliera la plataforma votada el 11 de marzo; en tanto que los jefes del ERP encabezados por Roberto Santucho y Enrique Gorriarán Merlo afirmaban que no apoyaban al gobierno peronista porque sus primeras medidas no iban en contra del sistema ni afectaban a la burguesía y el imperialismo, sino todo lo contrario.

En medio de ese maremágnum, el presidente Cámpora delegó el mando en Solano Lima y viajó a Madrid para acompañar a Perón en su viaje de regreso. Para tener una apreciación más cercana del estado de tirantez por el que atravesaba la relación entre Perón y Cámpora, conviene transcribir un párrafo del libro de Miguel Bonasso, *El presidente que no fue* (Planeta, 1997):

«El general no lo esperaba en Barajas y se prefiguraba su ausencia en otras instancias protocolares. Costaba saber, en ese momento, si todo se debía a las penurias de una difícil convalecencia, a su rencor con los "gaitas" por la nunca olvidada invitación a Lanusse o los celos de que fuera Cámpora y no él quien recibiera los honores que se tributan a un jefe de Estado. Decía que estaba "amortizado", en cuestiones de protocolo, pero el disgusto de no haber sido recibido por el Papa probaba lo contrario.»

Una versión coincidente es la que, desde otra óptica, brinda José Ignacio García Hamilton en *Juan Domingo* (Sudamericana, 2009):

«El día de la recepción [ofrecida por Francisco Franco], Cámpora, vestido de gala

y con banda presidencial fue a buscar a Perón a Puerta de Hierro, para convencerlo de que lo acompañara. Mas el general lo recibió vestido de guayabera, y tras un frío saludo se excusó, alegando una cena con amigos.»

El volcán en que se había convertido el Movimiento no tardaría en entrar en erupción. Fue el 20 de junio, en Ezeiza, en ocasión del regreso definitivo de Perón al país, cuando se produjo el enfrentamiento tan temido entre los dos bandos en pugna. La organización y control del mega acto al aire libre convocado para ese día fue confiada al coronel (RE) Jorge Osinde, hombre de confianza de López Rega, quien delegó las tareas operativas en la UOM de José Ignacio Rucci, las 62 Organizaciones y el llamado Comando de Organización, capitaneado por Alberto Brito Lima y Norma Kennedy. Más tarde, se le reprocharía al gobierno, en especial al ministro del Interior Esteban Righi, su completa prescindencia e irresponsabilidad al dejar esos delicados cometidos en manos de la derecha.

Aquel Día de la Bandera, soleado y festivo, todo estaba dispuesto para que Perón hablase a las masas desde un gigantesco palco levantado sobre el Puente 12, situado en el cruce neurálgico de la avenida Ricchieri con el camino de Cintura. En lo alto del escenario, el cineasta y cantautor Leonardo Favio hacía las veces de maestro de ceremonias, los músicos de la orquesta sinfónica afinaban sus instrumentos, en tanto que, abajo, la gente que llegaba a raudales desde temprano cantando estribillos y portando coloridas pancartas y banderas, se apiñaba lo más cerca que podía del inmenso palco decorado con las imágenes de Perón, Evita e Isabel.

Era la gran fiesta de recepción que Perón no había tenido el 17 de noviembre de 1972 cuando los militares lo impidieron. Hasta el mediodía todo se desarrolló en un marco de tranquilidad y buen tono, apenas empañados por algunas escaramuzas entre grupos antagónicos que no alcanzaban a presagiar la dimensión de la tragedia que se avecinaba y que se desató pasadas las dos de la tarde, cuando, de repente, comenzaron a silbar las balas sobre las cabezas de la multitud sin que se supiera de dónde venían ni a quién estaban dirigidas. Instintivamente, todos los presentes se

arrojaron al suelo para protegerse del fuego de francotiradores apostados en la arboleda vecina, en tanto que Leonardo Favio se desgañitaba tratando en vano de calmar a la concurrencia, hasta que él mismo y los músicos de la orquesta debieron hacer cuerpo a tierra en el tablado del escenario para protegerse de los balazos disparados a mansalva. Enseguida, confusión, gritos, sirenas de ambulancias, corridas y desbande generalizado. Nadie sabía muy bien lo que estaba pasando, cuya gravedad obligó a desviar el avión que traía a Perón hacia la base militar de Morón.

Con el paso de las horas se fueron conociendo los primeros detalles del enfrentamiento que se desencadenó cuando una gruesa columna de manifestantes de la Juventud Peronista que avanzaba desde el sur, supuestamente, pretendió arrimarse demasiado al palco y fue repelida por las bandas armadas que controlaban el sector para que nadie llegase a las inmediaciones del escenario desde donde hablaría Perón. El resultado fueron a lo menos trece muertos —aunque se sospecha que pudieron ser más— y centenares de heridos. La mayoría de las víctimas pertenecían a la Tendencia Revolucionaria, el blanco elegido por los tiradores furtivos. Horas más tarde, Favio denunció que en las instalaciones del Hotel Internacional de Ezeiza, donde los organizadores habían fijado su cuartel general, se torturó y asesinó a militantes de la JP cazados como ratas en las cercanías del palco y los bosques aledaños.

Una descomunal frustración fue la sensación dominante de los dos millones de argentinos que habían acudido ese día para reeditar un acontecimiento popular de características similares al legendario 17 de octubre de 1945, que, sin que nadie supiera cómo y por qué, trocó en la jornada de violencia y terror vivida en los bosques de Ezeiza, donde la gente deambuló despavorida durante horas para ponerse a salvo del acecho de los violentos.

Ezeiza fue una bisagra, un crudo anticipo de lo que vendría. Un capítulo decisivo de la metamorfosis peronista que estaba próxima a ingresar en la siguiente fase, más aterradora aún.

Esa noche, desde la residencia de Olivos, Perón brindó un mensaje escueto, lamentándose por «toda esa pobre gente que desde tan lejos había ido a Ezeiza para darme una bienvenida que me hace inmensamente feliz.» Al día siguiente, esta vez desde Gaspar Campos, acompañado por Cámpora, Isabel, López Rega y Raúl Lastiri; un Perón ofuscado y de rostro adusto no repartió

culpas por igual, sino que descargó toda la responsabilidad de lo sucedido en un solo sector:

«Nosotros somos justicialistas. Levantamos una bandera tan distante de uno como de otro de los imperialismos dominantes. No creo que haya un argentino que no sepa lo que ello significa. No hay nuevos rótulos que califiquen nuestra doctrina ni nuestra ideología: somos lo que las veinte verdades peronistas dicen.

Los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro Movimiento o tomar el poder que el pueblo ha reconquistado se equivocan. Los que pretextan lo inconcesable, aunque cubran sus falsos designios con gritos engañosos, o se empeñen en peleas descabelladas, no pueden engañar a nadie. Por eso deseo advertir a los que tratan de infiltrarse en los estamentos populares o estatales que por ese camino van mal.»

La última frase del estudiado discurso no dejaba lugar a dudas acerca de qué lado del mostrador estaba Perón, indignado con quienes consideraba responsables de lo que había pasado:

«A los enemigos embozados y encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos porque cuando los pueblos agotan la paciencia hacen tronar el escarmiento.»

La dureza de la alocución seguida con atención por millones de televidentes volvía el reloj hacia atrás, hacia los tiempos intransigentes de «Ni yanquis, ni marxistas», y, por cierto, marcaba una clara opción del líder por *la patria peronista* y sus cultores en desmedro de la otrora juventud maravillosa. Se iniciaba la cuenta regresiva: el escarmiento estaba más cerca de lo que muchos creían y la edad de la inocencia tocaba abruptamente a su fin.

Horacio Verbitsky, por entonces oficial de inteligencia de Montoneros, en *Ezeiza* (Editorial Contrapunto, 1985), años más

tarde, traza un balance de los sucesos del 20 de junio, desde la perspectiva de la organización a la que pertenecía:

«La izquierda peronista cometió errores que la condujeron indefensa al desfiladero del 20 de junio. Ignoraba que eran tan *peronistas* las posiciones de sus adversarios internos como las propias y planteó la pugna en términos de lealtad a un hombre cuyas ideas no conocía a fondo. No se detuvo a consolidar los avances conseguidos entre 1968 y 1973 ni a estudiar las reglas de juego de la nueva etapa. Imaginó que su mayor capacidad de movilización y organización de masas bastaría para inclinar la balanza en su favor frente a la dirigencia sindical burocrática. Creyó que sería posible compartir la conducción con Perón en cuanto este reparara en su poder. Se acostumbró a interpretar la realidad política en términos de estrategia militar, pero no previó que se recurriría a las armas para frenar su marcha impetuosa. Fue a un tiempo prepotente e ingenua.»

A los pocos días, Perón sufrió un infarto agudo de miocardio, según certificó el doctor Pedro Cossio que lo asistió en esa oportunidad. Por esas horas, un Càmpora atribulado por las repercusiones de Ezeiza, firmó un decreto devolviendo a Perón el grado de teniente general y el uso del uniforme militar, acciones reparadoras que no mejoraron el humor del jefe justicialista ni su encono hacia el presidente.

La tragedia de Ezeiza fue, desde el punto de vista histórico, un punto de inflexión que desnudó brutalmente la fractura interna del peronismo; al inclinar la balanza hacia la derecha, selló la suerte del gobierno camporista, que a esa altura había ingresado en un irreversible cono de sombras del que ya no escaparía. Ese día fatídico para el pueblo argentino, quedó palmariamente demostrado que la convivencia pacífica de corrientes tan antagónicas bajo un mismo paraguas protector constituía una utopía de imposible cumplimiento. Que ni siquiera la inconmensurable mediación de Perón alcanzaba para lograr un equilibrio elemental, capaz de

poner a la sociedad a cubierto de riesgos mayores. El presidente, ignorado y vaciado de autoridad, procuró seguir adelante a duras penas; despachaba en la Casa de Gobierno y visitaba a Perón en Gaspar Campos, donde este había fijado residencia, pero el vínculo con el líder del movimiento estaba irreparablemente dañado, y sus días como presidente, contados.

Miguel Bonasso, en la obra ya citada, reafirma lo anterior:

«Entre el 4 y el 13 de julio, el mando político en la Argentina se dividió en tres sedes: una pública y oficial (la Rosada); otra pública y oficiosa (Gaspar Campos), y una secreta (el departamento de Llambí). La primera cubría las formas del poder, con actos y ceremonias que apenas si le sirvieron al Tío para ratificar su fidelidad al proyecto de país que habían votado las mayorías. Gaspar Campos era el centro magnético. Allí concurrieron durante varios días el Presidente y sus ministros, "para recibir orientaciones del jefe del Movimiento". En el departamento de Llambí se cocinaba el gobierno que presidiría formalmente Raúl Lastiri.»

Horacio Verbitzky, ya citado, desgrana la misma visión: en la introducción de *Ezeiza*, donde anuncia que el libro se propone establecer, en primer lugar, «que la masacre fue premeditada para desplazar a Cámpora y copar el poder.» En otras palabras, que no se trató de un hecho fortuito sino que formaba parte de un plan que perseguía un objetivo superior: la recuperación del poder *prestado* a Cámpora.

Los hechos posteriores parecen confirmar esa presunción: el ala sindical, fortalecida por el explícito aval recibido por parte de Perón, tras apenas cuarenta y nueve días de gobierno, provocó las renunciaciones de Cámpora y Solano Lima y la consiguiente convocatoria a nuevas elecciones presidenciales. La ficción de tener un presidente *vicario* del poder real tocaba a su fin.

Con el presidente provisional del Senado Alejandro Díaz Bialeto convenientemente fuera del país, le tocó cubrir la acefalía transitoria a Raúl Lastiri, titular de la Cámara de Diputados. El yerno de López Rega, que padecía de cáncer, fue apenas la fachada

constitucional de una transición cuyo comando estaba fuera de la Casa Rosada, tanto que su movida más recordada fue mostrar su colección de corbatas a la revista *Gente*.

Siguiendo expresas directivas de Perón, el 4 de agosto, Gelbard anunció el otorgamiento de un crédito de 200 millones de dólares a Cuba, rompiendo por primera vez desde 1962 el bloqueo latinoamericano a la isla impuesto por los Estados Unidos. María Seoane, ya citada, explica que:

«(...) se trataba de un préstamo rotativo anual por el término de seis años, lo que en realidad elevaba su monto a 1.200 millones de dólares”, y agrega que este crédito “le permitía a Fidel adquirir maquinaria liviana, sobre todo del parque automotor y agrícola, a empresas radicadas en la Argentina.»

Fue un gesto muy fuerte del gobierno argentino, concebido por Perón, para reafirmar la doctrina de la Tercera Posición y la pertenencia de la Argentina al movimiento de países no alineados, equidistante de las dos potencias mundiales en la era de la bipolaridad.

Ese mismo día, para terminar de cuajo con las especulaciones y rumores echados a rodar, Perón anunció que encabezaría la fórmula del justicialismo acompañado por su tercera esposa, María Estela Martínez. Al parecer, durante una entrevista mantenida días antes con Ricardo Balbín, el jefe radical rechazó la vicepresidencia que supuestamente se le ofreció. Según Seoane, ya citada:

«Este fue —después de Ezeiza— el segundo round del enfrentamiento entre la izquierda y la derecha del peronismo, en el que evidentemente ganaba la derecha.»

Por esos días, Rucci organizó un desfile de un puñado de colectivos fletados por la UOM que dieron varias vueltas a la manzana que rodeaba la residencia de Gaspar Campos, en tanto que una semana más tarde, la Tendencia replicó, movilizandolos con la finalidad de hacer una demostración de fuerza y romper el cerco que aislaba a Perón, la consigna táctica que la conducción montonera bajaba desde la revista *El Descamisado*.

El órgano oficial de los Montoneros publicó por esos días una entrevista a Mario Firmenich, en la que el jefe guerrillero aclara —u oscurece, según cómo se lo mire— la postura de la organización en la coyuntura. Tras una larga perorata acerca de la relación entre guerrilla y política, el número uno de los Montoneros afirma que:

«En las actuales circunstancias que estamos pasando de la consigna "Perón vuelve" a "Perón al poder" nos encontramos en un cambio de etapa que obliga a un cambio en los métodos.»

Sin embargo, esa respuesta prometedora se desvanece por completo al responder acerca de si ello implicaba en concreto abandonar las armas:

«De ninguna manera. El poder político brota de la boca de un fusil. Si hemos llegado hasta aquí es porque tuvimos fusiles y los usamos. Si abandonáramos las armas retrocederíamos en las posiciones políticas. En la guerra hay momentos de enfrentamientos como los que hemos pasado y momentos de tregua en los que cada fuerza se prepara para el próximo enfrentamiento.»

Así las cosas, la dirección de la módica campaña electoral corrió por cuenta esta vez de las estructuras formales del Movimiento Nacional Justicialista y de las 62 Organizaciones Peronistas, en desmedro de los sectores juveniles que, carentes del aval de Perón y sin el protagonismo de otras jornadas, no terminaban de digerir la postulación de Isabel a la vicepresidencia ni el creciente ninguneo del general convertido en candidato contra su voluntad.

El 22 de agosto, primer aniversario de la masacre de Trelew, en un acto realizado en el estadio de Atlanta y convocado por la Juventud Peronista, Mario Eduardo Firmenich objetó públicamente la candidatura de María Estela Martínez y cargó, con nombre propio, contra Lastiri, López Rega, Osinde y Rucci. La tribuna coreaba un estribillo tan estremecedor como premonitorio: «Rucci, traidor, a vos te va a pasar lo mismo que a Vandor.» En ese acto,

le tocó a José María Pujadas, padre de Mariano, recordar a los mártires de Trelew en la evocación de su hijo muerto.

Un par de semanas más tarde, el ERP intentó asaltar el Comando de Sanidad, en la Capital Federal, con la finalidad de llevarse armamentos y material médico, pero el intento resultó fallido. Ese día perdió la vida el teniente coronel Raúl Duarte Ardoy y fueron capturados trece integrantes del ERP, entre ellos el soldado Hernán Invernizzi, sindicado como entregador, y el periodista Eduardo Anguita.

Mientras tanto, en Chile, el general Augusto Pinochet derrocaba a Salvador Allende, poniendo en marcha una de las dictaduras más sangrientas de la historia latinoamericana. De a poco, la metamorfosis se extendía como una mancha viscosa, asumiendo dimensión continental.

Perón al poder

Las elecciones para subsanar la acefalía derivada de las renunciadas de Cámpora y Solano Lima se realizaron el domingo 23 de septiembre de 1973. No hubo sorpresas: la fórmula Perón-Perón obtuvo el 62 por ciento de los votos, imponiéndose por amplio margen al binomio radical, integrado por Ricardo Balbín y Fernando de la Rúa. Catapultado por ese resultado plebiscitario, el viejo líder, que en unos días más cumpliría 78 años, llegaba a la presidencia de la República por tercera vez, caso único en la historia del país, restableciendo el orden natural de las cosas —alterado por la entronización de la fórmula alternativa del 11 de marzo— mediante la unificación del poder formal, que desde el 25 de mayo habían detentado otros, con el poder real, el verdadero, en una sola persona: él mismo.

El 12 de octubre, un Perón agotado y con serios problemas de salud a cuestas asumió el cargo que ejercería por pocos meses, hasta su muerte en julio del año siguiente. Apelamos una vez a la crónica de Miguel Bonasso, por entonces director del diario *Noticias*, órgano de prensa de los Montoneros:

«Después de tomar juramento a sus ministros, que eran los de Lastiri, Perón regresó al balcón de los recuerdos, que ya no era el de

antes: ahora debía hablar dentro de un cubo de vidrio a prueba de balas, frente a una multitud que los diarios estimaron en unas 100.000 personas. Una concurrencia diez veces menor a la del 25 de mayo. Con mucho más orden y bastante menos entusiasmo. Un curioso fenómeno que contrastaba con los datos electorales, con ese millón más que había recibido el Padre Eterno por encima de su Vicario.»

Más adelante comenta en lenguaje callejero, ramplón si se quiere, lo que pasaba del otro lado del mostrador:

«Los Montoneros no armaron quilombo ese día. Se limitaron a vivir al Viejo y a repartir volantes en la Plaza informando de su fusión con las FAR.»

Perón jamás perdonaría a los Montoneros, aunque estos no se hubiesen hecho cargo de manera explícita del atentado, por la muerte del secretario general de la CGT José Ignacio Rucci, cometido apenas un par de días después de las elecciones que lo consagraron presidente de los argentinos por tercera vez. Rucci no era un dirigente del montón: era una pieza clave en el delicado equilibrio concebido por Perón, un engranaje vital en la relación con el sindicalismo y, además, depositario de su afecto, algo que el jefe peronista prodigaba a muy pocos elegidos. Por eso, Perón tomó la muerte de Rucci como una afrenta personal, como un desafío a su jefatura. Desde esa perspectiva, el crimen provocó en el ánimo del conductor un efecto parecido al que generaron los hechos de Ezeiza. El olor a sangre puso en alerta a las hienas: las represalias de la derecha no tardaron en hacerse sentir, alimentando el círculo vicioso de violencia en el que el peronismo estaba encerrado.

El gabinete que acompañó a Perón estuvo integrado en su gran mayoría por peronistas históricos que ya venían actuando en el gobierno: Benito Llambí (Interior), Jorge Taiana (Educación), Alberto Juan Vignes (Relaciones Exteriores), Ángel Federico Robledo (Defensa), y Antonio Benítez (Justicia). José Ber Gelbard y José López Rega siguieron en sus puestos, lo mismo que Ricardo

Otero en Trabajo. La única novedad era que ya no quedaban representantes de la Tendencia en el gobierno. De todos los mencionados, el único que mantuvo el vínculo con Montoneros fue Gelbard, los demás ministros se mostraron renuentes, cuando no hostiles.

El nuevo escenario facilitó la gravitación de la figura más siniestra de la Argentina de todos los tiempos, José López Rega, un individuo oscuro, mediocre, de hábitos extravagantes y esotéricos, que se ganó la confianza de Perón sirviéndolo como mucamo durante los años de exilio y que, ayudado por Isabel, logró encaramarse a la cima del poder.

Para entonces, FAR y Montoneros habían culminado el proceso de fusión que llevó varios meses en una sola organización armada, que tomó el nombre de la segunda de ellas por ser más reconocido en el ámbito popular. La amalgama, lejos de representar una síntesis virtuosa, compactaba el sesgo militarista de las FAR con el populismo intrínseco de Montoneros, una receta alejada del pensamiento de fundadores como Carlos Olmedo (FAR) y José Sabino Navarro (Montoneros). Antes, Montoneros había absorbido a Descamisados; en tanto que las FAP —o lo que quedaba de ellas— atravesaban un proceso de desintegración que no tendría vuelta atrás.

La nueva conducción unificada, para relativizar el cada vez más evidente distanciamiento de Perón, prefirió justificar la exclusión y persecución desatada contra los sectores que representaban atribuyéndolas al supuesto *cercos* que aislaba a Perón del pueblo; según ellos, una valla levantada por un entorno en el que sobresalían López Rega e Isabel como figuras antagónicas centrales elegidas para la ocasión. Para entonces, la conducción montonera había revisado su propia ficción y caído en la cuenta de que Perón no había regresado a la Argentina para promover la revolución socialista ni estaba dispuesto a sacarse de encima a la derecha peronista y los sectores más reaccionarios del movimiento; ni, mucho menos, a compartir la conducción estratégica con ellos, como en algún momento creyeron posible.

De lo que parecían no haber caído en la cuenta era que, al sacrificar la acción política en aras de un militarismo creciente como venían haciendo, forzaban a Perón a endurecer su discurso a la vez que, por reacción, lo empujaban en brazos de sus enemigos.

La prueba está en que, tras la muerte de Rucci, Perón, agotada su paciencia, designó al comisario Alberto Villar como jefe de la Policía Federal y al comisario Luis Margaride como Superintendente de Seguridad de la fuerza, la dupla policial con la que de allí en más tendrían que vérselas Montoneros y ERP.

Teniendo en cuenta el giro que tomaban los acontecimientos en el país y la correlación de fuerzas que inclinaba el fiel de la balanza cada vez más hacia la derecha, a Obregón Cano le esperaba un futuro político poco promisorio. A escasos meses de asumir, el gobierno cordobés había dejado en el camino el glamour de los comienzos y estaba envuelto en las turbulencias propias de la época, sometido al fuego cruzado de la izquierda peronista que lo apoyaba pero que a su vez le demandaba mayor vigor, y de la derecha que se mantenía al acecho.

El clima social en la provincia no era el mejor. Las medidas administrativas adoptadas por el gobierno obregonista resultaron conflictivas y, por motivos diversos y puntuales, enfrentaron al gobierno con sectores gravitantes de la sociedad cordobesa como la Iglesia, los ganaderos, los mandos policiales y los empresarios del transporte. La sanción legislativa del nuevo estatuto para los docentes de establecimientos privados de enseñanza; la política de carnes basada en precios máximos y severos controles para asegurar el abastecimiento; la depuración y readaptación de las fuerzas de seguridad a la etapa democrática y la relación laboral de los choferes de UTA con la FETAP, la federación que agrupaba a los transportistas, chocaron con la oposición de los sectores afectados por las políticas gubernamentales que no trepidaron en hacer sentir sus voces, enrareciendo el clima social reinante y ocasionando un desgaste temprano al gobierno obregonista.

Tampoco ayudaba la evolución del proceso nacional ni los consiguientes realineamientos en lo más alto del poder donde no quedaban vestigios del camporismo residual. El viraje del gobierno desde el ambiguo «socialismo nacional», proclamado durante la campaña, a una postura netamente capitalista que hacía eje en el Pacto Social impulsado por el ministro Gelbard, desacomodaba al gobierno de Córdoba, fuertemente influenciado por la JP y otros sectores radicalizados que reclamaban el cabal cumplimiento del programa popular votado el 11 de marzo.

Las secuelas de Ezeiza y, en particular, la renuncia prematura del presidente Cámpora no fueron buenas noticias para las auto-

ridades cordobesas a quienes, en el nuevo escenario, les resultaba cada vez más difícil conciliar el rumbo nacional con la inestable situación provincial y, sobre todo, sintonizar el discurso propio a la nueva realidad sin arriar las banderas revolucionarias o dejar los principios por el camino. Un dilema complejo, que a menudo quedaba a la vista sin conformar del todo a nadie. Con un gabinete nacional en el que casi no tenía amigos y un Perón distante y declinante a su vez, a Obregón Cano se le estrechaba cada vez más el margen de maniobra.

Conscientes de la vulnerabilidad apuntada, sus adversarios internos redoblaron su actividad para socavar las bases de una administración provincial que lucía más débil cada día, a la que reclamaban a viva voz que se desprendiera de los *infiltrados* que, según ellos, abrigaba en su seno y contaminaban la pureza doctrinaria que debía exhibir todo gobierno que se preciara de peronista. Representantes de la ortodoxia peronista cordobesa trajinaban los pasillos de los ministerios nacionales y sindicatos afines llevando y trayendo información y directivas para desgastar al gobierno local. En ese contexto, no ayudó demasiado que el 17 de octubre la dirección de Montoneros eligiera la capital cordobesa para celebrar el Día de la Lealtad. Ese día, desde un palco levantado en la explanada Vélez Sarsfield, en el corazón de la ciudad, Roberto Quieto y Mario Firmerich hablaron a la concurrencia.

Entretanto, a nivel nacional, el divorcio entre Perón y la izquierda peronista se profundizaba día a día, complicando cada vez más el oscuro presente del país. Contrariado por la renuencia de los sectores ligados a la Tendencia Revolucionaria a adoptar su libreto pacificador y acatar sus directivas, el presidente disimulaba cada vez con menor frecuencia el fastidio que le causaban esos desafiantes actos de rebeldía. Para contrarrestar la influencia todavía incontrastable de la Tendencia en el seno del movimiento juvenil, Perón insuflaba oxígeno a otras corrientes vinculadas a la derecha peronista, referenciadas en López Rega y las 62 Organizaciones —como la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA), comandada por Julio Yessi—, aún a sabiendas de que no tenían ni por asomo la representatividad ni la capacidad de movilización de la JP Regionales, como se identificaba a la estructura territorial ligada a Montoneros, además de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), la Agrupación

Evita y el Movimiento Villero Peronista (MVP). La táctica de Perón consistía en emitir claras señales de que ese sector juvenil ya no tenía la exclusividad de trato ni otras prerrogativas que supo tener en el pasado cuando gozaba de la consideración y afecto del jefe supremo. Para entonces, lo de *juventud maravillosa* de otros tiempos había caído por completo en el olvido. Con el paso de los días, el balance de fuerzas en el esquema de poder favorecía de manera ostensible a los sectores más reaccionarios del gobierno y el Movimiento Peronista.

El mayor fastidio que los Montoneros causaban a Perón era por no haber entrado en razones y depuesto las armas como él hubiera deseado, y que en lugar de eso persistieran en la línea armada; a más del ERP, que pese a haber sido declarado ilegal por el gobierno, seguía operando militarmente y alterando el clima de paz social que Perón ansiaba imponer a toda costa en una Argentina sacudida por la violencia. Para entonces, la cúpula del ERP se había establecido en Córdoba, donde la organización contaba con mayor logística, decidida a extender sus operaciones a las provincias del NOA, en especial a Tucumán.

La gota que colmó el vaso fue el ataque a la guarnición militar de Azul, perpetrada por el ERP en el mes de enero de 1974, donde perdieron la vida, entre otros, el coronel Gay, jefe del regimiento, y su esposa. La ira de Perón a raíz de la muerte del sobrino de un antiguo camarada de armas se reflejó en el encendido discurso que, en su carácter de presidente de la Nación en ejercicio y vistiendo uniforme militar, dirigió ese mismo día por radio y televisión a todo el país, y que vale la pena transcribir para entender mejor el estado de ánimo del presidente y el clima que se vivía por esas horas:

«Ya no se trata solo de grupos de delincuentes, sino de una organización que, actuando con objetivos y direcciones foráneos, ataca al Estado y a sus instituciones como medio de quebrantar la unidad del pueblo argentino y provocar un caos que impida la reconstrucción y la liberación en que estamos empeñados. Es la delincuencia asociada a un grupo de mercenarios que actúan mediante la simulación de un grupo de móviles políticos tan inconfesables como inexplicables.

En consecuencia, ni el gobierno, que ha recibido un mandato popular claro, plebiscitario, ni el pueblo argentino, que ha demostrado con creces su deseo de pacificación y liberación, pueden permanecer inermes ante estos ataques abiertos, que pone en peligro la seguridad de la ciudadanía, cada día expuesta a la acción criminal de esta banda de asaltantes.»

Uno de los párrafos más cáusticos apuntaba directamente a la cabeza de Oscar Bidegain, gobernador de la provincia de Buenos Aires:

«No es por casualidad que estas acciones se produzcan en determinadas jurisdicciones; es indudable que ello obedece a una impunidad en que la desaprensión e incapacidad lo hacen posible.

(...) Aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que pretendemos una Patria justa, libre y soberana, lo que nos obliga perentoriamente a movilizarnos en su defensa y empeñarnos decididamente en la lucha a que dé lugar. Sin ello, ni la reconstrucción nacional ni la liberación serán posibles.»

Y el remate, en tono enérgico:

«Será, pues, la actitud de todos la que me impondrá mi futura conducta; ha pasado la hora de gritar "Perón", ha llegado la hora de defenderlo.»

Oscar Bidegain, blanco de las críticas del presidente, huérfano de apoyo, renunció a los pocos días, quedando el gobierno de la principal provincia argentina en manos del vicegobernador, Victorio Calabró, conspicuo dirigente de la UOM. La cosa no paró allí: la furia de Perón se extendió a los representantes parlamentarios de la Juventud Peronista vinculada a Montoneros, quienes se ne-

gaban a votar las modificaciones al Código Penal propuestas por el Poder Ejecutivo para agravar las penas de varios delitos en el marco de la lucha contra la subversión. Tras una tensa entrevista con Perón, renunciaron a sus bancas ocho legisladores de ese sector, entre ellos los diputados por Córdoba Roberto Vidaña y Rodolfo Vittar.

Los legisladores de la JP concurren a Olivos desprevenidos, creyendo que se trataría de un encuentro privado con el presidente de la República donde podrían explayarse sin reservas como en los viejos tiempos. Sin embargo, se llevaron una gran sorpresa cuando Perón los recibió con gesto adusto, rodeado de funcionarios, entre ellos López Rega, y con las cámaras de televisión listas para grabar la entrevista, convertida sin aviso en audiencia pública. Ese día, Perón, luego de escuchar a los visitantes, que a duras penas balbucearon sus reclamos, fue inflexible: «El que no está contento se va», les dijo, cortante. «Lo que no es lícito es estar defendiendo otras causas y usar la camiseta peronista», repitió para que no quedaran dudas de que no estaba dispuesto a dar marcha atrás ni a efectuar concesiones en la lucha contra el terrorismo.

La réplica oficial de los Montoneros fue la tapa de la revista *El Descamisado*, órgano de prensa de la organización, del 22 de enero de ese año: «Si los diputados aprueban las leyes represivas votarán leña para el pueblo.» A esa altura, el distanciamiento entre Perón y la izquierda peronista era irreversible.

Juan Bautista Yofre, en *El escarmiento* (Editorial Sudamericana, 2010), aporta la visión de la derecha respecto de aquellos acontecimientos:

«El ataque del PRT-ERP a la Guarnición Militar de Azul tuvo la triste virtud de poner sobre el tapete una larga lista de incongruencias. Sacó a la superficie la contradicción de una guerrilla que luchaba por la “liberación popular” mientras que el presidente era nada menos que Juan Domingo Perón. Se derrumbaba a los ojos de todo el mundo aquel andamiaje intelectual-ideológico de la “violencia de abajo” como respuesta a la “violencia de arriba”.»

Pocos días después, en medio de una conferencia de prensa, la periodista Ana Guzzetti del diario *El Mundo*, controlado por el PRT, preguntó a boca de jarro qué medidas adoptaría el gobierno para frenar el accionar de los grupos policiales de ultraderecha. Un Perón fuera de sí le pidió que se identificara y de inmediato ordenó formarle proceso.

La escala siguiente sería Córdoba.

Metamorfosis cordobesa

El historiador cordobés Roberto Ferrero en su artículo «Obregón Cano en la encrucijada», incluido en la compilación *Córdoba 1973. Escritos para Ricardo Obregón Cano* (UNC, 2912), resume el cuadro de situación en Córdoba a fines de 1973:

«Obregón no aceptó ceder espacios de poder al peronismo ortodoxo local, que después de un corto tiempo empezó a conspirar para obligarlo a renunciar. El general Perón alentaba la conspiración con sus palabras acerca de la "infección" que afectaría a Córdoba, refiriéndose a la presencia de la antes ponderada "juventud maravillosa" en diversos niveles de la administración obregonista. Por lo demás, antes de terminar el año '73, el gobierno de Obregón Cano se había enredado en una serie de desgastantes conflictos con las empresas de transporte urbano, con el Intendente de la capital, con las autoridades eclesiásticas, con los productores de carne y con Simó y su gente. Semiparalizado por estas circunstancias, sus tenaces opositores del interior del peronismo decidieron acelerar los preparativos para un golpe destituyente —renuncia o intervención federal— para el cual contaban con el visto bueno las autoridades nacionales y la colaboración material de López Rega.»

El primer indicio de que Córdoba estaba en la mira apareció en la edición del 22 de enero del diario *Mayoría*, en cuya contratapa, en la sección *Sotto voce*, se lee:

«Serían elevados al Congreso de la Nación en las próximas cuarenta y ocho horas los pedidos de intervención para las provincias de Buenos Aires y Córdoba, en forma sucesiva. La resolución fue adoptada ayer por la tarde, durante una prolongada reunión entre el teniente general Perón y el ministro Benito Llambí.»

El mismo libelo deslizaba que «los candidatos para ambas intervenciones serían los generales José Embrioni, en Buenos Aires, y Miguel Ángel Iñíguez en Córdoba.»

La anunciada intervención a Córdoba no se produjo, pero a los pocos días un motín policial que rompió con todos los códigos conocidos exigió la renuncia de las autoridades constitucionales de la provincia mediterránea. Para entonces, el gobernador de Córdoba iba dejando aliados en el camino, como el diputado nacional Carlos Palacio Deheza, que por esas horas declaró «tanto en el orden nacional como provincial, el peronismo de Córdoba está tan marginado como durante la dictadura.» El brazo ejecutor de la desestabilización institucional era, insólitamente, el jefe de Policía, teniente coronel Antonio Domingo Navarro. Fue él quien, el último día del mes de febrero de ese año de 1974, se insubordinó y provocó el levantamiento de la fuerza bajo su mando con el fin de crear un clima destituyente en la provincia, funcional a los planes del gobierno nacional.

Los hechos se desencadenaron a partir de la decisión de Obregón Cano de relevar a Navarro de su cargo, convencido de que el jefe de Policía que él mismo había designado no le profesaba lealtad, sino que era la cabeza de una conspiración contra el gobierno soliviantada desde el Ministerio de Bienestar Social de la Nación. El miércoles 27 de febrero de 1974 apareció en los diarios de Córdoba una solicitada firmada, entre otros, por un Comando José Ignacio Rucci, las 62 Organizaciones y un Comando 26 de septiembre, denunciando:

«(...) la nueva farsa que pretenden los seudorepresentantes del peronismo Obregón Cano, Atilio López y su camarilla de bolches que han usurpado los cargos de los legítimos peronistas. Pero la paciencia ha llegado a su fin.»

El brulote era el presagio de cosas más graves que se avecinaban. El mismo día que se produjo el levantamiento, Obregón Cano firmó la destitución de Navarro, quien, lejos de acatar la resolución, dispuso el autoacuartelamiento de la fuerza policial con el respaldo de los cuerpos principales y mandos superiores y exigió, a su vez, la renuncia del gobernador. Esa misma noche, medio centenar de policías vestidos de civil irrumpieron en la Casa de las Tejas y detuvieron a Obregón Cano y Atilio López, que se hallaban reunidos en el despacho principal. En un hecho sin precedentes, se llevaron también a alrededor de setenta personas que se encontraba a esa hora en la sede oficial del gobierno, entre ellos ministros, altos funcionarios y legisladores. Los detenidos fueron trasladados al Comando Radioeléctrico, donde permanecieron hasta que el juez federal Adolfo Zamboni Ledesma, dispuso su liberación.

Al día siguiente de la singular redada policial, en medio de la acefalía provocada por el motín policial, ante la ausencia del presidente provisional de la Cámara de Senadores, asumió como gobernador interino el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Mario Dante Agodino, un dirigente de larga trayectoria en el justicialismo, oriundo de la ciudad de San Francisco. La movida contó con el apoyo del sindicalismo ortodoxo, del antunismo, de la Juventud Sindical Peronista (JSP) y de otras facciones que durante varios días desplegaron bandas armadas en la vía pública y en sitios clave como emisoras de radio, Legislatura, facultades, sedes partidarias y sindicatos.

El fundamento del extravagante golpe de mano que borró de un plumazo a las autoridades legítimas era, en palabras de los sediciosos, que Obregón y López amparaban a infiltrados marxistas que se habían adueñado del gobierno en desmedro de los auténticos peronistas, a quienes no les quedó más remedio que sacarlos por la fuerza con el concurso de la fuerza policial. El

gobierno nacional, entretanto, adoptaba una actitud pasiva y de supuesta prescindencia, que en la práctica significaba un tácito aval a los sediciosos. El propio Perón había tomado distancia del conflicto, afirmando que «si los cordobeses no saben arreglar sus problemas, que se cocinen en su propia salsa.»

Si bien Obregón Cano y los demás rehenes fueron liberados al cabo de algunas horas de cautiverio, las cartas estaban echadas: cuestionado por los sectores tradicionales del peronismo a raíz de su complacencia para con la izquierda peronista y carente de apoyo nacional, no le quedó otro camino que alejarse del poder. Gobernador y vice oficializaron sus respectivas renunciaciones.

Según consigna Juan Bautista Yofre, ya citado, Obregón y López entregaron las renunciaciones a Ferdinando Pedrini, jefe del bloque de Diputados peronistas en el Congreso Nacional, el miércoles 7 de marzo por la tarde. A la mañana siguiente, los renunciantes mantuvieron una entrevista con Raúl Lastiri, presidente de la Cámara baja, y con Antonio Trócoli, jefe de la bancada radical. Esa misma noche, con el acompañamiento del bloque de la UCR —con excepción de los diputados alfonsinistas— que permitió lograr los dos tercios requeridos, se sancionó la intervención a Córdoba.

La medida alcanzaría únicamente al Poder Ejecutivo, tal la condición que planteó el radicalismo a cambio de sus votos. En el mensaje que acompañó el proyecto de ley de intervención a la provincia puede leerse que «las autoridades elegidas no supieron colocarse a la altura de los deberes de su función», y, «sin percatarse se fueron alejando de la revolución auténtica.» Para el gobierno nacional, las autoridades cordobesas fueron tolerantes en exceso con los agentes del caos e incluso habían fomentado «diversas situaciones conflictivas que fueron provocando un creciente clima de intranquilidad pública.» La metamorfosis iba más adelantada en Córdoba que en el resto del país; una vez más, la provincia se anticipaba a la suerte general.

Yofre señala que por esas horas se manejaron varios nombres para el cargo de interventor, entre ellos el general (R) Raúl Carcagno, el general (R) Raúl Tanco y el general (R) Eduardo Labanca, hasta que el día 11 de marzo, primer aniversario del triunfo electoral del FREJULI, se develó la incógnita: el delegado del Gobierno nacional en Córdoba sería Duilio Brunello, quien cuatro días más tarde fue puesto en funciones por el ministro Llambí. Hasta ese momento, Brunello se desempeñaba como secretario de Estado de

Coordinación y Promoción de la Comunidad en el Ministerio de Bienestar Social. De perfil conciliador, trató de componer un equilibrio utópico que no conformó a nadie, menos aún a la derecha que había prohijado el golpe contra Obregón Cano para quedarse con el poder, un objetivo que no cesaría hasta conseguir.

Ruptura definitiva

Entretanto, la brecha entre Perón y la izquierda peronista seguía ensanchándose cada vez más. El 23 de marzo, Montoneros eliminó a Rogelio Coria, dirigente histórico del gremio de la construcción, la UOCRA. Los primeros días de abril se tuvo conocimiento de una nueva disidencia en el seno de la Tendencia Revolucionaria, esta vez planteada por quienes veían con preocupación que la relación con Perón transitaba un camino sin retorno. El santafesino Jorge Obeid, cabeza visible del sector disidente, renunció a la jefatura de la Regional II de la JP; en tanto que en las semanas siguientes, otros dirigentes siguieron sus pasos. Era el germen de la corriente que daría en llamarse JP Lealtad y que tendría algunos adeptos en Córdoba.

El delgado hilo entre Perón y Montoneros terminó de cortarse el 1º de mayo, durante el acto convocado en la Plaza de Mayo para conmemorar el Día de los Trabajadores. Allí, un Perón molesto por los cánticos hostiles con que los sectores ligados a la Tendencia interrumpían su discurso y mortificaban a Isabel, que se hallaba a su lado, se salió de las casillas y trató a los jóvenes de «imberbes» y «estúpidos.» Antes de que finalizara su flamígero mensaje, pronunciado en tono desafiante, los militantes de la Tendencia enrollaron sus carteles y abandonaron masivamente el lugar, despoblando casi la mitad de la plaza. La fractura interna cobraba visibilidad.

José Ignacio García Hamilton, en su libro ya citado, refleja la decepción que invadió al sector que respondía a Montoneros:

«Los integrantes de las "formaciones especiales" habían ayudado a desestabilizar a los gobiernos militares que rechazaban al líder peronista y a preparar su retorno exitoso; pero ahora entendían que sus expresiones "trasvasamiento generacional" y "socialis-

mo nacional" no habían significado lo que ellos esperaban.»

Diez días más tarde, el sacerdote tercermundista Carlos Mugica fue asesinado por elementos facciosos que más tarde adoptarían el nombre de Tres A. En las semanas siguientes, la espiral de violencia, lejos de atenuarse, fue en aumento.

Perón se despidió de su pueblo el 12 de junio. Ese día pronunció su último discurso desde el emblemático balcón de la Casa Rosada, dejando para la historia la frase que marcó su designio postrero: «Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que, para mí, es la palabra del pueblo argentino.» Durante su mensaje a la multitud reunida esa tarde gris en Plaza de Mayo, el líder peronista evitó señalar herederos con nombre y apellido.

En Córdoba, una concentración convocada para seguir el discurso en la avenida Chacabuco, en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, derivó en incidentes. Un grupo de activistas se dirigió al local de la UTA, sobre la avenida Vélez Sarsfield, al que quisieron tomar por asalto, siendo repelido por tiradores parapetados en los techos del local. Otra columna atacó las oficinas céntricas del diario *La Voz del Interior*, en tanto que otros grupos intentaron asaltar la facultad de Arquitectura y la sede del SMATA de la calle 27 de Abril.

La salud quebrantada de Perón no resistiría las tensiones de ese presente agitado. Su estado se agravó y sufrió una nueva crisis tras la visita efectuada a Asunción del Paraguay para compartir un acto oficial con su amigo, el presidente Adolfo Stroessner. Volvió enfermo de ese viaje que realizó pese a que sus médicos habían opuesto reparos y en los días que siguieron no logró recuperarse: pasó sus últimas horas en la unidad de terapia intensiva montada en la residencia de Olivos. Allí falleció, a las 13:15 del 1º de julio de 1974.

El vacío político dejado por Perón era inconmensurable. Pese a que su edad avanzada —tenía 78 años— y su precaria salud debieron haber tornado previsible la situación, no fue así. El país no estaba preparado para sobrellevar la pérdida, mucho menos el peronismo, envuelto como se hallaba en una ardua disputa de poder entre sectores irreconciliablemente enfrentados. Perón había sido, mal o bien, la última frontera del inevitable desborde que sobrevino tras su deceso.

Según el testimonio del entonces secretario Legal y Técnico de la presidencia Gustavo Caraballo, recogido por Guillermo Gasió en su libro *Tras las bambalinas del poder* (Corregidor, 2007), pocas horas antes de morir, Perón lo citó para indicarle que redactara un decreto transfiriendo el mando a Ricardo Balbín, lo que no llegó a concretarse, posiblemente por la interferencia de López Rega, por esos días dueño del picaporte de la habitación donde Perón convalecía. Si fue realmente así, si ese pedido existió, más allá de la inviabilidad constitucional del mismo, resulta evidente que, en sus últimas horas de vida, Perón estaba preocupado por lo que sobrevendría cuando no estuviera.

La muerte de Perón y el duelo que le siguió fueron apenas un paréntesis momentáneo en el enfrentamiento entre la derecha y la izquierda peronista. Una inmensa movilización popular dio marco a los funerales de Estado más imponentes desde la muerte de Evita, que paralizaron al país durante un par de días. El pueblo, compungido, dio su último adiós al presidente en las calles de Buenos Aires, bajo el pertinaz aguacero que cayó a lo largo de toda esa noche y al día siguiente. El país todo se preguntaba qué sería de la Argentina sin la presencia de quien, con escasa fortuna, dedicó sus últimas energías a poner las cosas en caja en medio de una situación fuera de control.

No hubo que esperar demasiado para que el interrogante se develara. Y de la peor forma.

La Argentina sin Perón

La metamorfosis de la Argentina cobró renovado impulso tras la muerte de Perón. María Estela Martínez asumió inmediatamente la presidencia, en tanto que José López Rega, su mentor, se convertía en el hombre fuerte del nuevo gobierno, en el poder detrás del trono al mejor estilo rasputiniano.

La muerte del líder peronista se produjo en el momento de mayor distanciamiento con Montoneros, por lo que no era difícil prever que la relación de estos con el gobierno de Isabel, a quien negaban toda representatividad o mérito para ocupar ese lugar, empeoraría aún más, como realmente ocurrió. Un síntoma evidente del nuevo tiempo fue el recrudecimiento de la actividad de las bandas armadas prohijadas desde el Ministerio de Bienestar

Social, que ahora sí firmaban sus atentados como Alianza Anticomunista Argentina (Tres A o Triple A). Además de tener en la mira a militantes de izquierda, la tenebrosa organización intimidaba a artistas, intelectuales y músicos populares, muchos de quienes debieron abandonar el país tras recibir amenazas de muerte.

Pocos días después de la muerte de Perón, el PRT lanzó el Frente Antiimperialista y por el Socialismo (FAS), con un acto en la ciudad de Rosario que reunió más de 20.000 asistentes. Era un intento por parte de la conducción de ese partido por tomar la iniciativa, reagrupando a sectores no encuadrados y dirigentes de cuño clasista, como Agustín Tosco, para dar mayor cobertura a su brazo armado, el ERP, en la etapa que se avecinaba, caracterizada por ellos de guerra abierta contra el Ejército, «brazo armado de la burguesía y el imperialismo», según consignaba *Estrella Roja*, órgano oficial del partido. Allí se presentó en sociedad la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, que comenzaría a operar en la provincia de Tucumán, elegida por sus características geográficas y la combatividad del campesinado y de los sectores populares ligados a la industria azucarera para convertirse en teatro de operaciones y futura zona liberada. Un paso más hacia el abismo.

En las semanas que siguieron, un clima de amenazas, persecuciones y muertes por doquier se enseñoreó en el país, que contemplaba absorto el giro aciago que tomaban los acontecimientos sin que, desde el nivel político, alguien fuera capaz de ponerle freno. Para entonces no quedaban ni rastros del clima de euforia reinante en los primeros meses de 1973, en tanto que las expectativas populares de vivir en paz se constreñían día a día, a medida que crecía el enfrentamiento cada vez más violento entre aparatos armados de distinto signo.

En el mes de agosto se sucedieron una serie de asesinatos, especialmente en la ciudad de La Plata, perpetrados por las Tres A; en tanto que la guerrilla no se quedaba atrás: el ERP atacaba la fábrica militar de explosivos de Villa María, en la provincia de Córdoba, y el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca, que terminó con la captura y muerte de dieciséis guerrilleros a manos de las fuerzas de seguridad. El ERP replicó asesinando oficiales del Ejército, entre ellos al capitán Humberto Viola y a su pequeña hija.

La siguiente víctima notoria de las Tres A fue el doctor Silvio Frondizi, muerto por el estallido de una bomba el día 30

de ese mes de agosto. Al día siguiente, la misma banda asesinó en la vía pública al diputado Rodolfo Ortega Peña, defensor de detenidos políticos durante el gobierno de Lanusse, entre ellos varias víctimas de la matanza de Trelew. Unas pocas semanas más tarde fue el turno de Julio Troxler, uno de los sobrevivientes de los fusilamientos de civiles en los basurales de José León Suárez en 1956. Si Perón fue superado por la realidad y no pudo sofrenar la violencia desatada en la Argentina, mucho menos podía hacerlo su viuda, una mujer sin experiencia ni trayectoria política y en absoluto preparada para ejercer una función de alta responsabilidad como lo era la presidencia de la Nación en semejante contexto.

Sobre llovido, mojado. El 6 de septiembre de 1974, Montoneros anunció el pase a la clandestinidad. Ese día, Mario Firmenich encabezó una conferencia de prensa secreta, durante cuyo transcurso, rodeado de representantes de las agrupaciones de superficie -JP, JUP, JTP y Evita-, anunció que la organización emprendía una nueva etapa de «guerra popular integral», fundada en que «se han agotado todas las formas legales de continuar la lucha», mientras «las intervenciones de los sindicatos, la legislación laboral antidemocrática, el Pacto Social y la existencia de presos políticos siguieran caracterizando la vida política argentina.» Con matices, Montoneros adoptaba una estrategia parecida a la del ERP, de cuño netamente militarista, donde ni siquiera quedaba en pie aquello de *político-militar* y pasaba a ser militar a secas.

La decisión adoptada significaba un paso atrás desde el punto de vista político, porque implicaba abandonar la disputa en ese terreno para volver a las armas, una estrategia que retrotraía las cosas a los comienzos foquistas de la organización, en tiempos de la dictadura de Onganía. El anuncio fue leído como un gesto de impotencia de Montoneros, que no supieron ni quisieron articular un vínculo político perdurable con Perón en vida ni tampoco construir alianzas estables con sectores y dirigentes democráticos en aras de recrear un frente popular capaz de frenar el avance de la derecha.

En lugar de apostar a una política de masas, incapaz de contrarrestar la ofensiva derechista en el plano de la legalidad, la conducción montonera elegía la acción clandestina, la *guerra integral* anunciada con bombos y platillos, a contrapelo de la tarea de base que requería organización y coordinación para frenar el

avance de la represión legal e ilegal. Al elegir el camino de las armas, no hacían más que convalidar el renunciamiento definitivo a la construcción política desde las bases para privilegiar la guerra entre aparatos, un terreno donde las condiciones eran totalmente desfavorables dada la desproporción de medios al alcance de unos y otros contendientes. Un grueso error político que en los meses venideros se pagaría caro.

En *El peronismo de la victoria*, Jorge Bernetti condensa ese momento crucial en los siguientes términos:

«Nunca pudieron superar la contradicción entre desarrollar una política de masas y las voraces urgencias de reforzar el crecimiento de su logística militar con recursos materiales del gobierno popular. La guerra había quedado simplemente suspendida. Entendida como pausa política, como equilibrio de fuerzas altamente inestable, la instauración de la legalidad y del gobierno popular no fueron asumidos por los Montoneros como una instancia a defender por constituir un estadio de progreso de las fuerzas trabajadoras y nacionales, sino como una tregua tras la cual las contradicciones fundamentales se volverían a manifestarse de manera abierta y cruda. De allí que apresuraron la dilucidación de situaciones que, en definitiva, iban a colocar la correlación de fuerzas en situación muy poco favorable a las propias. *La guerra popular y prolongada se transformó para la guerrilla peronista en la guerra aparatista y apresurada.*»

En Córdoba, entretanto, Duilio Brunello, que se sostuvo en el cargo a duras penas mientras contó con el respaldo de Perón, tras la muerte del presidente, fue reemplazado por un *halcón* que reportaba al ala dura del Movimiento Nacional Justicialista y gozaba del beneplácito del sector lopezreguista: Raúl Lacabanne. Se trataba de un brigadier retirado de la Fuerza Aérea que gozaba de cierta consideración en los círculos ortodoxos peronistas desde 1955, cuando, siendo director de la Escuela de Aviación Militar

con asiento en Córdoba, repelió a los comandos golpistas que la asaltaron, lo que le costó el pase a retiro y el consiguiente ostracismo durante los años siguientes.

El nuevo interventor asumió el cargo el 7 de septiembre de 1974. De entrada, Lacabanne dejó en claro que gobernaría bajo el signo del autoritarismo y la impunidad; designando al frente de la policía al comisario (R) Héctor García Rey, que había participado en la lucha antsubversiva en la provincia de Tucumán. Integró su gabinete con figuras poco conocidas provenientes de la Capital Federal y dirigentes locales pertenecientes a la corriente ortodoxa: Alfredo Roque Corvalán (Gobierno); Juan Ángel Chamero (Hacienda) y el exgobernador Raúl Felipe Lucini (Bienestar Social). A los pocos días Francisco García Laval asumió la cartera de Gobierno, en tanto que meses más tarde se produjeron otros relevos que llevaron al contador Alberto Pautassi a Hacienda; a Cleofé Luis Gatica a Gobierno y al sindicalista Cataldo Quatrocchi a Bienestar Social.

A pocos días de asumir el nuevo delegado, el 16 de septiembre, Atilio López, el vicegobernador depuesto tras el amotinamiento policial, fue asesinado por las Tres A. El Negro había viajado a Buenos Aires junto a su asesor y activo militante del gremio de UTA, el contador Juan José Varas. Se hospedaron en un hotel del barrio de Once, donde fueron secuestrados por un comando de las Tres A. Los cuerpos acribillados y sin vida de ambos fueron encontrados poco después en cercanías de Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires. Una multitud acompañó sus restos desde barrio Empalme, donde la víctima vivía junto a su familia, hasta el cementerio San Jerónimo. Por esos días, la misma banda derechista asesinaba en la zona de Tigre a Alfredo Curutchet, un abogado cordobés que atendía a gremios y presos políticos. Fue velado en el sindicato de Luz y Fuerza.

Apenas dos días más tarde, Montoneros secuestró a los hermanos Jorge y Juan Born, principales accionistas de la legendaria corporación empresaria dedicada al comercio de granos. La *Operación Mellizas*, como la bautizaron sus autores, reportó la friolera de sesenta millones de dólares en dinero contante y sonante a las arcas de la organización, cuya conducción por lo visto no tenía intenciones de dejar las armas sino todo lo contrario. «Cuanto peor mejor», era la consigna de aquellos días.

En respuesta a la escalada de violencia, el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional un proyecto de ley que resultó apro-

bado en tiempo récord por ambas cámaras y fue sancionado el 28 de septiembre como Ley N° 20.840 de Seguridad Nacional, que reprimía «los intentos de alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación.» Las múltiples figuras tipificadas por la nueva ley eran reprimidas con pena privativa de la libertad, sin posibilidad de excarcelación o condena de ejecución condicional, en tanto que a los condenados se le aplicaban penas accesorias que incluían la pérdida de ciudadanía para los naturalizados, la expulsión del país para estos y los extranjeros, el decomiso de los objetos secuestrados y la clausura de locales. La ley estableció la competencia de la justicia federal para este tipo de delitos, dando lugar al nacimiento del *Camarón*, como se le llamó a la jurisdicción con competencia en delitos considerados subversivos.

El estado de Derecho y las libertades públicas estaban en franco retroceso, lo mismo que los derechos ciudadanos. La metamorfosis estaba pronta a completarse.

Lacabanne instauró en Córdoba un verdadero estado policial, incorporando al lenguaje cotidiano palabras como *extremistas*, *subversivos* o *terroristas*, que se repetían hasta el cansancio en comunicados, solicitudes y discursos oficiales. En las semanas que siguieron a la asunción del nuevo interventor fueron allanados e intervenidos los sindicatos *rojos* de SMATA y Luz y Fuerza, y libradas sendas órdenes de captura contra sus principales dirigentes, en tanto que la represión ideológica se extendió al ámbito de la administración pública y la Universidad Nacional, donde estaban a la orden del día las delaciones y persecuciones de delegados y activistas filiados como de izquierda. El 17 de octubre, Día de la Lealtad, el Poder Ejecutivo Nacional indultó a Antonio Domingo Navarro y demás policías involucrados en la rebelión que depuso a las autoridades constitucionales de Córdoba.

La investigadora Alicia Servetto, en su ensayo *Córdoba en los prolegómenos de la dictadura. La política del miedo en el gobierno de Lacabanne*, publicado en Revista *Estudios* N° 15 (Centro de Estudios Avanzados - UNC, 2004); describe así la situación que se vivía en la Docta por esos días:

«La política del nuevo Interventor se basó en la lógica de un militar en acción: “Yo estoy en guerra” fueron sus primeras declaraciones. De acuerdo a su filosofía política, era

necesario imponer el "orden" para actuar en "libertad", pero no era posible alcanzar la "libertad sin orden" y no podía haber "orden sin autoridad". En su diagnóstico, Córdoba vivía momentos difíciles, de convulsión interna y, se debía "terminar con ese estado de cosas". La tarea debía ser urgente, porque el enemigo adoptaba muchas formas, que como los virus mutantes, al ser combatidos en un lugar, adquirirían inmediatamente otra forma, en otro lugar. La "subversión" —asociada con "desviación"— no se concentraba solamente en las organizaciones armadas revolucionarias. También existía en "la administración pública, en las plantas industriales, en el empresariado, en el estado económico de la provincia.»

Víctor Echenique, camarógrafo oficial de Casa de Gobierno durante esa época, en una nota periodística publicada en *La Voz del Interior*, rememoró que el interventor «vivía a los tiros todas las noches, con una botella de whisky en la mano y rodeado de matones. Desde Prensa se sentían los gritos de los que capturaban.» En esa época, se corrió la voz de que en los chalets de la Casa de las Tejas se guardaban las armas y explosivos que utilizaban las bandas parapoliciales que asolaban Córdoba y, eventualmente, se torturaba a los detenidos.

En las calles, el clima no era mejor. Se vivía en estado de zozobra y nadie tenía la certeza de regresar sano y salvo a su casa al final de cada jornada. Los mandobles de uno y otro lado iban y venían, con la sociedad de por medio.

A nivel nacional, la última novedad del año fue el reemplazo de José Ber Gelbard por Alfredo Gómez Morales al frente del ministerio de Economía: el intento por recrear una burguesía nacional había fracasado y se iniciaba un tiempo de ajustes y ortodoxia fiscal en el país cuyo timón estaba en las endeble manos de la viuda de Perón, condicionada cada vez más por las Fuerzas Armadas. Montoneros, entretanto, cerró el año con dos hechos resonantes: el robo del ataúd con los restos de Aramburu del cementerio porteño de La Recoleta, a mediados del mes de octubre, y el asesinato del jefe de la Policía Alberto Villar, víctima

de la bomba colocada por un buzo táctico en el casco de su lancha de recreo apostada en el Tigre.

1975

En Argentina, el de 1975 fue un año caliente, muy caliente. Ese año se profundizó la escalada represiva que fue subiendo gradualmente en intensidad hasta confundirse con lo que vino después de marzo de 1976.

A poco de comenzar el año, el 5 de febrero de 1975, María Estela Martínez firmó un decreto secreto ordenando al Ejército iniciar la *Operación Independencia* en Tucumán, con el fin de erradicar el foco insurgente instalado por el ERP en esa provincia. En los meses siguientes, un vasto despliegue militar desbarataría la pretensión de esa organización de consolidar una zona liberada en territorio tucumano para luego reclamar el status correspondiente en los foros internacionales.

En el pedido de elevación a juicio de la causa *Barreiro y otros*, citada más adelante, con relación a este tema, se afirma que «el llamado "Operativo Independencia" consistió en la primera intervención masiva de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror.»

Pese a haber pasado a la clandestinidad, los montoneros seguían con atención el panorama político. Richard Gillespie así lo pone en palabras:

«El año 1975 también fue testigo de varios intentos, por parte de los Montoneros, de afirmarse como una fuerza política de masas y de prepararse para la eventualidad de una solución electoral a la crisis política con que estaba forcejeando por entonces el gobierno de Isabel Perón.»

La herramienta concebida para ese fin fue el Partido Auténtico, una estructura legal que llegó a reunir más de 80.000 afiliados y congregó en los niveles directivos a varios exgobernadores alia-

dos, entre ellos Ricardo Obregón Cano, Oscar Bidegain, Alberto Martínez Baca y Jorge Cepernic. La eventual solución electoral a la que alude el investigador inglés era el adelantamiento de las elecciones presidenciales, previstas para fines de 1976, a marzo de ese año, previa renuncia de Isabel. Ese plan contaba con la adhesión del radicalismo y del ala democrática del justicialismo. Sin embargo, en el seno de las Fuerzas Armadas se engendraba el huevo de la serpiente.

La nueva fuerza prohijada por Montoneros debutó en el mes de abril, en las elecciones de la provincia de Misiones, con candidatos propios. La alianza que en esa oportunidad integró el Partido Auténtico quedó en tercer lugar, con menos del 10 por ciento de los votos, muy lejos del FREJULI, que obtuvo el 46 por ciento y de la UCR con el 38 por ciento del total.

En el mes de junio eclosionó el modelo económico. El Pacto Social ideado por Gelbard y respaldado por Perón hasta su último aliento, no daba para más. El congelamiento de precios y salarios y el atraso de las tarifas habían acumulado una presión inflacionaria imposible de contener. Tanto como el desabastecimiento de artículos de primera necesidad y el surgimiento del mercado negro de distintos productos, entre ellos el dólar.

El nuevo ministro de Economía que reemplazó a Gómez Morales, Celestino Rodrigo, dispuso lo que estaba cantado y se venía postergando: un fenomenal ajuste de tarifas, aumento de los combustibles y una mega devaluación de la moneda que hicieron volar el modelo gelbardiano por los aires. La reacción no se hizo esperar y surgió del campo gremial, que reclamó aumentos de salarios acordes a los nuevos niveles de precios. Ante la falta de acuerdo, la CGT decretó el primer paro general contra el gobierno peronista. Al final se negoció un aumento salarial que promedió un 180 por ciento. Sin embargo, el efecto duró poco y el incremento fue rápidamente devorado por la inflación, que ese mes tuvo un pico record. El llamado *Rodrigazo* revirtió la tendencia progresiva de la distribución del ingreso registrada en los años previos y reacomodó los precios relativos en un nivel desfavorable para los asalariados que no se restableció en los años subsiguientes. Fue, en ese sentido, un punto de inflexión en la historia económica argentina de las últimas décadas.

El desenlace político, coletazo de la crisis económica y del brutal ajuste, no tardó en producirse: en el mes de julio rodaron

las cabezas de los ministros José López Rega, Adolfo Mario Savino, Alberto Rocamora y, algunos días más tarde, de Celestino Rodrigo, el autor del libreto que desencadenó la avalancha de precios y el caos ulterior. El exministro de Bienestar Social, carente de apoyo y repudiado por el sector gremial, partió rumbo a España, designado por Isabel como embajador extraordinario. Los reemplazantes de los renunciantes fueron Antonio J. Berútez (Interior), Oscar Ivanissevich (Educación), Ernesto Corvalán Nanclares (Justicia), y Jorge Garrido (Defensa). Como nuevo ministro de Bienestar Social juró Carlos Villone, y de Economía, Pedro José Bonanni, quien al cabo de un mes fue reemplazado por Antonio Cafiero, como parte de un cambio de gabinete que llevó a Carlos Ruckauf a Trabajo y a Carlos Emery a ocupar la cartera de Bienestar Social.

El gobierno de Isabel, con López Rega fuera de escena y un plan económico de ajuste en marcha, reflejaba cada vez mayor debilidad y por esa misma razón resultaba más vulnerable a las presiones de las Fuerza Armadas, ávidas por ganar espacios de poder y hacerse del control total del aparato estatal. Por esos días de zozobra e incertidumbre, en los corrillos políticos comenzó a hablarse en voz alta de la renuncia de la presidente o, al menos, de una licencia prolongada por razones de salud, algo que se concretaría más adelante, ya con el golpe de Estado en ciernes. Pocos argentinos creían que la frágil mujer estuviera capacitada para afrontar un presente plagado de dificultades y amenazas. En medio de ese clima de especulaciones y apuestas a futuro, se planteó una nueva controversia en el seno del justicialismo, que dividía al sector llamado *verticalista* —que reclamaba absoluto acatamiento y lealtad a la presidente en ejercicio— del *antiverticalista*, más propenso a considerar otras alternativas de gobernabilidad. En los planes de estos últimos figuraba el presidente provisional del Senado Ítalo Argentino Luder, quien seguía a Isabel en la línea sucesoria.

El telón de fondo de ese cuadro agudo de inestabilidad política e institucional lo proveía la violencia cotidiana, que lejos de ceder, iba en aumento. Juan Bautista Yofre, en *Nadie fue* (Sudamericana, 2008), consigna que: «A principios de agosto, la agencia noticiosa Associated Press computó 389 muertes por la violencia política en lo que iba del año 1975.» Casi dos muertos por día.

El ocaso de López Rega, entre otras consecuencias, sellaría a su vez la suerte del interventor de Córdoba, Raúl Lacabanne,

un hombre de sus filas. Sin embargo, antes de que ello ocurriera, faltaba aún la peor parte.

Represión ilegal en Córdoba

Como se dijo, el huevo de la serpiente se engendró antes en Córdoba que en el resto del país. Los hechos mencionados en este libro prueban de manera fehaciente que el terrorismo de Estado comenzó en la provincia de Córdoba con anterioridad al golpe de Estado de marzo de 1976. Una vez más, la Docta sería el rostro anticipado del país, en este caso para mal.

En Córdoba, los atentados y asesinatos dirigidos contra organizaciones y militantes populares, característicos del accionar de las Tres A, quedaron en manos del llamado Comando Libertadores de América, la versión local de la organización terrorista fundada por José López Rega, que por entonces operaba a nivel nacional, particularmente en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Las Tres A, aun cuando existían desde antes, habían incrementado notablemente su actividad tras la muerte del general Perón, ocurrida el 1º de julio de 1974, coincidentemente con el fortalecimiento de la figura del ministro de Bienestar Social, mentor político de la presidente María Estela Martínez de Perón y máximo referente de la derecha filo nazi.

Sin embargo, pese a que la lógica terrorista era la misma, conviene aclarar que las Tres A no fueron transplantadas como tales a Córdoba, donde la represión ilegal tuvo una operatividad sistémica propia y superior. La maquinaria represiva cordobesa actuó desde sus comienzos en coordinación, cuando no subordinada, al poder militar formal, concentrado en el Comando del Tercer Cuerpo de Ejército.

Al respecto, el periodista Mariano Saravia, autor de *La sombra azul* (Ediciones del Boulevard, 2005), apunta:

«Aunque muchos hacen la equivalencia del Comando Libertadores de América con la Triple A, en realidad la trascendía porque en él se mezclaban militares con policías y comandos civiles. Era un grupo mucho más pesado y su vocación represora era mucho

más encarnizada, quizá por la misma historia de Córdoba, distinta a la de Buenos Aires y el resto del país.»

Una pieza clave en el armado inicial de la operatoria ilegal en Córdoba fue un oficial de Ejército, el capitán Héctor Vergez. La presencia de este militar retirado, que se instaló en Córdoba a mediados de 1975, coincidió con la puesta en marcha de una fase superior de la represión ilegal en la provincia. Hasta ese momento, las tareas de inteligencia y represión corrían por cuenta de bandas armadas amparadas por la Intervención Federal, que les daba cobertura y les proveía logística. Actuaban con total impunidad y, las más de las veces, con escaso profesionalismo que suplían con excesos de brutalidad.

Vergez venía, justamente, a profesionalizar la tarea, a darle otro vuelo. A su llegada a Córdoba adoptó el alias de *Vargas* o *Capitán Vargas* y, ocasionalmente, el de *Gastón*. Según él mismo lo cuenta en su libro *Yo fui Vargas* (Edición del autor, diciembre de 1995), traía una carta dirigida al brigadier Lacabanne que, según sus propias palabras, le había entregado «la jerarquía más ortodoxa y decididamente antisubversiva del peronismo.» Seguramente se refería a López Rega. A continuación, Vergez relata que a poco de arribar tuvo una entrevista con Lacabanne, durante cuyo transcurso este puso a su disposición «los medios que pudiese necesitar del gobierno provincial, para contribuir en la forma más irrestricta posible a la derrota del ofensor terrorista.» Junto con Vergez y con igual cometido, desembarcó en Córdoba Pedro Raúl Telleldín.

Mariano Saravia lo confirma en *La sombra azul*:

«De hecho, fue el propio José el Brujo López Rega quien mandó a Córdoba como jefes de la organización parapolicial Comando Libertadores de América al capitán del Ejército Héctor Vergez (alias Vargas, más tarde jefe de la Brigada 141 del Ejército o Brigada de Informaciones) y a un hasta entonces oscuro y mediocre suboficial de la Aeronáutica: Pedro Raúl Telleldín.»

Vergez dirigió la Sección Tercera del Destacamento 141 de Inteligencia, llamada de Operaciones Especiales, y coordinó el accionar de

los grupos ilegales que operaban bajo el paraguas protector del D2, el Departamento Informaciones de la Policía de Córdoba, convertido por entonces en centro de detención y tortura de los detenidos en los múltiples procedimientos realizados a diario en la vía pública y viviendas particulares, sobre todo por las noches.

Telleldín, por su parte, fue nombrado comisario general y puesto al frente del D2, que funcionaba en la Jefatura de Policía cuando esta aún ocupaba el edificio del cabildo histórico frente a la Plaza San Martín. Al D2 se accedía por el pasaje Santa Catalina (expasaje Cuzco), por entonces cerrado por sendas vallas colocadas en cada extremo que impedían el paso del público. En la Jefatura funcionaban otros cuatro departamentos: el D1, de Personal; el D3 de Operaciones; el D4 de Investigaciones y el D5, el Judicial.

Con Telleldín a la cabeza, el D2 aportó logística, hombres y operatividad a una estructura ilegal que centralizó las actividades de calle e integró a militares retirados y en actividad, policías, expolicías y civiles que venían cumpliendo funciones de inteligencia en distintos ámbitos. Según Saravia:

«Sus principales funciones eran hacer inteligencia policial, infiltrarse y obtener informaciones de las organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles; en fábricas, partidos políticos y otro tipo de organizaciones sociales; coordinar operativos con el Tercer Cuerpo de Ejército; cometer atentados y simular que fueron actos de "la subversión terrorista"; y el secuestro, violaciones, torturas y asesinatos de personas, acompañados del saqueo de las casas de las víctimas.»

Esta operatoria aparece confirmada en el pedido de elevación a juicio de la causa *Barreiro y otros* de manera expresa:

«Puede afirmarse que el entonces Interventor Federal Brigadier general Raúl Lacabanne, instrumentó a través de la Policía de la Provincia de Córdoba, específicamente a través del Departamento Informaciones Policiales (D2) un grupo de efectivos para enfrentar no solo el fenómeno de la subver-

sión, sino también para perseguir a quienes desde la perspectiva del gobierno nacional aparecían como adversarios políticos. Debe señalarse también que con el correr de 1975, fueron sucediéndose diversos hechos de estas características, en los que fueron incorporándose elementos civiles y militares que pertenecían al Ejército. De las pruebas que hemos ido incorporando hemos podido acreditar, al menos con grado de probabilidad, que posiblemente el primer militar en sumarse a estas acciones fue Héctor Pedro Vergez, quien –según el relato de los exdetenidos de La Perla– se jactaba de ser el fundador y organizador del “Comando Libertadores de América”, nombre que con el correr de los meses asumió esta organización en la provincia de Córdoba a la hora de autoadjudicarse varios de los hechos que aquí relevamos.»

La génesis de esas bandas armadas aparece corroborada en el escalofriante testimonio de Carlos *Charlie* Moore, un miembro del ERP devenido en colaborador de los grupos de tareas que conoció desde adentro el D2, recogido por Miguel Robles en su libro *La Búsqueda* (Ediciones del Pasaje, 2010):

«Para el mes de julio [de 1975] la cosa se había empezado a acelerar en el D2. En términos más apropiados se había empezado a incrementar la actividad en todo sentido: asesinatos, secuestros. La tortura se volvió más violenta y muchísimo más aplicada.»

En otro pasaje del libro citado, el mismo Moore explica que «Telleldín y Tissera [segundo jefe] forman la Brigada Civil y empezaron a reclutar gente como supernumerarios. Ahí empezaron a aparecer gente de lo último, especialmente los que traía Tissera.» Y agrega:

«Muchas de estas personas operaron mucho tiempo en el D2 y, después de un período bastante largo, fueron a una escuela. Y recién en ese momento aparecían como el Sargento, como el Cabo. En definitiva, se desplazó a las Tres A y la Brigada de Investigaciones del D2 era, en los hechos, el Comando Libertadores de América, con el apoyo y participación del entonces capitán Vergez, o Vargas como se hacía llamar. Y ya con el Comando Libertadores de América empezaban las bombas. Y la intimidación. Y la extorsión. Los asesinatos a mansalva. La muerte a diario.»

Los vejámenes que se cometían a diario en sede policial con el fin arrancar confesiones, de acuerdo a los testimonios de numerosos detenidos que pasaron por el lugar, iban desde aplicación de picanas eléctricas, castigos corporales, golpizas, *submarino* –inmersión de la cabeza de la víctima en un balde con agua o excrementos–, insultos, simulacros de fusilamiento, manoseos y violaciones en el caso de las mujeres. Además de obligar a los prisioneros a permanecer esposados, encapuchados y parados durante largas horas, sin provisión de alimentos ni bebidas ni permiso para ir al baño o recibir visitas. A los detenidos se los mantenía sin legalizar durante los primeros días mientras se los torturaba para arrancarles información, hasta que, en el mejor de los casos, eran *blanqueados* ante el juez y trasladados a una unidad penitenciaria.

Todo esto consta en el pedido de elevación a juicio de la causa *Barreiro y otros*, ya citada:

«Es de destacar que –conforme ya lo señaláramos al analizar la aplicación de tormentos en esta dependencia policial– el personal del D2 practicaba allanamientos, realizaba detenciones y –especialmente– dirigía los interrogatorios de los detenidos. Las ilegales y crueles prácticas implementadas durante los interrogatorios no resultaban una cuestión oculta, ni exclusiva de algún funcionario policial. Por el contrario, los interrogatorios con tormentos eran diarios, las prácticas por

demás conocidas no solo por las víctimas, sino también por los efectivos policiales. De ello dan cuenta los testimonios de quienes pasaron por esta repartición en carácter de detenidos, al referir que los gritos de quienes eran sometidos a tortura eran constantes y desgarradores.»

A modo de ejemplo, transcribimos a continuación uno de los muchos testimonios que corroboran lo anterior; el de Graciela Olivella, que fue detenida el 23 de diciembre de 1974 y alojada en la D2, según consta en *La Perla*, el libro de Ana Mariani y Alejo Gómez (Editorial Aguilar, 2012) que recoge testimonios de sobrevivientes de ese campo de concentración:

«Primero me llevaron a un patiecito, había un baño en ese lugar. Ahí es donde me hacen la mojarrita y me violan, todo en ese baño. Después me sacaron y me hicieron sentar en un banquito de cemento hasta que se hizo de día. Luego me hicieron pasar a una habitación donde estaban todas las mujeres prisioneras (...) Estábamos vendadas, tiradas en el suelo, sentadas (...) Había uno que llamaban "Jefe I"; era terrible, más verdugo que el comisario Fernando Esteban. Ese nos hacía levantar a las 3 de la mañana y nos hacía parar en el patio mientras llovía. (...) Cuando me liberaron, me dijeron que me excarcelaban pero que no me podía mover de Córdoba y que me si me movía, tenía que ir al Juzgado a ver si me autorizaban o no.»

El D2 actuó desde el inicio en consonancia con el Destacamento de Inteligencia 141, que tenía su sede sobre la avenida Ricchieri, en barrio Rogelio Martínez de la ciudad de Córdoba. Esa repartición militar tenía una doble dependencia, territorial y funcional: reportaba en forma simultánea al Tercer Cuerpo de Ejército, a cuya jurisdicción pertenecía orgánicamente, y al Batallón de Inteligencia 601 con sede en la ciudad de Buenos Aires,

que concentraba y procesaba toda la información reunida por los destacamentos diseminados en el país.

Según consta en distintos expedientes judiciales y en numerosos testimonios obrantes en distintas causas, entre los militares que revistaban en el Destacamento 141 y que formaban parte de ese esquema represivo, figuran: el coronel Oscar Inocencio *Nono* Bolasini, el mayor retirado Ernesto Guillermo Barreiro, alias *Nabo*; el mayor Gustavo Von Diedrich, alias *León*; el teniente primero Jorge Exequiel Acosa, alias *Sordo*; el sargento primero Luis Manzanelli, apodado *El hombre del violín*; el suboficial Hugo Herrera, alias *Quequeque*. Entre los civiles que integraron la formación inicial, figuraban, entre otros: Ricardo Lardone, alias *Fogo*; Arnaldo José *Chubi* López; Ricardo Luján, alias *Yanky*; Jorge *Palito* Romero y Jorge Pereyra, *Hijo de la Tía*, como se conocía a la represora Argentina del Carmen Mercado de Pereyra, competidora en ferocidad con Mirta Antón, alias *la Cuca*, ambas integrantes del D2. Completaban el elenco del D2 los hermanos Yanicelli, Carlos (alias *Tucán grande*) y Raúl (alias *Tucán chico*), oriundos de Cruz del Eje, y otros policías y agentes civiles.

El Comando Libertadores de América comenzó a actuar ese año de 1975, en que se sucedieron los atentados, ataques y hechos intimidatorios perpetrados contra sindicatos, organizaciones, dirigentes y activistas, que, por supuesto, no fueron aclarados y ni siquiera investigados. Como es de suponer, en ninguno de ellos hubo detenidos y, a menudo, se atribuía su autoría a *grupos subversivos*.

El año comenzó con todo. El jueves 23 de enero, cerca de la una de la madrugada, estalló la poderosa bomba colocada en la planta impresora del diario *La Voz del Interior*, en calle Avellaneda al 1650, que hizo volar la rotativa por los aires y destrozó los cristales de las viviendas en varias cuadras a la redonda.

Así evocaba esas horas dramáticas el periodista Julio César Moreno, empleado por entonces del matutino, en su libro *La espuma de la cerveza* (El Emporio Ediciones, 2005):

«Habíamos salido del diario a la medianoche, luego de una jornada de trabajo como cualquier otra. Estábamos en un restaurante de la avenida Colón al 500, pasando La Cañada, ya de sobremesa. Éramos tres o cuatro personas: el viejo Wenceslao (inol-

vidable secretario de redacción), y algunos compañeros (Juan Carlos, Miguel, Isaac). Compartíamos la rutina de aquellas noches de verano entre divertidos y silenciosos. De pronto escuchamos una explosión tremenda, aunque algo lejana. Los cubiertos, los vasos y los cuadros de las paredes temblaron durante algunos largos segundos.

Nos quedamos callados, aunque todos teníamos la misma sospecha. Finalmente el Viejo se levantó, se acercó hasta la caja, y pidió el teléfono. Sí, había sido en el diario, no en el centro, sino en el barrio de Alta Córdoba, donde hacía poco se habían instalado dos nuevos centros de impresión.»

Días de furia

Los medios gráficos, condicionados por las restricciones impuestas por la censura oficial que prohibía, entre otras cosas, consignar el nombre de las organizaciones guerrilleras, daban cuenta a diario de actos de violencia y atentados contra personas y organizaciones políticas y gremiales. En el lenguaje críptico obligado por las circunstancias, el ERP era aludido como «la organización declarada ilegal», en tanto que los Montoneros eran «la organización auto-proscripta»; un estatus similar y diferente a la vez, que colocaba a ambos grupos fuera de la ley. La crónica de los episodios de violencia, poblada de eufemismos y ambigüedades, era aséptica y excepcionalmente merecía espacios que superaran unas pocas líneas perdidas en la página de policiales. La política editorial de la mayoría de los medios se cuidaba en mantener un delicado equilibrio, bajándole el perfil a la escalada represiva y al accionar de las organizaciones mencionadas para no malquistarse con las autoridades.

Sin embargo, la realidad seguía su curso. El 26 de febrero, la Columna Emilio Maza de Montoneros secuestró al cónsul honorario de los Estados Unidos en Córdoba, John Patrick Egan, cuyo cadáver apareció al cabo de algunos días, baleado y amarrado con alambre. El 8 de marzo, probablemente la misma célula ametralló

el frente de la vivienda de un asesor de la Intervención Federal, supuestamente vinculado a la represión ilegal.

Pese a que en el país aún regía el estado de Derecho, los episodios de violencia de uno y otro lado y las acciones represivas al margen de la ley estaban a la orden del día; el poder civil se diluía aceleradamente, erosionado por la creciente militarización que asolaba el país, en tanto que la justicia, convertida en un engranaje más de la represión, hacía poco y nada para poner freno a los desmanes.

La vida no valía nada. Esta realidad aparece reflejada sin ambages en el editorial de *La Voz del Interior* del 15 de marzo de 1975: «Córdoba es una ciudad humillada y entristecida por tanta violencia, por tantas muertes inútiles, por tantos desaparecidos, por tanto miedo. Vivir se ha transformado en la aspiración más elemental de los cordobeses.» En efecto, ante semejante estado de cosas, la primera obligación de los cordobeses era sobrevivir.

El 21 de marzo, se produjo el secuestro de Graciela del Valle Maorenzic y María de las Mercedes Gómez de Orzaocoa. Ambas mujeres, militantes del PRT, fueron interceptadas por un grupo de civiles armados en las inmediaciones del Hospital Córdoba, introducidas por la fuerza en un automóvil sin patente y trasladadas al Departamento Informaciones Policiales (D2) de la Policía de la Provincia de Córdoba que, como se dijo, funcionaba en la sede de la Jefatura de Policía, donde se interrogaba y torturaba a los detenidos. Nunca se las volvió a ver con vida ni se supo nada de ellas.

Al parecer, estas desapariciones tempranas fueron un hecho aislado, por cuanto durante las siguientes semanas no se registran nuevas denuncias de secuestros. La desaparición sistemática de personas recomenzó con mayor intensidad alrededor de seis meses más tarde. Es posible que, en marzo, los represores aún no contaran con la logística que sí tuvieron más adelante para desarrollar a mayor escala esta modalidad operativa, cuando se comenzaron a utilizar el Campo de la Ribera —una prisión militar ubicada en los confines de la ciudad— y, meses más tarde, el cuartel militar conocido como La Perla como centros de detención clandestina y antesala de ejecuciones y enterramientos clandestinos. De momento, se torturaba en el D2, en el cuartel de Policía.

El 24 de mayo de 1975 se produjo una nueva fuga de presas alojadas en el Buen Pastor, la cárcel de mujeres del barrio Nueva Córdoba. El operativo, planificado y ejecutado por el ERP, fue reflejado por *La Voz del Interior*:

«A las 20 horas del 24 de mayo de 1975, militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en una acción rápida y precisa, derribaron con una pick-up la reja de una de las ventanas del Hogar Buen Pastor, que daban a la calle Obispo Oro. Por allí huyeron 26 reclusas de la cárcel de mujeres, en su mayoría acusadas de subversivas y pertenecientes a distintas organizaciones. A la misma hora que comenzaba el plan de fuga, otros grupos aparentemente extremistas, hicieron estallar bombas de estruendo en las intersecciones de Obispo Trejo e Hipólito Yrigoyen y La Cañada y Bulevar San Juan. Allí también se levantaron barricadas con el propósito de distraer la atención policial, lejos de donde se consumaba la huida de las reclusas.»

El jueves 10 de julio, a las cinco de la tarde, Montoneros realizó una serie coordinada de atentados con armas y explosivos en el centro de la ciudad, colmado a esa hora de transeúntes tras el feriado del día anterior. Esa tarde de furia hubo disparos contra la Jefatura de Policía, frente a la plaza San Martín, se ametrallaron comisarias y varios patrulleros fueron atacados con granadas. Numerosos comercios de la zona céntrica fueron blanco de piedras y bombas molotov arrojadas por los activistas, entre ellos Gath y Chaves, Thompson y Williams, la mueblería Alterman, El Palacio de las Arañas, Córdoba Goma y la confitería Moorish de la calle 9 de Julio. Esa tarde, la vía pública se convirtió en un infierno para los transeúntes que circulaban o esperaban el colectivo en paradas cercanas a los lugares elegidos como blancos de los ataques.

El martes 29 de julio murieron tres agentes de la Policía mientras trataban de desactivar un artefacto explosivo abandonado en el céntrico puente Alvear. Muchas de esas bombas eran colocadas por personal del D2 para generar un ambiente de caos y confusión. Dos días más tarde, la policía persiguió a un automóvil que sus ocupantes finalmente abandonaron y en cuyo interior, según consigna el diario *La Voz del Interior*, «se hallaron proyectiles calibre 9 mm, clavos miguelitos y panfletos de una organización declarada ilegal.» El domingo 3 de agosto, el mismo medio reporta un robo de explosivos, mecha lenta y fulminantes de la cantera Quilpo, ubicada en el departamento Cruz del Eje.

El lunes 4 del mismo mes se conoció que habían estallado sendas bombas en los domicilios del decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Juan Nogueira García, y del director de la Escuela de Ciencias de la Información, Antonio María Requena, enrolados en la derecha universitaria. En ambos casos, los explosivos solo ocasionaron daños materiales. Desde el mes de diciembre del año anterior, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba era Mario Víctor Menso, exdecano de la Facultad de Medicina durante la gestión rectoral de Francisco Luperi; para entonces ya no quedaban decanos afines a la Tendencia. El interventor en el colegio Manuel Belgrano era Tránsito Rigatuso, sospechado de haber suministrado listas con datos de militantes estudiantiles a la represión.

Al día siguiente, las noticias dan cuenta «del arresto de dieciocho presuntos extremistas», supuestamente miembros del PRT, como resultado de procedimientos realizados en los barrios Güemes y Observatorio, donde se secuestraron diversas armas, municiones y un mimeógrafo. El 6 de agosto, en un procedimiento orientado por una delación, en una vivienda de Maestro Vidal al 1000, fueron detenidos Horacio Mendizábal y Marcos Osatinsky, dos peces gordos intensamente buscados, integrantes de la conducción de Montoneros. Según la versión periodística, en el lugar funcionaba una *cárcel del pueblo*, a la que se accedía por un placard camuflado. Se hallaron armas cortas y largas, municiones, explosivos, granadas de mano, documentación y una gran cantidad de caños para la fabricación de pistolas ametralladoras.

Los comandantes de Montoneros fueron trasladados al D2, donde fueron sometidos a diversos tormentos, como golpizas y aplicaciones de picana eléctrica. De nada sirvió el recurso de *habeas corpus* presentado por el abogado Hugo Vaca Narvaja (h) para legalizar la situación de los detenidos. Según consta en el expediente judicial de la causa *Barreiro y otros*, en los días posteriores, Osatinsky fue visitado por los abogados Lucio Garzón Maceda y Gustavo Roca, ante quienes planteó al jefe de Policía Choux la posibilidad de una tregua entre Montoneros y el gobierno nacional a fin de que cesaran las torturas a los detenidos de la organización.

En medio de esa Córdoba insegura, violenta y hostil, los Puñados trataban de seguir adelante con sus vidas, ignorando quizá que sus nombres figuraban en la lista negra de los represores y que la espada de Damocles que pendía sobre sus cabezas no tardaría en caer.

TERCERA PARTE
EL HORROR

La segunda tragedia

A mediados de agosto de cada año, cuando se aproximaba un nuevo aniversario de la muerte de Mariano, un halo de congoja y desconsuelo invadía la morada de los Pujadas.

En los días previos, no se hablaba demasiado del asunto, se lo escabullía para no recargar la propia tristeza ni la de los demás integrantes de la familia que había perdido a uno de sus miembros en la flor de su vida. Ninguno de ellos podía borrar de la memoria al ser querido desaparecido en 1972 que todos recordaban y extrañaban, cada uno a su manera: pronto se cumpliría el tercer aniversario de su muerte, y la evocación del hijo o del hermano fusilado en Trelew apenas por igual a unos y otros.

Su imagen entrañable de muchachote duro y cálido a la vez, se filtraba por debajo de las puertas, por las ventanas abiertas, brotaba desde el interior de los muebles, trepaba por las escaleras, flotaba en los pasillos y dependencias de la residencia familiar en la que Mariano había pasado la mayor parte de su vida trunca en compañía de todos ellos. Años felices, desvanecidos para siempre, sepultados por la realidad amarga que borró sonrisas y endureció el semblante de los demás miembros de la familia.

Como en los dos años anteriores, en las jornadas previas al fatídico 22 de agosto, marcado a fuego en el almanaque, los Pujadas deambulaban por la casa con la secreta esperanza de, en algún rincón, reencontrarse cara a cara con el ser amado, para saber al menos que su alma descansaba en paz, que Mariano velaba por ellos desde el más allá, cualquiera fuese ese lugar si es que lo había. Pese al tiempo transcurrido desde la masacre de Trelew –tres años pronto a cumplirse–, la herida permanecía abierta.

En la casa de siempre seguían viviendo los padres y los dos hijos menores: María José y Víctor. María de los Ángeles, la mayor de las dos hijas mujeres, se había mudado junto a su pareja y el bebé de ambos a otro barrio. Ricardo vivía en un departamento en el centro de la ciudad junto a su esposa y Paula, hija del ma-

rimonio. José María se había trasladado nuevamente a la casa paterna pocos días antes junto a su actual pareja, Mirta Yolanda Bustos, y la beba de ambos. Los otros cuatro hijos de José María vivían con sus respectivas madres.

Los Pujadas, conscientes del giro que tomaban las cosas en el país y, especialmente, en Córdoba, trataban de no hacer nada que los pusiera en la mira de los organismos de seguridad; ya habían pasado por eso tras la muerte de Mariano y no querían repetir la misma experiencia. Pese a los recaudos adoptados y, sobre todo, del esfuerzo diario del jefe de la familia para apuntalar la normalidad hasta donde le fuera posible, la tragedia volvería a golpearlos.

Noche de horror

El miércoles 13 de agosto de 1975, después de compartir una cena frugal y una corta sobremesa, los padres y los dos hijos menores se acostaron alrededor de las diez de la noche. José María y Mirta llegaron más tarde, cerca de las dos de la mañana, luego de visitar a los padres de ella que vivían cerca de allí, y se dirigieron al dormitorio que ocupaban escaleras arriba.

Esa noche hacía frío, mucho, y el cielo despejado y poblado de estrellas preanunciaba una helada matutina. Aún faltaba más de un mes para la llegada de la primavera que algunos de ellos jamás verían.

Apenas iban tres horas del jueves 14 cuando, en medio de la noche, el horror se presentó con forma de patota. En la vivienda familiar todos descansaban, ajenos por completo a lo que pasaba afuera. Los padres, en la suite principal; José María y Mirta, su esposa, en el dormitorio de la planta alta, junto a la cuna de la pequeña María Eugenia, de un año y tres meses; y Víctor y María José, los hijos menores, en sus respectivos cuartos que daban al corredor. Unos minutos antes de que arribaran los intrusos, uno de los serenos había completado sin novedades la recorrida habitual por los galpones.

A esa hora intempestiva llegaron los demonios nocturnos, una docena de individuos, algunos de ellos con la cabeza cubierta por capuchas oscuras, la mayoría a rostro descubierto. Gestos torvos, ademanes bruscos, porte amenazante; todos ellos sabían muy bien

a qué venían y qué le tocaba hacer a cada uno. El sereno que salió presurosamente a recibirlos, diría más tarde que le preguntaron de mala manera «dónde era la reunión», mientras se desplazaban en la oscuridad.

Los intrusos arribaron en cuatro vehículos, entre ellos un Peugeot 504 blanco y un Ford Falcon sin patente; vestían de civil y portaban armas cortas y largas. Actuaron con total impunidad y prepotencia, sintiéndose dueños absolutos del terreno que invadieron sin pedir permiso, como si fuera propio. Luego de rodear la casa por ambos costados y cortar las líneas telefónicas, un grupo atravesó el patio hasta el fondo de la vivienda; el que lo encabezaba golpeó la puerta ventana del dormitorio principal. El dueño de casa, sobresaltado, se levantó en pijamas y, desde adentro, les preguntó qué buscaban, en el mismo instante en que al menos cinco hombres armados penetraban a empujones en la vivienda.

Al grito de: «¡Esto es un allanamiento!» y llevándose todo por delante, inspeccionaron el resto de la casa. A punta de pistola y gritando órdenes, obligaron al dueño de casa y a los demás miembros de la familia a abandonar sus lechos y dirigirse al living, así como estaban, con lo puesto. No era la primera vez que se requisaba aquella vivienda que figuraba en las agendas de todos los servicios de inteligencia; en los últimos años lo había sido en seis oportunidades, pero nunca se habían llevado a nadie. Los miembros de la familia, conturbados por la prepotencia de los visitantes, pensaron que se trataba de uno más de esos procedimientos casi rutinarios a los que ya estaban acostumbrados, aunque algo les decía que esta vez las cosas serían diferentes. Que esta vez la peor tragedia se cernía sobre todos ellos como un ave de mal agüero.

Los intrusos permanecieron en la finca alrededor de una hora, quizá menos. Durante ese tiempo actuaron con desaprensión y extrema violencia, poniendo todo patas arriba, rompiendo y hurgando muebles y placares sin ninguna consideración ni recato. A juzgar por las manchas de sangre que quedaron en la ropa de cama y en el piso del dormitorio principal, es probable que, en esos instantes dramáticos, algún miembro de la familia resultara lastimado, presumiblemente Josefa, la madre, que habría forcejeado con uno de los captores que la golpeó salvajemente. También vapulearon a José María (h), a quien le aplicaron culatazos y otros castigos corporales.

A los mayores de la casa los sacaron a los empujones, maniatados, amordazados y con los ojos vendados; vestidos a medias, los obligaron a subir a los automóviles que esperaban afuera con los motores en marcha y los faros encendidos. En uno de los vehículos subieron a padre e hijo y en otro a María José y a Mirta; Josefa, presumiblemente sin vida, fue alojada en el baúl de uno de los automóviles. Los dos menores, Víctor y María Eugenia, quedaron dentro de la vivienda; el niño encerrado en uno de los baños que daba al corredor, y la beba en el rellano de las escaleras, envuelta en una frazada.

Enseguida, la caravana partió raudamente, llevándose a José María Pujadas Valls; su esposa, Josefa Badell Suriol; José María Pujadas; la compañera de este, Mirta Yolanda Bustos, y María José Pujadas. Para evitar pasar frente al portón de ingreso del Liceo Militar, salieron directamente a la avenida Japón por el camino de tierra colindante a las vías del tren que desembocaba en esa arteria de circulación rápida. Los serenos no dieron mayores detalles: uno de ellos dijo haber visto dos automóviles, uno color blanco, posiblemente un Peugeot 504, y un individuo con una ametralladora en sus manos. El otro, al parecer no vio ni oyó nada: supuestamente estaba lejos de la casa, recorriendo las incubadoras.

En la vivienda, como se dijo, quedaron Víctor José, el menor de los Pujadas, y la pequeña María Eugenia, hija de José María (h) y Mirta Bustos. Y un cuadro desolador de tierra arrasada: desorden por todas partes, ropas tiradas sobre el piso, muebles fuera de lugar, gavetas y cajones abiertos y revueltos, manchas de sangre. La crónica periodística posterior al suceso, da cuenta que los intrusos robaron dinero y objetos de valor, entre ellos alhajas, un grabador, un par de revólveres marca RUBI y una escopeta española de caza. Según consignó *La Voz del Interior*, antes de retirarse, los represores escribieron con lapicera a fibra «Hasta la victoria siempre. CRNJ» sobre un retrato de Mariano que dejaron tirado en el piso, e introdujeron en el inodoro de uno de los baños el busto del guerrillero muerto que el padre conservaba sobre su escritorio. El mismo que le obsequiara Horacio Mallo, el escultor de Rawson que solía visitar a Mariano en el penal.

Luego de que la patota abandonó el lugar y la casa quedó nuevamente sumida en silencio, Víctor pudo zafar de su encierro accionando el picaporte para destrabarlo; tras comprobar que los

mayores no se hallaban en la vivienda, corrió al escritorio de su papá para llamar por teléfono, pero comprobó que no tenía tono. Con las primeras luces, salió en busca de uno de los serenos, a quien pidió que lo acompañase hasta la estación de servicio ubicada sobre la ruta, frente al Liceo, para telefonar desde allí a su hermana, pero el empleado le habría dicho que el patrón le tenía prohibido abandonar su puesto durante la noche. Permaneció entonces junto a su pequeña sobrina hasta que arribaron los empleados del primer turno, alrededor de las siete. Poco más tarde, desde un teléfono vecino, contó lo sucedido a su hermana María de los Ángeles, la mayor de las dos hijas del matrimonio secuestrado.

Ella fue la primera de la familia en llegar y encontrarse con el dantesco espectáculo de la vivienda dada vuelta y, lo más grave: la ausencia de los mayores de la casa, cuyo paradero nadie conocía por esas horas. Ricardo, el otro hermano, también acudió al lugar apenas recibió la infausta noticia. Por esas horas, alguien de la cabaña puso a la pequeña María Eugenia en las manos seguras de sus abuelos, los Bustos, que vivían en el barrio contiguo de Remedios de Escalada.

El primer relato

Fue Víctor José Pujadas, pese a su corta edad, quien, pocas horas más tarde, brindó el único testimonio directo de los acontecimientos de aquella noche salvaje. Según su relato, recogido por el diario porteño *La Opinión* en su edición del viernes 15 de agosto, los intrusos nocturnos golpearon la ventana del dormitorio de su padre, al grito de: «¡Orden de allanamiento, abran la puerta!», y antes de que el dueño de casa, acostumbrado por la fuerza a aquellos desmanes, les franqueara la entrada, derribaron la puerta con violencia y entraron impetuosamente a la vivienda, introduciéndose a la carrera en el resto de las habitaciones.

«No hubo gritos; pienso que papá y mamá, creyendo que era otro allanamiento, no se resistieron. Yo alcancé a ver las piernas de dos personas y la cara de uno. Eran cinco. El que vi de frente era un gordito con anteojos de sol y tenía una curita en el costado izquierdo de la cara. Tendría unos 25 o 30 años», dijo el joven Pujadas.

«Una vez dentro, revisaron la casa y revolviaron todo. Luego nos reunieron en el living. Todos estábamos en pijamas. A mí y a mi sobrinita nos encerraron en el baño», prosiguió. «Lo único que pude escuchar desde el baño fue: “caminen, caminen”. Al rato escuché voces afuera y uno que daba órdenes a los gritos. Todos salieron por la puerta de la cocina y luego oí unos autos que se alejaban. Después de eso no escuché nada más.»

Luego de transcurridos algunos minutos, cuando el silencio era completo y tuvo la certeza de que no había quedado nadie en el lugar, Víctor contó que giró el picaporte y empujó la puerta hasta que pudo salir de su encierro, y que recorrió toda la casa sin hallar a ninguno de sus familiares. Se dirigió entonces al escritorio del padre para usar el teléfono, pero comprobó que el aparato no tenía tono. «Estaba todo revuelto, el televisor roto, el cuadro de Mariano tirado en el piso», dijo, acongojado.

El reportero le preguntó si tuvo miedo, a lo que Víctor respondió que: «miedo tuve al principio; miedo que me pegaran. Pero miedo, miedo, no tuve. A casa no era la primera vez que iba la policía.» Como se dijo, las fuerzas de seguridad ya habían estado otras seis veces antes que esa, solo que esta vez resultó diferente. Esta vez se los llevaron.

La denuncia

Superado el impacto anímico, tras comprobar con sus propios ojos lo que había ocurrido esa madrugada en la residencia paterna, María de los Ángeles, acompañada por algunos letrados amigos del foro local, se movilizó inmediatamente para evitar lo que, presentía, podía tener un final trágico para sus familiares secuestrados. Con la urgencia del caso, aunque sin abrigar demasiadas esperanzas, se presentó ante las autoridades policiales, tanto de la Policía de Córdoba como de la Policía Federal, donde en ambas sedes no obtuvo ninguna información acerca del paradero de su familia. Se trataba, a todas luces, de un procedimiento ilegal del que, aún sabiendo por cuenta de quién corría la autoría, nadie quería hacerse cargo.

Luego de recorrer infructuosamente hospitales y otros lugares para descartar hipótesis que con el correr de las horas caían por su propio peso, y sin saber dónde podrían haber sido llevados

sus padres y hermanos, María de los Ángeles recurrió a los diarios locales para efectuar la denuncia pública de lo sucedido esa madrugada.

El vespertino *Córdoba* de ese día jueves 14 de agosto informó en un suelto que: «Esta mañana se presentó a este Diario la señorita María de los Ángeles Pujadas para denunciar la desaparición de sus padres y otros familiares.» Más adelante agrega que la denunciante relató que la casa muestra un desorden general, hay manchas de sangre en el dormitorio de sus padres donde el respaldar de la cama «mostraba signos de golpes de culata de armas de fuego y los aparatos de teléfono habían sido rotos adrede.» Según se afirma en la misma nota, no se pudo constatar la veracidad de la denuncia, porque la Seccional 17ª como otras reparticiones dependientes de la Jefatura de Policía alegaron desconocer el episodio y negaron cualquier participación en el mismo.

«Coloco a mi familia y su seguridad en manos de las autoridades», fue lo último que dijo la hija del matrimonio secuestrado antes de dirigirse a la Legislatura, donde se presentó alrededor de las once de la mañana. Allí, los representantes del bloque de diputados radicales, después de escuchar su relato desgarrador, convocaron inmediatamente a una conferencia de prensa para repudiar el secuestro y reclamar el esclarecimiento del mismo.

Aparecen los cuerpos

Las primeras informaciones acerca del paradero de los secuestrados se conocieron recién en horas de la tarde de ese mismo jueves negro. Un parte oficial emitido a las 16:15, informó que sobre el camino de tierra que lleva al campo *La Lagunilla*, a unos tres kilómetros hacia el oeste del monolito que recuerda a la aviadora Miriam Stefford sobre la Ruta Nacional N° 36 que une Córdoba con la ciudad de Alta Gracia, fueron encontrados los cadáveres de cuatro personas adultas, mientras que una quinta —de sexo femenino— fue recogida aún con vida, aunque gravemente herida. El desenlace de la tragedia comenzaba a cobrar forma.

El inhóspito paraje, ubicado cerca de las nacientes del arroyo La Cañada que atraviesa la capital cordobesa, pertenecía a la firma Olivarera Argentina. La policía constató que, en el fondo de un pozo de agua fuera de servicio, próximo a una vivienda abando-

nada, se hallaban los cuerpos exánimes de varias personas. Para acceder al sitio donde exterminaron a las víctimas, los visitantes nocturnos derribaron un trecho del alambrado que delimitaba una vieja chacra abandonada y penetraron unos treinta metros hasta el lugar donde se encontraba el pozo, que aún conservaba más de siete metros de profundidad de los cuarenta que supo tener cuando estaba en uso y cuya existencia los intrusos seguramente conocían de antemano.

Según consignó el matutino *La Voz del Interior* al día siguiente, vecinos de la zona, alertados por la detonación de los explosivos que utilizaron los asesinos, entre las 6 y las 6:30 de esa mañana, advirtieron movimientos extraños y la presencia de cinco automóviles estacionados en las inmediaciones de la tapera. Los mismos que al poco rato partieron raudamente con dirección a la ruta 36, escuchándose el estampido de un disparo al aire lanzado desde la caravana. Esos mismos vecinos, con las primeras luces del día, atinaron a acercarse al sitio donde se dieron con el macabro hallazgo y alertaron a la policía.

En el sumario que se abrió ese mismo día en el Juzgado Federal N° 1 a cargo del juez Adolfo Zamboni Ledesma (Expediente 49-5-75), consta que el primero en llegar al lugar del hecho fue un empleado de la compañía Olivarera Argentina, enviado por su patrón para corroborar lo referido a su vez por un lugareño que dijo haber visto esa madrugada un movimiento inusual de automóviles en las inmediaciones de la tapera. Creyendo que se trataría de un intento de robo, el empleado se aproximó al sitio indicado donde vio huellas de sangre sobre el pasto y, poco más allá, extremidades humanas que emergían del interior del pozo semicubierto por un montículo de tierra. Sin pérdida de tiempo, dio aviso a la comisaría más cercana, la de Alta Gracia, desde el teléfono de la estación de servicio Mi Valle, ubicada sobre la ruta 36. La comisión policial acudió al lugar y, como se dijo, comprobó los hechos denunciados, solicitando el auxilio de los bomberos para extraer los cuerpos y la presencia del médico policial para verificar el estado de los mismos.

Valiéndose de un aparejo de sogas, los bomberos rescataron cinco cuerpos, dándose con que una de las víctimas, una mujer joven, aún presentaba signos vitales. Entretanto, cumpliendo con la rutina forense, el personal de Criminalística tomó fotografías y huellas dactiloscópicas y trazó un primer croquis de la escena

del crimen. En presencia de la jueza de Paz, el médico policial brindó los primeros auxilios a la única sobreviviente, a quien le practicó una flebotomía antes de ser derivada al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba. En el lugar se recogieron una frazada, algunas prendas y toallas manchadas con sangre de las víctimas. Los cuatro cadáveres fueron cargados en un furgón de la funeraria Luppi, de la ciudad de Alta Gracia y trasladados a la morgue judicial del Hospital San Roque para cumplir con el trámite de identificación.

En el sumario quedó asentado que las víctimas habían sido maniatadas a la espalda con hilo sisal, amordazadas con cinta adhesiva y ametralladas a mansalva antes de ser arrojadas al interior del pozo, donde fueron rematadas con cargas explosivas –presumiblemente granadas de guerra– para despedazar los cuerpos y provocar a la vez un desmoronamiento de tierra que los cubriese por completo.

Una versión posterior, publicada por *La Voz del Interior* en su edición del 30 de noviembre de 2005, es la que brindó Carlos Agüero al noticiero *Teleocho Noticias* días antes, revelando que él fue uno de los testigos de lo sucedido aquella fría noche de 1975, cuando contaba con 17 años y trabajaba en la zona como peón rural. Según Agüero, alertado por los ruidos y explosiones que se escucharon en la alta madrugada en medio del silencio de la hora, luego de cerciorarse que los intrusos se habían retirado del lugar, se acercó con sus hermanos y el dueño del establecimiento avícola en el que trabajaba y fueron ellos quienes lograron rescatar a la única sobreviviente de la matanza. Como se dijo, las constancias obrantes en el expediente indican que fueron los bomberos quienes izaron los cuerpos de las víctimas, dándose con que una de las víctimas aún respiraba.

Más tarde quedó confirmado que los cuerpos hallados pertenecían a José María Pujadas, jefe de familia, 54 años; a su esposa Josefa, de 51; a su hijo mayor de igual nombre, de 28; y a la menor de sus hijas mujeres, María José Isabel Rosa, de tan solo 18 años. Una vez practicadas las autopsias ordenadas por el juez de Instrucción de Séptima Nominación, doctor Miguel Ángel Ferrero, los cuerpos fueron entregados a los dos hermanos mayores.

Única sobreviviente

Mirta Yolanda Bustos era la compañera de José María Pujadas (h) y madre de la beba de quince meses que los secuestradores dejaron abandonada en la casa junto a Víctor, el menor de los hermanos Pujadas. Según consta en el expediente, fueron los débiles quejidos emitidos por la joven mujer, dada por muerta como los demás, los que alertaron de que aún se hallaba con vida. Pese a que le descerrajaron el correspondiente tiro de gracia, permaneció con vida, y al quedar debajo de los otros cuatro cuerpos, no resultó alcanzada de lleno por los explosivos lanzados al pozo para rematarlos. Un verdadero milagro.

Mirta, igual que los demás, llevaba las manos atadas a la espalda, la boca sellada con cinta adhesiva y presentaba dos heridas de bala en la cabeza y múltiples heridas causadas por las esquirlas de las granadas que por fortuna no interesaron partes vitales. Luego se comprobó que uno de los proyectiles quedó alojado en el cuero cabelludo, sin llegar a lesionar el cráneo, y otro en la nariz.

Fue trasladada al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, donde quedó internada con pronóstico reservado bajo una fuerte vigilancia. Según el parte médico, al ingresar al nosocomio, Mirta Bustos se encontraba en estado de shock, sufría de afasia total —estaba sin habla—, y presentaba las heridas de bala mencionadas y excoriaciones en distintas partes de su cuerpo.

Las primeras reacciones

La noticia del asesinato múltiple corrió como reguero de pólvora, causando una enorme conmoción entre la población y un principio de psicosis colectiva. En las horas que siguieron al hallazgo, se desató una ola de rumores y comentarios escalofriantes acerca de la matanza, que hasta el final del día no fueron desmentidos ni confirmados por las autoridades policiales que seguían mostrándose reticentes a brindar información, tomando distancia de un hecho criminal del que no respondían como institución, aunque conocían a sus autores.

Al día siguiente, viernes 15 de agosto, *La Voz del Interior* dio cuenta de ese estado de confusión reinante, a la vez que reflejó su propia percepción de lo acontecido:

«La impotencia e indignación que ayer caló hondo en toda la población provocada por un acto de barbarie que casi no registra anales en la historia contemporánea de nuestra provincia desató a posteriori una ola de versiones que, en muchos casos, surgían de mentes atormentadas por el asesinato de una familia y otros crímenes que es imposible de calificar. Córdoba, escenario latente de hechos que marcaron cambios profundos en la vida política, social y económica del país, está hoy consternada por una violencia sin par que deja un reguero de sangre y mutila el espíritu de hombres y mujeres que jamás se podrán recuperar. Surgen así, en un clima de horror y temores justificados, que parece nunca acabar, los más disímiles rumores.»

A continuación, la nota periodística mencionaba especies y trascendidos de variada índole, entre ellos la supuesta aparición de cadáveres en La Calera y Barranca Yaco, atentados con bombas, y hasta «del tronar de cañones.» Nada de eso fue confirmado, salvo el ataque a balazos con fines intimidatorios contra la planta transmisora de LV2 *Radio La Voz del Pueblo*, ubicada en la localidad de Ferreyra, próxima a la ciudad de Córdoba.

Tal era el ambiente de zozobra que se vivió esa tarde, que llegó a causar alarma el desborde de euforia de los hinchas de River Plate que tras dieciocho años de sequía, logró ese día el ansiado título de Campeón del Fútbol argentino. En medio de la tensión reinante, los bocinazos, cánticos y otras efusiones de alegría de los simpatizantes de la banda roja que festejaban el título, fueron tomados por muchos cordobeses como parte de las manifestaciones de violencia de las que tanto se hablaba por esas horas. Una vez más, la realidad mostraba sus dos caras contrapuestas, como la imagen de Jano.

En otro artículo de cariz editorial, titulado *Ante el exterminio de los seres humanos*, el mismo diario expresaba el sentimiento general por esas horas:

«El pueblo de Córdoba se sobrecoge ante este nuevo crimen, y hoy caminará otra vez por las calles con el rostro severo y triste de los últimos meses, acostumbrado como está a la rutina del duelo y la tristeza, sintiendo dentro de cada pecho el desprecio y la angustia de cada día.»

A poco de conocerse el hallazgo de los cuerpos, se suscitaron diversas reacciones. Entre las primeras, un comunicado de la Mesa Provisoria de Gremios en Lucha repudiando los alevosos asesinatos, al tiempo que convocaba a los obreros del cordón industrial a realizar asambleas en los lugares de trabajo y hacer abandono de sus tareas a partir de las 10 de la mañana del día viernes bajo las siguientes consignas:

«1º) En repudio a los alevosos asesinatos producidos ayer en nuestra ciudad; 2º) Por la inmediata libertad de los compañeros Mondino y Leyva y demás presos gremiales; 3º) Contra las suspensiones y despidos de las patronales; 4º) Contra la licencia forzosa que pretende imponer la patronal monopolista de Fiat Concord a los compañeros de esa fábrica; 5º) Por la homologación del convenio colectivo de los compañeros de GMD; 6º) Para que se garantice la prestación de los servicios sociales; 7º) En solidaridad con los compañeros de Sanidad, Judiciales, Calzado; 8º) Por la devolución de los sindicatos intervenidos a sus legítimos dirigentes.»

La medida se cumplió en las plantas de IKA Renault, Grandes Motores Diesel, Thompson Ramco y Perkins, entre otros establecimientos industriales del medio. En igual sentido se expidieron la Comisión de Familiares de Presos Políticos y Gremiales, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, distintas agrupaciones estudiantiles y asociaciones de docentes universitarios, la Unión Obrera Gráfica y la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea. También la CGT Regional Córdoba, dominada por los gremios llamados ortodoxos, aunque con un lenguaje diferente,

lamentó el episodio; lo mismo que las 62 Organizaciones y la Mesa Redonda Peronista Permanente, que respondía al dirigente Julio Antún. La Federación de Productores Avícolas de la Provincia de Córdoba repudió el asesinato de «uno de los pioneros del desarrollo avícola en el país.»

Distintos partidos políticos expresaron su repudio: el Partido Auténtico –ligado a los Montoneros–, el Frente de Izquierda Popular, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Revolucionario Cristiano, el Partido Intransigente, el Partido Popular Cristiano, el Partido Socialista Popular, el Partido Obrero, el Partido Comunista y la corriente Vanguardia Comunista.

La Junta Provincial del Partido Auténtico señaló en la extensa declaración emitida ese mismo día que «esa familia de mártires acaba de dar testimonio de la dignidad del Pueblo Argentino, de la justicia de la causa de los trabajadores, del empuje y vigor de su lucha.» En el párrafo siguiente, la agrupación arremete contra el gobierno nacional y la dirigencia justicialista a quienes responsabiliza por la violencia reinante:

«Las autoridades nacionales, empeñadas en una lucha contra el pueblo, que han impulsado y justificado el surgimiento de las bandas mercenarias que defienden su hipócrita ortodoxia y su falsa verticalidad, sumando a su propia traición el avance de la burocracia sindical y de los sectores militares reaccionarios para completar un cerco de miseria y represión contra el pueblo. Son responsables de esta impunidad salvaje las autoridades del Movimiento Nacional Justicialista y del Partido Justicialista que vienen poniendo una máscara peronista a los responsables de tanta ignominia.»

Más adelante, la agrupación política patrocinada por Montoneros denuncia la complicidad del gobierno provincial:

«Es responsable también el gobierno de la Intervención Federal en la provincia, cuyo único mérito fue montar el aparato represivo que conoce la población de Córdoba. Son

responsables todos aquellos legisladores y jueces que con su silencio cómplice y temeroso, su actitud negociadora y su mezquina "prudencia" convalidan día a día un proceso que tiene hoy tan feroz culminación.»

La misma tarde del jueves en que se conoció la noticia, la Cámara de Senadores se hizo eco del grave suceso durante la sesión de tablas.

Desde la vereda de enfrente, las expresiones eran de otro tenor, ajenas a la tragedia. Así, la Juventud Sindical Peronista (JSP) saludaba en un comunicado la designación de Cataldo Quatrocchi al frente del ministerio de Bienestar Social y le daba su amplio apoyo; en tanto que la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN) comandada en Córdoba por Carlos *Coco* Pedrotti anunciaba el cambio de fecha de la cena criolla programada. Por su parte, la Mesa Redonda Peronista Permanente invitaba a la conferencia de Raúl Jassen director de la revista *Reconquista*, acerca de «Sinarquia, Justicialismo y Estado Sindical.» Por lo visto, no todos los actores políticos percibían de la misma manera la gravedad de lo que estaba aconteciendo.

Hasta ese momento la única reacción oficial era la que constaba en el sucinto parte policial difundido por el Departamento de Relaciones Policiales:

«La Jefatura de Policía de la Provincia, ante el brutal y aberrante asesinato de la familia Pujadas, hace conocer a la opinión pública su más categórico repudio y se compromete a emplear todos los medios a su alcance a fin de esclarecer el mismo por cuanto hechos como este atentan contra la tranquilidad y el orden de la población, siendo deber ineludible de la autoridad policial preservarlas.»

Por su parte, la Subsecretaría de Prensa y Difusión de la Intervención Federal, sobre el final del día, dio a conocer el siguiente comunicado:

«El Poder Ejecutivo Provincial repudia categóricamente los hechos criminales acaecidos en la víspera, verdaderos actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Que el odio se enseñoree incluso con la familia, es algo que repugna a nuestro espíritu cristiano y a la reconocida hidalguía argentina. En tal sentido la Intervención Nacional reitera su constante pensamiento, de que no está en manos de nadie hacer justicia por su propia cuenta, puesto que para eso, en el estado de derecho que vivimos, tenemos una Constitución, las leyes y el órgano jurisdiccional pertinente. Consecuentemente con ello, ratifica su fe inquebrantable en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, al mismo tiempo que reafirma su permanente vocación de paz, orden y justicia, pilares fundamentales de nuestro verdadero estilo de vida. El gobierno se compromete a investigar estos hechos hasta las últimas consecuencias. Solicitando en tal sentido la plena colaboración ciudadana, para que así entre todos sostengamos el absoluto imperio de la Ley y la Justicia.»

La primera reacción pública de Raúl Lacabarne fue de sorpresa. El interventor fue informado del hallazgo de los cuerpos esa misma tarde, mientras se encontraba poniendo en funciones a su nuevo ministro de Bienestar Social, Cataldo Quatrocchi, un conocido dirigente de la UOM local. «Las tres A no operan en Córdoba, aunque sí lo hacen otros grupos extremistas», afirmó ante una consulta del periodismo, sin dar mayores precisiones acerca de a quiénes se refería. Fue una de las pocas veces, si no la única, que se reconocía, aunque de modo ambiguo y tangencial, la existencia de la represión ilegal en la provincia.

Horas más tarde, el Poder Ejecutivo provincial, consciente de la gravedad del episodio del que quería tomar la mayor distancia posible, emitió el comunicado oficial citado más arriba.

Palabra de Choux

El jefe de la Policía de Córdoba, inspector general Luis Alberto Choux, desde un primer momento trató de deslindar responsabilidades, descartando cualquier participación de la fuerza a su cargo en el bárbaro crimen. El funcionario policial, que se hallaba de viaje en la Capital Federal, regresó a las 13 horas del día jueves y aseguró ante un cronista del diario *Córdoba* que iban a hacer «todo lo posible por esclarecer el múltiple asesinato.»

Tras fustigar a los autores del atentado que se cobró la vida a toda una familia, Choux recordó «que no hacía más de seis meses que el doctor Pujadas se había presentado espontáneamente en el Departamento Central de Policía y manifestó su total prescindencia con la guerrilla y su intención de trabajar en paz y sin sobresaltos.» En efecto, el jefe de familia, después del último allanamiento, se presentó en la Jefatura de Policía acompañado de un escribano público que labró un acta, para dejar constancia de que ni él ni ninguno de los suyos, mantenía vínculos con organizaciones guerrilleras.

En la misma línea, Choux agregó que: «sus hijos, en los últimos tiempos no fueron requeridos en investigaciones antisubversivas y estimábamos que el grupo familiar se desempeñaba en actividades normales.» Era evidente que el Jefe de Policía quería despegarse del terrible suceso y desviar la atención hacia otro lado, aunque sin brindar pistas específicas ni comprometerse más de la cuenta. Con respecto a la única sobreviviente de la masacre, que por esas horas luchaba por mantenerse con vida, dijo: «Quiera Dios que esa joven se recupere y pueda darnos detalles para la investigación.»

Al día siguiente, sábado 16, el mismo día que se llevó a cabo el sepelio de las víctimas, *La Voz del Interior* publicó nuevas declaraciones del jefe de policía en la misma línea que las transcritas más arriba, vertidas durante un reportaje exclusivo realizado el viernes por la noche en el Salón Rojo de la Jefatura, donde el cronista fue atendido por Choux. El texto completo del reportaje es el siguiente:

«El asesinato de la familia Pujadas es una monstruosidad, una aberración. Es algo que debemos desterrar de toda nuestra patria.

Esto es negativo en todo sentido y ensucia nuestra lucha.

Considero que nosotros somos los segundos damnificados de este asesinato. Somos nosotros porque los agentes de la subversión están actuando en contra de las fuerzas de seguridad, y de tomar alguna represalia lo harán contra el personal policial que trabaja todo el día en las calles.

En cuanto a la investigación le puedo señalar que se está trabajando. Esperamos que la única testigo pueda aportar algún elemento que pueda indicar alguna pista para orientar nuestro trabajo. Esperamos que pueda recuperarse y que pueda declarar cuanto antes. Para evitar cualquier desenlace negativo, hemos dispuesto una custodia bastante fuerte, no digo el número de hombres porque operativamente no conviene hacerlo, pero sí que cuentan con armas largas para la vigilancia de esta persona. Con lo que se ha visto anteayer hay que prever cualquier cosa.»

A la pregunta de si consideraba que las víctimas tenían vinculación con la organización guerrillera a la que perteneció Mariano Pujadas, Choux descartó esa hipótesis de manera tajante:

«De ninguna manera, inclusive el señor José María Pujadas Valls se presentó espontáneamente meses atrás para aclarar su situación frente a la vinculación de su hijo muerto con la guerrilla. Habló con la gente nuestra que trabaja en los casos de subversión y aclaró que en ningún momento estuvo en eso. Inclusive ni estuvo detenido; se presentó, habló y se fue. Nosotros descartamos toda posibilidad de que este hombre tuviera algo que ver con la guerrilla. Si hubiéramos tenido sospechas, lo hubiésemos detenido. Que yo sepa, no pesaban ninguna sospecha sobre él y creo que el mismo concepto tiene la

gente del Departamento de Investigaciones (D2), especializado en esta guerra. Esto es una barbaridad que no tiene nombre. Pienso que tiene que ser algún problema entre gente de la misma guerrilla.»

Consultado acerca de si creía posible que algún sector o grupo policial actuara la margen de su control, la respuesta fue contundente: «Negativo, terminante: punto y guión. En absoluto, no existe ninguna posibilidad ni ningún tipo de sospecha al respecto», remató para no dejar lugar a dudas.

Palabra de asesinos

El comunicado anónimo de un desconocido hasta el momento *Comando Restaurador Nacional Justicialista-Comando Pantera* fue dejado en un sobre dirigido al Jefe de Policía junto a una medalla de metal con la inscripción «I.N.S. Promoción 1973, María José Pujadas.» En los ángulos superior izquierdo e inferior derecho de la hoja de papel, que fue conservada y obra en el expediente de la causa, puede verse, estampada en un sello de tinta azul, la cabeza de una pantera con sus fauces abiertas y, en el ángulo inverso, una estrella de ocho puntas, similar a la estrella federal utilizada en la época de Rosas.

El texto del Parte de Guerra Nº 1, fechado en «Córdoba de la Nueva Andalucía 18/8/75», escrito a máquina sin errores de ortografía, es el siguiente:

«1º) Este Comando el día 14/8/75, siendo las 03.00 horas procedió al secuestro y posterior ejecución (05.00 hs.) del "Clan Pujadas", que servía de apoyo logístico a la antipatria operante en nuestro país.

2º) Este Comando advierte al pueblo que no se deje engañar por las versiones de la prensa judeo-sinárquica tendientes a confundir y desvirtuar nuestro patriótico objetivo.

3º) No amenazamos ni advertimos. . . EJECUTAMOS.

¡SANGRE Y HONOR! ¡VICTORIA O MUERTE!
POR ARGENTINA. VIVA LA PATRIA. VIVA PERÓN
Comando Restaurador Justicialista-Coman-
do Pantera.»

El sepelio

Las infortunadas víctimas del cuádruple crimen fueron sepultadas en la tarde del día sábado 16 de agosto en el cementerio San Jerónimo de la ciudad de Córdoba, el mismo donde tres años antes había sido inhumado Mariano. En las horas previas, los cuatro integrantes de la familia Pujadas fueron velados en la misma residencia donde fueron secuestrados. Allí, en medio de un clima de congoja e indignación, desfilaron parientes y amigos de la familia. El cortejo, encabezado por los coches de la funeraria Despontín que transportaban los cuatro féretros, partió alrededor de las cuatro de la tarde, seguido por una caravana de automóviles y camionetas en las que se trasladó el personal de la cabaña avícola. Para muchos de ellos era una postal repetida de una tragedia anterior, la de Mariano, solo que esta vez multiplicada por cuatro.

En la explanada de la necrópolis de barrio Alto Alberdi, aguardaba otro abigarrado contingente de personas. Los ataúdes, cubiertos por sendas banderas argentinas, fueron conducidos a pulso hasta el panteón donde quedaron depositados. Durante el trayecto, se cantó el Himno Nacional y la Marcha Peronista, incluidas las estrofas agregadas que aludían a las organizaciones armadas. Tres oradores, en nombre del Partido Peronista Auténtico, de reciente formación, y de Montoneros, despidieron los restos, siendo interrumpidos en varias ocasiones por airadas consignas y estribillos coreados por los presentes. Cuando todo terminó, en el suelo quedaron diseminados panfletos del Partido Peronista Auténtico, conteniendo duras críticas a los gobiernos nacional y provincial y a las autoridades del Justicialismo, responsabilizándolos a todos por igual.

Pocos avisos fúnebres —en algunos casos el miedo fue más fuerte que el sentimiento solidario hacia las víctimas—, apenas algunos amigos personales del extinto padre de familia: Gustavo Sarría, Carlos Quiroga Mayor, Eduardo Martín, Juan Olmedo y sus respectivas familias. Del consuegro de Pujadas padre, Raúl

Mothe, padre de Sergio, pareja de María de los Ángeles. De gente ligada a la tragedia pasada y la presente: Rogelio Lesgart, Renzo Toschi, P. Mena, José Polti; los abogados Gustavo Roca, Hugo Vaca Narvaja y Lucio Garzón Maceda; Ricardo Yofre, Ricardo Obregón Cano, Roberto Sinagaglia, Carlos Alberto Capuano, José Fierro, Juan Manuel Montes.

El aviso familiar menciona al círculo íntimo de los extintos: sus hijos, Ricardo y Clara Gutiérrez; María de los Ángeles y Sergio Mothe; Mirta Bustos, Ana María, Zulima y Víctor José. Los nietos de la pareja masacrada: José Francisco, Gustavo, Mariano José, María y María Eugenia, hijos de José María; Sebastián, hijo de María de los Ángeles, y Paula, hija de Ricardo.

El día del sepelio, el Partido Peronista Auténtico publicó una solicitada de fuerte contenido político en el vespertino *Córdoba*. Bajo el título «Frente al odio al pueblo», además de condenar la barbarie, la fuerza patrocinada por Montoneros, planteaba ocho puntos de alto voltaje, tales como la renuncia de Isabel y el inmediato llamado a elecciones; la libertad de los presos políticos y la derogación de la legislación represiva y el levantamiento del estado de sitio; la implementación de un plan económico de emergencia y un salario mínimo de 800.000 pesos. Al pie, se lee «El peronismo vuelve con el peronismo auténtico.»

Investigación acotada

Las actuaciones judiciales vinculadas con el cuádruple crimen recayeron en el Juzgado Federal N° 1, cuyo titular, el doctor Adolfo Zamboni Ledesma, se constituyó en el domicilio de la familia Pujadas en la tarde del lunes 18 de agosto, cuatro días más tarde del secuestro.

Un día antes, el domingo 17, personal de la sección Homicidios y de la división Criminalística de la Policía de Córdoba habían realizado un peritaje en la finca, levantando huellas dactiloscópicas y secuestrando algunos elementos obrantes en el lugar, entre ellos el lápiz a fibra con que los asesinos escribieron «Hasta la victoria siempre» sobre un retrato de Mariano, un presente de la Juventud Peronista de Cipolletti a sus familiares.

El juez federal, acompañado por el fiscal Carlos Otero Álvarez y el jefe de Policía, permaneció alrededor de una hora en la

vivienda. Durante un alto en la inspección ocular, el magistrado conversó con Víctor, el único testigo del secuestro de su familia, que permaneció allí durante todo ese tiempo, demostrando una gran entereza.

Hasta ese momento no habían trascendido mayores detalles de las actuaciones sumariales labradas por la policía; tampoco se difundió el informe forense, ni se proporcionó el identikit de los presuntos autores que en realidad no había sido confeccionado, ni la pericia balística supuestamente practicada sobre los proyectiles y cápsulas halladas en La Lagunilla. Todo permanecía bajo secreto de sumario; el público conocía apenas lo difundido por la prensa en cuentagotas. Tal como estaban las cosas en el país, donde reinaba la impunidad, muy pocos creían que el caso se investigara a fondo y, mucho menos, que llegara a dilucidarse.

La única diligencia ordenada por la Justicia fue un procedimiento en el Hotel Dorá de la ciudad de Córdoba, a cuyos administradores se les requirió la nómina de pasajeros correspondiente a esos días, sin que se supiera el propósito. Según consta en el expediente, a esa altura de la *no investigación* se suscitó un conflicto jurisdiccional entre la justicia provincial, que instruía el sumario, y la federal que reivindicaba su propia competencia. En efecto, el Juzgado de Instrucción de 7ª Nominación, a cargo del juez Miguel Angel Ferrero, Secretaría Colalillo, había iniciado un expediente (91 «A») que reunía las «actuaciones labradas con motivo del secuestro y homicidio de José María Pujadas Valls y otros.» Para zanjar el diferendo, el entonces Agente Fiscal Nº 7 José Vicente Muscará se expidió a favor de la competencia federal, agregándose en consecuencia el expediente citado a la causa que se tramitaba en el Juzgado Federal Nº 1 a cargo de Zamboni Ledesma.

En realidad, no se investigaba demasiado porque no se quería descubrir nada. Como en otros hechos similares, se hacía lo mínimo indispensable para cubrir las formas. Así las cosas, para conocer algo más acerca de lo sucedido solo había esperar la recuperación de Mirta Bustos, quien, al parecer, evolucionaba favorablemente de la intervención quirúrgica a la que había sido sometida en el Hospital de Urgencias, donde permanecía en la sala de terapia intensiva. La única sobreviviente se hallaba bajo fuerte custodia, ya que se temía por un nuevo ataque contra su vida, una presunción que se vio fortalecida con la detención de dos mujeres

vestidas con guardapolvos que intentaron introducirse en la sala donde yacía la paciente.

Aunque la pericia médica de los cadáveres de las víctimas no se conocía aún, con el correr de las horas se afirmó una versión periodística que indicaba que Josefa Badell se resistió a ser llevada por la fuerza y por ese motivo había sido ultimada de un golpe en la cabeza y asfixiada con un cinturón en su propia casa antes de ser trasladada en el baúl de uno de los vehículos hasta el sitio donde se eliminó a los demás integrantes de la familia.

Más reacciones

El martes 19, día de tablas, le tocó pronunciarse a la Cámara de Diputados. Durante la sesión, el Bloque Radical emitió una declaración de repudio, mientras que el bloque oficialista, el FREJULI, presentó un pedido de informes. La crónica periodística señala que se guardó un minuto de silencio en homenaje «a la familia argentina enlutada por quienes se olvidaron de Dios y la Patria», promovido por el diputado oficialista Oscar Valdez. En la ocasión se pronunciaron los diputados Mussa (FREJULI), Prone (UCR) e Indiveri (FREJULI-Línea Popular). En el ambiguo homenaje rendido por el cuerpo se incluyó al capitán Miguel Alberto Keller, muerto el lunes 18 por el ERP durante un operativo en el Tiro Federal de Buenos Aires. Los diarios de sesiones de la Cámara de Diputados del período 1974-1976 desaparecieron de la Legislatura, por lo que no existen más datos que los mencionados.

Entretanto, se conocían en Córdoba las primeras reacciones del orden nacional: un telegrama despachado por el coronel Vicente Damasco, ministro del Interior designado por Isabel, requería al Interventor Federal información sobre la marcha de la investigación. Más tarde, voceros de la Intervención aclararon que en realidad había sido el brigadier Lacabanne quien informó al funcionario nacional sin que este se lo requiriese. El recelo entre ambos funcionarios se palpaba en el ambiente.

Mientras, lejos de la tragedia, el cronista de Espectáculos de *La Voz del Interior* se preguntaba si los cordobeses verían finalmente *El último tango en París*, el promocionado film de Bernardo Bertolucci prohibido por la censura.

Cuando aún no se habían acallado los ecos de la matanza, apenas seis días después, el miércoles 20, la ciudad fue conmocionada por un vasto despliegue guerrillero que intentó esta vez copar la Jefatura de Policía. Hubo muertos, heridos y detenidos.

La represalia no se hizo esperar: al día siguiente se reportó la muerte de Marcos Osatinsky, el jefe guerrillero que había sido detenido un par de semanas atrás. Según la versión oficial, la baja se produjo durante un supuesto enfrentamiento de un comando armado con la policía, en medio del traslado del prisionero al penal de barrio San Martín.

En los días subsiguientes continuaron los hechos de violencia y las muertes. En barrio Santa Ana fue dinamitada una vivienda donde supuestamente funcionaba una cárcel del pueblo, en tanto que el cadáver de Osatinsky fue sustraído de la ambulancia que lo trasladaba a Tucumán, supuestamente por miembros de la organización a la que pertenecía, versión que fue desmentida en una solicitada aparecida en días posteriores, donde se da cuenta de las reales circunstancias que rodearon a su muerte, a la vez que se responsabilizaba a «bandas mercenarias» por la posterior sustracción del cadáver.

La masacre de la familia Pujadas y los acontecimientos posteriores citados más arriba hicieron tambalear al brigadier Lacabanne, puesto bajo la lupa de las autoridades centrales desde que López Rega, su mentor, había caído en desgracia. Tanto que al poco tiempo, el 20 de septiembre de ese año, fue relevado por Raúl Bercovich Rodríguez, un dirigente proveniente de la ortodoxia justicialista que condujo los destinos de la provincia hasta que se produjo el golpe militar de 1976.

Para entonces, el vértice superior del esquema represivo era el general de División, Luciano Benjamín Menéndez, alias *Cachorro*, quien a partir de su designación al frente del Tercer Cuerpo de Ejército, en septiembre de 1975, puso en marcha la etapa más cruenta del terrorismo de Estado en Córdoba.

Informe forense según consta en la causa

En el expediente de la causa se encuentran glosados los informes expedidos por el Gabinete Médico Forense de la Policía de

la Provincia de Córdoba. En esos informes queda expuesto el horror, sin necesidad de agregar más palabras: «En relación a José María Pujadas Valls, se dictamina que este vestía solamente el pantalón y saco del pijama», confirmando lo ya señalado de que fueron sorprendidos en medio de su descanso y arrancados intempestivamente de su domicilio. El informe revela que esta víctima presentaba:

«(...) protrusión de lengua, surcos de ligaduras en ambas muñecas y tobillos, herida de bala de regular calibre con halo de fisch con orificio de entrada en región temporal izquierda y salida por el ángulo maxilar (gonión) derecho, herida de bala con orificio de entrada por el tragus de oreja derecha sin orificio de salida; hematoma bupalpebral en ojo derecho; escoriaciones múltiples en ambos pies y piernas, escoriaciones múltiples en cara anterior de tórax con fractura de múltiples costillas.»

La pericia médica establece como causa probable de la muerte «las lesiones de centros vitales del contenido craneano, amén del shock traumático general de las fracturas costales.»

Respecto a Josefa Badell el informe señala que registraba también:

«Ligaduras en ambas muñecas y tobillos, protrusión de lengua, hematoma bupalpebral en ambos ojos, dos heridas cortantes en párpados superior izquierdo, escoriación en placa de cuatro por cuatro en cara superior de hombro izquierdo, scalp de cuero cabelludo región occipital, dos heridas punzantes de profundidad indefinible en zona retromaxilar derecha, fractura múltiples de costillas.»

A partir de la interpretación de esas lesiones, el representante del Ministerio Público Fiscal señala que:

«Resulta revelador las constancias que dan cuenta que esta víctima tenía un cinturón ajustado con un nudo en torno a su cuello, posiblemente colocado en ese lugar en razón de que en algún momento se habría utilizado para sostener los esparadapos que obstruían su boca. Sin embargo –si bien esta mujer no fallece por asfixia– el relato del Dr. Gasparini de fs. 13502/3, cuando señala –refiriendo a qué significa protrusión de lengua– que significa “exteriorización de la lengua fuera de la boca. Se produce en los ahorcamientos-estrangulamientos, a mano o con cinturones o cordeles. Requiere alta fuerza de aplicación (por ejemplo en la antigua ejecución judicial inglesa)”, nos permite afirmar con grado de probabilidad que este también fue utilizado para atormentarla oprimiendo su cuello (el informe forense da cuenta de los surcos superficiales que le habría producido el cinturón en el cuello). Es así que en sus conclusiones, el forense indica como causa probable de muerte de la Sra. Badell de Pujadas –quien no recibió herida de bala– los politraumatismos que padeciera (ver informe de fs. 6392), sumadas a un reflejo vago-vagal por compresión de la zona carotídea (producido por el lazo en el cuello) que potenciado por los momentos de intenso shock emocional vividos desencadena un paro cardio respiratorio irreversible.»

Con relación a la hija del matrimonio asesinado, el informe refiere lo siguiente:

«Por su parte, María José Pujadas no solo presentaba la herida de bala en la cabeza que –a la postre– le produjeran la muerte, sino que la autopsia destaca que una herida contuso cortante de 5 cm de longitud con fractura de maxilar inferior, hematomas en

ambas fosas orbitarias y múltiples excoriaciones en el rostro, observándose también en este caso las marcas de las ligaduras que sujetaran sus manos y pies. Todo ello da cuenta de la violencia con la que fuera tratada en los momentos previos a su muerte.»

En el caso de José María Pujadas hijo, el informe forense indica:

«(...) que las heridas de bala que recibiera en la región yugular derecha y en la cabeza (ingresada por el conducto auditivo) resultan suficientes para producirle la muerte. Asimismo destaca las lesiones, excoriaciones y hematomas que se habría producido momento antes de los disparos finales, como así también los rastros dejados por las ligaduras de manos y pies.»

Con relación a la única sobreviviente:

«(...) el resumen de su historia clínica agregado a fs. 6366/7 nos permite determinar que habría recibido un trato similar a los del resto de su familia, de ello hablan las heridas que se verificaran a su ingreso al Hospital de Urgencia, donde se da cuenta de que —además de la herida de bala que revistaba en su cráneo— presentaba una herida contusa en región parietal derecho, edema palpebral, hematoma bilateral y excoriaciones. Todo hace suponer que, en el contexto de lo sucedido, y luego de que recibiera un disparo de bala en la cabeza con el evidente propósito de darle muerte, fue equivocadamente dada por muerta y arrojada en el pozo junto a los cuerpos ya sin vida de sus compañeros de infortunio.

Como se advierte el tipo de lesiones recibidas por las víctimas dan clara cuenta que —previo al disparo final que recibieran

todos a excepción de la Sra. Badell— los cinco fueron sometidos a reiterados golpes con el único propósito de mortificarlos. Ninguna otra conclusión cabe al respecto, en especial si se repara en que tanto las cuatro víctimas fatales, como la Sra. Bustos se encontraban atados de pies y manos, lo que claramente indica que carecían de posibilidad alguna de forcejear u oponer resistencia al accionar de sus captores.»

Camino al exilio

Una vez finalizados los recaudos legales y sepultados los cuatro familiares fallecidos, los sobrevivientes de la masacre se alejaron inmediatamente de Córdoba, salvo Mirta Bustos, que convalecía de gravísimas lesiones en distintas partes de su cuerpo. En las horas que siguieron al sepelio de las víctimas, el círculo de relaciones de la familia y los trabajadores de la granja repetían la misma versión: los sobrevivientes de la tragedia se habían marchado a España.

Apresuraron la partida por temor a que el ensañamiento persistiera y los asesinos volvieran por más, esta vez por ellos, para completar la macabra faena. Aun cuando no pesaba sobre ninguno de los sobrevivientes orden de captura ni cosa parecida, estaban amenazados de muerte. Ricardo y María de los Ángeles descreían por completo de la capacidad del Estado, argentino o cordobés, para salvaguardar las vidas de las personas en medio del desborde de violencia parapolicial que causaba nuevas víctimas cada día sin que nadie hiciera nada para detenerlo ni, mucho menos, para identificar y castigar a los responsables.

Como tantos otros argentinos en esa época, decidieron emprender el camino del exilio como única forma de poner a salvo sus vidas. No fue difícil elegir el destino: volverían sobre los pasos de sus mayores hasta el lugar de origen, donde todo comenzó: Barcelona.

Permanecerían en el país solo el tiempo necesario para completar los trámites. Los más pequeños—Sebastián y Paula— viajaban junto a sus respectivos progenitores; el mayor problema era cómo sacar del país a Víctor sin contar con la correspondiente autoriza-

ción paterna. Hasta que en un Juzgado de Menores, la encargada –Alicia Beatriz de Oliveira– les facilitó las cosas, sugiriéndoles que el joven Pujadas declarara que había abandonado el hogar; de ese modo, podía obtener la patria potestad provisoria de la persona que supuestamente lo cobijó. Se cumplió con la diligencia judicial y Víctor quedó bajo la tutela de Ricardo, su hermano mayor, que también se aprestaba a viajar al extranjero junto a su familia. María Eugenia, entretanto, permanecía en Córdoba, bajo la custodia de sus abuelos maternos.

Finalmente, casi con lo puesto y llenos de temor, lograron sobrepasar los controles de Migraciones, abordar el avión y salir del país rumbo a España: María de los Ángeles junto a Sergio Mothe, su esposo, y el bebé de ambos; Ricardo con su mujer y su pequeña hija; Víctor, y un tío –Mariano, hermano de Josefa Badell– que viajó desde Cataluña a buscarlos. Con los bienes materiales que quedaban en el país ya verían qué se hacía; de momento la prioridad era poner a salvo sus vidas.

Testimonio de Mirta Yolanda Bustos

El testimonio de la única sobreviviente de la masacre fue brindado el 12 de noviembre de ese año de 1975, cuando, merced a la rehabilitación, había recuperado el habla, aunque le costaba pronunciar algunas palabras. Seguía en el Hospital de Urgencias, pese a que durante los meses previos hubo al menos un par de intentos de trasladarla, que no llegaron a concretarse gracias a que los médicos que la trataban se opusieron a que fuera llevada a otro lugar donde no hubiera garantías para ella. Su escueto testimonio consta a fojas 108 del expediente de la causa *Barreiro y otros*:

«(...) Por su parte Mirta Yolanda Bustos relata a fs. 6495/6 sus recuerdos sobre lo sucedido, señalando que cuando se encontraban durmiendo fueron despertados por ruidos en la casa, que aparecieron varios individuos en su habitación y que la inmovilizaron atándoles las manos y vendándoles los ojos, haciendo lo propio con su marido, José María Pujadas Badell.

Señala que la condujeron a la planta baja donde permaneció sentada por un lapso de aproximadamente cuarenta y cinco minutos –sin poder calmar el llanto de su hijita que permanecía en la habitación de arriba y no paraba de llorar– para luego sacarla del domicilio e introducirla en la parte trasera de un vehículo, y que minutos más tarde advierte que sube a su lado su cuñada María José, quien no tenía tapada la boca y que lloraba y le decía “nos van a matar”. Relata que luego de unos veinte minutos, subió otra persona a la parte trasera del auto y que este inició la marcha por aproximadamente media hora y que durante ese trayecto nadie habló a excepción de uno de los atacantes que le preguntó a su cuñada “¿Vos qué sos de los guerrilleros?”. Que recién cuando el auto detuvo su marcha escuchó la voz angustiada de su esposo que le decía “Flaca, la nena”, preocupado por su hijita de poco más de un año que había quedado en la casa junto con Víctor. Que es todo cuanto pudo decir su marido porque fue inmediatamente silenciado, y –pese a encontrarse con los ojos vendados– pudo advertir que estaba siendo sometido a una golpiza, que recién entonces la hicieron descender del auto junto a María José y las acostaron en el suelo con la cara hacia arriba. Que escuchó un disparo –que supone que fue el que iba dirigido a ella –porque a partir de ese momento no recuerda nada más.»

Después de lo ocurrido, Mirta Yolanda Bustos ya no sería la misma de antes. La sombra de la tragedia la perseguiría por el resto de su vida.

¿Por qué los Pujadas?

Sin dudas, la elección de una familia ligada por lazos de sangre a un guerrillero emblemático, fundador de Montoneros, no fue casual. Está claro que la decisión de exterminarlos del modo brutal que se lo hizo no obedeció a fines operativos, por cuanto no estaba en juego desbaratar algún procedimiento subversivo en ciernes ni dismantelar ninguna célula de Montoneros; ni siquiera de capturar a alguno de sus integrantes, porque ninguno de los miembros de la familia pertenecía a ninguna organización armada, tal como el propio jefe de Policía lo reconoció públicamente luego de la matanza.

Tras el fusilamiento de Mariano junto a otros quince prisioneros en la base Almirante Zar, la familia Pujadas permaneció todo el tiempo bajo la lupa de los servicios de inteligencia y fue objeto de reiteradas requisas, investigaciones y todo tipo de seguimientos y molestias sistemáticas. Ninguna de esas veces se comprobó vinculación directa o indirecta de alguno de ellos con los grupos guerrilleros que operaban en esa época, ni se halló nada que pudiera resultar sospechoso o tuviera valor de indicio de una supuesta relación de la familia con grupos *subversivos*, según la jerga utilizada por los represores. Como afirmó Choux, los Pujadas se dedicaban a sus labores y todo lo que deseaban era vivir en paz.

Entonces, si las cosas eran realmente así, ¿por qué fueron elegidos? La explicación —si es que un hecho aberrante puede tenerla— debe buscarse en el especial momento que se vivía en agosto de 1975 en la provincia de Córdoba. El ambiente era de máxima tensión; desde el Navarrazo en adelante, se venía gestando un ascenso sistemático y arrollador de la derecha que ocupaba los espacios de poder, desplazando a los sectores ligados al gobierno depuesto, a la Juventud Peronista y a la izquierda no peronista en general, convertidos en blancos de los ataques. Sindicatos, universidades y facultades, medios de comunicación, bancos oficiales, caían en manos de personajes comprometidos con la facción gobernante, directamente ligada a José López Rega en el orden nacional.

En medio de ese ambiente enrarecido, comenzó a cobrar cuerpo la actividad represiva ilegal, concebida como una cruzada contra el comunismo que, según sus mentores, anidaba en Córdoba y era preciso borrar del mapa.

Esa feroz ofensiva represiva había desatado, a su vez, la reacción de las organizaciones armadas, que trataban por todos los medios de conservar los espacios ganados en una provincia considerada por sus respectivas conducciones como estratégica por la alta concentración obrera y universitaria y nivel de politización. Los golpes iban y venían, de un lado y del otro. La violencia se adueñó de las calles de la Docta, donde nadie podía sentirse seguro.

En Córdoba, la actividad represiva tuvo matices propios y mayor organicidad que a nivel nacional. El rol más activo lo asumió el llamado Comando Libertadores de América, ligado operativamente al Departamento de Investigaciones de la Policía (D2) y al Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército. El cometido de esa organización ilegal y clandestina era tan siniestro como el de las Tres A: quebrar el vínculo entre los grupos armados y la sociedad mediante la violencia y el terror, atentar contra militantes, dirigentes y activistas de izquierda, generar contrainteligencia e intimidar a todos aquellos que pudieran estar directa o indirectamente ligados a la subversión.

El fin último de los atentados, secuestros y ataques que se perpetraban a diario era, precisamente, amedrentar; atemorizar y disuadir a los ciudadanos para aislar a las organizaciones revolucionarias y poder así acabar con ellas con mayor facilidad. Era la fase psicológica de una acción terrorista planificada y ejecutada con el asesoramiento de quienes ya habían probado sus resultados en otras partes del mundo; un ensayo general de lo que más tarde se conocería como Doctrina de la Seguridad Nacional.

En ese marco, el asesinato de una familia entera, vinculada a la guerrilla en el imaginario público, estaba destinado a ser un claro mensaje intimidatorio dirigido al conjunto de la sociedad. No fue la peligrosidad de esa familia —que ni por asomo exhibía tal condición— sino la intención deliberada de sembrar el terror a gran escala lo que llevó a sus autores a concebir y ejecutar el tremendo crimen. Algo parecido a lo que se solía hacer en la Argentina del siglo XIX con las cabezas de los vencidos, expuestas en la plaza pública para aterrorizar a la población y disuadirla de apoyar al bando equivocado.

Tampoco fue casual la fecha elegida, que encerraba un alto valor simbólico: al día siguiente del hecho se cumplía un nuevo aniversario de la afrentosa —para las Fuerzas Armadas— fuga de

Rawson y, una semana más tarde, de la masacre de Trelew, donde cayó Mariano junto a otros quince prisioneros. Los sicarios sabían que, por el predicamento de la familia del guerrillero muerto y su arraigo en la comunidad cordobesa, la masacre, lejos de pasar desapercibida, repercutiría en la opinión pública, causando una enorme conmoción. No se equivocaron; eso fue exactamente lo que pasó.

Según pasan los años

La escalada de violencia que se desató en los meses siguientes a la masacre, desplazó al caso Pujadas del centro de atención y del interés de la Justicia, que en realidad nunca llegó a concitar del todo.

Pese al cambio de interventor, en Córdoba la represión ilegal siguió su curso: a partir del mes de septiembre y hasta el 24 de marzo de 1976 se produjeron 50 casos de desaparición de personas, según el listado que forma parte del informe de la Delegación Córdoba de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP).

Debieron pasar muchos años para que el aberrante episodio que tuvo como víctimas a los Pujadas recobrara vida. Después que se reabrieron las causas contra los represores que actuaron en el ámbito de la provincia de Córdoba, varios testimonios brindados en diferentes ámbitos señalaron a los responsables materiales de la matanza.

Teresa Celia Meschiati, al declarar en la causa por los crímenes cometidos contra detenidos en el centro clandestino de La Perla, donde estuvo cautiva, con referencia al caso de la familia Pujadas, dijo: «De los Pujadas, Manzanelli contó cómo habían hecho para matarlos, cómo los sacan a todos, los ponen en un pozo y los ametrallan y que en la casa habían dejado a un bebé y a un chico de once años.» Se refiere al sargento primero Luis Alberto Manzanelli, señalado como uno de los miembros más feroces del Comando Libertadores de América, quien después del golpe de 1976 siguió actuando como torturador y cumpliendo *trabajo de calle*, como se conocía a los procedimientos ilegales en la vía pública.

Otro que se jactaba a menudo de haber participado del asesinato de los Pujadas era Héctor Vergez, según lo testificó el cola-

boracionista Fermín de los Santos cuando le tocó declarar: «había aniquilado a la familia Pujadas mediante explosivos y se decía responsable del interrogatorio, tortura y muerte de Eduardo Juan Jensen, quien había estado detenido en el campo de la Ribera.»

En el mismo sentido, otra detenida, Liliana Callizo, aseguró que «Vergez se jactaba en La Perla de su directa intervención en distintos secuestros y asesinatos, entre los que incluye el de la familia Pujadas, el asesinato de nueve estudiantes bolivianos, los tormentos y la muerte de Susana Luna.»

Según consta en la misma causa, Piero Di Monte, exprisionero de La Perla, «recuerda que el sargento Hugo Herrera, uno de los más feroces torturadores, comentaba sus incursiones en relación a hechos perpetrados por el grupo que se hacía llamar Comando Libertadores de América, como por ejemplo el caso de la familia Pujadas o la muerte de Jensen.»

Otro detenido de aquella época, Gustavo Adolfo Contepomi, declaró durante el juicio a las juntas militares (24 de junio de 1985) que: «nuestros torturadores contaban que antes que se inaugurara La Perla, ellos eran el “Comando Libertadores de América”, y habían sido los responsables de todos los secuestros que se habían producido en Córdoba a fines del ‘75 y principios del ‘76, inclusive antes del golpe de Estado; se jactaban de haber sido los que mataron a toda la familia Pujadas, entre ellos el mayor Vergez, el civil López, el civil Romero y el suboficial Manzanelli.»

La versión Maristany, 35 años después

El 20 de agosto de 2010, el diario *Página 12*, reproduce el relato del exnovio de María José, una de las víctimas:

«La noche de la masacre, en la casa estaban el matrimonio Pujadas, sus hijos José María, María José y Víctor, la esposa de José María y la hijita de ellos, María Eugenia. Los Pujadas tenían tres hijos más: Ricardo, que ya estaba casado y vivía con su mujer y su hija en el centro de la ciudad; Ángeles, que estaba casada y hacía poco tiempo que se había mudado a una casa que compraron

los Pujadas padres, alejada de la cabaña avícola, y Mariano, quien había sido fusilado en Trelew. Los que se sobrevivieron esa noche fueron Víctor, que tenía once años, y María Eugenia, de tres meses, porque los encerraron en un baño. De los presentes se salvó milagrosamente la esposa de José María, pero falleció a los pocos meses a causa de las secuelas de aquella noche. Los tres hermanos que quedaron (Ricardo, Ángeles y Víctor) y sus respectivas familias se fueron a España con muy pocas pertenencias. Ninguno de los tres volvió a vivir a la Argentina, pero todos han estado de paso visitando a familiares o por negocios. Ricardo falleció hace algunos años a causa de un cáncer de hígado.»

Más adelante, Juan Carlos Maristany, quien siguió ligado a la familia Pujadas durante algún tiempo luego de la tragedia, recuerda amargamente que:

«(...) había en esa familia mucha honestidad, mucha sensibilidad social y muchas ganas de hacer. Todo esto fue truncado espantosamente por un grupo de "animales". (...) María José era una hermosa mujercita que a simple vista parecía sumamente frágil pero, en realidad, era fuerte y apasionada en todos sus actos. Reía con pasión, lloraba con pasión. Toda su existencia fue un homenaje a la vida y al compromiso.»

La causa judicial

En los años que siguieron a la masacre, la causa judicial (Expediente 49-5-75, Juzgado Federal N° 1), como casi todas las demás de esa misma época, permaneció dormida y, como era de norma, no se practicó ninguna averiguación ni diligencia; mucho menos detenciones relacionadas con el hecho.

Al año siguiente del hecho, según auto de fecha 3 de noviembre de 1976, el juez Adolfo Zamboni Ledesma dictó el sobreseimiento provisorio por prescripción en la causa que hasta ese momento no tenía imputados, en tanto que, ya en tiempos de democracia, el 5 de septiembre de 1990, otro juez federal, Gustavo Becerra Ferrer, dispuso el sobreseimiento definitivo y mandó el expediente al archivo.

Después de 1983, como se dijo, en otras causas abiertas por delitos de lesa humanidad cometidos en la misma época, salieron a la luz nuevos elementos de juicio que incriminaron a los presuntos autores del cuádruple crimen del 14 de agosto de 1975, lo que dio lugar a la instrucción de una nueva causa, a la que fueron agregadas las actuaciones originales interrumpidas por las resoluciones mencionadas: «Familia Pujadas s/averiguación de ilícito», que bajo el N° 28/06 se tramitó en el Juzgado Federal N° 3 de los Tribunales Federales de Córdoba, fiscalía López de Filoñuk. El paso siguiente fue la anulación de la resolución que había declarado extinguida la causa por prescripción. La medida fue dispuesta el 15 de junio de 2007 por la entonces jueza federal Cristina Garzón de Lazcano, con lo cual quedó expedito el camino para proseguir la investigación.

Más tarde, las autoridades judiciales le encomendaron a la misma fiscalía, que realizó una tarea meritoria para descubrir la verdad histórica y reabrir causas dormidas:

«La promoción del reagrupamiento de una serie de casos con el propósito de lograr, en un tiempo razonable, juicios significativos (en cantidad de hechos e imputados) que den cuenta de la magnitud y el modo de actuar del terrorismo de Estado en la provincia de Córdoba durante la década del '70, con el menor grado de exposición y desgaste de los testigos-víctimas que sea posible.»

En esa misma línea de esclarecimiento de actos terroristas previos al golpe de 1976, un grupo de abogados cordobeses—entre los que se contaban María Elena Mercado, Luis Reinaudi, María Teresa Sánchez y Miguel Ceballos— denunciaron el accionar del Comando Libertadores de América y reclamaron la investigación

de la terrible matanza de la familia Pujadas, entre otros hechos aberrantes ocurridos en la misma época.

El resultado de esos trámites procesales inconclusos y ulterior agrupamiento de expedientes fue la apertura de una mega causa caratulada «Barreiro Ernesto Guillermo, Menéndez Luciano Benjamín y otros p.ss.aa. privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado» (Expte. 12.627), que citamos hasta aquí como *Barreiro y otros*.

La causa abarca 51 casos de secuestros, torturas y homicidios, todos ellos ocurridos antes del golpe de Estado de 1976, como los secuestros de Graciela del Valle Maorenzic y María de las Mercedes Gómez de Orzaocoa (marzo 1975), la ejecución de Marcos Osatinsky (agosto de 1975), la masacre de la familia Pujadas (agosto de 1975), la matanza de estudiantes bolivianos y peruanos (diciembre de 1975) y el secuestro de Miguel Hugo Vaca Narvaja (marzo de 1976), entre otros.

En la treintena de imputados en la causa; además de los nombrados, aparecen otros nombres prominentes de la represión ilegal y del terrorismo de Estado, como Héctor Pedro Vergez, Luis Manzanelli y Carlos Yanicelli.

La prueba reunida durante la instrucción de los hechos que forman parte de la causa se compone de Documental e Informativa (numerosos documentos citados en el expediente) y Testimonial (declaraciones de testigos, víctimas y sobrevivientes).

En el caso específico del cuádruple crimen de los Pujadas la prueba consiste en las declaraciones de Víctor, obrantes en el expediente, y el testimonio prestado oportunamente por Mirta Bustos, así como de otros testigos que estuvieron detenidos en el campo de La Perla y escucharon comentarios acerca del hecho, como Teresa Meschiati, Ana Iliovich y Graciela Geuna. También las declaraciones de Flavio Bustillo Villarreal y Dionisio Roberto Carballo, empleados de la granja San José al tiempo del secuestro de sus patrones, y Miguel Ángel Periale y Ricardo Manuel Salcedo, trabajadores rurales que vieron los cuerpos de las víctimas *in situ* tras el asesinato.

En cuanto al testimonio de Víctor, coincide con el relato publicado por *La Opinión* al día siguiente de la masacre, salvo en lo que respecta a María Eugenia, la beba, que según consta en el expediente, no fue encerrada en el baño con él, sino que quedó al pie de las escaleras, donde la halló tras zafar de su encierro.

Dionisio Carballo, empleado de la granja, brindó otros detalles, según consta en el expediente:

«Que en relación al episodio del secuestro de la familia recuerda que ese día llegó a las ocho de la mañana y vio que los empleados estaban en el patio manifestándoles que estaban sin los patrones porque los habían secuestrado. Que entró a la casa y vio que estaba todo desordenado y que el dormitorio de sus patrones estaba todo desarmado, tirado y podía verse que en el respaldar de la cama matrimonial estaba marcada la forma de la culata de una escopeta o fusil como si hubieran pegado allí con mucha fuerza. Que había sangre desde el piso a la cama, salpicando la pared, hasta la cocina y que pudo ver también que en un cuadro que había en el living habían pintado la leyenda "Comando Águilas Negras" y que un busto que tenían de Mariano Pujadas lo habían tirado al inodoro del baño de la planta baja.»

La prueba técnica obrante en la causa son los informes de las autopsias que se realizaron a los cadáveres en el Gabinete Médico Forense de la Policía de la Provincia de Córdoba., agregados en autos a fs. 6284/7. Además, obran en el expediente los informes de la autopsias practicadas por el Dr. Humberto Numa, miembro del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, obrantes a fojas 6.383/6.395; como así también el resumen de la historia clínica de Mirta Bustos, suscripta por el Dr. Martín Avellaneda, director del Hospital de Urgencias.

La instrucción de la causa fija el marco contextual del cuádruple homicidio, incorporando lo que en la misma se denominan

«(...) consideraciones previas referidas a la política de persecución de la subversión que el Estado había emprendido en la primera mitad de la década de 1970, política que ciertamente no solo contextualiza histórica-

mente los hechos que nos ocupan en la presente causa, sino que impacta directamente en tales sucesos. Es así que en los párrafos que siguen habremos de recorrer, a la luz de variada documentación incorporada a la presente causa, el camino recorrido por los estamentos de inteligencia de las fuerzas de seguridad, refiriéndonos especialmente a la labor que en este sentido realizaban los órganos que ejercían esa función en el Ejército y en la Policía de la Provincia de Córdoba.»

Y a continuación establece una distinción entre:

«Dos etapas claramente definidas. La primera, marcada especialmente por una estructura informal bajo la órbita del poder estatal en la que se involucran elementos policiales, civiles y militares; y la segunda —que se inicia en octubre de 1975— definida al detalle por la estructura de todo el aparato represivo estatal, comandada por el Ejército y abocada en términos de guerra a la aniquilación del aparato subversivo.»

La conclusión de este apartado es que:

«Luego de lo reseñado en este capítulo no puedo más que concluir que los hechos de naturaleza delictiva que hoy nos ocupan —acontecidos entre marzo de 1975 y marzo de 1976, todos antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976— acontecieron en el marco de una lucha de claro contenido ideológico, montada desde el aparato del Estado, que les brindó recursos, amparo y garantía de impunidad. Es así, que estos crímenes deben encuadrarse en los extremos de lo que llamamos "crímenes de lesa humanidad", por lo que son alcanzados por las consecuencias jurídicas que de esta tipología

se deriva, especialmente en lo que concierne a su imprescriptibilidad.»

Los autores con nombre y apellido

Con el paso del tiempo, se afirmó la certeza de que el secuestro y posterior asesinato de cuatro integrantes de la familia Pujadas que se adjudicó el Comando Pantera, en realidad corrió por cuenta del llamado Comando Libertadores de América, el grupo de tareas integrado por militares y civiles cuya sede operativa era el D2 de la Policía de la Provincia de Córdoba, que actuaba a su vez de acuerdo a los lineamientos trazados por el Destacamento de Inteligencia 141 y bajo el paraguas protector del Tercer Cuerpo de Ejército.

¿Quiénes eran los asesinos? En el Expediente N° 12.627 del Poder Judicial de la Nación, correspondiente a la causa tramitada en el Juzgado Federal N° 3 de los Tribunales Federales de Córdoba –mencionado como causa *Barreiro y otros*– por la que se investigó a un conjunto de civiles y militares por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado, por diferentes hechos delictivos ocurridos en la misma época, en el hecho concreto que involucra a la familia Pujadas, figuran los nombres de los imputados como autores materiales del asesinato de cuatro integrantes de dicha familia.

La nómina de los imputados, tal como se hallan filiados en el requerimiento de elevación a juicio promovido por el Ministerio Público Fiscal, es la siguiente:

Héctor Pedro Vergez: (a) *Gastón, Capitán Vargas*, DNI 7.361.705., de nacionalidad argentino, estado civil casado, domiciliado en calle Rivadavia N° 1396 Piso 1° de Capital Federal, actualmente alojado en la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz de disposición de Juzgado Federal N° 5 de Capital Federal, de profesión o actividad militar retirado en el año 1978 con el grado de Capitán, nacido el día 28 de julio de 1943 en la Localidad de Victoria, provincia de La Pampa.

Luis Alberto Manzanelli: (a) *Hombre del violín* o *Luis*, MI 6.506.196, nacido el 07/09/38 en Córdoba, casado, militar retirado con el grado de Suboficial principal, hijo de Osvaldo Mercedes y Delfina Natividad Toranzo, domiciliado actualmente en calle Juan Fernández 6528, de barrio 20 de Junio, ciudad de Córdoba.

José Hugo Herrera: (a) *Tarta, Quequeque o Hugo*; DNI 4.579.794, argentino, nacido el 14/07/41 en la ciudad de Río Cuarto –Provincia de Córdoba–, hijo de José (f.) y de Ana Lucía Boccolini (f.), casado, militar retirado en el año 1980 con el grado de Sargento Ayudante, domiciliado en calle Rumipal N° 2864 B° San Pablo, ciudad de Córdoba.

Eduardo Grandi: DNI 6.500.270, argentino, nacido el 08/01/37 en Concordia provincia de Entre Ríos, de 72 años de edad, hijo de Tomás Emilio (f.) y Amelia Odoriso (f.), de estado civil casado, domiciliado actualmente en Onofrio Palamara N°2768 de barrio Cervecedores de esta ciudad, de actividad Comisario Inspector de la Policía de la Provincia de Córdoba (R.).

Ricardo Cayetano Rocha: argentino, DNI 6.614.717, nacido el día 02/07/49 en la ciudad de Bell Ville, provincia de Córdoba, hijo de Cayetano Ricardo (f) y de Elsa Carmen Suárez, de estado civil casado, domiciliado actualmente en calle Falucho 660, barrio 25 de Mayo, ciudad de Alta Gracia, jubilado por incapacidad, expolicía.

Marcelo Luna: (a) *Piruchín o pibe pedrota*, argentino, DNI 6.492.293, nacido el 10/06/35 en la ciudad de Berisso, provincia de Buenos Aires, hijo de Mariano y de Ana Muro, casado, domiciliado en calle Del Canal esquina De la Fuente, barrio Márquez de Sobremonte de la ciudad de Córdoba, de actividad policía de la provincia de Córdoba, retirado hace aproximadamente 18 años.

Juan Eduardo Ramón Molina: (a) *Negro*, argentino, DNI 7.984.919, nacido en Córdoba Capital, el 25/10/45, hijo de Néstor Francisco (f) y de Lucinda Monserrat Martínez (f), de estado civil casado, domiciliado actualmente en Paraje Ojo de Agua, Pedanía La Higuera, Dpto. Cruz del Eje, provincia de Córdoba, de actividad tareas rurales.

Herminio Jesús Anton: (a) *perro, boxer*, DNI N° 7.983.527, argentino, nacido el día 04/07/45 en la ciudad de Córdoba, hijo de Herminio y Martina Lidya Belen, con último domicilio en calle Ignacio Garzón 3169 de barrio Jardín de esta ciudad, casado, policía retirado.

Mirta Graciela Antón: (a) *Kuka, Graciela o Negra*, DNI 10.906.586, argentina, nacida el día 11/11/53 en la ciudad de Córdoba, hija de Herminio (fallecido) y Martina Lydia Belen, de estado civil viuda, domiciliada actualmente en calle Lezcano Ceballos N°

2631 de barrio Cervecedores de esta ciudad, de actividad Sargento (R) de la Policía de la Provincia Córdoba.

Antonio Filiz: LE 7.693.610, argentino, nacido el día 29/07/49 en Córdoba Capital, hijo de Vicente y Maravillas Romera, de estado civil casado, domiciliado actualmente en calle Villa Rica N° 928 de Barrio Residencial América de esta ciudad, de actividad policía retirado.

Fernando Andrés Pérez: M.I. 6.479.552, argentino, nacido el 20/09/32 en la ciudad de Córdoba, hijo de Andrés (f.) y Encarnación González (f.), de estado civil casado, domiciliado actualmente en calle Espora N° 2396 de B° Rosedal de esta ciudad, de actividad policía retirado.

Carlos Alfredo Yanicelli: (a) *Tucán*, argentino, DNI 10.836.802, nacido el 05/05/53, en la localidad de Villa de Soto, departamento Cruz del Eje, provincia de Córdoba, hijo de Alfredo Aldo (f) y de María Eleonora Fedi (f), de estado civil casado, domiciliado Alonso de Vera y Aragón 681, barrio Márquez de Sobremonte, de actividad retirado de la Policía de la Provincia de Córdoba, con el grado de comisario mayor.

Calixto Luis Flores: (a) *Chato*, argentino, DNI 6.509.755, nacido el 14/10/39, en la ciudad de Paso Libres, provincia de Corrientes, hijo de Luis (f) y de Raquel Martínez (f), de estado civil casado, domiciliado actualmente en calle Isidro Mena 2818, barrio Colón, ciudad Córdoba, actividad policía retirado con el grado de sub-oficial mayor.

Yamil Jabour: (a) *Turco*, argentino, DNI 6.606.450, nacido el 31/01/47 en la localidad de San Agustín, provincia de Córdoba, hijo de Affif (f) y de Mafalda Felisa González, de estado civil casado, domiciliado actualmente en calle Manuel Reyna 4117, barrio Cervecedores, policía retirado con el grado de Comisario Mayor.

Juan Carlos Cerutti: LE 6.553.509, argentino, nacido el 28/05/43 en la localidad de Cintra, provincia de Córdoba, hijo de Lorenzo (f.) y Josefa Raineri (f.), de estado civil casado, domiciliado actualmente en calle Falcato N° 826 de la ciudad de Bell Ville, jubilado de la Policía de la Provincia de Córdoba.

Y los civiles:

José Domingo Melfi: DNI N° 8.277.438, argentino, nacido el día 5/07/50 en esta ciudad de Córdoba, hijo de José Francisco Humberto y Ada Aurora Pedraza, domiciliado actualmente en

Av. de Mayo 923 de Barrio Villa Libertador de esta ciudad, de estado civil casado.

Jorge Omar Heredia: DNI N° 8.453.686, argentino, nacido el 25/11/50 en esta ciudad de Córdoba, hijo de Narciso Eusebio y Jesús María Barrera, separado, domiciliado en Continuación Echeverría casa 78 barrio Ricardo I, La Rioja, capital.

Eduardo Bonifacio Ríos: empleado de maestranza en la Cámara de Diputados (1973), pasó a desempeñarse como personal de vigilancia y reportaba al secretario del jefe de Policía Antonio Navarro. Luego de la Intervención Federal pasó al Ministerio Gobierno y, más tarde, al de Bienestar Social. En 1975 ingresó al D2.

Puede resultar ilustrativo agregar el comentario que sobre algunos de los imputados efectuó Carlos *Charlie* Moore, quien los conoció a fondo por convivir con ellos durante seis años en la sede del D2, y que Miguel Robles, ya citado, recogió en su libro. Con respecto al capitán Vergez, Moore señala: «Vergez era un tipo bien jodido ¡Guarda con Vergez! Ese sí que era un tipo muy operativo. Y para describirlo, te diría simplemente, que fue un asesino implacable.»

De Mirta Antón dice: «Esa mujer era una verdadera desalmada. Era una chica que parecía no tener principios, ni sentimientos, ni nada (...) Si yo la tengo que describir a "la Cuca" la describo no como inmoral, sino como amoral, porque ella no parecía distinguir diferencias entre el bien y el mal. Y además parecía no tener ningún tipo de remordimientos.» En cuanto a Carlos Yanicelli, afirma: «Al principio [de la detención de Moore] hacía buena letra, porque era un tipo carismático, comunicativo con toda la gente; era un líder natural para todos. Pero terminó para la mierda, porque al final terminó matando y torturando gente y metido en las cosas más oscuras de la Brigada.» De Jorge Pereyra, dice: «"El "Mocho" Pereyra era un pendejo protegido por la madre, un cobarde que se vivía escondiendo debajo de las polleras de su mamá, "la Tía" Pereyra.» De Eduardo Grandi, dice: «Era un oficial que venía de la Brigada número Dos, la que Merlo tenía originalmente a su cargo. Era un oficial de escuela, no un supernumerario. Y si bien te hacía recagar -porque en el D2 no había ninguna palomita blanca y todos fueron medio mano pesada-, yo recuerdo que en una época se opuso a los secuestros y asesinatos. Pero después se terminó integrando plenamente a las Brigadas.» De Calixto Flores, alias *Chato*, opina: «Un bruto; un animal de lo peor.»

No es más condescendiente con Yamil Jabour: «Pertenece a la Brigada; él salía, torturaba y mataba. Y no tenía ningún problema en hacerlo.» De Juan Cerutti, dice: «Vino de Bell Ville de la mano de Telleldín cuando estaba de jefe de la Unidad Regional. Era un exaltado que quería figurar siempre en todo. Apenas llegó al D2 se integró con los de la Brigada e inmediatamente se echó a perder por completo.»

Andrés Remondegui, uno de los diecisiete sobrevivientes de La Perla, en el libro –ya citado– de Ana Mariani y Alejo Gómez, señala que: «Marzanelli tenía una mirada desconfiada, la actitud de una persona que te semblantea. Era un tipo de doble faz: por momentos se mostraba como una persona amigable, pero después revelaba su verdadera cara.»

La mayoría de los imputados no prestó declaración indagatoria durante la instrucción de la causa, negando los hechos que se les imputan u oponiendo recaudos legales sugeridos por sus abogados defensores. Sin embargo, con relación al asesinato de los Pujadas, algunos de ellos deslizaron algún comentario, como Juan Carlos Cerutti, quien manifestó: «Respecto del hecho de la familia Pujadas, quiero aclarar que el día que sucedió me encontraba de franco en Bell Ville; y que además por este hecho hay ya personas condenadas en febrero del año 1976 y los supuestos autores serían Heredia, Melfi y Sosa.» Por cierto, no existieron tales condenas.

Otro de los imputados, Yamil Jabour, en presencia de su abogada defensora Ad Hoc, Dra. Natalia Bazán, dijo:

«Niego terminantemente lo que se me imputa en relación a la familia Pujadas. Considero que es arbitrario involucrarme en un hecho de la gravedad del que se me ha notificado basándose solamente en mi legajo personal, ya que el legajo no refleja los horarios que cumplía en mi función. No obstante la inversión de la carga de la prueba con que se trata de involucrarme, puedo decir que durante el desarrollo del juicio que se está llevando a cabo en el TOF 1, mediante declaración del Comisario Nieto a cargo del Departamento Personal actual de la Policía de la Provincia de Córdoba, ha quedado demostrado que quienes

cumplían funciones de sumariante o secretario de actuaciones como era mi caso, no estaban asignados a trabajos de calle, y que en el legajo no se refleja el horario de cumplimiento de la función, ya que eso es privativo de cada jefe de dependencia. En mi caso, cumplía el horario de 7 a 14 horas.»

Algo parecido manifestó otro imputado, Juan Eduardo Molina:

«En relación al hecho que involucra a la familia Pujadas, quiero señalar que la única prueba tenida en cuenta a los fines de involucrarme en este evento son las constancias de mi legajo personal, las que estimo insuficientes en razón de que yo he desarrollado actividades como sumariante en Informaciones de 07:00 hs. a 14:00 hs., esto ya lo puso en evidencia el Comisario Inspector Nieto en el juicio oral de la UP1 cuando expresa que el personal de sumarios de toda dependencia judicial se le denomina administrativos y no desarrollan actividades operativas.»

José Hugo Herrera declaró:

«Con referencia al caso de Pujadas Balls Jose Maria, Vadell de Suriol de Pujadas Josefa, Pujadas Vadell Jose Maria, Pujadas Vadell Maria Jose, Bustos Mirta Yolanda, según lo que dice el requerimiento la única sobreviviente fue Mirta Yolanda Bustos, la convoque a ella como testigo y a su vez cito como prueba el memorando DGI Od 74 SI de fecha 26 de febrero de 1976, que refería a una causa penal seguida contra Heredia Jorge Omar, Melfi y Sosa, que se tramita en la justicia de la provincia investigando el hecho, solicitando su remisión para ser agregada a esta causa.»

Con respecto a la responsabilidad que le cupo a las autoridades del Tercer Cuerpo de Ejército en el cuádruple asesinato, el requerimiento fiscal de elevación a juicio incrimina al entonces comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Carlos César Idelfonso Delia Larocca, antecesor de Luciano Benjamín Menéndez, en los siguientes términos:

«Con toda la prueba obrante en autos puede afirmarse que se ha constatado la existencia del hecho que tiene por víctimas a José María Pujadas Valls, Josefa Badell Suriol de Pujadas, José María Pujadas Badell, María José Pujadas Badell, Mirta Yolanda Bustos, hecho que da cuenta de la actuación clandestina y delictiva de un grupo formado por miembros del Destacamento de Inteligencia 141 "Gral. Iribarren" y de la Policía de la provincia de Córdoba dirigidos a repeler a la subversión resultando obvia la dependencia jerárquica del personal militar interviniente respecto del imputado César Idelfonso Delia Larocca.»

El militar prestó declaración en Campo de Mayo, donde cumple prisión a raíz de otras condenas y procesos. En cuanto al comisario Alberto Luis Choux, quien fue indagado en relación a diversos hechos cometidos mientras ejercía la jefatura de Policía, su responsabilidad en los mismos quedó acreditada en los siguientes términos:

«(...) en el lapso temporal que acontecieron los hechos que se le endilgan, el imputado Choux se desempeñó en la cúspide de la estructura policial, diseñando y dirigiendo desde esa función las acciones a realizar por sus subordinados. Su estrecha vinculación en las tareas que se desarrollaban en el Departamento Informaciones se halla ampliamente acreditada, dando cuenta no solo de su conocimiento directo de las prácticas que

allí se implementaban, sino especialmente de que estas obedecían a una clara política de persecución, ordenada desde lo más alto de la cúpula policial.»

Carlos Moore, ya citado, también opinó acerca de este personaje: «Choux era directamente un nazi al servicio de Lacabanne y toda esa mafia. Un tipo muy jodido y, sobre todo, peligrosísimo.»

En cuanto a Ernesto Guillermo Barreiro, cuyo nombre encabeza la carátula de autos, no está imputado en el hecho que tuvo como víctimas a los integrantes de la familia Pujadas, aunque su responsabilidad se extiende a varios de los demás hechos investigados en la misma causa. Barreiro –alias *Gringo*, *Hernández*, *Nabo* o *Rubio*–, llegó a Córdoba a comienzos de 1976 con el grado de mayor del Ejército para ponerse al frente de la represión ilegal y, en particular, del montaje del mayor centro de detención clandestina del interior del país: La Perla. Prestó servicios en el Ejército hasta abril de 1987 y fue uno de los cabecillas de la rebelión de los *carapintadas* durante la Semana Santa de ese año. Citado por la Justicia, desencadenó los episodios de Semana Santa al autoacuartelarse en las instalaciones del Tercer Cuerpo de Ejército. Lo hizo para evitar la prisión preventiva dispuesta por la Cámara Federal de Córdoba por hallarse imputado en seis casos de tortura y uno de homicidio. Más tarde, beneficiado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, siguió en el país, hasta el año 2004, en que se radicó en los Estados Unidos de Norteamérica para eludir el renacimiento de las causas judiciales en su contra. En el año 2007 fue extraditado para ser juzgado por delitos de lesa humanidad.

Será Justicia

La causa *Barreiro y otros*, junto a otras quince causas conexas, forma parte de la voluminosa causa caratulada como: «Barreiro Ernesto Guillermo; Menéndez Luciano Benjamín, Rivas Saravia Benjamín; Diedrichs Luis Gustavo; Vergez Héctor Pedro; Manzanelli Luis Alberto; Herrera José Hugo; Díaz Carlos Alberto Tissera Juan A.; Jabour Yamil; Britos Hugo Cayetano; Serrano Miguel Ángel; Luna Marcelo; Gómez Miguel Ángel; Antón Herminio Jesús; Torres Ar-

mando Luís; Villarruel Carlos Hugo; Flores Calixto Luís; Molina, Juan Eduardo Ramón; Rocha Ricardo Cayetano; Pérez Fernando Andrés; Merlo Ricardo Luís; López Arnoldo José; Romero Héctor Raúl; Morard Emilio; Lardone Ricardo; Rodríguez Hermes Oscar; Yanicelli Carlos Alberto; Lucero Alberto Luís p.ss.aa privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado» (Expte. 12.627).

La causa, conocida como *Menéndez III* o *La Perla*, agrupa hechos ocurridos entre los años 1975 y 1977 fue instruida por la fiscal Graciela López de Filoñuk, quien expidió el requerimiento de elevación a juicio el 2 de octubre de 2012.

Las causas aludidas se venían tramitando por separado, hasta que se dispuso su integración en un cuerpo único siguiendo los lineamientos sugeridos por la Procuración general de la Nación y por la Cámara Nacional de Casación Penal. La causa madre involucra a 45 imputados y 417 víctimas en total, de los cuales 32 imputados y 80 víctimas corresponden a la *causa Barreiro*, una de las más importantes junto a la conocida como *causa La Perla*. El caso Pujadas, por su parte, involucra a una veintena de imputados y cinco víctimas.

El juicio oral y público –el quinto por delitos de lesa humanidad en Córdoba– que incluye más de 900 testigos, comenzó el martes 4 de diciembre de 2012 en la sede los Tribunales Federales de Córdoba, en medio de una gran expectativa y fuertes medidas de seguridad. El Tribunal Oral Federal N° 1, que impondrá las condenas correspondientes, está integrado por los jueces Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci y José Camilo Uriburu. Carlos Ochoa actúa como cuarto juez, en tanto que la representación del Ministerio Público Fiscal corrió por cuenta del fiscal Carlos Gonella, reemplazado por Facundo Trotta luego de que fuera designado en otras funciones.

En la primera jornada, algunos de los acusados se quejaron airadamente ante el tribunal porque el público –en su mayoría, víctimas y familiares de las víctimas de la represión ilegal– exhibió fotografías de desaparecidos y flores rojas. Desde el otro lado del mostrador, algunos represores ocultaban su rostro con libros *escogidos* para la ocasión: *El Vietman argentino*, *El negocio de los derechos humanos* y *Los traidores*, entre otros títulos de similar catadura. El principal acusado, Luciano Benjamín Menéndez, faltó a la cita.

La primera parte del proceso, interrumpida por el receso estival, fue dedicada a lectura de la extensa causa. El último expediente, el correspondiente a la causa *Barreiro y otros* fue leído en la séptima audiencia, el 6 de febrero de 2013. El trámite del juicio, llevará varios meses. Seguramente, al final, «será justicia.»

Volver a empezar

La Barcelona que recibió a los sobrevivientes de la masacre ofrecía una atmósfera diametralmente diferente a la que se respiraba en la Argentina por aquellos días. Tras la muerte del dictador Francisco Franco –acaecida el 20 de noviembre de 1975–, se abría una nueva etapa para el pueblo español: la esperanza de una España renacida y libertaria se palpaba en todas partes, se respiraba en el ambiente.

Apenas pusieron un pie en la tierra de sus ancestros, los tres hermanos Pujadas sintieron que la cuenta volvía a cero, que había que comenzar de nuevo, empezando por lo más urgente: que los niños volvieran a sonreír, como afirma María de los Ángeles en *Fotos de familia*, la película de Eugenia Izquierdo. A Ricardo, convertido por las circunstancias en hermano mayor, le tocó hacer de padre de Víctor. En esa hora difícil, contaron con el apoyo invaluable de Ángeles Badell Suriol, hermana de la infortunada Josefa.

En los años siguientes a su arribo, Ricardo, María de los Ángeles y Víctor fueron testigos de la formidable transición española de una dictadura oscurantista a una democracia plena y, en ese marco, del proceso de consolidación de Cataluña como comunidad autónoma, entre otros cambios institucionales tan virtuosos como trascendentes que se operaron en la península ibérica en esa época. Una metamorfosis bien distinta a la que sufría la Argentina, en plena dictadura.

Allá, en tierra catalana, viven desde entonces, menos Ricardo, que falleció de cáncer en el 2002. Fue él, quien, en 1986, como buen ingeniero electrónico que era, fundó la empresa Técnicas de Control y Análisis (TCA) en sociedad con Pablo Seghers Ortiz. El sitio web (www.tca.es) informa que la empresa se dedica “a la construcción, suministro, instalación, puesta en servicio funcional y mantenimiento de equipos e instalaciones de control y ensayo

para la industria de automoción y sector de medio ambiente". Tras la muerte de Ricardo, Víctor preside la empresa que tiene su sede central en Barcelona y cuenta con sucursales en Buenos Aires y en San Pablo (Brasil). La granja cordobesa, vecina al Liceo, sigue en poder de los Pujadas y se encuentra alquilada a terceros.

Víctor está casado con Elena y tienen dos hijos: Vera y Bruno. Suele visitar la Argentina con alguna frecuencia.

Beatriz Mothe Pujadas, la hija de María de los Ángeles que nació en Barcelona, se recibió de médica y se desempeña en la Fundación Lucha contra el Sida y en la Unidad VIH del Hospital Germann Trias de Barcelona. Sebastián es abogado y Salvador, su hermano menor, economista.

Los Pujadas rehicieron sus vidas, tratando de dar vuelta la página del horror, bregando por seguir adelante pese a todo. Víctor lo pone en palabras en un reportaje publicado por la revista *Matices* (Agosto 2011):

"Después de lo de mi hermano vino todo lo de la familia. Yo quedé afectado. Me tuvieron muy protegido, no era que no se hablara, pero no era un tema muy normal. Así como hubo otras familias de exiliados que seguían muy ligados a la Argentina, nosotros no. Casi toda nuestra familia estaba en España: primos, tíos, teníamos más familia que acá. Nuestra vida se re-hizo, paulatinamente".

Mirta Bustos, la única sobreviviente de la masacre, quedó en el camino. Viajó a Barcelona en cuanto sus lesiones se lo permitieron y permaneció allí hasta 1978, año en que regresó a la Argentina, arrastrando las secuelas de las heridas recibidas, entre ellas la hemiplejía que le ocasionaba la renguera de una de sus piernas y cierto grado de dislalia. Se reencontró entonces con su pequeña hija, María Eugenia, que había cumplido cuatro años y seguía al cuidado de sus abuelos, los padres de Mirta. Residió en Córdoba hasta su muerte, en 1986. Desde entonces, María Eugenia vivió con su abuelo materno -la abuela falleció en 1982- hasta que se casó. Es madre de tres hermosos hijos.

REFLEXIÓN FINAL

La pregunta zumbona sobrevuela nuestras cabezas, da vueltas y vueltas como un tábano molesto: ¿Vale la pena remover el pasado, hurgar en esos abismos oscuros y peligrosos, sembrados de acechanzas? Aun hoy, cuando hechos aberrantes como los narrados son parte de la historia, hay, sin embargo, quienes, de buena fe, siguen pensando que no. Que mejor dejar las cosas como están, bajo un manto piadoso de olvido.

En esa misma línea, sostienen que la evocación pública de tales sucesos no debe trasponer el límite de la privacidad que impone el íntimo pesar de las víctimas o de sus familiares. Es cierto; pero es igualmente cierto que tragedias como la de los Pujadas, por las circunstancias en que ocurrieron y la dimensión alcanzada, exceden el plano privado; pertenecen al ámbito colectivo, al terreno de la Historia.

En cualquier caso, no está demás preguntarse por qué el reclamo por conocer la verdad, por indagar esa etapa luctuosa, no termina de prender del todo, de calar hondo en la sociedad argentina. Puede resultar más comprensible —nunca admisible, ni antes ni ahora— que eso pasara durante el reinado del horror, cuando actuaban las Tres A y la muerte era moneda corriente, o más tarde, cuando los militares desaparecían y asesinaban personas y el miedo de muchos argentinos era más fuerte que la razón al punto de anular el sentimiento solidario hacia las víctimas del terrorismo de Estado.

Sin embargo, ya en democracia, pasado el primer momento de fervor, el ejercicio de la memoria y el reclamo de justicia quedaron circunscritos a determinados círculos o segmentos de la sociedad sin que lograsen perforar las capas populares para convertirse en una gran cruzada colectiva, como debió ser. Probablemente algunos seguirían viendo el terror como algo ajeno, una cuestión concerniente solo a las víctimas y a sus allegados. O quizá, pese al tiempo transcurrido y el cambio de contexto, el asunto seguía causando escozor, cuando no cierto rechazo.

Es posible que muchos argentinos prefieran olvidar antes que remover heridas pretéritas. Lo pasado, pisado; se suele decir cuando se quiere dar vuelta la página. Murmurar, cerrando los ojos: ya está, ya fue; a otra cosa. Sin embargo, no es lo mejor. Sería aceptar lo que sucedió de manera acrítica, sin asumir el pasado reciente como algo propio, de una vez y para siempre.

Pese a los enormes avances de los últimos años, buena parte de esa historia abominable sigue vagando por allí, como alma en pena. ¿Demasiado doloroso? ¿Vergonzante para algunos, quizá? También fueron dolorosos, y cómo, el Holocausto y otros genocidios que los pueblos que los sufrieron siguen recordando, aún sabiendo que renueva la pena. Pese a todo, tienen en claro que el ejercicio de la memoria es la mejor arma contra la impunidad.

Tal vez aquí, en nuestra Argentina, abrumada por la andanada de información cruzada, por visiones antagónicas que parecen no tener síntesis posible, no se quiera tomar partido por los diferentes relatos en boga, o tal vez reine cierta confusión acerca de lo que sucedió realmente. Por algo no existe hasta hoy una versión única y universalmente aceptada de lo ocurrido durante esos años y, en cambio, pululan distintas visiones no siempre objetivas ni fundadas en la verdad histórica.

No por pensar diferente debemos negarnos a aceptar que muchas teorías e interpretaciones acuñadas en las últimas décadas puedan haber ganado adeptos. Como la conocida y denostada teoría de los dos demonios, que reparte culpas para los dos lados, demonizada a su vez por quienes no creen en ella e insisten que hubo un único y gran culpable, los responsables del terrorismo de Estado. O, peor aún, la de causa-efecto, que trata de justificar lo malo que llegó al final del camino como inevitable colofón de lo que le antecedió.

Como fuere, el resultado es que los argentinos durante mucho tiempo nos mantuvimos pasivos, sin reclamar masivamente, enérgicamente, airadamente, el castigo a los culpables del horror. De allí el valor de los juicios y condenas por delitos de lesa humanidad que, además de representar una obligación ineludible del estado de Derecho, significan un acto reparador hacia las víctimas y sus familias.

Afortunadamente, hoy en día todo el mundo está a favor de la plena vigencia de los derechos humanos; es algo que está fuera de discusión, casi una obviedad: ¿quién puede no estarlo? Pero si la

cosa se queda en una postura testimonial, declamatoria, no alcanza. Probablemente, como ocurrió con otros fenómenos parecidos en el mundo, haya que esperar que el tiempo transcurra y cicatricen las heridas para que finalmente la verdad se abra paso.

La verdad completa. La universal.

BIBLIOGRAFÍA Y OBRAS CITADAS

- Amorín, José. *Montoneros, la buena historia*. Editorial Catálogos, 2005.
- Bernetti, Jorge Luis. *El peronismo de la victoria*. Legasa, 1983.
- Bonasso, Miguel. *El presidente que no fue*. Planeta, 1997.
- Diario de un clandestino*. Planeta, 2000.
- CONADEP Delegación Córdoba. 1976-1983: *Nunca Más*. Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, 1998.
- Cooke, John William. *Peronismo y revolución*. Editorial Parlamento, 1985.
- Feinmann, José Pablo. *La sangre derramada*. Editorial Ariel, 1998.
- García Hamilton, José Ignacio. *Juan Domingo*. Editorial Sudamericana, 2009.
- Gasió, Guillermo. *Tras las bambalinas del poder*. Corregidor, 2007.
- Gasparini, Juan. *Montoneros. Final de cuentas*. De la campana, 1999.
- Gillespie, Richard. *Soldados de Perón, Los Montoneros*. Grijalbo, 1987.
- González, Marcela B. *Una historia con sentido. Los primeros 50 años de la Universidad Católica de Córdoba 1956-2006*. Edit. Univ. Cat. de Cba, 2006.
- Grieco y Bavio, Alfredo. *Cómo fueron los 60*. Espasa Calpe, 1994.
- Lanusse, Alejandro A. *Mi testimonio*. Laserre Editores, 1977.
- Lanusse, Lucas. *Montoneros, el mito de sus doce fundadores*. Vergara, 2005.
- Larraquy, Marcelo y Caballero, Roberto. *Galimberti*. Editorial Norma, 2000.
- Lindner, Franco. *Cooke. El heredero maldito de Perón*. Sudamericana, 2006.
- Luna, Félix. *La Argentina de Perón a Lanusse 1943/1973*. Planeta, 1993.

- Mariani, Ana. *La vida por delante*. Ediciones del Boulevard, 2006.
- Mariani Ana y Gómez Jacobo, Alejo. *La Perla. Historia y testimonios de un campo de concentración*. Aguilar, 2012.
- Martínez, Tomás Eloy. *La pasión según Trelew*. Planeta, 1997.
- Moreno, Julio César. *La espuma de la cerveza*. El Emporio, Page, Joseph A. Perón. Javier Vergara Editor, 1984.
- Rodeiro, Luis. *Fantasías de bandoneón (Una disidencia montonera)*. Ediciones de la cortada, 1996.
- Paino, Horacio. *Historia de la Triple A*. Editorial Platense S.A., Montevideo, Uruguay.
- Robles, Miguel. *La búsqueda. Una entrevista con Charlie Moore*. Ediciones del Pasaje, 2010.
- Romano, Silvia y otros. *Vidas y ausencias. Destinatarios de la represión. Córdoba, 1969–1983*. Universidad Nacional de Córdoba, 2010.
- Ruiz Zafón, Carlos. *La sombra del viento*. Editorial Planeta, 2003.
- Saidon, Graciela. *La montonera*. Editorial Sudamericana, 2005.
- Saravia, Mariano. *La sombra azul*. Ediciones del Boulevard, 2005.
- Seoane, María. *El burgués maldito*. Editorial Sudamericana, 2003.
- Tcach, César y otros. *Córdoba bicentenario: claves de su historia contemporánea*. Universidad Nacional de Córdoba, 2010.
- Verbitsky, Horacio. *Ezeiza*. Editorial Contrapunto, 1986.
- Vezzetti, Hugo. *Sobre la violencia revolucionaria*. Ed. Siglo Veintiuno, 2009.
- Yofre, Juan Bautista. *Nadie fue*. Editorial Sudamericana, 2008.
- Fuimos todos*. Editorial Sudamericana, 2007.
- El escarmiento*. Editorial Sudamericana, 2010.

ÍNDICE

Prólogo.....	13
--------------	----

PRIMERA PARTE

MARIANO, LA ÉPICA GUERRILLERA

Los Pujadas	17
Mariano	22
El tiempo de Mariano: los años '60 y la radicalización de la clase media	26
El movimiento estudiantil	31
La influencia de la Iglesia.....	36
La opción por el peronismo.....	40
La matriz del peronismo revolucionario en Córdoba	46
El AES	50
La militancia estudiantil.....	55
La vía armada	58
La toma de La Calera.....	66
Mariano: clandestinidad y caída.....	70
Mariano preso.....	74
En Rawson.....	77
La fuga	83
Palabra de Mariano.....	85
22 de agosto.....	94
Todo está guardado en la memoria.....	96
La versión oficial	103
El sepelio	108
Cuarenta años después, el juicio.....	112

SEGUNDA PARTE
METAMORFOSIS

Metamorfosis	119
1972.....	119
El GAN	125
Luche y vuelve.....	141
1973.....	145
Córdoba, 1973	152
Los Pujadas otra vez en los diarios.....	154
Primavera cordobesa	156
Cámpora al gobierno	157
Perón al poder.....	170
Metamorfosis cordobesa	178
Ruptura definitiva.....	182
La Argentina sin Perón.....	184
1975.....	191
Represión ilegal en Córdoba	194
Días de furia.....	201

TERCERA PARTE
EL HORROR

La segunda tragedia	207
Noche de horror	208
El primer relato.....	211
La denuncia.....	212
Aparecen los cuerpos	213
Única sobreviviente	214
Las primeras reacciones	214
Palabra de Choux	222
Palabra de asesinos	224
El sepelio	225
Investigación acotada	226

Más reacciones.....	228
Informe forense según consta en la causa	229
Camino al exilio.....	233
Testimonio de Mirta Yolanda Bustos.....	234
¿Por qué los Pujadas?	236
Según pasan los años	238
La versión Maristany, 35 años después	239
La causa judicial	240
Los autores con nombre y apellido	245
Será Justicia.....	252
Volver a empezar	254
Reflexión final.....	257
Bibliografía y obras citadas.....	261